

ELIANA CASTEDO FRANCO

H. C. F. MANSILLA

**ECONOMIA INFORMAL
Y DESARROLLO
SOCIO - POLITICO
EN BOLIVIA**

Transformaciones socio-culturales, erosionamiento
de la legitimidad estatal y perspectivas de lo informal



Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios

ELIANA CASTEDO FRANCO
H. C. F. MANSILLA

**ECONOMIA INFORMAL
Y DESARROLLO
SOCIO - POLITICO
EN BOLIVIA**

Transformaciones socio-culturales, erosionamiento
de la legitimidad estatal y perspectivas de lo informal



Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios

La Paz 1993

Impreso mediante una contribución de la fundación *Volkswagen - Stiftung*

© 1993 by Eliana Castedo / H. C. F. Mansilla
D.L.: 4 - 1 - 78 - 93

Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM)
Casilla 9205
La Paz / Bolivia

Impresión: HUELLAS SRL.

INDICE



Agradecimiento	7
Prólogo [M]	9
I. El marco general de referencia	13
1. <i>El desarrollo de la sociedad boliviana entre 1980 y 1990</i> [C]	15
a. El proceso político: de la dictadura militar a la democracia	18
b. Características globales de la evolución económica	23
c. Transformaciones socioculturales	30
2. <i>Los enfoques teóricos para la explicación de la economía informal</i> y sus implicaciones socio-políticas [M]	41
a. La percepción de una temática compleja	41
b. Los principales enfoques teóricos y sus implicaciones políticas	46
3. <i>La economía informal y su expansión</i> [C]	63
a. El eje coca-cocaína	64
b. El sector informal urbano	70
c. Impacto en la economía nacional	77

II. La economía informal y las alteraciones en el área político-institucional	85
1. <i>La economía informal y las modificaciones del movimiento sindical en Bolivia</i> [M]	87
a. El deterioro del sindicalismo tradicional	87
b. El sindicalismo frente al sector delictivo-ilegal de la economía informal	96
2. <i>La economía informal y la pérdida de legitimidad de las instancias estatales y de la administración pública</i> [M]	107
a. Consideraciones preliminares	107
b. La fuerza normativa de lo fáctico	110
c. El peso de la corrupción y temas anexos	116
3. <i>Las interrelaciones entre la economía informal y la esfera política</i> [M]	125
a. Consideraciones preliminares	125
b. Los informales y los partidos populistas	128
c. Las transformaciones en la élite del poder	138
4. <i>Políticas públicas, economía informal y las reacciones de los involucrados</i> [M]	145
a. La política de la ambigüedad	145
b. El camino hacia la militarización	153
c. Las reacciones ante la militarización	158
III. La economía informal y las alteraciones en el área socio-cultural	173
1. <i>Urbanización sin industrialización: efectos macrosociales de la migración interna vinculada a la economía informal</i> [C]	175
a. Economía informal y migración interna	178
b. Efectos de los flujos migratorios recientes en la distribución regional de la población	182
c. Superurbanización sin base industrial sólida: el caso de Santa Cruz de la Sierra	187
2. <i>Aspectos culturales de la expansión de la economía informal</i> [C]	203
a. Economía informal e identidad cultural	206
b. La mentalidad inherente a la informalidad	216

II. La economía informal y las alteraciones en el área político-institucional	85
1. <i>La economía informal y las modificaciones del movimiento sindical en Bolivia [M]</i>	87
a. El deterioro del sindicalismo tradicional	87
b. El sindicalismo frente al sector delictivo-ilegal de la economía informal	96
2. <i>La economía informal y la pérdida de legitimidad de las instancias estatales y de la administración pública [M]</i>	107
a. Consideraciones preliminares	107
b. La fuerza normativa de lo fáctico	110
c. El peso de la corrupción y temas anexos	116
3. <i>Las interrelaciones entre la economía informal y la esfera política [M]</i>	125
a. Consideraciones preliminares	125
b. Los informales y los partidos populistas	128
c. Las transformaciones en la élite del poder	138
4. <i>Políticas públicas, economía informal y las reacciones de los involucrados [M]</i>	145
a. La política de la ambigüedad	145
b. El camino hacia la militarización	153
c. Las reacciones ante la militarización	158
III. La economía informal y las alteraciones en el área socio-cultural	173
1. <i>Urbanización sin industrialización: efectos macrosociales de la migración interna vinculada a la economía informal [C]</i>	175
a. Economía informal y migración interna	178
b. Efectos de los flujos migratorios recientes en la distribución regional de la población	182
c. Superurbanización sin base industrial sólida: el caso de Santa Cruz de la Sierra	187
2. <i>Aspectos culturales de la expansión de la economía informal [C]</i>	203
a. Economía informal e identidad cultural	206
b. La mentalidad inherente a la informalidad	216

3. <i>La ambivalencia de la economía informal</i> [C]	227
a. La economía informal como factor de continuidad	229
b. La economía informal como factor de cambio	237
A manera de epílogo	249
La presión demográfica, la permanencia de la informalidad y las paradojas de la modernización en Bolivia [M]	251
Anexos	259
1. El complejo coca/cocaína y sus repercusiones sobre el medio ambiente [M]	261
2. Sinopsis de la encuesta de opinión pública [C]	271
3. Bibliografía seleccionada [C]	337

PROLOGO



La enorme relevancia que la economía informal ha alcanzado en muchos países del Tercer Mundo y muy particularmente en el área andina de Sudamérica ha traído consigo un aumento considerable de la actividad científica dedicada a esclarecer este fenómeno. Estos esfuerzos, cuyo nivel teórico es, en muchos casos, ejemplar, se limitan casi exclusivamente al campo de las ciencias económicas y estadísticas. El presente estudio trata de esclarecer cuestiones que han permanecido al margen de esos trabajos analíticos y teóricos, sobre todo en el caso boliviano. La esfera de lo político y lo institucional, la dimensión socio-cultural y lo étnico y también el campo de los valores colectivos de orientación, constituyen terrenos del quehacer humano que en su vinculación con la economía informal no han sido estudiados por las ciencias sociales, o sólo de manera esporádica y casual.

El propósito de este trabajo ha sido el de iluminar los aspectos no económicos asociados a la economía informal en Bolivia. Como se sabe, el peso y la importancia de la economía informal con respecto al Producto Interno Bruto, a la generación de ingresos y puestos laborales y al "incremento" del comercio exterior, han resultado ser, particularmente a partir de 1980, de una importancia extraordinaria: a la economía informal se le atribuye casi la mitad del producto real elaborado en Bolivia y, concomitantemente, el haber amortiguado la crisis económica más grave desde la fundación de la República mediante la creación de "nuevas" oportuni-

dades de ingreso y trabajo, por más precarias e inadecuadas que éstas resulten ser. El proyecto de investigación ha intentado elucidar las consecuencias que este inmenso fenómeno de la informalidad ha originado necesariamente en los ámbitos de la política y la cultura, tomadas éstas en su acepción más amplia. Por otra parte, no se trata de establecer simples relaciones de causa y efecto entre la economía informal y las otras esferas de la actividad social, sino de analizar vinculaciones multifacéticas, contradictorias y discontinuas, como se dan habitualmente en un orden social que puede ser calificado de complejo.

La presente obra trata de esclarecer los nexos que existen a partir aproximadamente de 1980 entre el crecimiento de la economía informal y el desarrollo de la esfera política, especialmente en lo referente a la evolución de la élite del poder, las transformaciones del movimiento sindical, la problemática de la significativa pérdida de legitimidad y autoridad moral de parte del Estado y de las instancias gubernamentales, el surgimiento de importantes partidos de corte populista y finalmente en lo que toca a las nuevas políticas públicas y a las reacciones que éstas últimas han provocado entre los involucrados informales. En otro plano, este trabajo intenta aclarar las relaciones entre la economía informal y el posible cambio de las pautas colectivas de comportamiento, sobre todo entre los mismos informales y en los grupos y estratos sociales próximos a ellos. Problemas de la ética laboral, las alteraciones en los roles ocupacionales de la mujer y las considerables repercusiones de la informalidad sobre la identidad cultural de ciertas comunidades (como El Alto y Santa Cruz de la Sierra) pertenecen a los temas aquí examinados. Esta problemática tan rica en matices está ligada a procesos muy extendidos de migraciones interiores y a conflictos de origen étnico, los cuales emergen ahora con inusitado vigor: a pesar de todos los designios modernizadores de las últimas décadas, la economía informal parece favorecer el renacimiento de desaveniencias sociales y diferencias culturales premodernas, como son las que provienen de un transfondo étnico y tienden a consolidarlo.

El estudio de los aspectos no económicos asociados a la economía informal ha demostrado, además, contener un elemento altamente controvertido, que atañe a la conformación de la (precaria) identidad colectiva. Este tipo de economía demuestra poseer tanto un factor de alteración a largo plazo como también un factor

igualmente estable de continuidad. Después de todo, la informalidad, sus diversas manifestaciones y su inmensa extensión ponen al descubierto el estado frágil y provisorio de la modernidad alcanzada hasta hoy en Bolivia, surgiendo del acervo tradicional de la sociedad variadas formas de comportamiento y trabajo que se las creía desplazadas por el "desarrollo" de los últimos tiempos. Las teorías mismas para explicar la economía informal están inmersas en aquella controversia, pues corresponden en el fondo a intereses práctico-políticos y a estrategias correspondientes para movilizar los recursos del Estado. La crítica de estos enfoques explicativos puede brindarnos alguna luz para comprender algunos aspectos políticos asociados a la informalidad.

Una de las conclusiones más importantes del estudio es haber constatado que, paradójicamente, las modificaciones en los ámbitos político-institucional y socio-cultural atribuibles a la economía informal parecen ser relativamente reducidas. El sector informal no ha inducido, probablemente, cambios en otros campos de la vida social que correspondieran más o menos a la magnitud de su extensión física y al peso de su significación económica.

Esto apunta seguramente al hecho de que la economía informal constituye, después de todo, un factor de continuidad en la evolución boliviana contemporánea. Esta persistencia se muestra también en el florecimiento del caudillismo y del prebendalismo en aquellos movimientos y partidos políticos populistas que se nutren del apoyo de los informales. La nueva tendencia populista en defensa de los cultivos de coca como si éstos fueran exclusivamente la prosecución de una vieja y genuina tradición andina –sin nexos con su turbio uso ulterior– y sus conexiones con la corriente indigenista, constituyen asimismo elementos que se integran en un gran proceso de continuidad de la cultura política convencional.

Por otra parte, el notable desarrollo del sector delictivo-ilegal de la economía informal (vinculado al complejo coca/cocaína) puede traer consigo políticas públicas que incluyan la militarización de varias zonas del país. La internacionalización del conflicto, el surgimiento de grupos armados campesinos de autodefensa, el renacimiento de movimientos radicales a la vez izquierdistas y nacionalistas y el agravamiento de las tensiones étnicas pueden representar el reverso de aquellas políticas públicas. El presente estudio trata, así sea someramente, de analizar esta com-

plicada evolución, al cabo de la cual una parte importante de las decisiones sobre el desarrollo boliviano podría ser trasladada a instancias extranjeras consagradas a combatir el tráfico de estupefacientes o, por lo menos, podría llegar a depender de las finanzas, los planes y los intereses de organismos no bolivianos.

Finalmente, el presente estudio intenta esbozar un análisis de los componentes demográficos y de los efectos ecológicos que están íntimamente ligados al crecimiento de la economía informal y que, de una manera u otra, están vinculados al gran proyecto de modernización que trata de implementar la sociedad boliviana, el cual se halla sumido en una profunda crisis. Este libro pretende ser un pequeño aporte al esclarecimiento de la misma.

H. C. F. Mansilla

I

EL MARCO GENERAL DE REFERENCIA

1

EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA ENTRE 1980 y 1990

Eliana Castedo Franco

En Bolivia la década 1980-1990 se caracterizó por una serie de marcados contrastes. En el sistema económico el de mayor relevancia estuvo definido por la evolución de la tasa inflacionaria cuyos valores extremos fueron de 66,5% al mes en agosto de 1985 y de -1,87% dos meses más tarde (1). El control exitoso del índice de inflación que anualmente había llegado al 20.000% (2) resultó de la ejecución del programa de estabilización de la Nueva Política Económica (NPE), implementada por el presidente Paz Estenssoro a partir del 29 de agosto de 1985. El proceso político no fue menos convulsionado. Hubo golpe de Estado, dictadura militar, el auto-desmoronamiento de un régimen de izquierda elegido democráticamente así como la proeza, para un país de conocida trayectoria golpista, de tener un presidente constitucional por tercera vez consecutiva: Jaime Paz Zamora que siguió a Hernán Siles Zuazo (1982-1985) y a Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) en el gobierno.

Los trabajadores mineros, protagonistas principales de los movimientos populares desde la Revolución Nacional de 1952, fueron desplazados del escenario político por los productores de coca, los informales y los Comités Cívicos departamentales. En la esfera socio-cultural importantes elementos modernizantes como la creciente urbanización y la mejoría de la expectativa de vida del individuo al nacer que en promedio alcanzó los 53 años hacia fines del decenio de los ochenta (INE s.f.: 35) eran acompañados

por otros que reflejan el atraso que todavía caracteriza al país. De acuerdo con datos oficiales más del 60% de los ciudadanos bolivianos no tenía acceso a la salud y el 18,3% de la población de 15 y más años estaba excluido del sistema educativo; el 58,9% de las casas carecía de servicio higiénico y el 40,7% de energía eléctrica (3). El telón de fondo de todos estos acontecimientos tan diferentes entre sí fue la presencia de la economía paralela definiendo de manera cada vez más evidente y directa con la exitosa proliferación de sus actividades el rumbo de la vida nacional.

La decisiva y creciente influencia del sector informal de la economía no se debió únicamente al hecho de que entre 1980 y 1982 el país fue gobernado por un grupo de militares involucrados en el tráfico de la cocaína; una serie de otros factores explica que continúe también durante los regímenes democráticos posteriores. Entre los factores de mayor trascendencia se halla la crisis de la minería, especialmente la del estaño, manifiesta en el decrecimiento del sector minero a una tasa promedio anual de 14% entre 1980 y 1987 (Villegas y Aguirre 1989: 81). En ese período la producción de estaño cayó de 27.271 a 8.128 toneladas métricas finas (INE 1986: 141 e INE s.f.: 169) en tanto que la de la hoja de coca aumentó de 38.286, en 1981, a 136.762 t.m. siete años más tarde (Quiroga 1990: 82). La consecuencia de esta evolución económica es que por ejemplo en 1987 la producción de coca y sus derivados generó un valor agregado de 1.422 millones de dólares correspondiendo al 24% del total de la economía; por su parte ramas relevantes como la agricultura —sin considerar a la coca—, hidrocarburos e industria contribuyeron con el 15%, el 8,7% y el 12,2% respectivamente (Presidencia de la República 1990: 12). Esta alteración en la estructura productiva no fue solamente el desplazamiento momentáneo de un producto por otro sino la expresión inequívoca de que la profundidad de la crisis que azotó a la economía durante el decenio pasado era en realidad resultado del "agotamiento del patrón de acumulación minero-estatal" (Grebe 1987a: 203) vigente desde 1952. En la nueva coyuntura parecería que "el resto del mundo puede prescindir de Bolivia en el comercio internacional de materias primas, con excepción de la cocaína" (Urioste 1989: 81). Correspondiendo con esa situación se dio una expansión acelerada de las variadas actividades desarrolladas en torno al nuevo producto de exportación; asimismo, de una gama de ocupaciones propias del sector informal urbano (SIU) con el

resultado de que la economía paralela contribuyó con más del 50% a la producción nacional (Doria Medina 1986: 15).

Las transformaciones en la estructura productiva del país originaron alteraciones en el sistema político y en las relaciones sociales. La pérdida de "la centralidad minera" (Lazarte 1987:174) provocó una crisis de identidad en el proletariado minero que afectó profundamente la acción de la Central Obrera Boliviana (COB) al perder la capacidad de convocatoria que tradicionalmente tenía dentro del movimiento popular. Muchos de sus sectores, especialmente aquéllos que aseguraban un ingreso gracias a la prosperidad de la economía informal, encontraron en nuevos partidos políticos un mejor canal para viabilizar sus intereses. Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que "se han nutrido [...] del descalabro sindical, de la actuación mediocre del indigenismo en cuanto fuerza política (katarismo) y de la disolución de otros movimientos populares" (Mansilla 1991: 16), constituyen hoy los principales portavoces de las mayorías urbanas marginadas. En la élite del poder aumentó la influencia de una ascendiente "burguesía chola" (Toranzo 1989a: 52) con un sustento económico definido principalmente por su participación en el circuito del tráfico mundial de cocaína. Desde el punto de vista sociológico este dato indica, por otro lado, la existencia de procesos de movilidad social vertical en el sentido de que individuos enriquecidos gracias a sus ocupaciones informales ascendieron en la estratificación social mejorando de status. Por su parte, los flujos de migración interna, intensificados durante los últimos años, señalan que de igual manera ocurrieron casos de movilidad horizontal; lo cual en una sociedad pluriétnica como lo es la boliviana implica, a su vez, el encuentro de grupos diferentes culturalmente hablando. Encuentros que pueden constituir un terreno fértil para conflictos sociales debido a la aculturación que desencadenan en personas y grupos.

Estas consecuencias no económicas de la propagación de actividades informales en Bolivia destacan por lo menos dos hechos relevantes: por un lado, que ellas dejaron de ser un tema exclusivo de las ciencias económicas gracias al grado de incidencia que también tienen en la política y en la esfera socio-cultural del país; y por el otro, que la ocupación no registrada es mucho más que el único recurso de supervivencia accesible a los pobres. El contrabando en gran escala y, sobre todo, la elaboración y comercializa-

ción de la cocaína están en manos de individuos bien situados desde el punto de vista económico y social. Es decir, la actividad informal trasciende los límites del círculo de los marginales urbanos y rurales para transformarse en la base material de un estilo de vida propio de diversas capas de la sociedad boliviana.

a. El proceso político: de la dictadura militar a la democracia

A diferencia del decenio de los 90 que comienza con la vigencia del gobierno democrático bajo la presidencia del Licenciado Jaime Paz Zamora el de los ochenta prosigue en sus inicios la larga tradición golpista de Bolivia. El 17 de julio de 1980 un sangriento golpe de Estado puso fin a la tumultuosa apertura democrática (4) que siguió al régimen dictatorial del general Hugo Bánzer (1971-1978). El general Luis García Meza designado presidente de la Junta de Comandantes afirmó al posesionar a los ministros de su gabinete que las Fuerzas Armadas de la Nación habían "[...] 'asumido la responsabilidad directa de administrar y transformar positivamente el país.'" (PADI 1982: 17) La única mudanza lograda fue sumamente negativa porque consistió en una cierta "legalización" de la elaboración y comercialización de la cocaína con motivo de la participación de importantes miembros del gobierno en las operaciones millonarias del narcotráfico internacional. El propósito de García Meza de quedarse "[...] 20 años en el poder hasta reconstruir Bolivia" (PADI 1982: carátula) fue truncado por las presiones tanto civiles como militares que lo obligaron a entregar su renuncia a la Junta de Comandantes integrada por el Contraalmirante Oscar Pammo y los generales Waldo Bernal y Celso Torrelío. Este asumió en septiembre de 1981 la presidencia del país y antes de cumplir el primer aniversario de gobierno, ya en julio de 1982, tuvo en el general Guido Vildoso Calderón su sucesor. Estas sustituciones en la cúpula del poder, interpretables como los desesperados intentos de la casta militar por lograr un mayor apoyo en la población y de esa manera prolongar el período de su dominación, no trajeron consigo el efecto deseado. La crisis económica que parecía escapar a todo control durante el gobierno de un grupo de militares dedicados a la preservación de sus intereses personales -mediante prácticas de corrupción sin ningún tipo de discreción-; el desprestigio que ellos lograron también dentro del estamento militar así como las presiones políticas y sanciones económicas internacionales, espe-

cialmente de parte del gobierno norteamericano, obligaron a Vil-doso a entregar el poder en octubre del mismo año al vencedor de las dos elecciones generales realizadas entre 1979 y 1980 (5): Hernán Siles Zuazo, líder de la Unión Democrática Popular (UDP). Una alianza de partidos de izquierda originada en el "Pacto de Caracas" establecido entre Siles Zuazo del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI) y Antonio Aranibar del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con el firme propósito de combatir al régimen dictatorial de Bánzer. El Partido Comunista de Bolivia (PCB), el Movimiento Revolucionario Tupac Katari (MRTK) y otros se acoplaron más tarde.

El retorno a la democracia después de casi dos décadas de regímenes militares llevó a los principales actores a estar, en primer lugar, ocupados y preocupados con la definición de los términos de su participación en el poder entendiendo que "la solución política de la crisis estatal tenía que constituir la condición básica para la solución de la crisis económica." (Mayorga 1987: 39) Sin embargo, la falta de coherencia interna de la coalición gobernante, debido entre otras razones a las contradicciones resultantes de la voluntad de cada partido de imponer su propia concepción de gobierno, impidió la solución política que habría permitido una actuación decidida y exitosa en el campo económico. Las difíciles relaciones con los otros protagonistas del juego político contribuyeron de igual manera al fracaso udepista, manifiesto en la necesidad del Dr. Siles Zuazo de convocar a elecciones generales antes del término constitucional de su mandato. Entendido como un régimen democrático popular el de la UDP había buscado la incorporación de la COB y de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en la administración del país. Ambas entidades se caracterizaron por una "política ofensiva [...] dirigida a imponer un modelo de participación en los mecanismos de decisión del Estado y de las empresas públicas" que en sus últimas consecuencias "habría significado un cambio en la naturaleza del Estado al poner en manos de la dirección sindical el control del aparato estatal y desplazar a la coalición de la UDP." (Mayorga 1987: 45) Esta postura radical de los sindicalistas provocó una ruptura del diálogo con los udepistas iniciándose una nueva fase en la relación entre ambos caracterizada por el manifiesto y combativo enfrentamiento de los sindicatos al gobierno. Por su parte, la oposición parlamentaria compuesta por los parti-

dos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) rechazaba, de la misma manera que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la propuesta del cogobierno de la UDP con los sindicatos arguyendo que se trataba de una "figura política anticonstitucional que rebasa las formas jurídicas del poder previstas por la Constitución Política del Estado." (Mayorga 1987: 38)

El consenso alcanzado entre los actores sociales para retornar a la democracia no fue complementado "con un pacto político que sentara las bases para la consolidación del sistema democrático y de sus perspectivas de desarrollo"; por el contrario, un "pluralismo conflictivo y centrífugo" (Mayorga 1987: 18) definió la gestión política de la UDP. La económica se caracterizó por la subestimación de la seriedad de la crisis por parte de los gobernantes quienes, además, intentaron dar una solución política que correspondía con el modelo de acumulación ya agotado. Hubo una grave falta de consideración de los nuevos condicionamientos del sistema económico nacional como lo dio a conocer el ex-ministro de Trabajo (del gobierno udepista) Horst Grebe. Según él, si bien "el asunto del narcotráfico afectaba a la gestión económica global en términos del perímetro de vigencia y validez de las acciones y medidas de política económica promulgadas" destaca que no "se puede decir que haya sido materia de un análisis serio, al menos en los niveles de gestión de la UDP como tal." (Grebe 1987b: 31-32) Aunque el narcotráfico "formaba parte de las presiones de la Embajada norteamericana", continúa Grebe, "muy rara vez se [lo] discutió en el seno de los organismos colectivos del frente de gobierno." (Grebe 1987b: 31)

El amplio apoyo de una población cansada de regímenes militares con el cual contaba Siles Zuazo al asumir la presidencia se fue resquebrajando cada vez más a lo largo de su gobierno. Los diversos paquetes económicos lanzados por su equipo ministerial no sirvieron sino para agudizar la crítica situación de la economía nacional azotada también por catástrofes naturales, como las inundaciones en el oriente y las sequías en el altiplano y en los valles en 1983. En un ambiente cercano a la anomia social y al caos político-institucional y marcado por la hiperinflación, los ciudadanos bolivianos fueron convocados a elegir un nuevo jefe de Estado.

Los comicios presidenciales de 1985 no otorgaron la necesaria mayoría absoluta a ninguno de los candidatos y cupo al Parlamento elegir al nuevo mandatario. Victor Paz Estenssoro, postulado por el MNR, fue elegido Presidente de la República con el apoyo de los partidos de izquierda. Estos prefirieron actuar de esa manera a entregar sus votos al general Hugo Bánzer de ADN, vencedora de las elecciones con un total de 493.735 votos (6). El doctor Paz Estenssoro asumió la presidencia del país por cuarta vez (7) mostrando la lucidez y madurez de una larga trayectoria política no solamente al aplicar enseguida un drástico programa económico en el marco de la NPE sino también al cerrar el "Pacto por la Democracia" (8) con su opositor el general Bánzer, que le permitiría gobernar sin el freno de una oposición parlamentaria como le había ocurrido a Siles Zuazo. A diferencia de éste logró de igual manera reestablecer la autoridad del Estado aun a costa de recurrir a medidas drásticas. Fue el caso del estado de sitio declarado ya en octubre de 1985 ante la convocatoria a huelga general realizada por la COB como reacción al Decreto Supremo N° 21060 que inició la NPE. Las diferencias entre el gobierno de izquierda de la UDP y el neo-liberal de la NPE no fueron solamente de naturaleza ideológica; la situación de los actores políticos varió significativamente. Durante el régimen udepista existió "un frente político gobernante fraccionado, un movimiento popular fuerte, una clase dominante desmarcada de la dictadura militar y una oposición congresal mayoritaria, sólidamente unida en torno a la implementación de una política 'salvajemente obstruccionista del Ejecutivo"; mientras que el dirigido por Paz Estenssoro estuvo marcado "por la presencia de un frente político sólido, que [sabía] lo que [quería] y [sabía] cómo hacerlo, un movimiento popular desgastado que (había) perdido su capacidad de convocatoria y combatividad, una clase dominante articulada, un control absoluto del Parlamento [...], y una debilitada acción contestataria de la izquierda." (Henrich 1987: 48)

El nuevo modelo neoliberal transfirió el papel regulador y orientador que tenía el Estado en la economía a las fuerzas del mercado y funcionó tomando en cuenta la existencia de un sector informal próspero. De hecho las consecuencias en el mercado laboral de la política económica implementada suponen la presencia de dicho sector cumpliendo una función relevante como "colchón amortiguador" para menguar conflictos sociales originados en el

masivo desempleo que causó el programa de estabilización. Solamente el saneamiento fiscal, por ejemplo, provocó la reducción de cerca del 10% de la fuerza de trabajo del sector público (Morales s.f.: 55). También fue aprovechado para llenar los cofres vacíos del Estado dado que la Reforma Tributaria de 1986 de alguna manera "legítima veladamente al sector delincencial de la economía [...] en lo que se refiere específicamente a la no verificación del origen de la riqueza [...]" (Henrich 1987: 51). Una conocida fórmula del ex-ministro de Planeamiento durante el gobierno de Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, a ese respecto sería la siguiente: "[...] 'quien tributa legaliza automáticamente su fortuna, independientemente de cómo la haya conseguido' [...]" (Henrich 1987: 51).

A pesar de que las severas medidas de la NPE agravaron la situación de amplios estratos de la población boliviana, el proceso democrático no fue interrumpido con el estallido de conflictos sociales violentos. En mayo de 1989 se llevaron a cabo los correspondientes comicios generales y como resultado del "sorpresivo pacto" (9) entre ADN de Bánzer y el MIR-NM de Paz Zamora, éste fue elegido Presidente de la República. Ya las elecciones municipales de 1987 (10) —las primeras independientes de las elecciones presidenciales y para el Parlamento desde 1949— mostraron el gran éxito alcanzado por los miristas que ocuparon el segundo lugar en la preferencia de los electores. El último decenio del siglo XX encuentra a Bolivia llena de expectativas por consolidar aún más la democracia. El "Acuerdo Patriótico" (11) que gobierna actualmente indica que, por lo menos a nivel político, existe un avance en esa dirección. Pero, "la democratización no sólo debe ser del sistema político formal, sino también del ingreso, del consumo, de la vida cotidiana; [porque] sólo así se pueden desterrar las nubes negras de la violencia." (Toranzo s.f.: 127). El análisis de los pilares económicos del actual sistema político boliviano, por otra parte, revela la vulnerabilidad del proceso democrático. Ellos están constituidos principalmente por las actividades informales, entre las cuales las ilegales vinculadas al tráfico de cocaína son las de mayor solidez. Es decir, las bases económicas de la democracia son muy precarias.

A las cuatro fases del proceso político durante la década 1980-1990 correspondieron cuatro modalidades diferentes de relación entre gobierno, opinión pública y economía informal. La

que caracterizó a la dictadura militar muestra una vinculación directa de miembros del gobierno con actividades delictivas de esa economía en cuanto la colectividad la consideraba todavía una realidad marginal; posición que mantuvo en el período del régimen de la UDP. Esta coalición, como fue adelantado, también ignoró la creciente importancia que había adquirido ese sector económico. Los gobernantes posteriores tuvieron otra posición al admitir ambos la presencia masiva de las ocupaciones no registradas en la realidad contemporánea del país. Paz Estenssoro lo hizo de un modo menos explícito que su sucesor, en el sentido de que aceptó implícitamente esa presencia, gracias a la cual era viable gran parte de la NPE; Paz Zamora, por el contrario, reconoció el peso alcanzado por la economía informal e intenta reacomodar el aparato productivo nacional en bases legales con su programa "Coca por Desarrollo". En el transcurso de los dos últimos gobiernos la opinión pública mostró, a través de todos los medios de comunicación social que operan en el país así como de las producciones de sus científicos sociales, que asimismo considera que dicha economía no es más una realidad marginal típica de las masas pobres urbanas y rurales.

b. Características globales de la evolución económica

De manera similar a lo ocurrido con el sistema político que transitó de la dictadura militar hacia la democracia –todavía en proceso de consolidación– el sistema económico también conoció una etapa de transformaciones profundas que pueden ser sintetizadas como la búsqueda de un nuevo eje después del derrumbe de la minería. Por el momento le corresponde a la economía informal cumplir esa función. Sin embargo, el peso considerable que en ella tienen las actividades del narcotráfico –en realidad son las que hacen posible que esa economía adquiera semejante relevancia– advierte que no puede constituir la base de un nuevo modelo de acumulación válido a largo plazo. El decenio pasado fue decisivo en el proceso de búsqueda porque se concretizó definitivamente el agotamiento del modelo vigente desde 1952 y, simultáneamente, el sector inoficial de la economía creció tanto que ya no es posible seguir ignorándolo "cuando se estudia la economía o cuando se diseña la política económica y menos cuando se la ejecuta." (Doria Medina 1986: 179-180). Durante los años ochenta hubo una recomposición en la estructura exportadora de Bolivia y un cambio

en lo referente a los mercados destinatarios: el comercio con los países limítrofes se amplió a medida que disminuía el intercambio con los países altamente industrializados. La Argentina desplazó a los Estados Unidos como principal país importador y el gas natural al estaño en calidad de producto más importante en la generación de divisas.

La crisis del modelo de acumulación minero-estatal vigente desde la Revolución Nacional de 1952 –que le permitió al Estado nacionalizar las minas y pasar a controlar las divisas por la venta de diferentes minerales– tuvo causas internas y externas. A pesar de haber conocido coyunturas favorables en el mercado internacional con incrementos en el precio del estaño la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) no las aprovechó para aumentar el volumen de producción. La inversión estatal se destinó a la ampliación de la capacidad de fundición descuidando tanto la prospección y extracción como la modernización de los ingenios de concentración. Asimismo contribuyeron al derrumbe minero la ausencia de inversiones en la reposición de equipos y materiales, una administración gerencial deficiente y la indisciplina laboral. En cuanto a las causas externas cabe destacar el hecho de que a partir de 1980 la recesión económica mundial y la sustitución del consumo de estaño, especialmente en la fabricación de envases, originaron una tendencia decreciente en la demanda de ese mineral. Además, hubo un aumento de la oferta tanto por la venta de las reservas de los EE.UU. como por la contribución de nuevos productores, la China y el Brasil por ejemplo, que llevaron a que los precios se desplomaran cayendo de 5,60 dólares la libra fina en octubre de 1985 a 2,38 en marzo de 1986 (Fernández 1989: 81).

La incapacidad de la economía boliviana para enfrentar la nueva situación explica que su participación en la producción mundial de estaño disminuyera: a mediados del decenio pasado le correspondió el último lugar entre los grandes productores con un total de 6,7% (12). También mermó la contribución al mercado mundial en otros minerales como plata, bismuto, cobre, plomo, zinc, wolfram, etc. El aporte del sector minero en las exportaciones del país cayó significativamente. En 1980 constituía todavía el 62,31% del total de las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales y en 1988, el 45,80%; habiendo alcanzado su punto más bajo de la década en 1986 con 30,74% (INE s.f.: 148). La evolución de la productividad del sector de la minería mues-

tra, de igual manera, las repercusiones de la coyuntura internacional en la economía boliviana: considerando un índice de 100 para 1978 se observa que éste cayó a 58 en 1987 (Villegas y Aguirre 1989: 174). Asimismo la evolución de la participación de las actividades del sector minero en el Producto Interno Bruto (PIB) bajó de 10,31% a principios de la década de 1980 a 8,80 en 1989, siendo el valor menor en 1987 con 5,20% (INE s.f.: 102). Además de haber causado un masivo despido de empleados de COMIBOL (13) que en 1989 tenía solamente 6.000 obreros después de contar todavía con 27.000 en 1985 (Toranzo 1989b: 17), el derrumbe de la minería redujo considerablemente las divisas por concepto de exportación.

En el transcurso de los años ochenta ellas disminuyeron de 1.037 millones de dólares en 1980 a 597 millones en 1988 (INE s.f.: 148). Entre 1980 y 1985 el ingreso de divisas provenientes de las ventas de productos bolivianos declinó en cerca de un 30% y de 60% si no se toma en cuenta las exportaciones de hidrocarburos (Antezana 1990: 34). Es en primer lugar la venta de gas natural a la Argentina el origen de la creciente relevancia que aquéllas adquieren durante los últimos años. En tanto que a principios de la década la participación de los hidrocarburos en las exportaciones era del 21,29%, al finalizarla el porcentaje correspondiente se elevó a 35,97; habiendo superado el valor de la venta de minerales desde 1983 hasta 1987 inclusive y logrado su mayor contribución en 1985 con un total de 55,66% (INE s.f.: 148). En los últimos años la participación del sector hidrocarburos en el PIB permaneció relativamente estable, alcanzando en 1988 el 6,2%; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) generó más del 50% de los ingresos del Tesoro General de la Nación y recibió alrededor del 30% de las inversiones públicas (Müller & Asociados 1990: 47). De ahí que desde el punto de vista del papel que juega en la generación de ingresos legales el sector minero y de hidrocarburos continúe siendo el más importante para la economía boliviana aun después del deterioro sostenido de la actividad minera.

Si bien es cierto que la contribución de este sector al PIB con 15,78% en 1980 y 14,90% en 1989 se coloca en tercer lugar después de las del sector de servicios y de la agricultura (14), y que como fuente generadora de empleos -4,40% en 1980 y 3,13% en 1988 (15)- no se destaca, su relevancia se mantiene porque la exportación del gas natural recupera en algo los millones de dólares que

dejaron de ingresar al país por la venta del estaño. Al sector le sigue correspondiendo 80% en la generación de las divisas (16) y por lo tanto es una de las más importantes fuentes legales de ingresos para el Estado.

Además de la no disponibilidad de divisas por las razones descritas la economía boliviana tuvo que enfrentar la tremenda carga del endeudamiento externo debido a la acumulación de los compromisos a cumplirse en el pago de la deuda externa así como las elevadas tasas de interés a partir de 1980. La deuda de casi 4.000 millones de dólares en 1988 representaba el 119% del PIB de ese año (Fernández 1989: 42). Los coeficientes de ella son los más elevados de América Latina porque por un lado, la relación deuda/exportación es de 767% y, por el otro, el coeficiente intereses/exportaciones, de 40%. El servicio de la deuda externa implicó hacia finales de la década de 1980 el gasto de más del 40% de las exportaciones y, a su vez, significó la transferencia anual al exterior del 5% del PIB (Fernández 1989: 85). El deterioro en los poderes de compra de las exportaciones de Bolivia así como la enorme carga que le significa al país el servicio de la deuda externa incidieron negativamente en su capacidad para importar; esta situación llevó a un estrangulamiento de la oferta de bienes y a un decrecimiento de la producción industrial por la escasez de insumos. Una manifestación dramática de estas tendencias es el hecho de que el PIB per cápita de 1986, en términos constantes (en dólares de 1950), era equivalente al PIB per cápita de 1950 (Antezana 1990: 27).

El grado de dependencia de la economía boliviana de un único producto principal de exportación que explica la intensidad del impacto del crash internacional del estaño no debe desviar nuestra atención de los logros alcanzados en los esfuerzos por diversificar la producción nacional. La creciente presencia de los productos no tradicionales en la estructura de exportación muestra que ellos tuvieron algunos resultados positivos. El porcentaje de participación de ese tipo de productos en el valor total de las exportaciones se incrementó de 11,71% en 1975 a 17,56% en 1988 (17). De acuerdo a los períodos en consideración variaron los productos de mayor importancia: en la década de los setenta los principales fueron el azúcar, el algodón y maderas en general y hacia fines del decenio 1980, sobre todo café y soya. Los cultivos industriales están localizados mayoritariamente en la región de

Santa Cruz, cuyo desarrollo agrícola fue impulsado a través de los cultivos de arroz y caña de azúcar. Hacia 1964 la producción de ambos ya había logrado abastecer la demanda del mercado interno y, en el caso del azúcar se inició su exportación. A partir de los años sesenta fue el cultivo del algodón que comenzó a adquirir importancia destinándose su producción para el mercado textil interno al cual logró abastecer a fines de la década (Ormachea 1987: 31-32). Considerando que en 1955 debían destinarse cerca del 58% de las divisas disponibles para importación para la compra de productos agropecuarios como azúcar, arroz, algodón, maderas, etc. (Arrieta et al. 1990: 91) se advierte el significado de esos avances para la economía del país. También el crecimiento de la frontera agrícola, que por los años 50 abarcaba solamente 420.243 hectáreas (Arrieta et al. 1990: 181) elevándose a un total de 1.261.208 para fines de los ochenta (INE s.f.:178) es un indicador relevante de ese progreso. El sector industrial, por su parte, tuvo un elevado crecimiento en las décadas del sesenta y setenta. La evolución del índice 1950 = 100 que llegó a caer a 82 en 1957 se elevó a 169 en 1969; y el índice 1970 = 100 aumentó a 166 en 1978. En ese decenio fue relevante el crecimiento del subsector de la industria de Metálicas Básicas que de un índice 1970 = 100 aumentó a 4.400 en 1979 (Doria Medina 1990:17). A pesar de estos avances el proceso de industrialización es incipiente (18), lo cual se refleja en que todavía ramas tradicionales como las de fabricación de tabacos, bebidas, alimentos, vestuario, calzado y producción de muebles tienen una participación masiva en el sector. No obstante estos logros económicos permanece la extrema fragilidad de la economía al carecer de una exportación diferenciada. En los últimos años la enorme dependencia que Bolivia tiene actualmente de la venta del gas a la Argentina se manifestó en 1989 con las tremendas dificultades en que fue colocado el país con el retraso de los pagos por parte del gobierno argentino (19). Significa ésto que los adelantos conseguidos en la diversificación de la economía no han sido lo suficientemente profundos y sólidos como para salvaguardar a la población de impactos negativos resultantes de las condiciones desfavorables en el mercado internacional para productos bolivianos.

Consecuentemente se puede afirmar que si la vulnerabilidad de la actual democracia boliviana se encuentra en las características de su sustrato económico, aquéllas del comercio exterior

denuncian la propia de la economía nacional. Las funestas consecuencias del alto grado de su dependencia de la exportación de uno o dos productos quedan comprobadas "con la pérdida del 54% de (los) ingresos de exportación, entre 1980 y 1987, debido a la caída de las cotizaciones del estaño y del gas." (Fernández 1989: 42)

Otro rasgo importante de la evolución económica durante los últimos años ha sido la terciarización de la economía, especialmente relevante para los temas de este estudio porque incentivó la expansión del sector informal. Tendencia que se manifiesta en la disminución del aporte de los sectores primario y secundario al PIB de manera simultánea al crecimiento del correspondiente al sector terciario. Su contribución relativa aumentó del 47,57% en 1980 al 49,86% en 1989, habiendo alcanzado el mayor valor de la década en 1987 con un total de 52,45%; la participación de las actividades agropecuarias, de la minería e hidrocarburos, de la industria manufacturera y la construcción disminuyó de 52,43 a 50,06 por ciento en el mismo período (INE s.f.: 102). En términos agregados el sector productivo redujo su actividad en 1986 en 2,4% con relación a 1970, en tanto que el de servicios básicos aumentó en 181% y el correspondiente a otros servicios se incrementó en 61% (Antezana 1990: 16). Esto refleja el cambio estructural sufrido por la economía en el sentido de que los servicios poseen mayor peso que la producción de bienes. Analizando la situación de cada rubro se observa que además de la crisis minera ya mencionada, la industria fue la otra rama afectada con la caída de la producción nacional. El aporte de esa rama disminuyó de 14,62% que tenía al comenzar el decenio a 10,60% en 1989 (INE s.f.: 102). El hecho que el sector industrial "retrocedió 16 años en la recesión", mientras que la economía en su conjunto lo hizo en 15 años y los servicios únicamente en 8 años (Doria Medina 1990: 19) expresa la profundidad de la crisis industrial. Por su parte, a la agricultura la caracterizó un comportamiento distinto del de los restantes sectores: mientras que éstos tuvieron tasas negativas entre 1981 y 1985, ella mostró un crecimiento positivo con excepción de 1983 debido a las catástrofes naturales que perjudicaron la producción; desde 1987, por el contrario, muestra una caída en su producto en tanto que el resto de la economía se recupera lentamente (UDAPE 1990: 110). La producción agrícola tuvo un promedio de 6,5 millones de toneladas métricas con un rendimiento me-

dio de 4,5 Tm/Ha (UDAPE 1990: 95). La participación porcentual de actividades del comercio, bancos y seguros, de la administración pública y otros servicios que no incluyen a los básicos se elevó de 40,95% a cerca de 41,18, teniendo la mayor contribución en 1987 con 44,33% del PIB (INE s.f.: 102).

Al igual que lo sucedido con la mayoría de los países latinoamericanos la llamada "década perdida" significó para Bolivia crecer a una tasa promedio de -2,3% por año (Antezana 1990: 16). A diferencia de ellos, que vieron combinados sus valores positivos y negativos, la economía boliviana fue la única en decrecer durante cinco años consecutivos. El quinquenio negro se inició en 1982 con un PIB de -4,4% y concluyó en 1986 cuando todavía se decreció a una tasa anual de -2,9% (20). Agravando más la situación del país y en acentuado contraste con los términos de la evolución económica está la tasa de crecimiento de la población a un promedio anual de 2,7% para el período 1976-1988 (INE s.f.: 35). Para el ciudadano boliviano común la tendencia negativa de las variables macroeconómicas se manifestó concretamente en la pérdida cada vez más acelerada del poder adquisitivo de su sueldo, salario u otro tipo de ingreso y en millares de casos, en la pérdida del puesto de trabajo. En 1981 la tasa de desempleo fue de 6,1%; entre 1984 y 1985 se elevó bruscamente de 15,4% a 19,2% (Antezana 1990: 193); encontrándose en la actualidad en niveles que varían de un 20% a un 25% (Müller & Asociados 1990: 91).

Desde principios de la década del sesenta y hasta casi fines de la del setenta había existido una relativa estabilidad de precios. A partir de 1979 aparecieron las primeras manifestaciones del proceso inflacionario y en la segunda mitad de 1983 "la ebullición de precios empezó a manifestarse en variaciones mensuales de dos dígitos en el índice de precios al consumidor" (Nuñez del Prado 1986: 263); alcanzando entre abril de 1984 y agosto de 1985 el punto culminante con la llegada de la hiperinflación. A pesar de los diferentes paquetes económicos lanzados por el gobierno de la UDP para modificar el rumbo inflacionario la realidad cotidiana mostraba la pérdida de confianza en el peso boliviano que causó de hecho la "dolarización" de las transacciones económicas usando como referencia el tipo de cambio en el mercado negro. La política económica implementada por Paz Estenssoro, por el contrario, consiguió ya a partir de su segundo año de gobierno detener la caída del PIB y el retorno de las tasas positivas -sin alcan-

zar los niveles característicos de la década de 1970– que permitieron iniciar el último decenio del siglo con un crecimiento de 2,6%, valor bastante alejado del -1,37% de 1980 (21). La NPE lanzada con el D.S. Nº 21060 fue concebida y practicada respondiendo a la necesidad de eliminar la hiperinflación así como lograr una estabilidad monetaria "a cualquier precio" (Antezana 1990: 73). Logrado ese propósito se intentó fomentar la reactivación del aparato productivo con medidas complementarias dadas a conocer en julio de 1987 con el D.S. Nº 21660. El advenimiento del nuevo gobierno a cargo del Licenciado Paz Zamora no significó un cambio en la política económica como se desprende del D.S. Nº 22407 que norma actualmente la actividad económica nacional. La incógnita que permanece es si la situación mundial y en especial la economía de los países vecinos permitirá a la boliviana romper sus actuales vínculos con el sector informal –los términos de su expansión serán expuestos en un capítulo que sigue–, sobre todo con el narcotráfico, para definir un nuevo modelo de acumulación basado en la exportación ventajosa de productos que sean el resultado de la práctica de actividades legales y prósperas.

c. Transformaciones socio-culturales

Completando el cuadro general de la situación boliviana entre 1980 y 1990 corresponde atender, finalmente, a las características y tendencias resaltantes en la esfera socio-cultural. Ella, al igual que el desarrollo económico y el proceso político, presenta marcados contrastes en su evolución. De manera sintética se puede indicar que /la acelerada modernización de algunas ciudades y contados pueblos está en crasa disparidad con la situación de la mayoría de los ciudadanos bolivianos que de acuerdo con un estudio de Müller & Asociados a finales de los años ochenta eran todavía en un 80% pobres (22). El auge de la economía informal contribuyó a acelerar el ritmo de esa modernización y, a su vez, profundizó la fisura que divide al territorio nacional en urbes prósperas o decadentes y, a la sociedad, en individuos con o sin éxito financiero. Esto porque tanto las poblaciones vinculadas a los circuitos de producción y comercialización de ese tipo de economía como las personas que desempeñan alguna ocupación en ella logran superar la crisis del sector formal y, en determinados casos, llegar a acumular fortuna.

Un elemento de aquel aceleramiento es la creciente urbanización del país que se deriva del intenso proceso migratorio hacia las principales ciudades donde proliferan las actividades no registradas. Debido a que la aglomeración en los grandes centros urbanos es más rápida que su industrialización, el aparato productivo local no está en condiciones de absorber la fuerza de trabajo migrante y las instituciones públicas de ofrecer a los recién llegados una infraestructura urbana adecuada. La consecuencia es que en Bolivia se encuentran problemas similares a los que agobian a los habitantes de las grandes metrópolis latinoamericanas. En pequeña escala en las cuatro ciudades principales del país, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y El Alto aumentan las dificultades típicas de lugares como Buenos Aires, Lima, Ciudad de México o Caracas: sub- y desempleo masivos, marginalidad, criminalidad, carencia de servicios básicos para la masa de los moradores urbanos, etc. En 1988 todavía 57,5% de los hogares en áreas urbanas tenían abastecimiento de agua fuera de la vivienda y el 32,4% estaban sin servicio higiénico; solamente el 43,3% de las casas emplearon el carro basurero como sistema de eliminación de la basura que producen, en tanto que más de 57% de ellas no estaban incorporadas al sistema de alcantarillado público para eliminar aguas servidas (23). La situación en el campo era aún más dramática. Basten algunos indicadores globales para ilustrarla. El 86% de las viviendas rurales desconocían lo que es un servicio higiénico, el 69% no se abastecía de agua gracias al sistema de cañería; únicamente el 26,5% tenía acceso a la energía eléctrica y lo que es bastante grave, el 87% de las casas no tenía un sistema de eliminación de aguas servidas, ni siquiera el de una letrina o pozo ciego (24). La expulsión de habitantes de las áreas rurales y urbanas atrasadas arroja, sin embargo, otros resultados menos negativos. Bolivia como sociedad multiétnica ve acompañada cada fase de su historia con un conjunto de transformaciones en las relaciones entre los grupos étnicos que la componen. En la actualidad la situación no es diferente. Los masivos flujos migratorios desencadenados, sobre todo por la NPE y fortalecidos por las oportunidades de trabajo que ofrecen quehaceres paralelos a los reconocidos legalmente, además de implicar importantes desplazamientos geográficos y cambios radicales de ocupación para sus protagonistas, trastocan profundamente la composición étnicocultural de las urbes más importantes del país. El encuentro de individuos con diferentes tradiciones, valores o costumbres adopta

variadas modalidades: desde aquélla del ex-campesino aymara que migra hacia El Alto donde se instala como sastre, pasando por la del maestro quechua que abandona la escuelita rural en las cercanías de Sucre para conducir camiones cargados de mercaderías de contrabando a las Ferias del Chapare hasta el caso extremo del ex-minero de Catavi o Siglo XX que "relocalizado" en un puesto de venta callejero busca una mejor suerte en la ciudad camba de Santa Cruz de la Sierra. Este tipo de encuentros provoca transformaciones en el sistema valorativo y en las reglas de comportamiento de los recién llegados y de los miembros de la sociedad receptora. Transformaciones que pueden ocasionar graves problemas económicos, psico-sociales, emocionales, etc. a la persona concreta pero que desde el punto de vista global tienen repercusiones positivas al contribuir, a largo plazo, a consolidar la integración nacional.

Si bien la economía informal juega un papel relevante en las recientes tendencias de concentración urbana e indirectamente en la agudización de los problemas que surgen por la insuficiencia de la infraestructura de los centros hacia donde migran las personas, desde el punto de vista del individuo estos flujos migratorios también tuvieron efectos que en algunos casos pueden ser considerados como positivos: la movilidad social de tipo vertical fue estimulada en su modalidad ascendente y constituye uno de los procesos de transformación social contemporáneos mejor percibidos por el ciudadano común. A él no deja de llamarle poderosamente la atención el hecho de que a pesar de la profunda crisis económica que afectó, especialmente, a miles de asalariados —mineros, obreros y miembros de la clase media— surjan diariamente nuevos millonarios (25), capaces de financiar una vida llena de manifestaciones de derroche material. Inclusive en zonas marginales de las ciudades o en pequeños poblados carentes de los servicios públicos básicos, sea agua potable, electricidad o alcantarillado, no dejan de aparecer "como por encanto de magia" (Irusta y Poirot 1986: 18) lujosas construcciones siempre acompañadas de un garaje con uno o varios autos. La situación financiera agobiante de unos y la prosperidad de otros se debe a la diferencia que existe entre sus fuentes de ingresos: para los primeros es el deteriorado sector formal de la economía y para los segundos, el sector informal en auge y expansión. La mayoría de las personas activas en la economía paralela deben recurrir al (auto-) empleo en

actividades al margen de la ley porque carecen de otra opción para asegurar su supervivencia y la de su familia.

Los casos del campesino que prefiere dedicarse al cultivo de la hoja de coca porque ella "da mucho más que cualquier otra cosa" (Canelas & Canelas 1983: 229), del "pisacoca" o del "zepe", son algunos de los más conocidos. Situaciones similares se encuentran en el SIU. Un estudio realizado en la ciudad de La Paz con vendedoras ambulantes, entre septiembre de 1986 y julio de 1987, reveló por ejemplo, que las vianderas llegan a obtener una utilidad neta de Bs 300 (= 150 \$US) como promedio mensual, siendo ese ingreso más elevado que el de los maridos "ocupados generalmente como plomeros, sastres, mecánicos, albañiles o (en) sectores bajos de la burocracia pública: mensajeros, porteros, sargentos de policía." (Arteaga 1988: 26). Existe, sin embargo, una gran cantidad de individuos que indiferentes a los cuestionamientos morales implícitos, especialmente en las diversas ocupaciones propias de la elaboración y la comercialización de la cocaína, las aprovechan para obtener inmensas ganancias. Ellas son empleadas para sustentar un estilo de vida más o menos suntuoso; de lo que se desprende que de cierta manera el fin, esto es, el tipo de consumo que se practica justificaría los medios usados para conseguirlo. No solamente en las ciudades se encuentran manifestaciones de la nueva riqueza, también en la región rural, donde debido a su tradicional pobreza la crisis debería mostrarse con mayor énfasis hay, por el contrario, un incremento de capitales familiares cada vez más sólidos que permiten a sus dueños comprar una casa en las urbes cercanas y elevar su nivel social dejando de ser agricultores para dedicarse al comercio de productos contrabandeados.

En este contexto es importante destacar que la ocupación informal, a primera vista solamente un quehacer económico remunerado al margen de la economía nacional, se halla sustentada por un determinado sistema de valores. Ya la aceptación del carácter ilícito que le es propio denota una relación especial con categorías como legal-illegal. Por su parte, la incorporación al lenguaje cotidiano de una amplia terminología vinculada particularmente al tráfico de la cocaína —palabras como "narco-arquitectura", "narco-dólares", "narco-avionetas", "narco-abogados", etc.—, indica la existencia de una cierta familiaridad y tolerancia de la colectividad con las consecuencias del auge de la economía paralela. Esa

tolerancia es resultado de la profunda crisis económica que obligó a millares de individuos a buscar recursos desempeñando una actividad no registrada oficialmente y, de igual manera, producto de la articulación que existe entre elementos de la escala valorativa que rige en el universo informal y de la que orienta la acción social de los bolivianos no involucrados en ese tipo de actividades. Un ejemplo es el tipo de relación existente entre profesionalidad y empleo. La irrelevancia de la educación en el momento de obtener una fuente de ingreso es un rasgo constitutivo de la ética de trabajo del boliviano, en la cual antes que la formación profesional sólida del individuo interesa su habilidad y astucia para acceder a un quehacer remunerado —en el sector formal y/o en el sector informal de la economía—, cuya ejecución le asegure un acceso rápido a la riqueza material. El descrédito en la opinión pública de la educación como base importante de competencia para el mercado de trabajo aumenta con la expansión de la economía paralela porque el puesto informal de trabajo no exige un nivel alto de instrucción, salvo contadas excepciones. Para el desempeño exitoso de la actividad informal no es necesario contar con una buena carrera escolar y profesional sino, principalmente, poseer cualidades innatas como coraje y "sangre fría" para servir de "mula" en el transporte de la cocaína fuera del país o para sobornar a un inspector de aduana al contrabandear productos brasileños, argentinos, chilenos, etc.

Este menosprecio de la calificación profesional como base esencial para la ejecución de una ocupación se traduce en la desestima del trabajo honrado por parte de una colectividad que, por el contrario, favorece el enriquecimiento veloz. La riqueza accesible a través de la incorporación del individuo en el circuito de la economía informal coloca en segundo lugar la pregunta por la legalidad de los medios empleados para conseguirla. Por eso no hay un rechazo social efectivo de las personas enriquecidas en la mayoría de los casos gracias al narcotráfico. Es frecuente escuchar frases como: "'Déjenlo que aproveche', 'Que haga sus pesos'" (Pereido Mercado 1988: 25). Dado que lo importante es "hacer dinero", el narcotraficante es respetado y hasta invitado a ingresar a fraternidades, comparsas, clubes sociales, etc. En un medio como el boliviano, preocupado por los aspectos formales y externos, la figuración y la ostentación reciben una sanción social positiva. Por ello es permitido que los medios de comunicación a través de sus páginas y de los espacios televisivos dediquen gran parte de su

programación a las columnas sociales en las que no es identificada la procedencia del dinero, sino destacada "la forma de su gasto en el cumplimiento de los ritos sociales; [donde] joyas, ropas, perfumes, autos son cartas de presentación de mayor calidad y eficacia que una profesión, un post-grado, un arte o el dominio de la ciencia." (Peredo Mercado 1988: 25-26) Especialmente el traficante de cocaína "ha sabido hacer suyo aquel principio 'como lo ven lo tratan', y utiliza sus recursos para ganar consenso social y aceptación comunitaria." (Peredo Moreno 1988: 26)

Este tipo de aceptación social permite entender que si bien entre 1982 y 1986, por un lado se advirtió "una depresión del consumo privado nacional de 23%"; por el otro, "el consumo de bienes importados [subió] en 33%, lo cual no solamente refleja anomalías del aparato productivo sino también distorsiones en las pautas de consumo y un uso dispendioso de las escasas divisas que posee el país." (Toranzo 1987: 6) De esta manera la economía informal tiene efectos modernizantes a nivel de la esfera cultural porque extiende entre los bolivianos las aspiraciones de consumo moderno que provocan cambios en las actitudes, expectativas y pautas de comportamiento de los individuos; sobre todo de aquéllos que gracias a sus ingresos de origen no oficial cuentan con la posibilidad de entrar en contacto con los avances tecnológicos en materia de electrodomésticos, aparatos de esparcimiento o pueden viajar al extranjero, etc.

Otra manifestación de la manera como la expansión de las ocupaciones informales contribuye a la modernización de la sociedad boliviana es el impacto de aquélla en el rol femenino que también provoca cambios en la estructura familiar y en las relaciones internas de la familia nuclear. La participación de la mujer en el mercado de trabajo, condicionada por la crisis económica que caracterizó al país, creció significativamente, con especial énfasis en las actividades informales (26); participación que no queda sin tener repercusiones de largo alcance en la relación hombre-mujer, propia de la sociedad boliviana de marcadas tendencias machistas. El desempeño de una actividad remunerada coloca a la mujer frente a una serie de situaciones que le brindan la oportunidad de cuestionar su rol tradicional en la sociedad.

Aunque esa actividad significa para la mayoría de las amas de casa un aumento considerable de horas de trabajo (27), es al mismo tiempo una base favorable para redefinir su relación con los otros miembros de la familia. Para las mujeres casadas brinda

la alternativa de poner fin a un matrimonio fracasado, ya que ella no depende más exclusivamente del apoyo financiero del esposo. Esa nueva situación más favorable para la mujer se refleja en la tendencia manifiesta en datos estadísticos de acuerdo con los cuales en 1950 apenas el 0,28% de las mujeres eran divorciadas, mientras que en 1988 el porcentaje se elevó al 2,08% (28). También para la mujer soltera el trabajo remunerado adquiere un significado especial porque además de brindarle mayor independencia personal contribuye a consolidar una conciencia más positiva acerca de su rol no sintiéndose presionada para enfrentar el futuro gracias a la seguridad material que le brindaría el casamiento. Con la ausencia de presiones sociales para contraer matrimonio de manera a asegurar una identidad socialmente reconocida, la joven aprovecha su tiempo para obtener una profesión, ganar dinero, viajar, etc.

Vincular las recientes transformaciones socio-culturales con la propagación de las actividades informales es descubrir que ellas fomentan mutaciones que pueden ser calificadas de positivas para el progreso del país y otras de perniciosas. Entre las últimas resalta la drogadicción extendida por los centros urbanos. Se estima que en el país cerca de 200.000 personas consumirían cocaína, ampliándose particularmente el consumo entre la población infantil (Aguilar 1987: 53). Será tarea de los capítulos que siguen examinar con mayor profundidad consecuencias del impacto del auge de la economía informal en la esfera político-institucional y en el proceso de modernización.

NOTAS

- 1) Antezana 1990: 178. La hiperinflación boliviana en 1985 fue la séptima más elevada en la historia mundial (Jahnsen 1988: 9). Otros casos fueron, por ejemplo, el de Alemania con una tasa mensual de aumento de precios internos de 35.875 en noviembre de 1923 y de Grecia con la de 85.507.000 en noviembre de 1944 (Pazos 1986: 66).
- 2) Antezana 1990: 97. Otros autores (Morales 1988: 10 y Müller & Asociados 1990: Boletín nº 45 cuadro 3) hablan de una inflación anual de alrededor 8.000%. Las diferencias entre las cantidades presentadas como inflación anual resultan del hecho de que algunos autores, Antezana por ejemplo, se basan en la variación anual teniendo a un determinado mes como referencia mientras otros al estilo de Morales, hablan de inflación anual y se refieren a la variación constatada entre el 31 de diciembre de dos años consecutivos.
- 3) Müller & Asociados 1990: 96 e INE s.f.: 65, 66 y 73. Si bien los datos para fines de la década de 1980 destacan el subdesarrollo boliviano, comparándolos con los correspondientes a 1976 se observa una relativa moder-

nización del país puesto que entonces la tasa de analfabetismo era de 36,8%; los hogares sin disponibilidad de servicio higiénico eran el 78,5% del total y el 65,7% carecía de electricidad (INE s.f.: 65, 66 y 73).

- 4) Una huelga iniciada por mujeres mineras desencadenó un proceso de presiones políticas que obligó al general Bánzer a convocar a elecciones presidenciales para democratizar el país en el marco de la política del respeto de los Derechos Humanos difundida por el presidente norteamericano Carter.
- 5) Los resultados obtenidos durante las elecciones presidenciales entre 1978 y 1980 por los colocados en los primeros cinco lugares fueron los siguientes:

ELECCIONES GENERALES DE 1978

Partido Político	% de votos válidos
Unión Nacionalista del Pueblo (UNP)	50,90
Frente de Unidad Democrática y Popular (F-UDP)	25,00
Alianza Democrática de la Revolución Nacional (ADRN)	11,03
Partido Demócrata Cristiano (PDC)	8,63
Movimiento Nacionalista Revolucionario del Pueblo (MNR-P)	2,11

ELECCIONES GENERALES DE 1979

Partido Político	% de votos válidos
Unión Democrática y Popular (UDP)	35,98
Movimiento Nacionalista Revolucionario-Alianza (MNR-A)	35,88
Alianza Democrática Nacionalista (ADN)	14,88
Partido Socialista Uno (PS-1)	4,82
Alianza Popular de Integración Nacional (APIN)	4,10

ELECCIONES GENERALES DE 1980

Partido Político	% de votos válidos
Unidad Democrática y Popular (UDP)	38,71
Movimiento Nacionalista Revolucionario-Alianza (MNR-A)	20,13
Alianza Democrática Nacionalista (ADN)	16,82
Partido Socialista Uno (PS-1)	8,70
Frente Democrático Revolucionario (FDR)	3,01

Elaboración Propia

Fuente: INE s.f.: 11

- 6) Müller & Asociados 1990: 73. La participación porcentual de los partidos colocados en los primeros lugares fue la siguiente:

ELECCIONES GENERALES DE 1985

Partido Político	% de votos emitidos
Acción Democrática Nacionalista (ADN)	28,77
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)	26,60
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)	8,90

Fuente: Müller & Asociados 1990: 73, 75-76

- 7) El Dr. Victor Paz Estenssoro fue presidente la primera vez de 1952 a 1956; la segunda, de 1960 a 1964; su tercer gobierno se inició en 1964 como resultado de una reelección pero el golpe militar del Gral. René Barrientos Ortuño lo interrumpió abruptamente (INE s.f.: s.n.).
- 8) El "Pacto por la Democracia" entre ADN y MNR fué sellado el 16 de octubre de 1985.
- 9) "Reportaje a 1989" en Presencia, La Paz 31.12.1989.
- 10) Los primeros colocados durante las elecciones municipales fueron:

ELECCIONES MUNICIPALES DE 1987

Partido Político	% de votos emitidos
ADN	24,94
MIR	22,87
MNR	11,77

Elaboracion Propia

Fuente: BOLIVIA 1988: 7

- 11) El "Acuerdo Patriótico" es un pacto político firmado entre ADN y MIR-NM, partido éste que como fue indicado anteriormente se fundó para combatir al régimen dictatorial del general Bánzer. La sigla NM (= Nueva Mayoría) corresponde a la fracción liderada por el Licenciado Paz Zamora.
- 12) CLEPI 1988: 123. Los otros grandes productores de estaño son: Malasia con un aporte del 15%, Brasil con 11%, Indonesia con 9%, China 7,5% y Tailandia con 6,9% (CLEPI 1988: 123).
- 13) Entre 1980 y 1986 la empresa estatal registró un pérdida promedio anual equivalente a 140 millones de dólares (Morales et al. 1987: 52).
- 14) INE s.f.: 102. Las actividades económicas colocadas en primer y segundo lugar fueron por un lado, las del sector de servicios que sin considerar a los servicios básicos (electricidad, agua, etc.) en 1980 contribuyeron al PIB con el

40,96% y en 1989 con el 41,19% y, por otro, las de la agricultura cuyos valores fueron del 18,35 y 21,59 por ciento respectivamente (INE s.f.: 102).

- 15) Müller & Asociados s.f.: 36 e INE 1989a: 72. La rama que absorbe el mayor porcentaje de la población ocupada es la agricultura con 46,50% del total en 1980 y 42,31% ocho años más tarde (Müller & Asociados s.f.: 36 e INE 1989a: 72).
- 16) No hay que olvidar que la composición de ese porcentaje varió significativamente durante el decenio pasado debido a la disminución de la exportación de minerales y a la simultánea relevancia que adquirió la venta del gas natural.
- 17) INE 1981: 251 e INE s.f.: 148. También se exporta castaña, goma, cuero, ganado vacuno, entre otros.
- 18) Algunos rasgos de la industrialización en Bolivia serán presentados al tratar, en un capítulo a seguir, el proceso de urbanización en el país.
- 19) En mayo de 1989 la deuda argentina por compras de gas equivalía a 190 millones de dólares (Müller & Asociados 1990: 47).
- 20) Müller & Asociados 1990: Anexo 1 cuadro 1. Los valores correspondientes a los otros años fueron: 1983= -6,5; 1984= -0,3 y 1985= -0,1 (Müller & Asociados 1990: Anexo 1 cuadro 1).
- 21) "1990: Comportamiento económico-financiero de Bolivia" en El Deber, Santa Cruz de la Sierra 6.1.1991 e INE s.f.: 101.

Durante la década de 1970 el PIB creció de la manera siguiente:

1971	1972	1973	1974
4,9%	5,9%	6,9%	6,1%
1975	1976	1977	1978
5,5%	6,5%	3,5%	3,1%

Fuente: Minkner 1981: anexo p.1

- 22) Müller & Asociados 1990: 96. Un estudioso de la realidad nacional concluye que "después de más de 159 años de vida Republicana el país es capaz de ofrecer un nivel de vida decoroso a sólo el 5 por ciento de la población, que pertenece al estrato de más altos ingresos (...)" (Vega s.f.: 15).
- 23) INE s.f.: 65-66 y 69. En 1976 los porcentajes eran más alarmantes; por ejemplo el 53% de los hogares urbanos carecía de servicio higiénico y el 70% no tenía acceso al alcantarillado público (INE s.f.: 65-66).
- 24) INE s.f.: 65-66. A diferencia de lo que sucede con las ciudades, la zona rural continúa sumida en la pobreza. Entre 1976 y 1988 no hay grandes avances en su infraestructura de servicios públicos como lo muestra el hecho que en la década de 1970 el 95,7% de las casas carecían de servicio higiénico (INE s.f.: 65).
- 25) Se estima que entre 2.000 y 2.500 millones de dólares procedentes del negocio del narcotráfico estarían en manos de no más de 200 personas (Oporto Castro 1989: 177).

- 26) En el capítulo titulado "La ambivalencia de la economía informal" se entrará en mayores detalles sobre este tema.
- 27) Así por ejemplo, vendedoras ambulantes en La Paz informaron tener una jornada que llega a un total de 95 horas como promedio semanal: 60 horas dedicadas al comercio y 35 al trabajo doméstico (Ruiz 1988: 7).
- 28) Ministerio de Hacienda y Estadística s.f.: 64-65 e INE 1989a: 53 y 69. En el caso de los datos de 1950 el total es la suma de mujeres censadas; en el de 1988 es la población femenina estimada para ese año.

LOS ENFOQUES TEORICOS PARA LA EXPLICACION DE LA ECONOMIA INFORMAL Y SUS IMPLICACIONES SOCIO-POLITICAS

H. C. F. Mansilla

a. La percepción de una temática compleja

A pesar de que las causas y la importancia de la economía informal y muy especialmente de su florecimiento inusitado en los últimos tiempos han sido ya estudiadas desde el punto de vista de las ciencias económicas y las disciplinas afines, se puede advertir la carencia de estudios sociológicos y politológicos acerca de esta temática, lo cual es evidente en el caso boliviano. Al mismo tiempo se puede observar un marcado desinterés por vincular la expansión de la economía informal con los procesos de modernización que tienen lugar en forma acelerada desde la llamada Revolución Nacional de 1952. A pesar de todos los reveses y contratiempos sufridos en las últimas décadas, Bolivia ha ingresado indefectiblemente a la senda de la urbanización, a la era del consumo masivo contemporáneo y al terreno de las pautas modernas de comportamiento social. Se trata de un proceso reputado generalmente como irreversible, sostenido por los estratos sociales más diversos y apoyados por las más distintas corrientes político-ideológicas; el surgimiento de la economía informal y, sobre todo, su inesperada dilatación, parecen ahora encarnar un notable freno con respecto de las ilusiones concomitantes de progreso material permanente, modernización rápida y desarrollo coherente. La economía informal adquiere ahora, por lo menos parcialmente, el carácter de una economía clandestina, situada literalmente a la sombra del quehacer lícito y del desenvolvimiento normal, es decir, como un fac-

tor no muy favorable a los designios de modernidad que comparte una porción muy grande de la sociedad boliviana.

Para marxistas y revolucionarios, para liberales y tecnócratas, la evolución de la economía informal se asemeja a un doloroso cuestionamiento del *proyecto de modernización*, meta de la mayoría de los esfuerzos colectivos, el cual, como se sabe, ejerce además una función de identificación colectiva de primera categoría entre las élites izquierdistas y las conservadoras de la Bolivia contemporánea. El vertiginoso crecimiento de la economía clandestina y el estancamiento de la formal parecen conformar importantes factores que retardan o hasta obstaculizan la anhelada modernización, por lo que la opinión pública cree ver en todo ello una "década perdida" para el desarrollo o, por lo menos, una considerable rémora para el progreso del país. En todo caso, la economía informal representa el reverso —teóricamente no esperado— de esfuerzos intensos y de larga duración en pro de la modernización de Bolivia y, simultáneamente, una especie de claro retroceso hacia un periodo histórico caracterizado por relaciones de producción de marcada índole agraria y campesina y por condiciones de vida de cuño precapitalista y premoderno. El retorno a esta etapa, a la cual se la creía ampliamente superada, hace surgir nuevamente el espectro de una pobreza generalizada, propia de naciones asiáticas o africanas, pobreza que asimismo significa una clara disminución en los niveles de organización comunal, un estancamiento en el campo de la educación y la cultura populares, una vuelta a tradiciones irracionales propias de modos de vida rurales y una innegable regresión en el ámbito político-institucional (1).

Lo paradójico y decisivo del decurso actual de la economía informal es que está íntimamente vinculado a elementos centrales del proceso boliviano de modernización, por más modesto que éste sea a escala mundial. La precipitada tasa de urbanización, las modificaciones en las técnicas de producción, los flujos migratorios y las consecuencias de la reforma agraria, de la apertura de nuevas regiones agrarias y del debilitamiento de los lazos primarios han abonado el terreno donde luego prosperó la economía informal. Sería obviamente inadecuado y hasta falso el presuponer un nexo causal obligatorio entre estos aspectos recién nombrados (de indudable cuño modernizante) y el incremento de la economía informal, pero todos ellos y muy principalmente el aumento de-

mográfico debido a mejoras en la salud pública y la previsión social constituyen el horizonte desde el cual se despliegan tan frondosamente las variedades de la economía clandestina.

Existen naturalmente otros factores que han coadyuvado energicamente a este desarrollo, que no están ligados a los procesos modernizantes y que, por lo tanto, son percibidos por la opinión pública y por los estudiosos de la materia como las causas principales de la economía informal. Este procedimiento tiene la ventaja de no establecer una conexión manifiesta entre modernización y economía clandestina y de evitar un análisis profundo de las relaciones entre ésta última y las acciones del Estado. De todas maneras, es necesario mencionar aquellos factores que tienen que ver con los orígenes de la economía informal sin provenir de esfuerzos modernizantes, ya que un fenómeno tan complejo como aquélla tiene notoriamente una serie múltiple de ingredientes causales. Como se trata de aspectos ampliamente estudiados por las ciencias económicas, aquí basta una mención cursoria de algunos de ellos:

- agotamiento del potencial minero de la nación y colapso de la industria correspondiente;
- uso excesivo y erosionamiento de suelos agrícolas;
- terciarización de la economía boliviana;
- incremento de las desigualdades sociales, del nivel de ingresos y de las oportunidades de empleo;
- modificaciones en la demanda de bienes y servicios;
- procesos inflacionarios y hasta hiperinflacionarios; y
- crisis fiscal, pérdida del control de la economía por parte del Estado y reducción de la capacidad del mismo para las recaudaciones de impuestos (2).

Para un análisis de la percepción colectiva de la economía informal en Bolivia es imprescindible, sin embargo, insistir en aquellos fenómenos y motivos que están enlazados con los intentos de modernización e industrialización, con el resultado francamente mediocre de los mismos al cabo de algunos decenios y con las consecuencias ambivalentes que se pueden atribuir a las políticas públicas de redistribución de ingresos, de mejoramiento de los estratos menos favorecidos de la población y de expansión de las

funciones estatales, y especialmente al rol del Estado como empresario en los rubros más diversos. Frente a esta gama de problemas derivados precisamente de un desarrollo más o menos modernizante, la economía informal adopta el carácter de una mera estrategia de supervivencia de parte de aquellos sectores sociales excluidos de todos los beneficios del progreso material, lo cual la hace aparecer como una lamentable desviación con respecto al camino "normal" de un desarrollo basado en la tecnología contemporánea y en sistemas eficientes de administración de recursos. Se trata ostensiblemente de un fenómeno difícil de digerir teóricamente y contrapuesto a los postulados —y a las esperanzas— de muy diferentes filosofías de la historia y enfoques en torno a la evolución de los países latinoamericanos, ya que, por un lado, la economía informal está vinculada a formas de organización social y de producción que hoy en día son consideradas como arcaicas y, por consiguiente, superadas por el adelanto histórico conseguido penosamente a lo largo de las últimas décadas, y, por otro, todo este complejo causa la impresión de ser claramente desfavorable a la consolidación de una identidad colectiva apoyada sólidamente sobre las conquistas científico-tecnológicas de la modernidad (3).

Es comprensible que la opinión pública perciba con desagrado una cuestión que le hace recordar que la economía informal *también* representa los aspectos colaterales negativos de todo proceso de modernización. El desempeño de los intentos de industrialización en Bolivia puede ser calificado de decepcionante; la recomposición de la estructura productiva ha ocasionado un drástico aumento de las tasas de desempleo y un descenso no menos brutal del nivel medio de ingresos (4). Por último —pero no menos importante—, la economía informal en Bolivia está íntimamente vinculada al negocio de la cocaína y al narcotráfico; el sector ilegal-delictivo conforma probablemente su porción financieramente más importante y, durante mucho tiempo, su fracción más dinámica, debido, entre otros factores, a los cuantiosos excedentes que genera, a su capacidad para proveer de ocupación a grandes contingentes laborales de origen urbano y rural y a los considerables efectos multiplicadores que ejerce sobre el resto de la economía boliviana (5). Todo esto no contribuye, manifiestamente, a incrementar la respetabilidad de la economía informal.

La percepción social de la misma se complica por el hecho de tener que incluir necesariamente a los sectores ilegal-delictivos,

pero sin poder atribuirles funciones positivas y promisorias para el futuro. Es sintomático que todas las investigaciones acerca de la economía informal en Bolivia estimen a priori, sin mayor problematización, que los sectores ilegal-delictivos, asociados principalmente al complejo coca/cocaína, pertenecen a ella sin más, lo que, por ejemplo, omite la conocida obra de *Hernando de Soto* (6) sobre el caso peruano. Es por ello que en Bolivia el intento de descubrir entre los informales empresarios innovadores e intrépidos ha resultado ser mucho más débil que en el Perú o en otros países; debido a los factores nombrados, las fuerzas neoliberales en Bolivia vacilan en promover abiertamente el fortalecimiento del sector informal en cuanto parte indispensable y valiosa para el futuro del movimiento anti-estatista de la libre empresa (7).

No sólo la inclusión del sector delictivo-ilegal, sino también otro aspecto contribuye a dificultar una visión social positiva y unívoca de la economía informal. Esta última está enlazada a numerosas formas de la producción agraria y artesanal tradicional, de modo que es fácticamente imposible establecer una frontera clara entre lo clandestino e ilícito de la economía informal, por un lado, y lo consuetudinario y legalmente tolerado de la economía tradicional, por otro. Para los campesinos de las etnias indígenas, por ejemplo, que se dedican al cultivo de la coca, resulta bastante incomprensible que una actividad realizada por ellos desde tiempos inmemoriales se haya convertido en un quehacer ilegal y penado por la ley. En general puede aseverarse que la ahora muy discutida transición de un sistema productivo legal-formal a uno ilegal-informal —que es uno de los temas de más actualidad de las ciencias sociales y económicas del área andina— no brinda ningún sentido a una buena parte de la población rural boliviana: en el incremento del cultivo de la coca estos grupos ven seguramente un mero aumento cuantitativo de una faena acostumbrada y no una ocupación cualitativamente nueva y moralmente reprochable.

La auto-percepción de los informales urbanos es muy similar. En su gran mayoría son hijos o nietos de campesinos indígenas que han practicado (o aun practican) una agricultura de subsistencia, alejada tanto del incipiente mercado nacional como del marco estatal. De generación en generación se ha transmitido en ellos una fundada desconfianza hacia toda instancia y medida gubernamentales, la que ha sido transferida al nuevo ambiente urbano. Para realizar su trabajo en las ciudades, estos informales

evitan, dentro de lo posible, todo registro en instituciones oficiales y aprovechan más bien los llamados vínculos primarios (familia, clan, amistades, padrinzagos) y las pautas convencionales de comportamiento de su medio premoderno. En este contexto, que es una simbiosis de elementos tradicionales y modernos, la diferenciación entre economía formal e informal juega un papel muy secundario, máxime si el mundo de lo formal-legal está unido a normas e imágenes de una *cultura estatal*, de la cual las etnias indígenas y los sectores campesinos han participado relativamente poco (8).

b. Los principales enfoques teóricos y sus implicaciones políticas

Aunque las teorías más importantes para explicar el fenómeno de la economía informal son ya conocidas y han sido suficientemente analizadas, no es del todo superfluo el tratarlas someramente, ya que sus implicaciones socio-políticas, las políticas públicas derivables de ellas y sus conexiones étnico-culturales –sobre todo en el contexto boliviano– no han sido aun debidamente estudiadas. A causa del enorme peso del sector ilícito de la coca/cocaína, la definición más conveniente para este caso es la que traza una simple línea divisoria entre lo formal y lo informal de acuerdo a la legalidad vigente en Bolivia; de esta manera, el sector delictivo-ilegal es considerado como *parte integrante* de la economía informal, pero sin identificar enteramente lo informal con lo ilícito. La economía informal sería entonces la actividad llevada a cabo fuera de las regulaciones y normas vigentes (o rozando continuamente el borde de éstas), lejos de los mercados legalmente establecidos y, por consiguiente, el quehacer no registrado por el sistema oficial de estadísticas (9).

En Bolivia uno de los puntos más substanciales de la controversia teórica no atañe tanto a la magnitud alcanzada por la economía informal (10), sino más bien a su función social, sus posibilidades de crecimiento e integración y a sus perspectivas en el largo plazo, teniendo en cuenta su conexión con el complejo coca/cocaína. Como en el resto de América Latina, se discuten teorías explicativas que tienen claras connotaciones ideológicas y políticas:

- la economía informal en cuanto fenómeno efímero que desaparecerá con una adecuada planificación estatal y con los avances del proceso de modernización;
- la economía informal como fuente complementaria (de índole positiva) del potencial de crecimiento de la economía libre de mercado;
- la economía informal en cuanto estrategia de vida autónoma y tradicional de dilatadas etnias indígenas;
- la economía informal como el fundamento no-capitalista de un cambio revolucionario, basado en un sector de subsistencia, capaz de inducir un crecimiento centrado en sí mismo y auto-suficiente y simultáneamente un cambio social revolucionario;
- la economía informal en cuanto alternativa parcial, creadora de enclaves estables y con posibilidades de desarrollo genuino en el marco de una economía dual de larga duración (11).

En Bolivia tienen relevancia, aunque de magnitud muy diferente, sólo tres enfoques: el marxista-dependetista, el neoliberal y el indigenista (12), todos ellos asociados a políticas públicas que a primera vista son incongruentes entre sí, pero que paradójicamente no presentan disparidades insalvables.

La tendencia teórica más antigua y que aun dispone de la mayor influencia es la asociada a la inmensa investigación empírica del *Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe* (= PREALC), que fue creado por la Organización Internacional del Trabajo (= OIT), dependiente de las Naciones Unidas. Este enfoque teórico, que se ha nutrido de un marxismo mitigado por tendencias estructuralistas y otras modas de las últimas décadas y, obviamente, por la Teoría latinoamericana de la Dependencia (13), parte *a priori* de la concepción de que un desarrollo adecuado y logrado consiste en un proceso sostenido de crecimiento, urbanización, consumo de masas e industrialización. Ya que el paradigma evolutivo es una imagen bastante convencional de la modernidad contemporánea, el desenvolvimiento socio-económico que postula esta corriente es, en el fondo, una industrialización basada en la tecnología contemporánea, en la homogeneización creciente de toda la sociedad y en una dinámica técnico-cultural continuada. En contraste con estos valores normativos,

la economía informal aparece como una deformación temporal, como un fenómeno precario y provisional y como un callejón sin salida que, en última instancia, se opone al "desarrollo normal" de las sociedades latinoamericanas (14). La economía informal es considerada entonces como un retorno a la "heterogeneidad estructural" y a modelos anticuados de producción y distribución; se la percibe asimismo como un sistema que retiene importantes recursos que servirían al proceso de industrialización y como un círculo vicioso que sólo conduce a un tenaz tráfico de la pobreza entre los informales mismos. En este contexto la economía informal es vista a lo sumo como una solución interina, como una válvula accidental de escape que únicamente puede brindar una contribución al desarrollo de una nación en momento de agudas crisis y cuando el desempleo alcanza límites insoportables.

Siguiendo los lineamientos de la Teoría de la Dependencia, que parte de un paradigma de modernidad derivado de los centros metropolitanos, la evolución latinoamericana y boliviana en particular es calificada como un capitalismo dependiente y de segunda clase: el "capitalismo industrial boliviano" recibe la denominación de "inmaduro", "pues no produce de manera capitalista toda la masa de mercancías necesarias para su propia reproducción", y de "híbrido", porque coexistirían formas de producción empresariales con semi-empresariales, capitalistas con artesanales (15). La economía informal emerge como el resultado del carácter heterónimo y dependiente del desarrollo latinoamericano, de la naturaleza contradictoria de su estructura social, de una evolución que produce necesariamente enormes disparidades de ingreso y desigualdades sociales y, por ende, de un proceso capitalista de modernización que demostraría su cualidad inferior y su dinámica insuficiente. El sector informal estaría caracterizado por un excedente "estructural" de fuerzas laborales, que no encuentran trabajo en el ámbito moderno de la economía y que están obligadas a desarrollar estrategias precarias de supervivencia. El uso de técnicas de producción de carácter capital-intensivo conduce a una capacidad reducida de absorción de la esfera moderna. Las fuerzas de trabajo excedentarias están, por lo tanto, compelidas a buscar su suerte en los sectores premoderno, que se destacan por su baja productividad general, su escaso nivel de complejidad tecnológica, su incipiente división de las tareas productivas, la baja calificación de su mano de obra, su modesta dotación de capital y, en general, por su falta de previsibilidad (16).

Esta corriente teórica postula además la tesis de que el sector informal tendría la función —de enorme relevancia— de disminuir los costes de producción y reproducción de todo el sistema. La posición subordinada del sector informal-tradicional con respecto a la esfera formal-moderna reiteraría en el interior de la sociedad la relación asimétrica que existe entre centro y periferia a nivel mundial, dentro de la cual, como se sabe, las naciones metropolitanas se aprovechan de una amplia gama de condiciones adversas impuestas a las sociedades periféricas por el mercado mundial. Ya que esta vinculación entre los sectores informal y formal sería desfavorable a la larga para el desarrollo integral de los países involucrados, esta corriente teórica propugna como única solución aceptable la paulatina integración de lo informal-tradicional en lo formal-moderno: de la "lógica de la subsistencia" habría de pasar a la "lógica de la acumulación" (17). Las medidas propuestas para tal diseño resultan ser, empero, de una notable modestia: la "democratización" del acceso a los créditos bancarios para los informales, la mejoría de la capacitación profesional y la asignación de ayudas técnicas más adecuadas.

Esta concepción cuenta aun con una gran aceptación en Bolivia (y en toda América Latina): se acomoda a la mentalidad general de aquéllos que son partidarios de un proceso rápido y convencional de modernización y que, simultáneamente, sustentan una actitud paternalista hacia la fuerza laboral. Así como la economía informal les parece un retroceso frente a las novedades tecnológicas del día, alimentan una profunda desconfianza con respecto a la gente que intenta o que tiene que construirse una existencia autónoma en forma espontánea y lejos de planes estatales y reglamentaciones burocráticas (18). Se puede aseverar que la economía informal representa algo básicamente desagradable para los funcionarios y planificadores, los políticos e ideólogos que, en el fondo, anhelan registrar, controlar y dirigir los recursos naturales y humanos de modo exhaustivo y autoritario; por lo demás, la economía informal parece encarnar aquella "heterogeneidad estructural" que se opone a ser utilizada según la lógica de la mera eficiencia en proyectos y diseños concebidos unilateralmente desde arriba.

El enfoque de PREALC no permite reconocer lo específico del sector informal; al adherirse a los lugares comunes de la Teoría de la Dependencia en torno a la presunta falta de dinámica de cre-

cimiento del sector moderno en países del "capitalismo periférico" y al surgimiento "necesario" de dilatados grupos de marginales urbanos, este enfoque reduce, en el fondo, una problemática compleja a un solo factor causal simple –la relación asimétrica entre centros y periferias–, deja de lado otros varios elementos que dan origen a la economía informal y supone que una adecuada y muy extendida acción estatal podría a la larga determinar la transición de la informalidad a la economía formal-moderna. El caso boliviano, caracterizado por una multiplicidad de orígenes, manifestaciones y resultados de la economía informal, no puede ser explicado recurriendo a analogías generales y considerándolo como una anomalía o una carencia por contraste con aquéllo reputado como la evolución "normal" y, ante todo, deseable (19).

La visión neoliberal de la economía informal se ha conformado paradójicamente poniendo en duda la idea –tan convencional como expandida– de que América Latina constituye una sociedad del capitalismo periférico. Para el enfoque neoliberal, lo decisivo del actual estado de cosas no es la existencia de un orden capitalista, sino precisamente su ausencia; en lugar de la dinámica de un capitalismo liberal predominaría el estancamiento propio de un sistema mercantilista y patrimonialista, que sofoca la iniciativa privada mediante un exceso de regulaciones burocráticas, por medio de la promoción de una minoría de agentes económicos (en detrimento de la mayoría) y en base a exoneraciones tributarias y la imposición de barreras arancelarias (las que, en el fondo, favorecen a grupos cuyo principal mérito reside en haber conseguido una notable influencia política). Dentro de este contexto teórico, la economía informal aparece como una sana respuesta a una economía embrollada por el estatismo burocrático y como el anhelo razonable y moderno de propiedad privada y empresa libre (20).

A pesar de las reformas neoliberales implementadas por el gobierno boliviano a partir de agosto de 1985, el país ha persistido en una atmósfera social proclive al estatismo habitual, la que sigue impidiendo el despliegue de una auténtica economía de libre mercado y, al mismo tiempo, auspiciando el florecimiento de la economía informal. Bolivia configura una sociedad premoderna en el sentido de que la prioridad fundamental de los diversos grupos no consiste en la creación de una nueva riqueza social, sino en la redistribución de la ya existente. La mayoría de los movimientos políticos pugnan por participar en una verdadera batalla redis-

tributiva, en la que los grupos mejor organizados, más agresivos y con los vínculos más sólidos con el aparato estatal y sus empresas son los que llevan las de ganar. La sociedad boliviana actual denota varios elementos de una *rent-seeking-society* (21): los principales favorecidos de esta economía de rentas son los funcionarios públicos, los empresarios parasitarios que viven de encargos y trabajos estatales y, en parte, los proletarios urbanos. Sus ingresos no corresponden de modo razonable a su desempeño y labores efectivas. Estos grupos son proclives a una actividad empresarial del gobierno tan dilatada como caótica; para mantener sus privilegios fácticos, que están conectados a las más variadas prácticas de corrupción y cohecho, propias de un aparato estatal altamente enrevesado y burocratizado, se oponen vehementemente a la crítica socialmente relevante de la discusión pública, al control mediante gremios independientes y, ante todo, al sistema de la competencia abierta y espontánea en mercados de bienes, servicios e ideas.

La decadencia contemporánea de este sistema premoderno de economías de rentas y, al mismo tiempo, el intento de contraponer alguna alternativa seria al Estado redistributivo –fuente inagotable de corrupción y de complicaciones innecesarias (22)– han fomentado la insurgencia de la economía informal, máximo si se trata de grupos sociales emergentes, perjudicados hasta ahora por el *urban bias* de la sociedad mercantilista, grupos empeñados en labrarse su propio destino fuera de toda influencia estatal y alentados, en el fondo, por un impulso genuinamente moderno, dedicado a aminorar los aspectos mercantilistas y patrimonialistas de la herencia colonial.

El enfoque neoliberal adolece de flaquezas teóricas y debilidades prácticas. El rol del Estado aparece en tonos demasiado negativos, ya que, con la posible excepción de algunas naciones de Europa Occidental durante la acumulación primaria de capital, la promoción gubernamental ha sido decisiva para el ulterior despliegue de las actividades empresariales privadas (como lo demuestra actualmente el caso de Corea del Sud). Es simplista el atribuir todos los fracasos de la iniciativa privada al entorno institucional-burocrático, cuando son múltiples las causas para el desempeño mediocre de los empresarios pequeños y medianos en toda América Latina. Es, por ejemplo, inconcebible cómo los empresarios del sector informal (23) habrían de competir contra los grandes consorcios nacionales e internacionales aun en el caso

óptimo de que se anularan todos los obstáculos provenientes de la burocratización excesiva del aparato administrativo y todos los remanentes del orden mercantilista-patrimonialista. Por otra parte, es improbable que en el complejo contexto de la sociedad boliviana actual se pueda crear, mediante una especie de lógica darwiniana, un capitalismo liberal genuino e innovador frente al mercantilismo prebendalista y clientelista, el cual, paradójicamente, goza de popularidad y arraigo (24). Además, los neoliberales pasan por alto algunas funciones que imprescindiblemente debe cumplir el Estado y que, después de todo, no las desatiende completamente: servicios públicos, educación, arbitraje de conflictos también entre los diferentes sectores informales (25).

En el terreno de la praxis, las medidas propugnadas por el enfoque neoliberal se distinguen también por su modestia. El objetivo principal es, obviamente, la reducción del Estado mercantilista y patrimonialista, la simplificación o anulación de sus funciones, la racionalización de las leyes y normas, la descentralización de la administración pública y medidas afines (26), pero todos estos puntos del programa neoliberal no afectan los aspectos esenciales que también están ligados a la economía informal: la explosión demográfica, la continuada erosión de los escasos suelos agrícolas bolivianos, la permanente emigración del campo a la ciudad y la persistencia de mecanismos sociales, culturales e institucionales que originan la discriminación de las etnias indígenas de donde se nutre la gran masa de los informales.

Para el caso boliviano *Roberto Casanovas Sainz* (27) señaló adecuadamente que es muy laborioso el establecer una clara línea divisoria entre formalidad e informalidad: los trabajadores informales, al actuar al margen de las disposiciones legales, no lo harían deliberadamente, sino más bien siguiendo una racionalidad muy aceptable derivada de la idea de minimizar costes. Cerca de la mitad de las unidades económicas informales en el ámbito urbano –vendedores ambulantes, empresarios pequeños, artesanos y ofertantes de los servicios más diversos– han cumplido con la obligación de inscribirse en el Registro Unico de Contribuyentes (lo que no supone una erogación financiera), pero es muchísimo más reducido el porcentaje que paga efectivamente los impuestos, y aun en este caso se trata sobre todo de tributos locales (municipales) y no de impuestos nacionales. Se debe advertir que este comportamiento colectivo posee en Bolivia una larga

tradición, basada en las prácticas de supervivencia que las etnias indígenas han tenido que desplegar a lo largo de siglos en un contexto que siempre les ha sido relativamente adverso.

El estudio de estas pautas ambiguas de comportamiento colectivo ha llevado a la formulación incipiente de un enfoque indigenista acerca de la economía informal en Bolivia. Los informales indígenas dan a primera vista la impresión de un estilo de vida y de producción estático, pasivo y anticuado, pero, en el fondo, han sabido adaptarse —de manera no innovadora, pero ingeniosa— a circunstancias extraordinariamente duras para ellos en un contexto concebido para favorecer a los estratos mayoritariamente blancos o mestizos (28). A pesar de que aun existen únicamente fragmentos dispersos de una teoría indigenista de la economía informal (29), su relevancia radica en el porcentaje elevado de la población de origen indígena en Bolivia (la fuente más importante de la proveniencia de los informales) y en la creciente fuerza de las tendencias nativistas e indigenistas, que tienen a no pocos informales entre sus adherentes. Según este enfoque, la economía informal no es la mera estrategia actual de supervivencia de grupos sociales que han quedado al margen del desarrollo económico contemporáneo, sino un modo de vida autónomo que cuenta con una larga tradición. Esta estrategia de vida de las etnias indígenas debe ser comprendida fuera de los conceptos convencionales de tradicionalidad y modernidad o economía planificada y mercado libre, conceptos que estarían ya prefigurados por una lógica eurocéntrica que impediría una explicación realmente adecuada del fenómeno. Hay que considerar el hecho de que la mayoría de los informales —indígenas o mestizos con marcada ascendencia aborígen— pertenecen a los grandes sectores sociales que desde la conquista española están sometidos a los más variados tipos de discriminación, aunque éstos sean, hoy en día, de carácter extralegal. Entre ellos hay que constatar asimismo una amplia gama de explotación económica más o menos abierta. El enfoque teórico indigenista subraya el hecho de que los informales —campesinos dedicados al cultivo de la coca, vendedores ambulantes urbanos, trabajadores despedidos de las minas, mini-empresarios en nuevas aglomeraciones de índole precaria— continúan una antigua tradición que puede ser calificada como una hábil actitud de ambigüedad frente al Estado central y al aparato burocrático, los cuales, hasta hoy, tienden a favorecer los intereses de las minorías blanca y

mestiza. La economía informal ejercida por los grupos mencionados no pone en duda frontalmente la legalidad del Estado boliviano, sus leyes e instituciones, no cuestiona los logros tecnológicos de la modernidad y tampoco trata de disociarse totalmente ni del mercado ni del marco legal y monetario del Estado central, pero intenta construir paralelamente un circuito de pequeñas empresas, nexos, obligaciones y prestaciones de servicios, un circuito que no está registrado legalmente (o sólo en forma muy parcial y temporal), pero se aprovecha de algunos resquicios y de muchas oportunidades que brinda el quehacer económico del presente, cuya tolerancia con respecto a irregularidades legales ha crecido enormemente en esta época de una severa crisis económica. Este sistema está basado en relaciones de reciprocidad, parentesco y compadrazgo que provienen de las antiguas tradiciones socio-culturales andinas. Se trata de un modo de vida y de una estrategia permanente del quehacer productivo que tienen raíces muy profundas en el pasado; para los que viven en aquel contexto la diferencia entre formal e informal o entre tradicional y moderno no tiene ningún sentido.

Las connotaciones políticas derivables del enfoque indigenista son algo difusas. En forma mediata puede vigorizar las tendencias separatistas y fundamentalistas, que no son del todo extrañas al estado actual de la conciencia política de las etnias indígenas; esta teoría puede contribuir igualmente a fomentar la ilusión de un camino histórico totalmente diferente y autónomo, alejado tanto del consumismo occidental como del socialismo estatizante. Existen, empero, dudas acerca de la capacidad de los informales de constituir un movimiento social coherente, un actor político considerable y una ideología convincente (30). Aunque la mayoría de los informales no se perciba en tal condición y se vea más bien como la continuación natural de una vieja civilización, hay que reconocer que ellos —sobre todo en el ámbito urbano— están sometidos día y noche a los *efectos de demostración* irradiados por la exitosa cultura metropolitana del Norte, cuyos valores de orientación, ahora de validez universal, tienden también en Bolivia a prevalecer sobre los valores respectivos del orden tradicional, por más sólido que éste aun parezca. La economía informal debe ser considerada —por lo menos en el presente— como un fenómeno subordinado a la economía formal-moderna: aun cuando la economía informal haya crecido notablemente en los últi-

mos tiempos y dé la impresión de una senda autónoma de desarrollo —reconciliada, por lo demás, con la cultura ancestral del país—, no hay que olvidar que su despliegue tiene lugar dentro de un marco socio-histórico cuya dinámica está en última instancia determinada por el adelanto tecnológico contemporáneo, por presiones económicas supranacionales y por los valores de orientación procedentes del proceso de modernización, industrialización y urbanización. Pese a la distancia que el enfoque indigenista atribuye a los informales con respecto al mundo formal-moderno (distancia que significaría asimismo un grado substancial de autonomía), es probable que éstos se hallen en una posición subordinada con relación a la economía formal, no sólo a causa de los factores recién mencionados, sino también porque la economía informal en su totalidad sirve en último término a la consolidación o, por lo menos, al mantenimiento de la formal-moderna. En el caso boliviano se puede aseverar que existe, sin duda alguna, un flujo financiero permanente y voluminoso del sector informal en favor del formal (31).

No se debe descartar la posibilidad de que los informales bolivianos posean una actitud ambigua en torno a sus propias tradiciones: es probable que no reconozcan una distinción clara entre formalidad e informalidad y, por consiguiente, entre actividades lícitas e ilícitas según la legislación vigente en la actualidad; es igualmente verosímil que empleen con bastante éxito diversos elementos típicos del orden tradicional, basado en los vínculos primarios y en sistemas de solidaridad inmediata, para construir su universo de empresas, labores, tácticas y nexos informales en medio de una sociedad hostil y étnicamente diferente. Y hasta es casi indudable que buena parte de ellos esté orgulloso de proseguir una tradición ancestral y de obtener un resultado no del todo desdeñable en esta faena por demás ardua e ingrata, la cual, obviamente, trasciende el carácter de una mera estrategia temporal y precaria de supervivencia.

Es probable, sin embargo, que los mismos informales tiendan, de una manera no del todo explícita, a integrarse paulatinamente al "otro" modo de vida y producción: uno de sus anhelos centrales sería el ingresar a la esfera de la formalidad como primer paso hacia el mundo de la modernidad (32). Los informales mandan a sus hijos a escuelas del sistema formal, tratan de utilizar —modestamente— los adelantos de la tecnología moderna y, tam-

bién en un marco reducido, pero formal-moderno, intentan hacer valer sus intereses y designios políticos. Considerando la enorme diversidad de los grupos involucrados y de sus móviles, es altamente problemática la creación de una representación unificada de los intereses de los informales, y, por lo tanto, la consolidación político-institucional de su estrategia de vida a largo plazo, máxime si la irradiación de los valores y las normas modernas va a seguir socavando el fundamento ancestral de su identidad colectiva aborígen.

Las prácticas políticas deducibles de los enfoques teóricos (mayor intervención del Estado en el caso del marxista-dependen-tista, apoyo masivo a los informales en cuanto abanderados de la economía del libre mercado en el neoliberal y fomento de un proyecto autónomo y autárquico en el caso del enfoque indigenista) disponen en la realidad de una base social restringida y de un porvenir bastante dudoso.

Enfoque Teórico	Causas para el surgimiento de la economía informal	Manifestaciones centrales	Intentos de solución e implicaciones políticas
Teoría Marxista-dependista (PREALC y afines)	Excendente estructural de fuerzas laborales a causa de capacidad reducida de absorción del sector moderno; sector informal financia desarrollo del sector moderno.	Heterogeneidad estructural de lo social; "capitalismo inmaduro"; enfoque popular entre funcionarios y planificadores.	Lógica de la subsistencia" debe dar paso a la lógica de la acumulación; mayor actividad estatal para hacer que los informales pasen a ser formales; industrialización como meta paradigmática.
Teoría Neoliberal (Hernando de Soto y tendencias afines)	Economía informal como efecto del Estado mercantilista y patrimonialista y el exceso de regulaciones burocráticas; economía informal en cuanto anhelo de genuina propiedad privada y empresa libre.	Actividad política como batalla redistributiva sin creación de nueva riqueza social; formación de minorías privilegiadas que viven del favoritismo y prebendalismo gubernamentales.	Desregularización legal y desburocratización del Estado; descentralización de la administración pública; informales deben transformarse en formales según el paradigma de las naciones occidentales; apoyo a partidos liberales y afines.
Teoría Indigenista	Economía informal como manifestación de una tradición propia; estrategia de vida fuera del concepto occidental de legalidad y basado en relaciones de parentesco y reciprocidad andinas.	Establecimiento de una economía paralela a la formal-moderna sin atacarla frontalmente; heterogeneidad económica y socio-cultural como algo positivo.	Indiferencia hacia proyectos estatales y programas para erradicar la informalidad; postulado de autonomía étnica y autarquía económica; apoyo a partidos y movimientos indigenistas y nativistas.

Enfoque Teórico	Caracterización de los informales	Caracterización del Estado	Bases de apoyo
Teoría Marxista-dependista	Marginales / marginados no llegan a conformar una clase social; dispersión grupal y ocupacional; facultad restringida de auto-organización, de alcanzar mejor nivel educacional y de articular intereses.	Clasista; proclive al mantenimiento del capitalismo periférico; dependiente de factores externos e influenciable por organismos internacionales.	Necesidad de reconstruir clases (en sentido marxista) y reforzar la labor de los sindicatos convencionales; socialismo como meta ulterior.
Teoría Neoliberal	Empresarios naturales impedidos por las circunstancias; buenas posibilidades de auto-organización, aunque no estén ejercitadas.	Mercantilista; no es "capitalista" en sentido genuino por proseguir la tradición paternalista y patrimonialista de la colonia española.	Racionalidad individualista; contra la concepción clasista del marxismo; capitalismo liberal como meta ulterior.
Teoría Indigenista	Sujetos y actores sociales de primera importancia; representantes de las raíces más profundas del país; portadores de verdadera solidaridad.	Oligárquico; representante de la minoría blanca (y de las capas mestizas); obstáculo para desarrollo multirracial.	Base predominante étnica (indígenas); problema de división de clases secundaria ante problema de discriminación racial-cultural.

NOTAS

- 1) Cf. el excelente ensayo de María del Carmen Feijóo, *La pobreza latinoamericana revisitada*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 108, julio/agosto de 1990, pp. 28-36, especialmente p. 36; Ray Bromley, *The Urban Informal sector: Why it is Worth Discussing*, en: WORLD DEVELOPMENT, vol. 6 (1978), Nº 9-10.
- 2) Cf. el muy instructivo libro de Samuel Doria Medina, *La economía informal en Bolivia*, La Paz: Edobol 1986, p. 29, 35 sq., 40, 47, 115 sqq.- Como efectos de estos factores y, a su vez, como causas de la economía informal surgen el desempleo masivo, la disminución del potencial industrial del país y la declinación del producto interno bruto.
- 3) Sobre esta problemática, que representa un nuevo reto a las ciencias sociales latinoamericanas, cf. Edelberto Torres-Rivas, *Retorno al futuro. Las ciencias sociales vistas de nuevo*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 108, julio/agosto de 1990, pp. 18-27
- 4) Cf. por ejemplo: Roberto Casanovas Sainz, *Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad*, en: Antonio Peres Velasco et al., *Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad*, La Paz: CEDLA 1989, p. 65
- 5) *La economía informal*, La Paz: ILDIS 1986 (cuaderno No. 14 del Foro Económico), p. 11
- 6) Hernando de Soto et al., *El otro sendero. La revolución informal*, Bogotá: Oveja Negra 1987, passim
- 7) Estas afirmaciones y las que siguen se basan en conversaciones con expertos en ciencias sociales, con representantes gremiales y con miembros influyentes de partidos políticos, entrevistados acerca de esta temática en La Paz en 1991.
- 8) Cf. el ensayo de Hernando de Soto, *A propósito de coca y cocaína. Distinguir entre informales y criminales*, en PRESENCIA (La Paz), 11 de febrero de 1990, p. 2, donde De Soto se refirió específicamente a la constelación boliviana y postuló una expansión de las normas y los modelos "legales" al mundo indígena campesino (de un modo no burocrático), insistiendo en una paulatina discriminación entre los informales y los realmente criminales.
- 9) Acerca de esta definición "legalista" de la economía informal cf. entre otros: Raffaele de Grazia, *Clandestine Employment*, Ginebra: UNO/OIT 1984, p. 9; Wolf Schäfer (comp.), *Schattenökonomie. Theoretische Grundlagen und wirtschaftspolitische Konsequenzen* (= Economía en la sombra. Bases teóricas y consecuencias político-económicas), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1984, p. 5; Arnold Heertje / Philippe Barthélémy, *L'économie souterraine*, Paris: Economica 1984; Dan A. Bawly, *The Subterranean Economy*, New York etc.: McGraw-Hill 1982; Klaus Gretschmann, *Wirtschaft im Schatten von Markt und Staat* (La economía a la sombra del mercado y del Estado), Frankfurt: Fischer 1983; Rolf-Dieter Grass, *Ausweichwirtschaft. Abgrenzungen, Ausprägungen, Ausmasse* (= Economía informal. Delimitaciones, conformaciones, dimensiones), Frankfurt etc.: Lang 1984; Renato Duarte (comp.), *Emprego e renda na economia informal da América Latina*, Recife: Massangana 1984; y la obra fundamental: PREALC, *Sector informal: funcionamiento y políticas*, Santiago de Chile: UNO/OIT 1978 (que no perdió nada de su importancia primigenia).

- 10) La mayoría de los estudios económicos y de los trabajos de asesoría consultiva estiman que la economía informal –incluyendo los sectores ilegal-delictivos– conforma por los menos la mitad (51%) del Producto Interno Bruto real del país. Cf. entre otros: Samuel Doria Medina, op.cit. (nota 2), p. 173; *La economía informal*, op. cit. (nota 5), p. 22; *La economía informal: una visión macroeconómica*, La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Económicas (=UDAPE) 1985, passim; *Un intento de medición del sector informal urbano en Bolivia*, La Paz: UDAPE/INE 1987; Roberto Casanovas, *El sector informal urbano en Bolivia: apuntes para un diagnóstico*, en: Leticia Sainz (comp.), *El sector informal en Bolivia*, La Paz: CEDLA/FLACSO/ILDIS 1986, p. 155, 159; Isabel Arauco, *Una aproximación al análisis de la relocalización*, en: TEMAS LABORALES (cuaderno No. 5: *La relocalización*), La Paz: CET 1988, p. 23, 25
- 11) Sobre estos enfoques teóricos cf. la obra muy informativa de Erika Märke, *Ein Weg aus der Abhängigkeit? Die ungewisse Zukunft des informellen Sektors in Entwicklungsländern* (= Un camino que conduce fuera de la dependencia? El incierto futuro del sector informal en los países subdesarrollados), Heidelberg: Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft 1986, pp. 19-29; 64 sqq.; Hans-Günther Seifert-Vogt (comp.), *Schattenwirtschaft und alternative Ökonomie* (= Economía informal y economía alternativa), Regensburg: Transfer 1984, passim; Martin Hopenhayn, *Nuevos enfoques sobre el sector informal*, en: PENSAMIENTO LATINOAMERICANO, Madrid, vol. 1987, Nr. 12, pp. 423-428; T. Schiel/G. Stauth, *Subsistenzproduktion und Unterentwicklung* (= Producción de subsistencia y subdesarrollo), en: PERIPHERIE, vol. 1981, No. 5-6, pp. 122-144
- 12) Para otra clasificación de los enfoques teóricos cf. Gerd Schönwälder, *Still Useful after all These Years? Reflections on the Informal Sector Concept*, Montreal: McGill University 1990, p. 2 sqq. (Centre for Developing-Area Studies Paper No. 63); Pedro Galin, *El sector informal urbano: conceptos y críticas*, en: NUEVA SOCIEDAD, N° 113, mayo/junio 1991, pp. 45-51.
- 13) Para una visión diferente, que discrimina entre la teoría de PREALC y una tendencia neomarxista, cf. el excelente ensayo de Vanessa Cartaya, *El confuso mundo del sector informal*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 90, julio/agosto de 1987, p. 80
- 14) Jaime Mezzerá, *Abundancia como efecto de la escasez. Oferta y demanda en el mercado laboral urbano*, en: NUEVA SOCIEDAD, ibid., pp. 106-117; Ernesto Kritz, *Análisis del sector informal urbano en América Latina*, en: Leticia Sainz (comp.), op. cit. (nota 10), p. 60; Kritz, *Políticas latinoamericanas en relación al sector informal*, en: ibid., p. 245 sq.; Horst Grebe López, *Comentario*, en: ibid., p. 97; Rolando Morales, *Comentario*, en: ibid., p. 232
- 15) Hernando Larrazábal, *Sector Informal Urbano: revisión a los enfoques teóricos precedentes al estado de la discusión*, en: ibid., p. 35 sq.
- 16) Cf. entre otros: Samuel Doria Medina, op. cit. (nota 2), p. 146; *La economía informal*, op. cit. (nota 5), p. 7; *Sector informal urbano*, Lima: Junta del Acuerdo de Cartagena 1988, vol. I, p. 7; cf. también los ensayos entre tanto clásicos de Daniel Carbonetto, *Notas sobre la heterogeneidad y el crecimiento económico en la región*, en: D. Carbonetto et al., *El sector informal urbano en los países andinos*, Guayaquil: ILDIS/CEPESIU 1987, p. 75 sq.; Viktor E. Tokman, *Dinámica del mercado de empleo urbano*, Santiago de Chile: PREALC/OIT 1977; Tokman, *El*

imperativo de actuar. El sector informal hoy, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 90, julio/agosto de 1987, pp. 93-105

- 17) Ernesto Kritz, *Políticas...*; op. cit. (nota 14), p. 248; *Conclusiones y recomendaciones de política*, en: Antonio Peres Velasco et al., op. cit. (nota 4), p. 284 sqq.
- 18) Sobre esta actitud paternalista cf. *Estimación de la magnitud de la actividad económica informal en el Perú*, Lima: Instituto Libertad y Democracia 1989, p. 13
- 19) Sobre esta temática escribió acertadamente *Hernando Larrazábal*: "Los problemas vinculados a la pobreza urbana, al subempleo y a la distribución de los ingresos se explican como irregularidades o anomalías de las economías latinoamericanas. [...] la lógica de explicación parte de determinantes negativos; es decir, se habla de carencias, ausencias o funcionamientos anómalos definidos, por contraste, con algo que sería el modelo de normalidad y perfección del funcionamiento".- Larrazábal, op. cit. (nota 15), p. 40.- Cf. también Gerd Schönwälder, op. cit. (nota 12), p. 7; *Estimación ...*, op. cit. (nota 18), p. 13
- 20) Cf. entre otros: Hernando de Soto, op. cit. (nota 6), p. 59 sq., 239-245, 295 sqq.; Alberto Bustamante Belaúnde, *El Estado mercantilista y el desarrollo del sector informal*, en: Roberto Hidalgo Trujillo (comp.), *Retos de política económica frente a la crisis social. Perspectivas para los años '90*, Lima: Habitat Perú Siglo XXI / Fundación Friedrich Naumann 1989, p. 80, 85, 88.- En Bolivia no ha sido publicada ninguna obra teórica de envergadura que represente a esta corriente neoliberal. Los escritos de *Hernando de Soto* han gozado, sin embargo, de una considerable difusión y de una recepción muy favorable; ellos contienen los puntos centrales sustentados por la tendencia neoliberal boliviana.
- 21) Cf. entre otros: Hernando de Soto, op. cit. (nota 6), pp. 15, 239-245, 252, 289, 292; Instituto Libertad y Democracia, *Estado mercantilista, economía informal y reformas institucionales*, Lima: s.e. 1989, passim; Erich Weede, *Warum bleiben die armen Leute arm? Rent-Seeking und Dependenz als Erklärungsgesamtsätze für die Armut in der Dritten Welt* (= Por qué permanece pobre la gente pobre? Rent-Seeking y dependencia como enfoques para explicar la pobreza en el Tercer Mundo), en: POLITISCHE VIERTEL JAHRESCHRIFT (= PVS), vol. 26 (1985), No. 3, pp. 270-276; Georg Simonis, *Rent-Seeking -eine neue Theorie der Untereentwicklung* (= Rent-Seeking- una nueva teoría del subdesarrollo), en: PVS, vol. 27 (1986), No. 1, pp. 100-109
- 22) Hernando de Soto, *ibid.*, p. 242: "[...] el derecho redistributivo termina por politizar a todos los sectores de la población que buscan organizarse para tratar de vivir a expensas de los demás: los consumidores presionan para que los precios se establezcan por debajo de los niveles competitivos, los asalariados presionan para que sus remuneraciones se establezcan por encima de ellos, los empresarios establecidos lo hacen para impedir o retardar cualquier innovación que perjudique su posición en el mercado, los empleados, para preservar sus puestos y evitar ser reemplazados por otros más eficientes. En suma, el sistema nos ha obligado a todos a convertirnos en expertos en buscar protecciones o ventajas del Estado."
- 23) Gerd Schönwälder, op. cit. (nota 12), p. 10
- 24) Carlos F. Toranzo Roca, *Comentario*, en: Fernando Prado / C. F. Toranzo Roca, *Debate Regional. Sector informal y empleo urbano en Santa Cruz*, La Paz: ILDIS 1990, p. 42.- Sobre la obra de Hernando de Soto escribió *Laurence*

Whitehead que "mercantilismo" y "Estado" estaban cargados con un intenso simbolismo negativo; habría más denuncia que análisis de los mismos para "realzar la virtud moral atribuida a los informales".- Whitehead, *Algunas reflexiones sobre el "Estado" y el sector informal*, en: REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA, vol. LI, No. 3, julio/septiembre de 1989, p. 102

- 25) Whitehead, *ibid.*, p. 105, 110
- 26) Un catálogo de las medidas propugnadas por el enfoque neoliberal para mejorar la situación de los informales y aliviar sus problemas burocráticos se halla en: Hernando de Soto, *op. cit.* (nota 6), pp. 298-310, catálogo compartido por la correspondiente línea de pensamiento en Bolivia.
- 27) Roberto Casanovas Sainz, *op. cit.* (nota 4), pp. 115-117. cf. en general: Victor E. Torman *Sector informal en América Latina: de subterráneo a legal*, en: *Más allá de la regulación. El sector informal en América Latina*, Santiago de Chile: PREALC 1990, pp. 3-23.
- 28) Gerd Schönwalder, *The Other Path to Development? Approaches to the Informal Sector*, Montreal: McGill University 1990 (tiposcrito de una ponencia), p. 5 sq.
- 29) Jorge Dandler, *Apuntes generales sobre "economía informal" y su importancia en Bolivia*, La Paz: CERES 1985; *La economía informal*, *op. cit.* (nota 5), p. 7 sq.; Hernando Larrazábal, *op. cit.* (nota 15), p. 30; Laurence Whitehead, *op. cit.* (nota 24), p. 103 sq.- En Bolivia falta una obra de conjunto sobre esta temática como el brillante libro de José Matos Mar, *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*, Lima: Instituto de Estudios Peruanos 1984, *passim*
- 30) Según Gerd Schönwälder, el sector informal sería sólo una dimensión social, denotando lo común de la situación histórica específica de varios grupos sociales en decadencia económica, y no un actor socio-político con peso propio.- Schönwälder, *Still...*, *op. cit.* (nota 12), p. 13; Laura Faxas / René Antonio Mayorga, *Los movimientos sociales en Bolivia: una experiencia metodológica de investigación*, La Paz: CERES 1986, pp. 10-18, sobre la compleja relación entre movimiento social, movimiento popular, clase social, actor socio-político, etc. en el contexto de la evolución contemporánea de Bolivia y del rol del Estado.
- 31) Samuel Doria Medina, *op. cit.* (nota 2), p. 134.- En general sobre esta temática: Hernando de Soto, *op. cit.* (nota 6), pp. 199-201. Según de Soto, este tipo de transferencias redundan en favor del Estado peruano: cerca del 10% del producto interno bruto peruano (1985) se debe a transferencias involuntarias del sector informal hacia la totalidad de lo formal, lo que incluye obviamente al Estado (*ibid.*, p. 200).
- 32) Hernando de Soto, *ibid.*, p. 60. Los esfuerzos de los informales y su normatividad extra-legal sería una larga marcha hacia la propiedad privada y no hacia la colectivista o tradicional.

3

LA ECONOMIA INFORMAL Y SU EXPANSION

Eliana Castedo Franco

La definición de economía informal expuesta en el capítulo anterior fue escogida porque su carácter general facilita la realización de los propósitos de nuestro estudio. Entendiendo que de ella forma parte todo quehacer económico no registrado por el sistema oficial de estadísticas es posible abarcar tanto al SIU como al eje coca-cocaína. Es decir, la definición incluye a prácticas de naturaleza tan distinta como el contrabando en gran escala o el contrabando "hormiga"; el comercio ambulante o la venta callejera de alimentos; el narcotráfico; la reparación de zapatos o la reparación automotriz; la confección de prendas de vestir; la producción artesanal; el transporte colectivo; la atención en un salón de belleza, etc. Sin interesar si la actividad económica en cuestión sea realizada al margen de la ley de manera deliberada por su carácter delincuencial, o si ello se deba a la precariedad financiera de quien la ejecuta, esta doble acepción conviene debido a que al investigar los efectos no económicos del auge de aquella economía es difícil establecer cuáles son producto de la expansión de las actividades propias del sector informal y cuáles resultado del boom que caracteriza al eje. Las estrechas interrelaciones de una rama con la otra impiden realizar una distinción clara entre las repercusiones de ambas porque existe un intenso proceso de retroalimentación que confunde sus fronteras o límites. Un ejemplo de la complejidad de esos nexos es la situación que se da cuando las ocupaciones vinculadas al cultivo de la hoja de coca, a la fabricación y comercialización de la pasta o del clorhidrato de cocaína que aseguran un

buen ingreso a miles de individuos contribuyen, a su vez, a aumentar la demanda de productos de consumo que es satisfecha a través de las ventas a cargo de comerciantes dedicados al contrabando en pequeña o en gran escala. Durante la realización de las entrevistas no surgieron mayores dificultades al proceder de esa manera. Las personas interrogadas también manejaron el término economía informal en su doble significado en el momento de reflexionar sobre los temas planteados en el cuestionario, reforzando nuestra convicción de facilitar el análisis de repercusiones en esferas no cuantificables como lo son la político-institucional y la socio-cultural con el manejo de conceptos globales. Antes de iniciar dicho análisis, sin embargo, es necesario exponer, en primer lugar, algunos rasgos resaltantes de la expansión de la economía no formal. En las dos primeras partes de este capítulo presentaremos por separado y de modo resumido características de cada una de las ramas más importantes para luego ofrecer elementos del impacto que ellas conjuntamente tuvieron en el sistema económico nacional. No es posible comprender las consecuencias políticas, sociales y culturales del auge de las actividades paralelas sin antes conocer el destacado rol que jugaron durante la crisis económica de la década de 1980 como fuente de ingreso para miles de personas y de divisas para el Estado.

a. El eje coca-cocaína

Un gran número de autores (v. gr. Aguiló 1988; Oporto Castro 1989; Quiroga 1990; Blanes 1991) habla del complejo coca-cocaína cuando se refiere al conjunto de quehaceres desarrollados en torno al cultivo de la hoja de coca y a la elaboración y comercialización de la cocaína. En este estudio preferimos emplear el término *eje coca-cocaína* para resaltar la función que cumple en la actual coyuntura constituyendo el centro de gravitación, el sostén o apoyo principal de la economía boliviana.

A nivel internacional Bolivia ha dejado de ser conocida por la frecuencia de los golpes anticonstitucionales y por su casi total dependencia de la exportación de estaño para destacarse como una nación donde llegó a gobernar un clan de narcotraficantes y cuya economía está sostenida desde varios años atrás por su conexión con la red mundial dedicada al tráfico de la cocaína. Esta conexión no se limita al hecho de ser el país el segundo mayor

productor en el mundo, después del Perú, de la hoja de coca que permite la fabricación del polvo blanco. Bolivia dejó de ser únicamente proveedora de la materia prima; en su territorio también se elabora, se comercializa, se consume y se exporta la droga. Fábricas de sulfato localizadas mayoritariamente en el Valle cocha-bambino y laboratorios de óxido o clorhidrato ubicados en la selva de los departamentos de Santa Cruz y Beni indican que grupos de narcotraficantes bolivianos cuentan con capacidad propia para la refinación final y tienen acceso a redes de exportación y distribución del producto, probablemente ya desde 1982 (Blanes 1991: 292). Se estima, por ejemplo, que en 1987 el 15% de la cocaína importada a los EEUU tenía procedencia boliviana (Campodónico 1989: 227). El consumo, fue anotado anteriormente, está extendido en las principales ciudades y asimismo se lo encuentra bastante difundido por la zona rural justamente en estrecha vinculación con la ocupaciones propias del eje. Los "písacocas" y los "zepes" consumen la droga en un estadio menos elaborado (1) con la intención de calmar hambre, frío, cansancio y el dolor que provocan sus respectivas faenas.

En 1987 Perú habría cultivado el 50% del total de la producción mundial de coca, Bolivia entre el 40 y 45% y Colombia entre el 5 y 10% (Campodónico 1989: 227). De acuerdo con algunos autores (2) de igual manera se cultiva la hoja en el Ecuador, Paraguay y Brasil. Si bien el Perú ocupa el primer lugar como proveedor de la materia prima para la fabricación de la cocaína, este dato no debe desviar nuestra atención respecto del peso diferente que esa producción tiene en la economía de cada uno de los países. Comparando la situación peruana con la boliviana se constata que a fines del decenio de 1980 los cultivadores de coca constituían en el Perú el 6% de la población activa en el sector agrícola y el 7% en Bolivia; por su parte, el 3% del total de habitantes peruanos y el 4% de los bolivianos dependían de los ingresos ilegales que la coca facilitaba, correspondiendo su producción al 12% del PIB agrícola nacional en el primer caso y al 21%, en el segundo (de Rementería 1991: 68). Por otro lado, la exportación del clorhidrato de cocaína equivalía al 51% de las exportaciones peruanas y al 137% de las bolivianas o al 5% del PIB del Perú y al 18% del PIB de Bolivia (de Rementería 1991: 68-69).

La Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, de julio de 1988, establece que en el país existen tres zonas

diferentes de cultivo de coca: la zona de producción tradicional, la de producción excedentaria en transición y la zona de producción ilícita (3). En la región de los Yungas predomina el cultivo tradicional en tanto que en la del Chapare, el cultivo excedentario destinado a la elaboración de la cocaína debido a las diferencias existentes entre la hoja de coca producida en uno y otro lugar. La de los Yungas por no ser tan amarga sería la que el campesino prefiere para el acullico (4); la coca del Chapare, por el contrario, contiene dos veces más alcaloide. Otra diferencia entre ambas regiones es la de la productividad: en el trópico cochabambino el cultivo es hasta tres veces más productivo que el de los Yungas, en consecuencia de aquella zona es posible extraer seis veces más droga que de la coca yungueña (Quiroga 1987: 12). La ubicación de los Yungas a casi 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, y del Chapare, aproximadamente a 150 km al noreste de Cochabamba destaca que la concentración de la mayor cantidad de hectáreas cultivadas con coca en territorio boliviano es una realidad cercana a importantes centros urbanos, también desde la perspectiva geográfica. Esta cercanía impide a toda persona la posibilidad de negar la existencia de dicha realidad concibiéndola como marginal y perdida en algún rincón alejado y aislado de la geografía nacional y, por otro lado, contribuye a la intensa imbricación de actividades del eje coca-cocaína con las del SIU y viceversa porque facilita el intercambio comercial entre los informales activos en ambas ramas y de ellos con el resto de la sociedad.

Aunque no cabe duda que es el boom de la coca el que atrae a los individuos hacia esas regiones, no hay que olvidar que en ellas también existen otros cultivos relevantes: la región de Yungas tiene el 95% de la producción nacional de café y el 33% de los cítricos, siendo que cerca del 70% del cultivo de café en el área está destinado a la exportación (Quiroga 1990: 16). Por su parte en la zona del Chapare cosechan sobre todo arroz, maíz y yuca. Es a partir de 1975 que se inició la expansión del cultivo de la hoja de coca no solamente a causa de la creciente demanda para la fabricación de la droga sino también por el "proceso general de deterioro de la economía campesina y de políticas agrarias que fueron muy ineficaces en fomentar el desarrollo campesino." (Flores 1987: 32) De acuerdo con estimaciones de especialistas en 1977 había en los Yungas 7.606 cultivadores en tanto que en 1987 aumentaron a un total de 22.000; por su parte en el Chapare fueron 5.761 per-

sonas que cultivaron la hoja a mediados de la década de 1970 mientras que para 1987 ese número se elevó a 38.000 (Canelas & Canelas 1983: 211 y 213 y Ruppert 1990: 156). Estas cifras adquieren dimensión alarmante cuando se agrega a las personas dedicadas a quehaceres propios de las otras etapas del proceso de elaboración de la cocaína: 147.600 individuos estarían directamente ocupados en el eje (incluyendo a secadores, "pisacocas", "zepes", "rescatadores", comerciantes de precursores, químicos, etc.) y un total de 463.000 constituirían lo que el estudioso alemán Ruppert califica de "dependientes directos" (Ruppert 1990: 156). Cantidad equivalente al 27,65% de las personas ocupadas en el año de referencia: 1987 (5). Asimismo el porcentaje del total de superficie cultivada en el país que es destinado al cultivo de la coca aumentó considerablemente: a principios de la década de los ochenta equivalía al 1,90% y ocho años después ascendió al 4,61% (6). Esta evolución se manifiesta en la producción de algunos de los principales productos agrícolas que a diferencia de lo que sucede con la hoja de coca no tuvieron un incremento sostenido durante los últimos años como se desprende del siguiente cuadro:

**PRODUCCION DE PRINCIPALES
PRODUCTOS AGRICOLAS**
(en toneladas métricas)

PRODUCTO	1980	1982	1984	1986	1988
papa	786.620	900.000	722.873	697.000	701.800
trigo	60.140	66.000	78.490	81.200	63.800
café	20.540	21.179	21.566	24.153	25.450
algodón*	6.800	3.900	2.410	4.414	1.771
coca	25.750	47.490	86.234	134.554	136.762

Elaboracion Propia

Fuente: Doria Medina 1986: 67; INE s.f.: 187 y Quiroga 1990: 82

* algodón en fibra

En 1983 se obtenía todavía 400 dólares por la carga de 100 libras en el Chapare; en 1984: 300; en 1985: 200; en 1986: 100; en 1987: 60 y en enero de 1988: 12 (ILDIS 1988: 53). A pesar de esta tendencia la producción (7) aumentó notoriamente de un total

aproximado de 13.823 toneladas métricas en 1978 a cerca de 132.400 en 1989 (Quiroga 1990: 82 y Oporto Castro 1989: 171). Cálculos aproximados indican que en 1988 en el Chapare se cultivaron 51.198 hectáreas, en los Yungas 8.913 y 845 en la zona de Yapacaní, en el departamento cruceño. Únicamente el 10% de la coca producida en el Chapare y en Yapacaní y el 20% de la coca de los Yungas estaría destinada a usos lícitos, empleándose el resto en la elaboración de la cocaína (DIRECO 1988 citado por Quiroga 1990: 81). Durante el decenio pasado la superficie cultivada con la hoja de coca creció en los siguientes términos:

SUPERFICIE CULTIVADA DE COCA (en hectáreas)

1980	1982	1984	1989
22.788	35.269	56.867	70.995

Elaboracion Propia

Fuente: Oporto Castro 1989: 171 y Quiroga 1990: 81

No es posible conocer con exactitud la cantidad de cristal de cocaína elaborado a partir del cultivo de tantas hectáreas de hoja de coca. En base a estimaciones efectuadas por la Dirección Nacional de Reconversión Agrícola (DIRECO) en 1988 las hectáreas cultivadas en el Chapare habrían alcanzado para producir 588 toneladas de la droga (DIRECO 1988 citado en Quiroga 1990: 90). Los rescatadores del sulfato de cocaína o "pasta" son "los únicos que tienen el plano completo" de la ubicación de las fábricas clandestinas y "carta blanca para un acceso a toda hora." (Aguiló 1991: 11) Disfrazan sus actividades clandestinas con otras menos peligrosas vinculadas al comercio minorista y mediano y cuentan con dos tipos de mercado para su mercancía: el mercado local y nacional al que se dirige un 20% del sulfato producido en el Chapare, y el de los productores del clorhidrato de cocaína (Aguiló 1991: 13). Según datos de un estudio realizado por UDAPE en 1985 el precio de un kilogramo de sulfato de cocaína elaborado en el Chapare tenía en la región un valor que oscilaba entre \$US. 300

y \$US. 500; el mismo kilo ya en el Departamento del Beni, uno de los centros de embarque y comercialización internacional de mayor importancia en el país, era vendido en \$US. 800. El kilo de la base oxidada, por su parte, costaba alrededor de \$US. 3.000 que convertido en clorhidrato ascendía a un total de 7.500 dólares FOB-Beni; el kilogramo de cristal exportado a Colombia tenía un valor aproximado, de acuerdo con el mismo estudio, de \$US. 25.000 llegando a ser vendido en los Estados Unidos por un precio superior de casi el doble mientras que en Europa alcanzaba la suma de 100.000 \$US (Doria Medina 1986: 64).

En una entrevista otorgada a un semanario italiano el presidente Jaime Paz Zamora informó que "una hectárea de coca rendía en 1987 unos 6.400 dólares a un campesino de la región del Chapare, mientras que la hectárea de café dejaba 1.500 dólares, la de plátanos, 600 y la de maíz, 300." (8) Que cuatro años más tarde la economía desarrollada en torno al eje coca-cocaína continúa siendo de vital importancia para regiones enteras del país se desprende de la afirmación hecha por el párroco de Santa Ana de Yacuma, ciudad beniana a 400 kilómetros de la capital paceña. "La droga nos da de comer" explicó el sacerdote español en declaraciones realizadas a periodistas que cubrieron las acciones militares efectuadas en junio de 1991 en el marco de un "gigantesco operativo en busca del 'emperador' de la droga" (9), al justificar las actividades de defensa emprendidas por la ciudad. Es debido a la magnitud alcanzada en la actualidad por el complejo de actividades económicas desarrolladas alrededor del cultivo de la hoja de coca que ya no se trata solamente de erradicar su producción, sustituyéndola con la de otros productos, sino de lograr la "sustitución de la economía de la coca" (Quiroga 1987: 14). La situación paradójica a la que ha llevado el auge de esta economía se refleja en el hecho dramático de que el Estado debe invertir millones de dólares anualmente para "reducir un cultivo no porque ya no resulta rentable, sino precisamente porque se ha convertido en el más rentable de (la) economía." (Quiroga 1987: 7) Por esa razón no es errado afirmar con el investigador Richard B. Craig que: "Bolivia es la quintaesencia de las naciones de coca, una verdadera cocalandia. La mayoría de los bolivianos están involucrados en una forma y otra en la cocacultura. Cultivan la coca, la ritualizan, la mascan, la beben, la cocinan, la trituran, la refinan, la fuman, la venden y tratan de erradicarla." (Craig 1988: 106)

b. El Sector Informal Urbano

El término sector informal urbano hace referencia a una realidad que no es de data reciente; por el contrario, ella es desde décadas atrás parte constitutiva del acontecer socio-económico en el país. Se trata del conjunto de actividades económicas desarrolladas por las masas marginales de las ciudades para asegurar su supervivencia. Lo nuevo consiste, por un lado, en la expansión alcanzada por ese conjunto que en la actualidad también contribuye a mejorar el ingreso de otros estratos sociales, por ejemplo el de las capas medias empobrecidas, y a satisfacer las necesidades de consumo de bienes y servicios de la mayoría de los bolivianos. Por el otro, que en correspondencia con ese incremento su investigación científica es un tema dominante en la actual literatura de las ciencias sociales en Bolivia y en América Latina. Es interesante observar que con el tratamiento sociológico del tema esta categoría, básicamente un producto del análisis económico, deviene categoría sociológica cuando se habla de los informales. La revisión crítica de algunas de las obras más representativas (10) plantea varias interrogantes. Son los informales como grupo el nuevo portador del cambio social en los países latinoamericanos? Cumplen aquéllos una función similar a la que cumplió la categoría pueblo dentro del discurso de la teoría de la dependencia?

El SIU abarca a los patrones de microempresas o de establecimientos semiempresariales y sus asalariados; a los trabajadores independientes o por cuenta propia; a los trabajadores y familiares no remunerados, y a los empleados domésticos. Todos ellos activos en un sinnúmero de quehaceres en el comercio, en los servicios y en la pequeña industria y artesanado, desempeñados para satisfacer las necesidades de los centros urbanos que no son cubiertas por el sector moderno de la economía. A mediados de la década de 1970 el 55,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana tenía un empleo informal; hacia fines de los años ochenta el porcentaje correspondiente se había elevado a 60 (Kritz 1989: VII). La creciente proporción de personas no asalariadas en el total de la PEA urbana muestra la relevancia que el SIU adquirió en calidad de refugio frente al desempleo; esa tendencia refleja la sostenida expansión del autoempleo, especialmente en la modalidad del trabajador por cuenta propia (TCP), como se ejemplifica en el siguiente cuadro:

**DISTRIBUCION DE LA PEA URBANA POR CATEGORIAS
OCUPACIONALES Y TASAS DE CRECIMIENTO**
(en porcentajes)

CATEGORIA	1976	1987	Tasa de crec. acum. anual (1976-1987)
<i>ASALARIADOS</i>	68.2	54.5	3.5
obreros	16.8	11.0	1.7
empleados	40.3	38.6	5.3
e.domésticos	11.1	4.9	1.9
<i>NO ASALARIADOS</i>	31.8	45.5	9.2
patrones	1.7	4.5	15.4
prof.indep.	1.6	1.4	4.4
T.C.P.	27.6	35.3	8.1
T.F. no remun.*	0.9	4.3	21.8

FUENTE: Casanovas 1989: 71

* Trabajador familiar no remunerado

Además de indicar características macroeconómicas del país, por ejemplo la contracción del aparato productivo, esta estructura ocupacional denuncia el deterioro de la calidad de vida de los bolivianos que al ser informales carecen de acceso a la seguridad social y a otro tipo de beneficios sociales que la Ley General del Trabajo reconoce a los asalariados. Alarmante es no solamente el tamaño del SIU sino, también, el hecho de que el mayor volumen del sector informal se ubique en las tres principales ciudades. Entre 1980 y 1985 a la ciudad de La Paz (que aún incluía a El Alto en su jurisdicción) le correspondió alrededor del 49%; a Santa Cruz de la Sierra: 18 por ciento y a Cochabamba el 14% (UDAPE/INE 1987: 74). En 1987 del total de unidades económicas no formales estimadas en siete capitales (no se consideraron ni Trinidad ni Cobija) el 45,53% se encontraban en la capital paceña, 25,97% en la cruceña y 12,82% en la cochabambina (Casa-

novas 1989: 84). Contribuye a la constitución de esos porcentajes la debilidad del proceso boliviano de industrialización que va acompañado de una creciente concentración urbana principalmente en el Eje Central (La Paz-Cochabamba-Santa Cruz). El ritmo del crecimiento poblacional que lo caracteriza es mayor que el de las economías locales, siendo el resultado la incapacidad de las mismas para absorber la fuerza de trabajo en aumento. En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, entre 1976 y 1986 la Población en Edad de Trabajar (PET) se incrementó anualmente a un promedio de 7,45%, habiendo aumentado su participación en el total de la población de 71 a 73 por ciento (Casanovas y Rojas 1988: 46). La ciudad de Cochabamba tuvo una evolución similar.

La tasa de crecimiento de la PET para el mismo período fue de 4,27% y constituyó algo más del 74% de todos sus habitantes (Escóbar de Pabón y Ledo 1988: 48, 56 y 67). La migración jugó un rol decisivo en esos incrementos porque una gran mayoría de quienes migraron se encontraba en edad activa. Del total de migrantes hacia la capital cochabambina durante aquellos diez años el 56 por ciento se concentraba en el rango de 10 a 34 años; en el caso cruceño 64% de los migrantes recientes en 1985 tenía entre 15 y 64 años de edad (Escóbar de Pabón / Ledo 1988: 51 y Casanovas / Rojas 1988: 48). El Alto, otro centro urbano que es destino importante de los recientes flujos migratorios también presentó una población económicamente activa predominantemente informal. Tomando como ejemplo su estructura ocupacional en 1988 se constata que el 15,73% eran obreros; el 26,41%: empleados; el 0,80%: aprendices remunerados; el 1,03%: empleados domésticos; el 42,18%: TPC; ayudantes no remunerados: 6,28%, y patrones: 6,93% (Sandoval y Sostres 1989: 67).

En el período de 1976 a 1986 la PEA de la ciudad de Cochabamba creció a una tasa media anual de 4,97% y la de la capital cruceña a un ritmo 7,48% ((Escóbar de Pabón / Ledo 1988: 67 y Casanovas / Rojas 1988: 53). En ambos casos el resultado fue la informalización de la fuerza laboral en los términos indicados por los siguientes datos válidos para aquéllos años:

**SANTA CRUZ DE LA SIERRA:
DISTRIBUCION DE LA PEA POR CATEGORIAS
OCUPACIONALES**
(en porcentajes)

CATEGORIA	1976	1986	Tasa de crec. acum. anual (1976-1987)
<i>ASALARIADOS</i>	64.6	57.1	6.03
obreros	17.1	24.8	11.72
empleados	36.4	29.2	4.94
e. domésticos	11.1	3.1	6.06
<i>NO ASALARIADOS</i>	35.4	42.8	9.61
patrones	1.9	7.3	25.52
prof. indep.	2.1	2.3	8.51
T.C.P.	30.0	27.9	6.62
T.F. no remun.	1.4	5.3	24.49

Fuente: Casanovas y Rojas 1988: 65 y 66

**CIUDAD DE COCHABAMBA: DISTRIBUCION DE LA PEA
POR CATEGORIAS OCUPACIONALES**
(en porcentajes)

CATEGORIA	1976	1986	Tasa de crec. acum. anual (1976-1987)
<i>ASALARIADOS</i>	68.8	53.3	2.64
obreros	16.1	20.5	s.d.
empleados	41.6	31.3	s.d.
e.domésticos	11.1	1.5	s.d.
<i>NO ASALARIADOS</i>	31.1	46.7	10.20
patrones	1.9	4.1	s.d.
prof. indep.	1.9	1.9	s.d.
T.C.P.	26.9	33.9	s.d.
T.F. no remun.	0.4	6.8	s.d.

Fuente: Escóbar de Pabón y Ledo 1988: 67 y 77

Las principales actividades informales en las regiones urbanas del país se concentran, en orden de importancia, en el comercio, los servicios y en la industria manufacturera. En 1980 más del 75% de la población ocupada en el SIU ejercieron tareas en alguna de esas tres ramas económicas. A partir de 1983 el porcentaje se elevó a 80 debido al incremento sistemático de las ocupaciones comerciales, especialmente las correspondientes al comercio minorista; entre 1980 y 1984 la participación del comercio aumentó del 29 al 40 por ciento (UDAPE/INE 1987: 78). Para el año 1987 la distribución de establecimientos no registrados fue la siguiente:

**DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS
INFORMALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD
SEGUN SECTORES
(en porcentajes)**

	Sector Informal	Sector Familiar	Sector Semiempr.
Ind. Manuf.	16.0	14.6	21.0
Construcc.	7.1	6.1	11.0
Comercio	44.8	50.3	24.9
Transportes	8.0	8.2	7.2
Estab. Financ.	2.9	2.2	5.5
Servicios	21.2	18.6	30.4

Fuente: Casanovas 1989: 79

El peso del comercio en el sector informal es manifestación de la masiva presencia que en él tienen los trabajadores por cuenta propia. Examinando la composición del SIU de acuerdo con las categorías ocupacionales que lo integran se constata la creciente importancia de ellos así como la disminución, también en este sector, del total de asalariados. El siguiente cuadro estadístico ofrece datos sobre esa evolución durante los años de 1980 y 1985:

SECTOR INFORMAL URBANO POR AÑO SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL

CATEGORIA OCUPACIONAL	1980*	1985*
Asalariado	29,83 %	27,61 %
Patrón o empleador	6,21 %	5,36 %
Trab. cuenta propia	60,02 %	62,02 %
Trab. no remunerado	3,94 %	5,00 %

Elaboracion Propia

Fuente: UDAPE/INE 1987: cuadro 5 de anexo estadístico

* población urbano-capitalina.

La relevancia de los TCP en el sector no registrado de la economía pone en relieve aspectos importantes del impacto que su auge tiene en la esfera socio-cultural del país. Por un lado, el hecho de que la mayoría sean migrantes —en 1983 el 52,5% de los TCP operando en la ciudad de La Paz no eran nativos (Casanovas y Escóbar de Pabón 1988: 54)— hace referencia a la existencia de flujos poblacionales que en el pasado reciente se acentuaron en vinculación con la propagación de los quehaceres no formales, como será analizado en un capítulo a seguir. Por otro lado, el desempeño de una ocupación en el comercio muestra que para hacerlo con éxito se exige poca o ninguna calificación profesional y que es un trabajo muy inestable y precario. Dos características de la actividad informal —la escasa capacitación de su ejecutor y la inestabilidad como fuente de ingreso— con enormes repercusiones culturales, especialmente en la ética laboral del boliviano y en otros componentes de la mentalidad colectiva de Bolivia de las cuales nos ocuparemos más adelante.

La masiva presencia de las faenas comerciales en el SIU tiene estrecha relación con el contrabando que durante el decenio pasado conoció un incremento formidable no solamente debido a la profunda crisis económica, sino también a la necesidad de los traficantes de la cocaína de "lavar" o "blanquear" los "narco-dólares", es decir, de incorporar sus ganancias ilegales y delictivas a los circuitos lícitos de la economía del país (11). Esa necesidad fomentó el contrabando en gran escala que se diferencia del tradicional contrabando "hormiga" por el volumen del capital invertido, por el

tipo de mercaderías importada y por la clase de consumidor a la que se dirige. En 1985 la importación de mercaderías de contrabando habría sido de más de 100 millones de dólares (Blanes 1991: 293); para 1989 la suma sería de 150 millones de dólares considerando solamente el tráfico ilegal de productos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo con informaciones otorgadas por el presidente de la Cámara de Industria y Comercio local (12). El inmenso prejuicio que esa "invasión" de bienes (13) provoca a la producción nacional –la máxima autoridad de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz destacó que hacia fines de la década pasada "[...] 'la capacidad instalada de industrias y negocios comerciales (funcionaba) al 30% [...]' (14)– llevó a que los empresarios privados tomaran la iniciativa de fundar y poner en funcionamiento los Comités de Represión al Contrabando (15).

Los datos anteriormente expuestos que muestran la composición del SIU y su crecimiento sostenido durante los últimos años, de modo implícito indican que también existió (y existe) una demanda para los bienes y servicios ofrecidos por los informales. Así como hay contrabandistas en gran escala se encuentran consumidores de ingresos elevados que satisfacen sus necesidades, por ejemplo, realizando compras en las "Casas Importadoras" (16); por su parte, las capas medias empobrecidas y los estratos populares frecuentan los mercados negros como el Miamicito paceño, la Cancha cochabambina o la Feria de Barrio Lindo en Santa Cruz de la Sierra. De lo anterior se desprende que tanto desde el punto de vista de las fuentes de empleo que ofrece como del tipo de consumo que facilita el sector informal dejó de ser una realidad exclusiva de los marginales de las ciudades bolivianas porque abarca a individuos de todos los estratos de la sociedad. En la ampliación de "su campo de acción" jugó, y todavía juega, un papel decisivo la prosperidad que caracteriza al eje coca-cocaína. Aunque ambos componentes de la economía paralela tienen un origen diferente, en la actualidad el auge del uno fortalece al otro, predominando en todo caso la influencia que proviene del eje. De no existir los ingresos que aseguran las faenas del circuito en torno al tráfico de la droga sería menor la demanda de los productos y servicios que ofrece el SIU y él continuaría siendo lo que siempre fue: un refugio para las masas populares.

c. Impacto en la economía nacional

Al iniciar el capítulo indicamos que la economía informal está constituida principalmente por las actividades propias del eje coca-cocaína y las del sector informal urbano. Entre ambas ramas existen complejas conexiones que hacen casi imposible el análisis de la expansión de una sin la consideración de las características de la otra. Fue señalado que un primer nexo está dado por el ingreso proveniente de la cocaína que se traduce en una creciente demanda de productos de consumo satisfecha principalmente por el SIU. Por ejemplo, los cultivadores de coca y sus familias gastan el dinero obtenido en la compra de vehículos, electrodomésticos modernos, de bienes inmuebles fuera de la zona de cultivo; todo ello en caso de no invertir en la educación de los hijos (Blanes 1991: 301). Otro nexo más complejo pero no por eso menos conocido es el que se establece principalmente entre empresarios del oriente boliviano —que en muchos casos también esconden en sus haciendas fábricas destinadas a la producción del cristal de cocaína— que emplean sus conexiones financieras, locales e internacionales, para contribuir al "blanqueo de los narcodólares" que conlleva a la mencionada importación ilegal de bienes de consumo suntuoso. Estos dos ejemplos de las vinculaciones directas entre determinados sectores sociales y la economía informal no debe desviar nuestra atención del siguiente hecho: el impacto que sus actividades han tenido en el sistema económico nacional permite suponer que en realidad todos los bolivianos se encuentran de un modo u otro —como productores y/o como consumidores de los bienes y servicios de procedencia no formal— supeditados a la informalidad.

La visión macroeconómica predominante en la presentación de la evolución de la economía boliviana entre 1980 y 1990 dejó de lado el significado que tiene el proceso descrito para el ciudadano común. Inflación e hiperinflación, decrecimiento del PIB por varios años consecutivos, caída de la productividad en sectores claves del sistema económico nacional, etc., son variables relevantes para el análisis científico que denotan, asimismo, acontecimientos —negativos— sobresalientes en la vida privada de los individuos. Pérdida de la fuente de ingreso, disminución del poder adquisitivo del sueldo o salario que se recibe, cortes y/o limitaciones en el consumo personal y/o familiar, traslado geográfico en busca de nuevos empleos, son algunos de los ejemplos más

dramáticos y frecuentes. Es decir, las profundas transformaciones que se reflejan en los datos macroeconómicos de la década de 1980, devienen alteraciones profesionales y de ocupación no solamente para individuos aislados sino también, como el caso de los mineros lo ilustra, para grandes grupos económicos. En ese proceso de cambios radicales corresponde a las actividades informales ser una especie de "tabla de salvación" para personas expulsadas del sector formal. La absorción tanto de los expulsados de ocupaciones económicas registradas como de aquéllos que complementan su ingreso legalmente adquirido con otro u otros de procedencia informal ha contribuido a la enorme y acelerada expansión sobre todo de las faenas vinculadas al eje coca-cocaína y las del Sector Informal Urbano durante el último decenio.

No es tarea fácil acceder a información amplia y fidedigna respecto del total de personas que durante los últimos años, sobre todo como resultado de la vigencia de la NPE, perdieron su empleo en el sector formal de la economía. A pesar de ello, reuniendo algunos datos dispersos es posible obtener cierta aproximación a la situación que nos interesa conocer. Con ese propósito resulta valioso saber que entre 1980 y 1987 la PEA creció a un promedio de 2,3%, mientras que la población ocupada decreció en 0,4%; decrecimiento que, ya indicamos, fue mayor en las actividades productivas (17): en 1987 los ocupados productivamente eran 9% menos que en 1980, lo que equivaldría a un total de 118.156 personas (Villegas y Aguirre 1989: 63). A principios de 1988, de acuerdo con la COB, 120.000 individuos expulsados de la minería, de la administración pública y de la industria manufacturera todavía no habrían logrado encontrar una nueva fuente estable de ingreso (Alanes 1988: 62). Por otra parte, los sueldos y salarios de quienes consiguieron permanecer como asalariados en aquellas y otras ramas económicas legales enfrentaron la pérdida acentuada del poder adquisitivo de sus remuneraciones. La caída en los niveles salariales se refleja en el deterioro del salario real promedio (nacional anual) cuyo índice 1984: 100 fue de 0,63 en 1985, habiendo alcanzado en junio de 1988 el valor 0,75 todavía inferior al de 1970 con 0,77 (Chulver 1990: 43). Pérdida que también tuvieron los asalariados con ingresos mayores al promedio nacional activos en bancos, seguros, en el sector de hidrocarburos y en el de servicios básicos (agua, gas y electricidad).

Por el contrario, el desempeño de actividades informales permitió a miles de individuos obtener elevados ingresos o, en todo

caso, por lo menos mejores que los ofrecidos por el sector formal de la manera ejemplificada anteriormente con el caso de las vendedoras ambulantes en la ciudad de La Paz –quienes obtuvieron mayores ganancias que sus maridos como asalariados en aquel sector–; el del campesino que recibe un precio más elevado si su producto es la hoja de coca y no el café ni el maíz/según informaciones otorgadas por el propio presidente Paz Zamora páginas atrás; o el del piloto que por un solo vuelo transportando droga de Santa Cruz a Colombia gana 100.000 dólares (Irusta y Poirot 1986: 29). Beneficios que explican el inmenso crecimiento de los individuos (auto-) empleados en las dos principales ramas de la economía informal.

El presidente Paz Zamora indicó en una entrevista, realizada a principios de 1990, que la economía de la coca anualmente producía cerca de 1.500 millones de dólares, de los cuales 600 quedarían en el país (González 1991: 36). Por su parte, el estudioso de la economía nacional Doria Medina calculó que en promedio la fuga de capital procedente de la producción nacional de cocaína sería lo equivalente al 85% del total; éste alcanzó la suma de 5.733 millones de dólares entre 1980 y 1985 (Doria Medina 1986: 72). A pesar de que la mayor parte de ese capital no es invertido en la economía nacional el efecto multiplicador del sector coca en su conjunto es muy significativo debido a la debilidad de la estructura económica de Bolivia. Justamente en 1985 cuando se dio el derrumbe del precio internacional del estaño fueron entre 367 y 490 millones de dólares los que quedaron en el país y sirvieron para financiar tanto actividades formales como informales. Fue debido a ese volumen de capital que a pesar de un sostenido decrecimiento del PIB formal (más de 25% entre 1980 y 1985) existieron actividades que crecieron y se diversificaron, por ejemplo, el contrabando, el sector financiero especulativo, el consumo suntuario, la gran importación de vehículos de lujo, etc. (Doria Medina 1986: 71). Cuando la cotización mundial del estaño se redujo y el precio del gas también, a principios de 1986, y no se dio un incremento de las divisas por la exportación de productos no tradicionales, "la única explicación de la 'gran' estabilidad cambiaria y el ostensible incremento de las reservas de divisas que se da en los primeros meses de 1986" (Doria Medina 1986: 71) fue la existencia de las millonarias ganancias del narcotráfico.

Un estudio de UDAPE de 1985 estimó que en ese año el 80% de la oferta de divisas en el mercado paralelo provenía de aque-

llas ganancias y concluyó que dicho porcentaje iba creciendo aceleradamente (Doria Medina 1986: 59). En enero de 1986 el entonces ministro del Interior afirmó que "[...] más del 50% de los dólares que entran en el país provienen del tráfico de drogas". Un informe de la Cámara de Diputados de Bolivia, por su parte, denunció en 1987, en la misma dirección, que "[...] 'en los pasados 5 años, las exportaciones de cocaína y sus derivados fueron 300% más altas que todas las otras ganancias por exportaciones juntas, y (que) en 1985 el PNB era equivalente al de las drogas' [...]" (Craig 1988: 110). El "reciclaje de los dólares generados por las actividades ilegales se ha convertido además en un elemento que garantiza la estabilidad del tipo de cambio, aspecto que es confirmado por las estimaciones del Fondo Monetario Internacional [...]" (Doria Medina 1987: 19); aquél explica también "en gran medida [...] la moderada inflación existente en Bolivia." (Campodónico 1989: 246)

En pocas palabras, se puede concluir que en su conjunto el sector informal de la economía y de modo especial, por su magnitud, el eje coca-cocaína constituye "la carta oculta de la estabilización" (Toranzo 1989c: 27). El peso del eje en la realidad del país puede apreciarse mejor al compararlo con el significado que tiene en otros países del continente. El siguiente cuadro ofrece algunos datos estadísticos sobre el papel, de la economía desarrollada en torno al tráfico de la cocaína, en los sistemas económicos de Bolivia, Perú, Colombia y los Estados Unidos:

RELACION ENTRE NARCOTRAFICO Y ECONOMIA 1987

	PNB	IpC	PIBC	% del PNB
Bolivia	3,9	600	3	77
Perú	14	800	4	29
Colombia	39.5	1.320	9	23
Estados Unidos	4.500	18.405	22,5	0,5

Elaboracion Propia

Fuente: Doria Medina 1986: 169 y Herf 1990: 33

PNB= Producto Nacional Bruto (en millones de dólares)

IpC= Ingreso per cápita (en dólares)

PIBC= Producto Interno Bruto de la Cocaína (en millones de millones de dólares)

% del PNB= el PIBC como % del PNB

Como destacan las anteriores cifras el grado de dependencia del sistema económico boliviano de la existencia de un tráfico de cocaína próspero es incuestionable y tanto para el estudioso como para el ciudadano común es evidente que "sin coca-dólares, la economía, de hecho mutilada, estaría virtualmente en bancarrota." (Craig 1988: 109)

La exitosa y múltiple presencia de la economía informal en calidad de fuente de ingresos para el individuo y de divisas para el Estado, y de centro proveedor de productos de uso y de consumo y de servicios es una solución coyuntural para la crisis profunda que caracteriza a la economía boliviana. Su función como "tabla de salvación" exige un elevado precio socio-económico. Cabe mencionar, por ejemplo, el impacto perjudicial del narcotráfico en el mercado de la mano de obra. En el departamento de Santa Cruz los propietarios de haciendas rurales que antes del galopante proceso inflacionario pagaban un salario diario equivalente a cuatro dólares americanos se quedaron sin peones para trabajar sus tierras debido a las distorsiones salariales provocadas por las actividades del eje coca-cocaína; las cuales hicieron posible que un peón "pisacoca" llegase a recibir hasta ochenta dólares por jornada (Canelas & Canelas 1983: 235). En la producción campesina tradicional también se dieron alteraciones significativas.

El campesino para cosechar las hectáreas cultivadas con coca ya no puede conformarse con la ayuda familiar sino que debe contratar a otras personas; de esta manera aumenta el trabajo asalariado y ocurren rupturas en la economía tradicional que básicamente se orienta al autoconsumo y al intercambio en pequeña escala. Es decir, la coca promovió "la mercantilización en las zonas de cultivo y cambios en la relaciones de producción." (Quiroga 1990: 14) Mercantilización que repercute en el sistema de valores de los individuos al fomentar en ellos aspiraciones modernas de consumo, imposible de ser satisfechas en el marco de una estructura de producción arcaica, y desencadena un proceso de ruptura con el mundo al que pertenecían causando perturbaciones emocionales en las personas que a su vez pueden constituirse en el origen de graves y violentos conflictos sociales.

La expansión de la economía informal durante la década 1980-1990 no solamente conlleva las "perversas deformaciones generadas por el narcotráfico" (Toranzo 1989b: 14); ella de igual manera conserva el carácter monoexportador y primario de la economía boliviana. Para Oporto Castro: "si antes dependíamos del

estaño ahora dependemos de la cocaína. Y al igual que en el pasado, hoy seguimos sujetos a una demanda que escapa por completo a nuestro control con el agravante que los excedentes que quedan en el país son luego derrochados en un consumo superfluo sumuario o generalmente en negocios especulativos, sin llegar a generar verdadera acumulación de capital." (1989: 172)

Desde la perspectiva que interesa en este estudio, esto es, la político-institucional y la socio-cultural se observa que el auge de las ocupaciones no registradas implica, asimismo, el mantenimiento de determinados valores y pautas de comportamiento en los términos que serán expuestos a lo largo de los siguientes apartados. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la supeditación a la informalidad no es solamente consecuencia de las necesidades económicas de los individuos, como fue adelantado al iniciar este capítulo, sino también de otras de naturaleza no económica.

NOTAS

- 1) De acuerdo con Aguiló, estudioso de la realidad social en torno al eje cocaína, los "pisacocas" (personas que emplean sus pies y a veces también las manos para mezclar las hojas secas de coca con kerosene y otros productos químicos para obtener la "pasta") recibirían como pago de su trabajo pitillo, esto es, tabaco mezclado con pasta de coca. Así por ejemplo, los niños campesinos que a temprana edad (nueve años) se incorporan al circuito de la droga "con toda su inocencia" son "reclutados y explotados hasta dejarles, dramáticamente inútiles, con los pies destrozados y la cabeza embotada." (Aguiló 1986) A los "zepes" (individuos, sobre todo de origen chiriguano, que transportan la coca de los lugares donde se la cultiva hasta las fábricas de sulfato) les pasa algo parecido.
- 2) Véase v. gr. Heinz 1989: 487 y Ortiz Crespo 1990: 33. La producción de coca en los tres países principales fue la siguiente entre 1980 y 1988:

PRODUCCION DE HOJA DE COCA (en toneladas métricas)

PAIS	1980	1983	1985	1987	1988
Perú	86.255	127.291	164.997	213.776	s.d.
Bolivia	25.750	47.490	141.233	133.766	136.762
Colombia	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	24.000

Elaboracion Propia

Fuente: Doria Medina 1986: 67, Campodónico 1989: 235 y 239 y Quiroga 1990: 82
s.d. = sin dato

- 3) Mayores detalles al respecto se encuentran en el capítulo dedicado al análisis de las políticas públicas relacionadas con el cultivo de la hoja de coca.
- 4) El acullico es el nombre con el que se conoce al uso tradicional de la coca, es decir, la masticación de la misma por parte de los indígenas con el propósito de aliviar el hambre, el frío, el cansancio.
- 5) Baudoin 1990: 44. Del total de la población ocupada en 1987 el 7,05% trabajaba en la industria manufacturera (Baudoin 1990: 44).
- 6) INE s.f.: 178 y Quiroga 1990: 81. El porcentaje correspondiente a los productos industriales (algodón, caña de azúcar, maní, tabaco y soya) varió entre 12,17 y 12,18 en el mismo período (INE s.f.: 178).
- 7) Sobre la producción total de la hoja de coca existen informaciones divergentes (Campodónico 1989: 229-231).
- 8) Entrevista publicada en *El Mundo*, Santa Cruz de la Sierra 14.11.1989.
- 9) "Dice el sacerdote de Santa Ana: 'La droga nos da de comer'" y "Gigantesco operativo en busca del 'emperador' de la droga", en: *El Mundo*, Santa Cruz de la Sierra 29.6.1991.
- 10) Cf. Bustamante et al. 1990, Instituto de Estudios Liberales 1988, Oddone et al. 1990 y Palma 1987.
- 11) Un medio empleado con frecuencia son las avionetas que sacan del país la cocaína y regresan con cargamentos principalmente de bebidas alcohólicas, cigarrillos y medicamentos. De acuerdo con un estudio realizado por el "Grupo de Acción Financiera Internacional", cuyo objetivo es analizar modos de combatir el narcotráfico, "el blanqueo de los réditos de las ventas de heroína, cocaína y cannabis en Estados Unidos y Europa deja a los narcotraficantes 232.000 dólares por minuto[...]" en "Blanqueo de narcodivisas deja a traficantes 232.000 dólares por minuto" en: *El Mundo*, Santa Cruz de la Sierra 20.4.1990.
- 12) "Contrabando en Santa Cruz moviliza 150 millones de dólares anualmente", en: *El Mundo*, Santa Cruz de la Sierra 7.11.1989. En la misma noticia se indica que el contrabando en 1980 era equivalente a 51 millones de dólares.
- 13) Se trata de una verdadera invasión tanto por la diversidad de bienes que ingresan al país ilegalmente como por su volumen. La escala abarca papel higiénico, toallas, servilletas de papel, azúcar, aceite comestible, harina de trigo, cigarrillos, pilas, alambre de púas, papel fotocopia y otros, huevos, pollos, leche y derivados, caramelos y similares, arroz, televisores, aparatos electrónicos, medicamentos, etc. (Comité regional Mixto de Represión al Contrabando-Santa Cruz s.f.: passim). La procedencia de los artículos de uso y de consumo son Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Estado Unidos y países europeos.
- 14) "Federación de Empresarios Privados: Privatización de la aduana es la solución para frenar el contrabando" en: *El Mundo*, Santa Cruz de la Sierra 1.11.1989. La prensa también denuncia que el "Contrabando absorbe 65% del mercado de medicamentos" en: *El Mundo*, Santa Cruz de la Sierra 7.12.1989.
- 15) En el informe para la gestión 88-89 del comité cruceño se lee que: "La iniciativa de tomar acciones concretas para hacer frente al contrabando de importación, correspondió a un grupo de empresarios nucleados en la Cámara de Industria y Comercio y que muy pronto contó con el decidido apoyo de esta

nuestra institución. Posteriormente, otros sectores productivos se sumaron al esfuerzo, hasta que el propio Gobierno, consciente de que se trataba de un movimiento legítimo y reconociendo sus propias limitaciones para combatir esta actividad ilícita, convalidó la participación del sector privado en los temas aduaneros, mediante Decreto Supremo, creando así los Comités de Represión al Contrabando." (Comité Regional Mixto de Represión al Contrabando-Santa Cruz s.f.: 1)

- 16) Los valores dominantes en la colectividad boliviana permiten que las tiendas de artículos importados, si bien legalmente establecidas, abastezcan sus depósitos con productos contrabandeados.
- 17) Villegas y Aguirre 1989: 57. Entre 1980 y 1987 la estructura ocupacional del país evolucionó del siguiente modo:

POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS
(en porcentajes)

SECTORES	1980	1987
Agricultura	46.5	47.4
Minería	4.0	2.0
Petróleo	0.4	0.5
Manufactura	10.30	7.1
Construcción	5.5	2.7
Electricidad, agua	0.4	0.5
Transporte y comunicación	5.4	7.4
Comercio	7.4	8.2
Bancos, seguros	0.8	0.9
Servicios Públicos	19.3	23.4

Fuente: Villegas y Aguirre 1989: 59

II

LA ECONOMIA INFORMAL Y LAS ALTERACIONES EN EL AREA POLITICO-INSTITUCIONAL

1

LA ECONOMIA INFORMAL Y LAS MODIFICACIONES DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN BOLIVIA

H. C. F. Mansilla

a. El deterioro del sindicalismo tradicional

A comienzos de la década de 1980 el movimiento sindical boliviano se hallaba aun en una posición de indudable fortaleza: durante varias décadas había constituido el factor principal de la oposición a los regímenes autoritarios de derecha y a las dictaduras militares tan frecuentes a partir de 1964 (1). Su poder de convocatoria y movilización entre los llamados sectores populares era simplemente enorme, su influencia política y su prestigio en cuanto grupo de presión eran considerables (y muy temidos por los gobiernos de turno); los partidos y los intelectuales de izquierda, la llamada opinión pública progresista, la coalición gubernamental de centro-izquierda que tomó las riendas del poder desde 1982 hasta 1985, los gremios de campesinos y fracciones notables del movimiento indigenista atribuían una relevancia substancial a los actos y a las declaraciones de la corporación sindical mejor organizada del país, la COB. Las instituciones empresariales, los partidos del centro y la derecha y los medios de comunicación social afines a estas tendencias vieron hasta más o menos 1985 con preocupación creciente las demandas cada vez más radicales y los anhelos de poder político cada vez más evidentes que provenían del sindicalismo organizado.

Pero desde 1985 aproximadamente, se puede constatar una franca declinación del movimiento sindical en todos sus aspectos: su ascendiente en el ámbito político está en franco retroceso,

su facultad de movilización social se ha reducido marcadamente, su autoridad moral entre los intelectuales y las "clases populares" se vino abajo y el número de sus adherentes se transformó en una magnitud limitada y decreciente. Las huelgas generales, los paros parciales y, en general, los objetivos perseguidos por la COB tuvieron a partir de 1985 una influencia francamente restringida; ni las políticas públicas, ni la actuación cada vez más amplia de los empresarios privados, ni la evolución de los nuevos movimientos sociales toman demasiado en cuenta el movimiento sindical, sus órganos institucionales y sus declaraciones programáticas (2).

El deterioro del movimiento sindical, conjuntamente con el florecimiento de nuevos partidos populistas y de comités cívicos y vecinales, conforma probablemente el hecho de mayor relevancia en el plano político-institucional que está asociado al crecimiento de la economía informal en Bolivia. No se puede, obviamente, presuponer un nexo estrictamente causal entre ambos fenómenos. Se puede afirmar, sin embargo, que la decadencia sindical es, en la esfera de la política, el aspecto concomitante más significativo de la expansión de la economía informal, ya que implica una seria recomposición de los actores y las fuerzas político-institucionales, una modificación apreciable del comportamiento a largo plazo de los votantes en las elecciones, una alteración profunda de las tendencias ideológicas fundamentales y una promoción de nuevos agentes sociales con involucración política.

Aunque las posibles causas del declinamiento sindical en Bolivia han sido ya analizadas, conviene recordar las esenciales entre ellas porque poseen una vinculación más o menos inmediata y central con la dilatación de la economía informal.

(A) Una de ellas tiene que ver directamente con alteraciones de largo aliento en la economía mundial, cuyas repercusiones se dan, aunque en menor escala, también en las naciones del Tercer Mundo. El sector secundario de la economía y, ante todo, la industria pesada convencional, se encuentran en un proceso de crisis y conversión, que se ha traducido por una disminución radical de su tamaño absoluto y de su peso relativo dentro de la estructura de producción de la sociedad respectiva. Esto conduce a una demanda decreciente de insumos minerales, lo que en Bolivia ha originado una contracción de la tradicional actividad minero-extractiva. El movimiento sindical ha estado organizado a escala mundial en torno a este sector productivo secundario, y ahora,

afectado de pleno por la crisis y la reconversión correspondiente, ha perdido adherentes y, simultáneamente, capacidad de negociación y movilización políticas y autoridad social y ética entre casi todos los estratos de la población.

(B) Hasta agosto de 1985 se practicó en Bolivia un marcado ensanchamiento de las funciones estatales, especialmente de las empresariales-productivas, lo que conllevó políticas públicas intervencionistas, aumento del empleo estatal y la ilusión de una mayor participación de las masas en la conducción del gobierno. Esta "lógica estatal", como la denominó *José Blanes* (3), alcanzó hacia aquel año sus límites económicos, financieros y hasta físicos: la hiperinflación, el peso creciente de la deuda externa acumulada, el descenso continuo de la productividad de las empresas estatales, el caos en todo el aparato gubernamental y la reducción persistente de los ingresos de los propios empleados y obreros del sector público condujeron a que en las elecciones generales de 1985 triunfasen partidos políticos que implementaron a partir de entonces una "lógica del mercado" (4) que, si bien aun no pudo o quiso introducir una política de privatizaciones, en cambio implementó un modelo que cercenó la magnitud del sector estatal y asignó al privado la responsabilidad por la dirección y la dinámica del proceso productivo. Esto significó el desempleo de miles de empleados y obreros, la marginalización de grandes contingentes laborales, una fuerte estratificación y diferenciación en las empresas privadas basadas en el principio de rendimiento, cualificación técnico-profesional y desigualdad de ingresos, una relevancia mayor dada al trabajo temporal y el consiguiente decaimiento general de organizaciones —como los sindicatos— que, en el fondo, representan a los trabajadores del viejo estilo. En Bolivia este desarrollo trajo consigo además un verdadero colapso de la industria minera (después del hundimiento del precio de estaño en las bolsas internacionales en 1985); puesto que la COB y su sector más fuerte y combativo, la *Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia* (= FSTMB), dependían de la llamada centralidad minera —a la cual estaba ligada, después de todo, la identidad colectiva del movimiento sindical (5), de su carácter proletario-obrero y de su sentimiento de vanguardia política nacional—, una vez que esta "centralidad" se diluyó por prosaicas razones técnico-económicas, la base humana del movimiento sindical abandonó sus organizaciones y se refugió en la economía informal. Los mineros desem-

pleados conforman, como se sabe, uno de los sectores numéricamente más grandes de la economía clandestina, sin mantener ninguna vinculación con sus antiguos sindicatos (6).

(C) Otra causa de la declinación sindical debe ser vista en aquella tendencia mundial que vuelve a privilegiar los impulsos individualistas, que promueve los partidos (y no los sindicatos) como órganos de agregación y articulación de intereses legítimos de grupos y sectores, que fomenta las asociaciones vecinales, regionales y étnicas (dando la impresión de retornar a las añoradas formas primarias de solidaridad inmediata) y que desalienta todo tipo de pensamiento clasista-colectivista. Esta tendencia, aunque debilitada, también se ha hecho presente en la Bolivia contemporánea. Los sindicatos han perseguido, en cambio, una política muy convencional en este sentido, dentro de la cual le cupo al marxismo el legitimizar toda forma de maximalismo; los dirigentes y teóricos del sindicalismo han defendido un marxismo simplista que ha impedido, por un parte, percibir (y digerir) las alteraciones que se dan en la economía y sociedad contemporáneas, y, por otra, ha favorecido una visión dicotómica de su propio entorno. En la política y en la confrontación con los otros actores políticos bolivianos han visto primordialmente una lucha de clases entre contendientes irreconciliables, dando lugar a una "lógica militar" (7), según la cual la concertación social sería un mecanismo engañoso destinado a subordinar el movimiento obrero en favor de las clases "dominantes"; una actuación basada en compromisos y negociaciones en torno a objetivos precisos constituiría una traición a la sacrosanta misión del sindicalismo organizado y una convergencia temporal y pragmática con los "contendientes" podría ser tolerada sólo como un ardid de guerra para confundir y debilitar a éstos últimos. Esta visión maniqueísta y, en realidad, profundamente pesimista del acontecer social impidió que la COB amplíe su campo de acción social, gane nuevos aliados y comprenda los legítimos intereses de los nuevos movimientos sociales, regionales y étnicos. Además, su actividad intolerante durante el periodo 1982-1985 hizo que la opinión pública responsabilizara al movimiento sindical de la agravación de la crisis económica, de la fragmentación política y de la descomposición moral de la nación. La desilusión y la deserción de los afiliados a los sindicatos pueden ser calificadas de muy altas: ningún miembro que abandonaba una organización sindical sentía nostalgia por

la institución y creía más bien liberarse de una obligación inútil y onerosa (8).

No es del todo superfluo el referirse a una periodización de la evolución sindical en América Latina propuesta por *Francisco Zapata* (9), que atañe asimismo al auge actual de la economía informal. Según este esquema se habrían dado tres fases centrales:

- el periodo *heroico* (crecimiento hacia afuera, dominación del sector exportador, discurso marxista como cohesionante de la identidad obrera);
- la etapa *institucional* (industrialización substitutiva de importaciones, participación del sindicalismo en la estructura populista de gobierno); y
- la fase de *exclusión* (transnacionalización del proceso productivo, congelación de prerrogativas sindicales, desmantelamiento de instituciones y prácticas ligadas a la organización sindical, tendencia al pragmatismo y decadencia de la ideología revolucionaria, disminución drástica de la llamada presión redistributiva, autoritarismo empresarial a veces con represión militar y florecimiento de la informalidad).

Aun cuando este esquema evolutivo se fundamenta en muy pocos elementos de juicio —relevancia exagerada del mercado mundial y de los factores exógenos, culpabilización del neoliberalismo— y deja a otros premeditadamente de lado (presión demográfica excepcionalmente alta, tasas elevadas de urbanización, política maximalista y auto-destructiva de los propios sindicatos, transformación hacia una mayor complejidad tanto de la estructura social general como de las condiciones de producción), contribuye ante todo a comprender aquéllo que los sindicatos han perdido objetivamente con el desarrollo de los últimos años y con el advenimiento de la economía informal. En el caso boliviano es importante el señalar que los sindicalistas aun en ejercicio y los que fueron obligados a abandonar su actividad regular se sienten manifiestamente excluidos del proceso socio-económico contemporáneo. Entre las desventajas que ellos mismos mencionan se hallan (10):

- marcada pérdida en la significación que poseían anteriormente las negociaciones tarifarias colectivas y los convenios con el Estado;

- dificultades en toda inserción política de sindicatos y entes similares de representación de "intereses populares";
- deterioro de los "vínculos clásicos" entre los sindicatos y los partidos populistas y los de izquierda;
- incremento del "autoritarismo patronal" en el interior de las empresas; y
- merma de la antigua confianza en la elevación lenta, pero segura de nivel de ingresos y de la relevancia socio-cultural de los sindicatos.

Los actuales informales, que pertenecieron antes a organizaciones sindicales y que disponen de una cierta formación política, por más precaria que ésta ha sido, perciben la situación en la que ahora están sumidos como una especie de desclasamiento y hasta de esclavismo, ya que muchísimos de ellos han tenido que aceptar puestos de índole aleatoria como peones no cualificados en el complejo coca/cocaína (11). Han debido, además, perder las esperanzas de mejorar sus propios niveles técnico-profesionales, de lograr una educación de nivel más alto para sus hijos y de acceder paulatinamente a una calidad más elevada de vida.

La relación entre el deterioro del sindicalismo y el florecimiento de la economía informal en Bolivia tiene, empero, algunas facetas más complejas. Después del descalabro de la economía minera y de la reducción drástica de los sectores fabriles, agrícolas y otros pertenecientes al sector formal, la expansión de la economía informal y de sus partes clandestinas y delictivo-ilegales ha contribuido de manera eficaz, rápida y hasta cierto punto exitosa a evitar un derrumbe económico completo de la nación y a aminorar considerablemente un estallido social que se pensaba inminente y casi ineludible. A la economía informal le corresponde, entonces, la función central de haber amortiguado una crisis generalizada de primer orden mediante la creación de millares de fuentes de ocupación e ingreso para la mayoría de aquellos desocupados, marginales y desclasados que produjo la crisis económica a partir aproximadamente de 1978/1979. Se trata naturalmente de "oportunidades laborales" precarias, mal remuneradas y peor vistas, pero que permiten la supervivencia de una buena porción de la población boliviana, sin que el Estado haya tenido que tomar las medidas pertinentes para paliar la crisis y sin que ni siquiera haya diseñado las políticas públicas adecuadas

al caso. Con la instauración del régimen neoliberal en 1985 hubo, como se sabe, un corte radical en el empleo estatal y para-estatal; despidos (con y sin indemnización), retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y compulsivas y una larga serie de medidas afines causaron una fuerte contracción de la fuerza laboral formal. En la Corporación Minera de Bolivia, el empleador más grande de la esfera productiva, este programa originó la cesantía permanente de dos terceras partes de sus empleados y obreros (12). Aunque los recortes no fueron tan dramáticos, en otras reparticiones de la administración pública y en la empresa privada se dieron igualmente fenómenos de despidos masivos, lo que conllevó principalmente una relación cualitativamente nueva entre el empleo asalariado y el no asalariado en Bolivia --con un evidente incremento de éste último (13). Además el ritmo anual de crecimiento del sector informal sigue siendo más alto que el del formal, con graves consecuencias para el futuro de la sociedad boliviana (14).

Los efectos concomitantes de la compleja relación entre el deterioro del sindicalismo organizado y la expansión de la economía informal pueden ser caracterizados mediante los siguientes enunciados, lo que es válido sobre todo para el periodo que se inicia en agosto de 1985:

(A) El despido masivo en empresas estatales y privadas ha conducido a ciertos procesos de movilización y especialmente dispersión horizontales; centros mineros y aglomeraciones urbanas en torno a ellos han sufrido una notable disminución de su población, mientras que los cinturones de miseria alrededor de las capitales departamentales y las zonas dedicadas al cultivo de la coca han experimentado un aumento demográfico correspondiente (15). Entre las consecuencias de este proceso se hallan una amplia diseminación de las unidades productivas, una ilegalización de una parte considerable de los nuevos "trabajos" y una clara pérdida de los vínculos profesionales y hasta personales que tenían entre sí los antiguos afiliados a los sindicatos. Este proceso parece ser particularmente agudo entre los ex-mineros, quienes, al tener que abandonar sus lugares tradicionales de residencia y trabajo, han dejado de percibirse a sí mismos como un sector social cohesionado y con valores comunes de orientación (16).

(B) Otra consecuencia fundamental es la llamada *desproletarización* de los informales. Fuera de los vínculos establecidos por

la fábrica, la empresa minera o petrolera, los antiguos obreros abandonan rápidamente la conciencia de pertenecer a una clase homogénea y explotada y, simultáneamente, la idea concomitante de luchar por objetivos racionales y colectivos. La única meta que parecen perseguir los ex-obreros es la de la supervivencia cotidiana, meta enteramente comprensible dada la precariedad del nuevo modo de vida. Esta inseguridad existencial, que parece permear todos los aspectos relativos a las actividades informales, imposibilita el postulado de las reivindicaciones sindicales habituales, limita toda forma más o menos permanente de organización sindical o protosindical en cuanto agregación y articulación de intereses y favorece más bien modelos relativamente arcaicos para exponer y defender esos intereses, como agrupaciones vecinales, movimientos en pro de un solo (y modesto) objetivo material, corrientes regionalistas y hasta agrupaciones gremiales de inspiración religiosa. A la decadencia del sindicalismo de fuerte proveniencia proletaria parece corresponderle un incremento del paternalismo clásico, que sería claramente detectable en el interior de las empresas informales del sector urbano manufacturero o de servicios (17). En base a los propios datos empíricos acopiados se podría aseverar que los mineros y obreros desempleados pierden más o menos rápidamente su "conciencia de clase proletaria" y adoptan los valores de orientación predominantes en los sectores informales donde encuentran una ocupación, valores de corto aliento, erráticos, sin designios claros para el mañana y derivados, en el fondo, de la necesidad de sobrevivir bajo condiciones de pauperización creciente y calidad de vida declinante. Dentro de las pequeñas empresas informales se puede constatar un retorno a condiciones laborales prevalecientes en la primera etapa del capitalismo clásico, sin derechos sociales, sin seguro de ningún tipo, con fluctuación altísima de la fuerza laboral y con una política intransparente de remuneraciones. Allí vale además el principio: "Obra terminada, relación laboral concluida" (18) como corolario de la modalidad de pago a destajo en su forma más cruda.

(C) Otra consecuencia, muy ligada al factor anterior, es el surgimiento de una relativa apatía política en casi todos los grupos integrados por informales que antiguamente estuvieron sindicalizados. Esto puede ser rastreado en el destino peculiar de los llamados relocalizados mineros y fabriles (19), quienes dejaron de lado su ideología política radical y de corte socialista y adoptaron

una visión pragmática, pesimista y claramente inmediatista, contribuyendo involuntariamente a la estabilidad política y al fortalecimiento de corrientes derechistas en el país a partir de 1985. A esto ha coadyuvado fuertemente el proceso de *recampesinización* (20) de ex-obreros y ex-mineros, quienes, transformados en informales y teniendo que convivir o en un ambiente rural (sector coca/cocaína) o en un nuevo ámbito urbano, signado por la enorme masa de migrantes del campo de primera generación y reciente data, van adquiriendo lenta pero seguramente las pautas de comportamiento, los valores de orientación y hasta la visión del mundo del medio rural andino. Organizaciones de intereses de cuño más o menos moderno —como los sindicatos— denotan en esta situación un desempeño pobre (21), que se debe no sólo a la dispersión geográfica de las unidades de producción, sino también a la existencia de una sorprendente cantidad de conflictos internos, cuya importancia intrínseca es relativamente baja, pero cuya persistencia imposibilita, por ejemplo, la constitución de federaciones representativas y eficientes en las distintas ramas de actividad. Puede afirmarse que los sindicatos que han pervivido desde antes o los nuevos establecidos muy rudimentariamente entre los informales se dedican mayormente a tareas de auto-ayuda, a la búsqueda de modestas posibilidades laborales y a la instalación de ollas comunes o comedores populares; dependen en un grado muy alto de otras organizaciones no gubernamentales, de fondos externos o de la caridad de la Iglesia católica. Esto conduce a

- robustecer vínculos paternalistas ya existentes e incrementar la dependencia con respecto a instancias no sindicales;
- restringir sus acciones a metas inmediatas, no visualizando objetivos genuinamente políticos; y
- consolidar una estructura interna muy elemental (no disponen de poder de negociación, no poseen fondos propios para emergencias, no tienen una vida interna activa, ya que generalmente no celebran asambleas ni cuentan con locales para ello) (22).

Esta combinación de desproletarización, informalización y despolitización debe ser, empero, matizada por la emergencia de los nuevos movimientos de base (vecinales, regionales, etc.) y por el apoyo de los informales a partidos populistas. En lo referente a esto último es imprescindible mencionar, sin embargo, la probabi-

lidad de que los informales sean víctimas de una evidente manipulación de parte de las jefaturas de aquellos partidos, la cual es facilitada por la conducta errática de los informales y su oportunismo en el campo político (23). Se trata naturalmente de un proceso incipiente y complejo, que aun no permite el enunciado de tesis explicativas seguras. La teoría de la desproletarización / informalización / despolitización privilegia la visión convencional marxista de *clases* como agentes fundamentales del acontecer socio-político; el hecho de que los informales tengan ahora que afrontar por sí solos los problemas de su existencia y reproducción y que el Estado boliviano haya renunciado no sólo a su función interventora directa en la economía, sino también a sus tareas mediadoras en conflictos y, en general, en las relaciones sociales, es percibido como algo primordialmente negativo (24). Pero si se considera a los informales —y, más extensamente, a los movimientos sociales— fuera de esta lógica de clases y más bien como nuevos actores socio-políticos de propio derecho, capaces de una renovación de pautas socio-culturales y de la creación de nuevas identidades colectivas, entonces es posible que las representaciones de los intereses de los informales, bajo el modelo sindical o mediante organizaciones novedosas, contribuyan a considerables modificaciones de las esferas política, socio-cultural e institucional bolivianas, cuyas características aun no pueden ser detectadas con exactitud. Esta posibilidad debe ser obviamente contrastada con todos los aspectos negativos (desde la dilapidación de recursos hasta el desfase tecnológico y la baja productividad) que son inherentes a la economía informal.

b. El sindicalismo frente al sector delictivo-ilegal de la economía informal

Debido a la reducción numérica de sus afiliados, a la pérdida del poder de convocatoria y al crecimiento de la economía informal como manifestación de profundos cambios en la estructura socio-económica del país, el movimiento sindical boliviano y su órgano más importante, la Central Obrera, han aminorado substancialmente su radicalismo ideológico y sus pretensiones políticas (25); desde aproximadamente 1985, los sindicatos se han dedicado mayormente a defender intereses sectoriales y gremiales propios (salarios, puestos de trabajo, etc.), lo que ha conllevado un notable deterioro de su rol político y de su peso como actor social. La posi-

ción general de los sindicatos con respecto a la economía informal está caracterizada por el desconcierto y la ambigüedad —en lo que se asemeja a la actitud correspondiente del gobierno y de otros actores socio-políticos. Sin encomiar el papel de la economía informal, un ministro de trabajo reconoció que ella contribuye decisivamente a generar fuentes de trabajo y posibilidades de un ingreso mínimo para amplias capas sociales. "Si desaparece la informalidad, viviríamos una tensión social muy grave" (26). No es muy diferente la postura del sindicalismo, aunque ésto no garantiza *per se* una influencia mayor sobre los informales.

Sintomática es la actitud adoptada por las organizaciones sindicales frente al enorme sector de la coca/cocaína, donde no sólo ex-obreros, sino también afiliados a la CSUTCB han encontrado una fuente actualmente irremplazable de trabajo e ingresos. El movimiento sindical y algunos partidos de izquierdas atribuyen ahora un carácter substancialmente *progresista* a las tareas y actividades de los campesinos dedicados al cultivo y a la comercialización de la coca, defendiendo los intereses de los involucrados en tales prácticas y haciéndolas pasar como un modo de producción de vieja raigambre ancestral y, por supuesto, inofensivo desde el punto de vista de la legalidad. Hasta instituciones como la *Comisión Andina de Juristas* insisten en que la coca y su refinación constituyen un *recurso natural* que "merece ser defendido" y proclaman que los productores de coca no son delincuentes (27). Esta argumentación, inmensamente popular, tiene la ventaja de las semiverdades caras a la consciencia popular por proveer una clara función exculpativa.

Las posiciones de los sindicatos y los partidos de izquierda ante esta problemática pueden resumirse así (28):

- El actual *status quo* de un consentimiento tácito a la producción clandestina excedentaria de coca debe ser mantenido. El gobierno debe seguir con la tolerancia efectiva —pese a la condena verbal— hacia la producción de coca, cuya parte más importante (cerca del 90%) no tiene obviamente nada que ver con los llamados usos tradicionales por la población aborigen. Los productores de coca, organizados sindicalmente, demandaron en marzo de 1991 del gobierno —y en forma perentoria— la libre comercialización de la coca, la expulsión de las agencias norteamericanas dedicadas al control de la misma y la derogación de todas las leyes y los reglamentos que

se opongan fácticamente a un incremento de este "producto" (29). Una de las principales razones esgrimidas es tan sólida como prosaica: ningún otro cultivo exhibiría la rentabilidad financiera de la coca (30). La CSUTCB sobre todo se ha mostrado extremadamente hostil contra todo intento gubernamental de destruir o únicamente limitar los cultivos excedentarios de coca, llegando en varias ocasiones a bloquear caminos o a amenazar con desabastecer los mercados urbanos si se llevaba a cabo tal designio (31). La COB se ha solidarizado con la posición general de la CSUTCB, alegando principalmente que no se puede producir artículos para los cuales no hay mercado (32).

- Las mencionadas organizaciones sindicales y gremiales están enérgicamente en contra de la *militarización* de las zonas de cultivo excedentario de coca y en contra de la participación norteamericana en operaciones militares. Las causas son relativamente fáciles de discernir: dada la alta rentabilidad de los cultivos de coca, los campesinos no renunciarán a ellos ni por razones políticas, ni ecológicas y ni siquiera por aquellas asociadas a un posible desarrollo genuinamente alternativo a largo plazo. Debido a la corruptibilidad excepcionalmente alta de las Fuerzas Armadas y de la policía bolivianas, la intervención más o menos directa de asesores o de personal militar norteamericano sería la única garantía de seriedad y alguna eficacia en las operaciones de destrucción o restricción de cultivo de coca. Contra este propósito se ensaña la resistencia de los gremios y sindicatos de agricultores, para lo cual cuenta con la proverbial aversión que existe en el universo latinoamericano contra toda política pública norteamericana. La ideología justificativa es la de la "defensa de la soberanía nacional" (33).
- Los sindicatos y las organizaciones políticas afines han desarrollado entre tanto una auténtica apología de la producción de coca en cuanto una actividad encuadrada estrictamente dentro de una tradición popular, ancestral, ritual-religiosa y hasta anti-imperialista, que tendría muy poco que ver con el narcotráfico y mucho con la identidad colectiva de etnias amenazadas por maquinaciones de potencias y culturas foráneas (34). Una verdadera masa de publicaciones intenta demostrar que el cultivo de la coca es, en el fondo, la

inofensiva continuación de una valiosa herencia socio-histórica autóctona, aunque haya para tal fin que pasar por alto factores cuantitativos: cerca de nueve décimas partes de las cosechas respectivas son destinadas al profano objetivo de la elaboración de cocaína (35).

- Organizaciones sindicales y gremios campesinos extienden el discreto manto del silencio sobre los daños ecológicos que resultan de la monocultura de la coca. En la apasionada defensa de la coca como continuación de un quehacer ancestral y en cuanto una forma anti-imperialista de economía, los dirigentes sindicales olvidan generosa y premeditadamente la tala de bosques, el erosionamiento y empobrecimiento de los suelos, la destrucción de la variedad en flora y el avance indiscriminado de la monocultura a expensas de las tierras subtropicales montañosas, que se hallan entre las más vulnerables del mundo a causa de la rápida e irreversible pérdida de una capa de humus delgada y frágil. Al contrario de otros cultivos (como café y cítricos), la monocultura masiva de la coca exige una previa destrucción de las grandes arboledas y, en muchas regiones de suelos particularmente escarpados y lesionables, la constante apertura de nuevas tierras (*shifting cultivation*) en vista de la rápida degradación de los suelos utilizados por más de tres o cuatro años.

Los ex-mineros y otros desempleados urbanos, que por razones de fuerza mayor tienen que dedicarse al cultivo de la coca en zonas subtropicales o tropicales, exhiben, de acuerdo a la encuesta ya mencionada, algunas similitudes en relación con la problemática del medio ambiente:

(1) La percepción colectiva del trópico es prácticamente la misma que manifiesta el grueso de la población boliviana. Está determinada por la ignorancia y la ingenuidad. Se supone que las regiones tropicales son espacios físicos esencialmente iguales a los demás y que las mismas técnicas agrícolas usadas en las tierras altas y frías pueden ser aplicadas sin más al nuevo entorno tropical.

(2) Se espera del trópico la solución de problemas ajenos a este ecosistema, es decir a dilemas surgidos en ámbitos geográficos y ecológicos totalmente diferentes; además, los colonos comparten, sobre todo al comienzo, la opinión muy difundida de que las tierras tropicales son particularmente fértiles y capaces de generar cosechas opulentas. La frondosidad del manto vegetal tiende a favorecer este parecer totalmente equivocado.

(3) La actitud de los colonos ante el suelo tropical es básicamente la misma que ante una mina, a la que hay que explotar en el plazo más breve posible, tratando de extraerle el máximo provecho y sin preocuparse por su situación a mediano o largo plazo. "Cuando decae la productividad, se abandona, se vende a otro colono recién llegado o a veces se distribuye entre los hijos" (36).

(4) En zonas tropicales los colonos consideran el nuevo entorno "como algo hostil y extraño en un primer momento y como algo carente de valor después" (37). Inversiones de largo aliento son muy raras. El cultivo extensivo de la coca ha demostrado ser poco conservacionista. De acuerdo a la teoría indigenista acerca de la economía informal, la difusión de esta última, incluyendo obviamente el complejo coca/cocaína, contribuiría a consolidar o a volver a establecer relaciones socio-económicas basadas en los principios premodernos de la reciprocidad, la familia extendida y el compadrazgo. Pero la realidad ha demostrado que precisamente la economía informal ha significado en las regiones rurales la introducción acelerada y brutal de aspectos típicos de la modernidad -como el trabajo asalariado, el dinero como medio generalizado de interacción, relaciones de mercado- y la descomposición de los vínculos primarios, del modo de vida premercantil y, en el fondo, del sistema de solidaridad orgánica e inmediata que existía en aquel universo signado simultáneamente por la pobreza y la tradicionalidad (38). Lo que se ha conseguido en aquellas comarcas es, en realidad, la importación de una modernidad de tercera clase, que sólo contiene las desventajas y ninguna de las virtudes del orden moderno.

Aquí es pertinente añadir que los movimientos políticos indigenistas, cuya base de adherentes se recluta mayormente entre los campesinos de origen aymara, no hacen gala de preocupación por la problemática ecológica y menos aun por el impacto sobre el medio ambiente causado por la intensificación de los cultivos de coca; se manifiestan más bien por la expansión de la frontera agrícola y por la multiplicación de los cultivos hacia las regiones sub-tropicales y tropicales del país (39). Estas tendencias combaten ciertamente toda forma de militarización (40) de las zonas con sembradíos excedentarios de coca, afirmando que la militarización no se dirige, en el fondo, contra este tipo específico de cultivos, sino contra el campesinado en general (41). Habría que de-

fender la hoja de coca en cuanto símbolo de la "bolivianidad" (42). Es importante observar que otros dirigentes sindicales, incluidos algunos de la CSUTCB, exhiben opiniones más matizadas sobre la evolución de la economía informal a largo plazo y perciben los peligros inherentes a la evolución de una economía apoyada en una base tan precaria (43). Estas ambivalencias, resultados de un mejor proceso de reflexión, irán probablemente configurando un cierto escepticismo entre los sindicatos y otros gremios representativos acerca de la economía informal.

NOTAS

- 1) Cf. sobre esta temática: Jorge Lazarte, *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. Historia de la COB 1952-1987*, La Paz: ILDIS 1989; Guillermo Lora, *Historia del movimiento obrero boliviano*, La Paz: Amigos del Libro 1967-1980 (varios tomos); Carlos F. Toranzo Roca (comp.), *Crisis del sindicalismo en Bolivia*, La Paz: FLACSO/CERES 1987; varios ensayos en: Roberto Laserna (comp.), *Crisis, democracia y conflicto social*, Cochabamba: CERES 1985
- 2) Sobre esta temática cf. Roberto Laserna (comp.), op.cit.; René Antonio Mayorga, *Movimientos sociales y sistema político: la crisis del sistema democrático y la Central Obrera Boliviana*, en: *ibid.*, pp. 25-64; Mayorga, *La Central Obrera Boliviana: paradoja del sistema democrático*, La Paz: CERES 1986
- 3) José Blanes, *El Estado y el mercado de trabajo en Bolivia: redefiniciones a ratz de la crisis económica*, en: Adriana Marshall / José Blanes, *Crisis fiscal, Estado y mercado de trabajo*, La Paz: CEBEM 1991, p. 34 sq.
- 4) *Ibid.*, p. 35 sq.- Cf. también Isabel Arauco, *Una aproximación al análisis de la relocalización*, en: TEMAS LABORALES, No. 5 (La relocalización), La Paz, Centro de Estudios del Trabajo 1988, *passim*; en general cf. Luis Sandoval, *Sindicalismo y sectores informales*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 110, noviembre/ diciembre de 1990, p. 144
- 5) Jorge Lazarte, *Crisis de identidad y centralidad minera*, en: *Repensando el país*, La Paz: Movimiento Bolivia Libre 1987, p. 159; Lazarte, *El movimiento obrero: crisis y opción de futuro de la COB*, en: Carlos F. Toranzo Roca (comp.), op. cit. (nota 1), pp. 251-291; René Antonio Mayorga, *La Central...*, op. cit. (nota 2), p. 14; en torno a la muy desventajosa posición de los sectores campesinos, claramente mayoritarios en el país, frente a los minero-proletarios en el marco de la COB, cf. Jorge Lazarte, *Movimiento...*, op. cit. (nota 1), p. 181 sqq.; Silvia Rivera Cusicanqui, *El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática*, en: Roberto Laserna, (comp.), op. cit. (nota 1), pp. 129-164, especialmente p. 157
- 6) Cf. el excelente ensayo de Hernando Larrazábal, *El proceso de desproletarianización en Bolivia y los nuevos desafíos para el movimiento popular*, en: Rodolfo Eróstegui (comp.), *El movimiento sindical hacia el año 2000*, La Paz: ILDIS 1990, p. 146, en el cual Larrazábal llama la atención hacia las múltiples causas para el declinamiento del movimiento obrero y, por consiguiente, del sindical, de-

rivadas de complejas transformaciones tecnológicas en las economías metropolitanas y de una posible nueva división internacional del trabajo.

- 7) Sobre la "lógica militar" imperante dentro de los cuadros dirigentes del movimiento sindical cf. René Antonio Mayorga, *Movimientos...*, op. cit. (nota 2), p. 59 sq.; Mayorga, *La Central...*, op. cit. (nota 2), p. 17; Mayorga, *Crisis de Estado y democracia*, en: R. A. Mayorga (comp.), *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia*, La Paz: CLACSO/CERES 1987, pp. 129-159
- 8) Estos enunciados se fundamentan en la encuesta de opinión realizada entre representantes de gremios (por ejemplo, sindicatos) e informales en La Paz y Santa Cruz en 1991.
- 9) Francisco Zapata, *Nuevos modelos de desarrollo, crisis económica y políticas de ajuste en América Latina*, en: Rodolfo ErósteGUI (comp.), op. cit. (nota 6), pp. 2-6
- 10) Esta auto-visión de sindicalistas bolivianos está basada en la mencionada encuesta indicativa a representantes gremiales realizada en La Paz y Santa Cruz en 1991.
- 11) Datos de la encuesta mencionada; cf. también Federico Aguiló, *Los peones de la cocaína*, en: PRESENCIA del 23 de noviembre de 1986, p. 11 sq; cf. Luis Sandoval, op. cit. (nota 4), pp. 140-151; Achim Wachendorfer, *Sindicalismo latinoamericano, un futuro incierto*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 110, noviembre/diciembre de 1990, pp. 80-91
- 12) Unidad de Análisis de Políticas Económicas, *La política antiinflacionaria de choque y el mercado de trabajo: el caso boliviano*, La Paz: UDAPE 1989, p. 181 sq.; Isabel Arauco, op. cit. (nota 4), p. 13 sq.; Ivonne Farah, *Crisis de las políticas sociales y del Estado benefactor* (anexo estadístico), en: Rodolfo ErósteGUI (comp.), op. cit. (nota 6), p. 80
- 13) Datos en: Roberto Casanovas Sainz, *Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad*, en: Antonio Peres Velasco et al., *Informalidad e ilegalidad*, La Paz: CEDLA 1989, pp. 71-73; Arauco, *ibid.*, pp. 10-14; *La economía informal hizo de colchón a pesadez de la crisis*, en: PRESENCIA del 22 de febrero de 1987; 600.000 "informales" frenan eclosión social que generaría el desempleo, en: PRESENCIA del 14 de octubre de 1990; *Narcotráfico da trabajo a 390.000 personas*, en: PRESENCIA del 4 de septiembre de 1989; *Según CIID industria de la coca-cocaína es la mayor fuente de empleo*, en: PRESENCIA del 1 de abril de 1990; Carlos F. Toranzo Roca, *Desproletarización e "informalización" de la sociedad boliviana*, en: Toranzo (comp.), *Bolivia hacia el 2000. Desafíos y opciones*, Caracas: Nueva Sociedad/Amigos del Libro 1989, p. 239
- 14) Roberto Casanovas Sainz, *ibid.*, p. 78 sq.
- 15) Datos en: Hernando Larrazábal, op. cit. (nota 6), pp. 161-164; Isabel Arauco, op. cit. (nota 4), pp. 10-14.- Sobre lo ocurrido en los centros mineros después del colapso, cf. *Investigación sobre el cooperativismo en Siglo XX, Llalagua/Siglo XX*: Centro de Comunicación y Educación Popular Pío XII 1990; José Blanes / Mario Gutiérrez, *Complejo urbano minero del Norte de Potosí: tendencias y alternativas en la crisis del estaño*, La Paz: CEBEM 1990
- 16) Apreciación basada en la mencionada encuesta de informales. Cf. también el brillante estudio de Carlos F. Toranzo Roca, *Desproletarización...*, op. cit. (nota 13), p. 233 sqq.

- 17) Silvia Escóbar de Pabón, *Los establecimientos informales ante la ley. Análisis microeconómico*, en: Antonio Peres Velasco et al., op. cit. (nota 13), p. 153 sq.
- 18) *Ibid.*, p. 134.- Cf. también *ibid.*, p. 156; Gustavo Rodríguez/ Carlos Böhrt, *Bolivia: el movimiento sindical y la crisis*, en: Carlos F. Toranzo Roca (comp.), op. cit. (nota 1), pp. 17-43; Toranzo Roca, *Desproletarización...*, op. cit. (nota 13), p. 233; sobre la situación general en América Latina cf. el instructivo ensayo de Manuel Barrera, *El movimiento de los excluidos. Desempleo y la nueva informalización*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 90, julio/agosto de 1987, pp. 126-133, con la conclusión terminante: "La correlación que se puede establecer entre el sindicalismo y el sector informal de la economía es una correlación negativa. Es decir, a mayor sector informal -más volumen, más numeroso- menos volumen, menos numeroso es el movimiento sindical" (*ibid.*, p. 133).
- 19) Cf. Isabel Arauco, op. cit. (nota 4), pp. 12-24
- 20) La expresión proviene de Mario Arrieta Abdalla, *Utopía andina, desproletarización y recampesinización*, en: Carlos F. Toranzo Roca / Mario Arrieta Abdalla, *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia*, La Paz: UNITAS/ILDIS 1989, pp. 147-179
- 21) Roberto Casanovas Sainz / Silvia Escóbar de Pabón, *Los trabajadores por cuenta propia en La Paz. Funcionamiento de las unidades económicas, situación laboral e ingresos*, La Paz: CEDLA 1988, p. 40
- 22) Cf. por ejemplo: Jorge Lazzo Valera, *La dramática migración de los "relocalizados" mineros*, en: PRESENCIA del 6 de agosto de 1990; sobre la problemática general latinoamericana cf. Luis Sandoval, op. cit. (nota 4), *passim*; ORIT, *El desafío del cambio. Nuevos rumbos del sindicalismo*, Caracas: Nueva Sociedad 1990
- 23) Cf. Carlos F. Toranzo Roca, *Desproletarización...*, op. cit. (nota 13), p. 236
- 24) Ivonne Farah, op. cit. (nota 12), p. 65, 71.- Representando una opinión muy generalizada en América Latina, Héctor Béjar calificó a la informalidad de "compañera inseparable" de las viejas y nuevas plutocracias y de la "forma descentrada y dependiente de nuestras economías". Béjar, *Reflexiones sobre el sector informal*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 90, julio/agosto 1987, p. 92
- 25) La Central Obrera Boliviana se percibió a sí misma durante largo tiempo como el sujeto político fundamental y decisivo y como el suprapartido de las izquierdas bolivianas. Cf. un ejemplo de esta tendencia en Filemón Escóbar, *Testimonio de un militante obrero*, La Paz: HISBOL 1984, *passim*
- 26) Declaraciones del Ministro de Trabajo, Oscar Zamora, del 13 de octubre de 1990, en: 600.000 "informales"..., op. cit. (nota 13)
- 27) Comisión Andina de Juristas, *Narcotráfico. Realidades y alternativas*, en: NUEVA SOCIEDAD; No. 109, septiembre/octubre de 1990, p. 60.- La Comisión se declara enfáticamente contra la "erradicación forzosa" de los cultivos de coca, pero no alude ni remotamente a modelos alternativos de desarrollo.
- 28) Enunciados basados parcialmente en la mencionada encuesta de opinión entre dirigentes sindicales y de gremios.
- 29) *Cocaleros rechazan tanto sustitución de cultivos como militarización*, en: LA RAZON (La Paz) del 1 de abril de 1991, p. 16 (Primer Encuentro Andino de Productores de Hoja de Coca).

- 30) *Pasan hambre campesinos que cambian coca por café*, en: AQUI (La Paz) del 30 de junio de 1990, p. 1 sq.; *La coca no puede ser sustituida*, en: VAMOS A VER! (suplemento mensual de AQUI) del 24 de marzo de 1990, p. 2 sq.; *Café, cacao y aceites probaron sustituirla, y no pudieron*, en: *ibid.*, p. 3; *Las grandes equivocaciones sobre la coca*, en: *ibid.*, p. 1; *Agricultores amenazan con retornar al cultivo de coca. La decisión fue adoptada en el XI Congreso de Campesinos del Trópico*, en: PRESENCIA del 14 de julio de 1990
- 31) *Según la CSUTCB bloqueo campesino en 4 departamentos*, en: PRESENCIA del 21 de agosto de 1990; *Gobierno y dirigentes emitieron informes contrapuestos*, en: *ibid.*; *Campesinos afirman que erradicación forzosa de coca es ilegal*, en: PRESENCIA del 7 de junio de 1989; *Cerca de 30 campesinos fueron detenidos por interceptar a UIMOPAR*, en: PRESENCIA del 30 de junio de 1989; *Versiones contradictorias sobre incidentes en el Chapare*, en: *ibid.*
- 32) *"Convenios en Cartagena han ocasionado terror y pobreza en el campesinado"*, en: PRESENCIA del 20 de marzo de 1990, p. 7; cf. sobre todo: COB / CSUTCB / CSB, *Militarización no, desarrollo sí*, en: ESTADO Y SOCIEDAD, No. 7, vol. 6, enero/junio de 1990, p. 91
- 33) COB / CSUTCB / CSB, *ibid.*, p. 91; *Campesinos ratifican estado de emergencia y movilización*, en: PRESENCIA del 25 de julio de 1989; *Anexo 3 enfrentará a FF.AA. con una masa de 400.000 a 500.000 campesinos*, en: PRESENCIA del 15 de julio de 1990, p. 5; *Productores de coca pedirán la aplicación de plan de emergencia*, en: PRESENCIA del 14 de marzo de 1990; *Campesinos advierten posible "guerra sucia" del narcotráfico*, en: PRESENCIA del 1 de julio de 1990; *Campesinos del Chapare piden que no se destruyan caminos y se ejecute plan de sustitución*, en: PRESENCIA del 19 de marzo de 1990, p. 5
- 34) José Mirtenbaum, *Coca no es cocaína*, en: NUEVA SOCIEDAD, N° 102, julio/agosto de 1989, pp. 144-152.- Este artículo es una muestra clara de la posición que trata de coonestar el cultivo actual de coca (es decir: excedentario y dedicado a fines bien profanos) como la continuación de una inofensiva tradicional cultural basada en la reciprocidad andina y no en la "depredadora acumulación capitalista".- cf. también *Productores de coca rechazan complicidad con narcotraficantes*, en: PRESENCIA del 23 de diciembre de 1989; *Trabajadores anuncian nueva ofensiva contra el gobierno*, en: PRESENCIA del 19 de marzo de 1990; Roberto Jordán Pando, *Coca, cocaína, interdicción y narcotráfico*, en: ESTADO Y SOCIEDAD, vol. 6, No. 7, enero/junio de 1990, pp. 11-35; *Coca: hacia una estrategia nacional*, La Paz: FES 1990; algunos testimonios en: Ricardo Calla / José Pinedo / Miguel Urioste, *CSUTCB: debate sobre documentos políticos y asamblea de nacionalidades*, La Paz: CEDLA 1989
- 35) Cf. dos valiosas investigaciones críticas: Eva Dietz, *Der Funktionswandel der Koka in Bolivien* (= El cambio de funciones de la coca en Bolivia), Saarbrücken: Breitenbach 1990, pp. 13- 40, 47 sqq.; Rasso Ruppert, *Das Kokaund Kokaingeschäft in Bolivien. Organisation, räumliche Struktur, wirtschaftliche und soziale Effekte* (= El negocio de la coca y cocaína en Bolivia. Organización, estructura espacial, efectos económicos y sociales), Nürnberg: GERAG 1990, p. 35 sqq.
- 36) Cf. José Blanes, *Migraciones, colonización y narcotráfico en Bolivia*, en: *Desarrollo amazónico: una perspectiva latinoamericana*, Lima: CIPA/INANDEP 1990, p. 225

- 37) Ibid., p. 233; cf. Ana María Vera, *Droga y ecología: un duelo a muerte*, en: ULTIMA HORA (La Paz), del 12 de abril de 1991, p. 2.- Cf. el importante artículo de Carlos Krings Fortún, *La coca y la vida*, en: PRESENCIA del 23 de junio de 1991, que analiza las relaciones entre la CSUTCB y el complejo coca/cocaína en base a materiales y testimonios de primera mano.
- 38) Cf. Kevin Healy, *The Boom within the Crisis: Some Recent Effects of Foreign Cocaine Markets on Bolivian Rural Society and Economy*, en: D. Pacini / C. Franquemont (comps.), *Coca & Cocaine: Effects on People and Policy in Latin America*, Peterborough (N.H.): Cultural Survival 1986, pp. 101-143; Richard B. Craig, *El tráfico ilícito de drogas: implicaciones para los países sudamericanos donde se origina*, en: REVISTA OCCIDENTAL, vol. 5 (1988), No. 2 (= 15), pp. 105-140
- 39) Entrevista con el Secretario de Relaciones Públicas del Movimiento Revolucionario Túpac Katari (L) en La Paz el 6 de diciembre de 1990
- 40) Ibid.; entrevista con el Secretario de Actas de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en La Paz el 9 de noviembre de 1990
- 41) Entrevista con el Secretario Permanente de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz el 2 de enero de 1991
- 42) Entrevista con el Secretario de Conflictos de la Confederación Sindical de Constructores en La Paz el 6 de noviembre de 1990
- 43) Entrevista COB (nota 40), loc. cit.; entrevista CSUTCB (nota 39), loc. cit.; entrevista con el Secretario de Finanzas de la Confederación Sindical de Gre-miales en La Paz el 17 de noviembre de 1990.

LA ECONOMIA INFORMAL Y LA PERDIDA DE LEGITIMIDAD DE LAS INSTANCIAS ESTATALES Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

H. C.F. Mansilla

a. Consideraciones preliminares

Partiendo de los datos compilados de periódicos y revistas y de aquéllos conseguidos mediante una pequeña encuesta indicativa de opinión y de los pareceres de los expertos entrevistados, se puede afirmar la existencia de un nexo complejo y cambiante entre la expansión de la economía informal, especialmente de sus sectores ilegal-delictivos, y la paulatina erosión que sufren la legitimidad del Estado y gobierno bolivianos y la decreciente credibilidad de las instituciones estatales. No se puede postular, obviamente, un vínculo causal obligatorio entre ambos fenómenos; no se puede aseverar, por consiguiente, que la dilatación de la economía informal sea la variable determinante y la pérdida de legitimidad del Estado sea la variable dependiente. Pero sí se puede percibir que los siguientes aspectos representan elementos *concomitantes* del inusitado florecimiento de la esfera informal desde por lo menos 1980:

(1) La administración pública boliviana parece ir sufriendo un paulatino pero seguro menoscabo de sus facultades técnico-administrativas, reduciéndose además su radio de acción y, por ende, a largo plazo, la capacidad de resolver —o, por lo menos, de atacar— los problemas sociales más graves. Este proceso podría afectar negativamente el área de ejercicio de la soberanía estatal (que nunca ha sido demasiado sólida).

(2) Una multiplicidad de formas de corrupción, todas ellas en franco aumento, parece prosperar en casi todas las reparticiones de la administración pública, y particularmente en aquéllas que tienen que ver directa e indirectamente con el tratamiento del sector ilegal-delictivo de la economía informal: la casi totalidad del poder judicial (incluyendo las fiscalías), el Ministerio del Interior (abarcando asimismo a los organismos policiales) y las Fuerzas Armadas de la nación. Fenómenos de corrupción se han extendido, sin embargo, a todos los ámbitos estatales, y al permear también la esfera que atañe al gran público (trámites, autorizaciones, legalizaciones, cobro de impuestos y tasas, recaudaciones de aduanas, etc.), han hecho del soborno y de prácticas similares un elemento cotidiano y omnipresente en las interrelaciones del ciudadano con las instancias gubernamentales (1).

(3) El Estado, los partidos políticos, las representaciones de los intereses sectoriales (incluidos los empresarios y los sindicatos) y muchos actores socio-políticos han exhibido una actitud fundamentalmente ambigua ante la economía informal, ante sus porciones ilegal-delictivas y ante la acelerada dilatación del ejercicio de hábitos situados al margen de la ley. Todo ésto ha conducido a que el ciudadano común vaya percibiendo cada vez más el aparato estatal como un conjunto de sinecuras y empleos sumido en un proceso aparentemente imparable de descomposición ética y a los gobernantes como personajes de poca respetabilidad moral y menor competencia técnica. La legitimidad del Estado y sus instituciones sufre un creciente proceso de erosionamiento, puesto que la identificación del ciudadano común con ellas se encuentra en abierta declinación, emergiendo más bien una marcada aversión por la totalidad de la *clase política*, una inocultable repugnancia por todas las usanzas prevalecientes en la administración pública y un claro designio de llevar a cabo una existencia alejada, en lo posible, de las instancias estatales, de los programas gubernamentales y de las regulaciones públicas.

(4) La pérdida de legitimidad del Estado debe ser vista asimismo dentro de un contexto general, en el cual una parte considerable de la población se percata de que la estabilidad financiera proviene, en buena medida, de los recursos generados por las fracciones ilegal-delictivas de la economía informal (2) y en el cual personas y grupos asociados al narcotráfico ganan una cierta influencia sobre los partidos políticos, los gremios representativos

de intereses sectoriales, los medios masivos de comunicación social y, ante todo, sobre ciertos organismos de la administración pública. La probabilidad de que una parte de la élite política misma esté constantemente bajo la presión de esos actores sociopolíticos asociados a lo ilegal-delictivo origina la impresión de que se ha dado en Bolivia una transformación de la élite del poder que se traduciría profanamente por la inclusión de importantes figuras de las fracciones "turbias" de la economía informal, cooptadas abiertamente como miembros de la clase política. Esta modificación de los grupos gobernantes del país ahondaría aun más la comprensible desconfianza que el ciudadano común abriga frente a los órganos supremos del Estado y el gobierno.

La combinación de todos estos factores, sobre todo de la expansión del soborno para toda operación en la cual intervenga un funcionario público, con la decadencia de las funciones técnico-administrativas, educativas e infraestructurales del Estado, con la ambigüedad generalizada ante lo ilegal-delictivo y finalmente con la influencia posiblemente creciente del narcotráfico y actividades afines sobre la élite del poder, origina un malestar difuso pero en aumento hacia todo lo relacionado con la administración pública. El erosionamiento de la legitimidad del Estado y del aparato gubernamental se manifiesta, en resumen, mediante

- un decaimiento de la consciencia colectiva de la necesidad y de las bondades del Estado de Derecho;
- una desconfianza masiva hacia la igualdad, proporcionalidad y objetividad de los procesos jurídicos, de los actos administrativos y de las leyes mismas (3);
- una opinión universalizada en torno a la corruptibilidad, falta de idoneidad y carencia de genuina autoridad entre los gobernantes;
- una creciente indiferencia con respecto a los partidos políticos, al proceso de democratización y hacia los asuntos públicos y comunitarios en general; y
- una tendencia que se amplía socialmente relativa a la prescindibilidad de los órganos e instituciones estatales y a la conveniencia de vivir y trabajar a una notable distancia de todas ellas.

b. La fuerza normativa de lo fáctico

La erosión de la legitimidad estatal boliviana puede ser percibida también *ex negativo*, es decir, observando la relevancia decreciente de las regulaciones legales y el alcance significativo al que ha llegado la normatividad impuesta por la economía informal. En su estudio sobre la situación en el Perú, *Hernando de Soto* (4) llegó a la conclusión que la facticidad informal, como en el caso del comercio urbano popular, crea su propia "legalidad", que lentamente se convierte en la normatividad aceptada generalmente. En varios campos de actividad económica, que van desde el comercio hasta el transporte pasando por la construcción de viviendas, los informales establecen primeramente unos hechos muchas veces penados por la ley y los ordenamientos administrativos, hechos, empero, que son tolerados por los funcionarios municipales para no agravar una situación tirante de crisis y que paulatinamente originan un acostumbramiento tanto de los otros habitantes como de las autoridades pertinentes. En Bolivia ha sucedido un proceso muy semejante: en una multitud de terrenos, y particularmente en el campo de lo ilegal-delictivo, la repetición incesante de lo fáctico-informal ha conducido a que se lo considere como algo cotidiano, lícito y habitual. Los casos más significativos son la expansión de los cultivos de coca, el cohecho como elemento substancial de transacciones estatal-administrativas y la ocupación de terrenos (para viviendas) y calles (como puestos de venta). También en Bolivia uno de los motivos esenciales para este proceso evolutivo reside en el alto coste (en términos financieros y de tiempo a invertir) que representaría una legalización —por lo menos una completa— de la construcción de una vivienda o de la apertura de una pequeña empresa. Un estudio sobre la compleja relación entre informalidad y legalidad llegó al sorprendente resultado que un porcentaje muy elevado de los informales estaba empadronado en los registros respectivos (sobre todo en el *Régimen Tributario Simplificado*) pero que relativamente pocos de ellos pagaban efectivamente los impuestos derivables de tal empadronamiento (5). Y si realmente cumplen con estas obligaciones tributarias, lo hacen con los montos más reducidos y en el nivel más bajo y cercano a ellos (por ejemplo: impuestos municipales) (6).

Se trata naturalmente de una estrategia de supervivencia consagrada a minimizar riesgos (en este caso: roces evitables con

las autoridades), sin desafiar abiertamente la potestad de las instancias gubernamentales. Lo substancial de este tipo de estrategia reside en su *ambivalencia*: intenta socavar en ciertos puntos las facultades, los derechos y las posibilidades de actuación del Estado, sin negar en ningún momento sus atributos de soberanía. Este lento, pero seguro cuestionamiento de aspectos de la *legalidad* inherente a acciones e instituciones estatales trae consigo, sin embargo, una depreciación de la *legitimidad* del Estado. A largo plazo se diluye toda identificación emotiva con las instituciones que componen el Estado boliviano, se pasa a considerarlo exclusivamente como un conjunto bastante endeble de reglas de juego que pueden ser vulneradas según cálculos utilitarios y se lo juzga de manera pragmática de acuerdo a modestos resultados en el campo de la infraestructura.

La aceptación masiva del narcotráfico y de otras prácticas informales es posible sólo en un marco social donde, desde épocas ya inmemoriales, predomina aquella ambivalencia colectiva con respecto al ordenamiento legal y donde la erosión de la legitimidad estatal ha alcanzado ya una cota relativamente alta. Según un estudio de Rasso Ruppert (7) en torno al complejo coca/cocaína en Bolivia, la admisión colectiva de los aspectos ilegal-delictivos de la informalidad es posibilitada por la falta de una amplia conciencia de lo ilícito; la esfera de lo permisible se halla, apoyándose en viejas convenciones no escritas, en un estado de flexibilidad que hace factible la tolerancia del narcotráfico, aunque se lo condene verbalmente. La indulgencia para con otras actividades informales es aun mayor, sobre todo si se trata de negocios pequeños que permiten sobrevivir al inculpado. El narcotráfico no es seguramente el factor causal de la corrupción, pero sí el usufructuario —ahora privilegiado— de la corruptibilidad general que puede ser detectada en toda América Latina: el obstáculo más importante para una represión eficiente del narcotráfico residiría en el carácter corruptible y extorsionable de todos los involucrados, particularmente de las instancias estatales (8). No pocas personas, cuyas fortunas dejan vislumbrar un origen más que dudoso, disfrutan de una excelente reputación popular y de la fama de ser sujetos excepcionalmente hábiles y, por ende, encomiables, en sus campos de acción (9).

La corruptibilidad como "estilo de vida" (10) implica tanto las funciones de protección, encubrimiento y asesoramiento brin-

dadas por funcionarios estatales como el aprovechamiento de vínculos familiares y de amistad de parte de personas honestas para realizar negocios lucrativos con círculos involucrados directamente en el sector ilegal-delictivo de la informalidad, sin ensuciarse las manos en forma manifiesta. Dentro de este estilo civilizatorio se inscribe la política gubernamental hacia el narcotráfico, que puede ser calificada como una mixtura de proscripción teórica y tolerancia práctica. Durante periodos relativamente largos, la actitud gubernamental en los hechos creó un marco de referencia que favorecía notoriamente la producción y distribución de coca y cocaína en Bolivia (11).

Esta propensión a la ambigüedad, que va tomando paulatinamente dimensiones cada vez mayores, destruye la confianza colectiva en la legalidad de los actos gubernamentales y, por consiguiente, en la legitimidad del Estado boliviano. A ésto contribuyen primordialmente

- la inseguridad derivada de un clima de violencia latente y muchas veces manifiesta que predomina en las zonas productoras de coca, donde el comportamiento de los funcionarios públicos (Fuerzas Armadas, policía, aparato judicial, fiscalía) es errático, imprevisible, proclive a la violencia física y a la corrupción financiera (12);
- la acelerada difusión de fenómenos como el soborno, el cohecho y el prevaricato, los cuales permiten a los narcotraficantes saber con la debida anticipación los planes de represión del gobierno, pasar la producción de hojas de coca y pasta de cocaína a través de los puestos de control estatal, confundir los contingentes de coca destinados a usos tradicionales con aquéllos destinados a fines ilícitos, recuperar la cocaína confiscada legalmente, evitar toda acción judicial contra sus "subordinados" y conseguir la liberación de aquéllos que caen en prisión a causa de pequeños deslices (13); y
- el hecho de que los informales de los sectores no delictivos tengan que emplear una parte considerable de sus magros ingresos en una infinidad de sobornos a los agentes estatales del orden (policía ante todo), únicamente para poder llevar a cabo sus actividades cotidianas. Estos sobornos, cuyo monto individual es relativamente bajo, pero cuyo carácter es permanente, se asemejan a los tributos de los periodos

históricos premodernos y carecen de la racionalidad, previsibilidad y utilidad de los sistemas impositivos modernos (14).

Las consecuencias generales de todos estos factores deben ser vistas en la creciente inseguridad jurídica, lo que merma la confianza del ciudadano común en todo el aparato administrativo del Estado y, obviamente, en su capa dirigente. Es conveniente señalar, aunque sea someramente, que estos últimos procesos evolutivos y, en particular, la ambivalencia del Estado y de la población con respecto a la normatividad legal, provienen de una antigua tradición socio-cultural —el desarrollo actual no hace sino exacerbar una herencia histórica de vieja data. Sin caer en esquemas explicativos hiperculturalistas se puede afirmar que considerables segmentos de la población boliviana han vivido desde la época colonial en una situación de ambigüedad liminar con respecto al Estado central, a sus representantes y a sus leyes; en esta percepción colectiva de autoridades y normas, que ha estado caracterizada por la laxitud, el sentido práctico de la oportunidad y la ambivalencia, no se ve de ninguna manera una actitud reprobable ni menos éticamente condenable. Se trata de otra faceta de la misma estrategia de supervivencia adoptada por los desfavorecidos, para los cuales la legitimidad del orden establecido ha sido un asunto secundario. Otra peculiaridad histórico-cultural coadyuva a reforzar los comportamientos ambivalentes de los informales frente a la normatividad legal: esta última esfera se destaca por la excesiva regulación, la proliferación de trámites engorrosos (e innecesarios) y por la rigidez de las estructuras y los procedimientos administrativos. El funcionamiento del aparato gubernamental y el desenvolvimiento de la sociedad en general hubieran sido simplemente imposibles si los empleados estatales y los ciudadanos comunes hubiesen intentado sujetarse estrictamente al marco de la ley. Desde los comienzos de la colonia española han prevalecido simultáneamente algunos "hábitos" que han permitido el desarrollo de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, la marcha de la maquinaria estatal a pesar de lo severo y riguroso que ha sido y es aun el marco normativo: la flexibilidad de los propios funcionarios en la aplicación de la ley y ordenamientos, el ignorar deliberadamente estatutos legales, la interpretación de los mismos según las necesidades del cliente o peticionario y el conceder sanciones legales a actuaciones claramente ilícitas. Este sistema está imprescindiblemente asociado a la corruptibilidad de aquellos que administran la ley y

a la predisposición del público a pagar sobornos en un número muy alto de casos. La tolerancia masiva hacia la economía informal se explica también porque sus miembros contribuyen de modo considerable al financiamiento de los ingresos extra-legales de una variedad enorme de funcionarios estatales, aunque su aporte sea individualmente bastante reducido.

Este sistema posee indudablemente elementos que pueden ser calificados como protodemocráticos, pues desde la era colonial han ayudado a mitigar el centralismo de las decisiones políticas y administrativas, a diluir algo el rigorismo legal, a imponer una notable indulgencia en las cuestiones de la vida diaria y a ampliar el radio de aquéllos con facultades decisorias (15). Este modelo para la *difusión del poder* tiene manifiestamente algunos elementos originales y dispone de métodos para aligerar las transacciones cotidianas de una buena parte de la población. Pero, sobre todo a largo plazo, carece de transparencia, previsibilidad, eficiencia y, en general, de factores que promuevan la racionalidad de las actuaciones humanas. No es favorable, por otro lado, a una protección genuina contra los abusos provenientes de fuentes estatales y, por consiguiente, a modernos principios democráticos del Estado de Derecho. Se trata, en el fondo, de un sistema algo arcaico para limar las asperezas y severidades de un tipo de organización estatal-burocrático altamente centralizado y regularizado, en el cual no pueden florecer algunos componentes de la democracia liberal-representativa: la validez real de los derechos humanos y ciudadanos, la igualdad ante la ley, la sujeción de las instancias estatales a la propia normatividad, el examen de actos gubernamentales de parte de gremios independientes y la responsabilidad indemnizatoria de las instancias estatales por los daños que ellas causan a particulares. Ya que hoy en día la respetabilidad del Estado y del gobierno tiende a ser medida por estas conquistas de la democracia moderna, la legitimidad de ambos viene a ser seriamente erosionada si la evolución socio-cultural y político-institucional propende a ir en otra dirección. Las diversas formas de la economía informal parecen fomentar, así sea de modo involuntario, un desarrollo proclive a la preservación de aspectos marcadamente tradicionales, arcaizantes, no-democráticos, iliberales y poco compatibles con la racionalidad contemporánea.

El comportamiento socio-político de los informales sugiere

más bien una estrategia que intenta medrosamente la conservación de aquéllo que se acaba de alcanzar y la permanente readecuación a planteamientos políticos de corto aliento. Esta posición, a la cual no le falta una cierta complejidad, ha demostrado tener una estimable inventiva en la lucha con las realidades cotidianas y con sus numerosas tribulaciones; los informales han evidenciado sus habilidades nada despreciables en el manejo de recursos escasos y en el arduo trato con las autoridades. Estas pautas de comportamiento no sobrepasan, sin embargo, la dimensión de una sagacidad muy convencional, que se limita a la viveza, la picardía, la perseverancia y la tosudez, y que, por otro lado, carece de impulsos genuinamente innovativos. Estos son, empero, indispensables para proyectar una respuesta original, intrépida y fructífera a los retos de un proceso muy complicado de modernización, el cual, después de todo, configura el marco de acción de la actual sociedad boliviana, del cual los informales no pueden abstraer. Ellos consolidan, en última instancia, la identificación entre un acto de inteligencia creativa y un proceder astuto, manteniendo de esta manera una tradición muy antigua, pero que ya no está a la altura de las circunstancias y necesidades de la Bolivia de hoy.

La expansión de la economía informal puede tener otras consecuencias menos negativas, precisamente en el área político-institucional. La *informalización* de la política en Bolivia puede contribuir a fomentar nuevos movimientos sociales, no-partidarios, no-ideológicos, y con objetivos muy concretos, como autogestión de barrio, municipio o región o la consecución de una sola meta precisa. Se trata de corrientes fuera de la "tríada Estado-Partido-Ciudadano" (16), que no buscan la conquista del poder político (o su participación en él), sino la conformación de contra-poderes en terrenos restringidos y delimitados. En el caso boliviano estos nuevos movimientos sociales --que van desde los comités cívicos hasta grupos religiosos de solidaridad elemental-- están impulsados y constituidos no sólo por los informales, sino también por gente de bajos recursos, pero ocupación formal; es imposible deslindar exactamente la responsabilidad y la actuación de los informales de aquéllos que no lo son. Por otra parte, los comités cívicos y las tendencias regionalistas responden a menudo a los intereses y a los móviles de las élites municipales y provinciales, quienes no pueden ser equiparadas a los informales, es decir, a los sectores de ingresos y de niveles educativos más bajos y más precarios de la

población entera. Finalmente hay que señalar la probabilidad de que estos nuevos movimientos sociales, que actúan premeditadamente fuera del ámbito estatal --pero no contra él-- y en campos donde no hay que esperar necesariamente ni actividades ni regulaciones gubernamentales, se comporten indiferentemente frente a la problemática de la legitimidad del Estado y no afecten mayormente su erosionamiento.

c. El peso de la corrupción y temas anexos

Uno de los factores más proclives a socavar la identificación de la sociedad con el Estado estriba en la calidad y cantidad del fenómeno de corrupción. A partir de cierto nivel, obviamente muy elevado, segmentos cada vez mayores de la población empiezan a percibir en la corrupción ya no un elemento consuetudinariamente tolerable de las instancias gubernamentales, sino un aspecto infamante, detestable y perjudicial de la administración pública. El erosionamiento de la legitimidad del Estado y sus agencias se incrementa substancialmente si este sentimiento se universaliza y se robustece y si logra ser articulado por movimientos sociales y partidos políticos de alguna relevancia. En todo caso puede aseverarse que en Bolivia la indulgencia hacia los fenómenos de corrupción parece haber llegado a un cierto límite; por otra parte, la economía informal ha coadyuvado indudablemente a fortalecer la posibilidad de actos de corrupción en las esferas más variadas de la actividad humana.

Un conocido periodista mencionó acertadamente los daños sociales motivados por los sectores ilegal-delictivos de la economía informal (17):

- menoscabo de la soberanía nacional;
- perturbación de los valores morales colectivos;
- alteración del funcionamiento "normal" de la economía del país;
- transformación de cientos de miles de campesinos bolivianos en dependientes de un circuito vinculado a negocios extremadamente turbios; y
- "una ola de corrupción sin precedentes en nuestra historia, ola que está sumergiendo a todos, pero muy especialmente al gobierno, en una espiral aterradora de inmoralidad".

No es inútil el advertir que el auge de la economía informal y particularmente de sus sectores asociados al narcotráfico se dio paradójicamente después de que la dictadura militar (1980-1982) ligada más o menos estrechamente a este negocio ilícito tuvo que ceder el poder a un gobierno civil elegido democráticamente (18). A partir de 1982 se incrementa considerablemente el número de campesinos dedicados al cultivo de coca y aumenta el peso relativo que la economía informal posee en la formación del Producto Interno Bruto. Al mismo tiempo los grupos financieramente más importantes ligados a esta actividad logran acrecentar su influencia sobre los medios de comunicación social, los partidos políticos, los niveles decisorios de la administración pública y muy especialmente sobre los órganos consagrados a combatir este flagelo, como el sistema judicial, los organismos policiales, las fiscalías y los centros de reclusión. "La ecuación de los narcóticos en Bolivia difiere poco de otros países productores: mientras más cercano el escenario de las drogas, mayor es la corrupción" (19).

La magnitud de la corrupción y la corruptibilidad ha ido aparentemente en constante ascenso, a pesar que desde 1982 se suceden gobiernos cuya legalidad democrática no está en duda. A partir de 1989 se puede constatar un recrudecimiento de la corrupción en todas las esferas de la administración pública, reconocida por múltiples manifestaciones de voceros gubernamentales. Como reconoció el subsecretario de Defensa Social, *Gonzalo Torrico* (20), el narcotráfico

- ha infiltrado directa o indirectamente las actividades económicas formales e informales;
- ha corrompido jueces en múltiples oportunidades (21);
- ha buscado el poder político que asegure impunidad (22).

La Iglesia Católica (23), instituciones públicas (24) y hasta el gobierno (25) han criticado –sin ningún éxito en la práctica– los variadísimos fenómenos de corrupción; la generada por el narcotráfico continúa y refuerza la tradicional corruptibilidad de los funcionarios públicos. Un ministro del Interior reconoció en 1990 que "no existe un área en el país que, en absoluto, esté libre de la corrupción" (26). Constituye una ironía de la historia que el mismo ministro fue obligado en 1991 a presentar su dimisión (casi conjuntamente con el Comandante General de la Policía y el Jefe de la Lucha contra el Narcotráfico) cuando periódicos norteamericanos lo acusaron de encubrir y hasta amparar el narcotráfico, no pu-

diendo presentar prueba alguna de descargo y admitiendo tácitamente la inculpación (27).

Los sectores ilegal-delictivos de la economía informal han coadyuvado -como ya se mencionó- a intensificar hasta magnitudes inusitadas la corrupción prevaleciente en las fuerzas del orden público y en la judicatura. En el primero de los casos los fenómenos son bien conocidos: encubrimiento discreto de actos delictivos, amparo y apoyo a operaciones de gran alcance, soporte logístico más o menos sistemático a grupos escogidos de narcotraficantes y -prosiguiendo una vieja tradición- extorsiones y chantajes a los individuos y grupos que se niegan a pagar los "derechos de protección". En los organismos armados de represión del narcotráfico se considera un "castigo" el no ser enviado por un par de meses al teatro de operaciones, por ejemplo, al Chapare, pues solamente con cerrar los ojos el oficial en cuestión puede mejorar notablemente sus ingresos. Naturalmente que las Fuerzas Armadas y la Policía aseveran que su potencial y equipamiento no es aun el suficiente para combatir "eficazmente" el narcotráfico (28). No es de extrañar que las agencias norteamericanas encargadas de erradicar el narcotráfico consideren que la corrupción y corruptibilidad de las instituciones armadas bolivianas constituyen uno de los obstáculos mayores para el objetivo fijado (29).

El otro gran foco de fenómenos de corrupción lo constituye el poder judicial. A este respecto la economía delictivo-informal favorece una tradición de inmoralidad, lentitud e ineficacia judiciales que proviene también de la era colonial. El bajo prestigio social del que gozan los jueces, su sometimiento secular a las presiones del poder ejecutivo, su deplorable nivel salarial y su escasa preparación intelectual contribuyen a que los miembros de la judicatura y ramas anexas (fiscalías, etc.) sean particularmente proclives al cohecho y al prevaricato (30). En el caso del narcotráfico, la judicatura se distingue por la extrema laxitud en el tratamiento de los delincuentes mayores, por la premeditada tardanza de los procesos, por las pérdidas intencionales de documentos, por el sobreseimiento de innumerables casos, por los fallos favorables a los encausados y por la liberación adelantada de los condenados. A fin de poner coto a estas irregularidades, el gobierno creó mediante la ley 1008 trece tribunales especiales consagrados exclusivamente a conocer causas conectadas al narcotráfico, pero estos "juzgados antinarcóticos" exhibieron en el breve periodo de su

funcionamiento las mismas o peores usanzas venales que los tribunales ordinarios (31).

Lo grave de este desarrollo estriba en el hecho de que la corruptibilidad judicial se ha extendido prácticamente a todas las ramas del sistema; los modestos ciudadanos, involucrados en casos civiles o penales de índole totalmente cotidiana, están ahora obligados a jugosas recompensas extra-legales sólo para evitar retardamientos excesivos en el desenvolvimiento de los procesos. La economía informal-delictiva está motivando, de modo más o menos directo, una desconfianza creciente y generalizada hacia el poder judicial y socavando así uno de los fundamentos esenciales de la legitimidad del Estado.

Uno de los problemas más graves derivados de la expansión de la economía informal-delictiva y de la laxitud generalizada con respecto a los fenómenos de corrupción y corruptibilidad, consiste en la progresiva integración de grandes contingentes de campesinos en redes, circuitos y sistemas de producción vinculados directa y exclusivamente con la elaboración y comercialización de cocaína (32). Los agricultores tradicionales de la coca se dedican en forma creciente a la fabricación de la base de cocaína, lo que ha conducido parcialmente a desestructurar la clásica economía campesina, convirtiéndola en dependiente de un solo producto (y de las mafias de intermediarios) y descomponiendo un tejido social constituido a lo largo de siglos. Los sindicatos y otros órganos de representación de intereses campesinos defienden, empero, esta nueva "actividad" mediante argumentos totalmente convencionales y muy poco convincentes: producción de un producto absolutamente "tradicional", lucha anti-imperialista y peculiaridades de un decurso evolutivo cultural-étnico diferente (33).

Lo que favorece la erosión de la legitimidad estatal es probablemente la relajación de valores colectivos de orientación en torno a lo lícito o ilícito —como en el caso de los campesinos—, combinada con una aceptación mayor del cohecho de parte de los funcionarios públicos y una cierta indulgencia hacia todas las prácticas de soborno en el seno de la opinión pública. De los resultados extraídos de las entrevistas a representantes de los informales se deriva evidentemente una actitud laxa ante fenómenos ilícitos e ilegales, precisamente frente al narcotráfico y asuntos anexos (34). Este último es percibido frecuentemente como una simple ocupación laboral, tan respetable o tan detestable como

cualquier otra. En cuanto actitud —como ya se indicó— no sólo es grave para el conjunto de los valores éticos y las pautas colectivas de comportamiento, sino también para el ejercicio de la democracia: se puede constatar una creciente indiferencia frente al juego democrático y hasta con respecto a la política en general (35). Es por ello, en parte, que los empresarios privados han manifestado su preocupación acerca de la expansión de la economía informal, ya que ellos se consideran (con algún derecho) uno de los pilares de la restauración del sistema democrático imperante en Bolivia desde 1982 (36).

NOTAS

- 1) Sobre esta problemática cf. el suplemento dominical de ULTIMA HORA del 24 de marzo de 1991, bajo el título: *Corrupción, peor que el cólera*, y especialmente el artículo de Luis A. Glasinovic, *Quién detiene la corrupción?*, en: *ibid.*, p. 4 sq.
- 2) Cf. *Estabilidad boliviana se basa en recursos que genera el "narco"*, en: PRESENCIA del 24 de noviembre de 1989 (opinión del economista peruano Oscar Ugarteche Galarza, quien reconoció que la estabilidad se basa, aparte de los "recursos" ya nombrados, en la austeridad fiscal practicada desde 1985).
- 3) Cf. la brillante obra de Manfred Mols, *Demokratie in Lateinamerika* (= Democracia en América Latina), Stuttgart: Kohlhammer 1985, *passim*
- 4) Hernando de Soto et al., *El otro sendero. La revolución informal*, Bogotá: Oveja Negra 1987, p. 63, 74, 104 sq., 107, 116
- 5) Roberto Casanovas Sainz, *Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad*, en: Antonio Peres Velasco et al., *Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad*, La Paz: CEDLA 1989, p. 83 sqq., 100
- 6) Silvia Escóbar de Pabón, *Los establecimientos informales ante la ley*, en: Antonio Peres Velasco et al., *ibid.*, pp. 141-149; acerca del listado de disposiciones legales que pueden y deben afectar al sector informal, cf. Antonio Peres Velasco, *Aspectos legales del sector informal urbano en Bolivia*, en: *ibid.*, pp. 24-54
- 7) Rasso Ruppert, *Das Koka- und Kokaingeschäft in Bolivien. Organisation, räumliche Struktur, wirtschaftliche und soziale Effekte* (= El negocio de la coca y cocaína en Bolivia. Organización, estructura espacial y efectos económicos y sociales), Nürnberg: GERAG 1990, pp. 179-182
- 8) *Ibid.*, p. 180.- Cf. también informes gubernamentales publicados en: PRESENCIA del 26 de septiembre de 1986, 1 de marzo de 1987, 8 de julio de 1987, 31 de mayo de 1988, y, en relación con la judicatura, en: PRESENCIA del 9 de agosto de 1986, 3 de agosto de 1987 y 26 de enero de 1988.
- 9) Cf. Amado Canelas / Juan Carlos Canelas, *Bolivia: coca cocaína*, Cochabamba: Los Amigos del Libro 1983, p. 189
- 10) Rasso Ruppert, *ibid.*, p. 180, 200; cf. René Bascopé Aspiazú, *La veta blanca. Coca y cocaína en Bolivia*, La Paz: Ediciones Aquí, 1982, *passim*

- 11) Ruppert, *ibid.*, p. 182. Este marco protector habría servido para que los narcotraficantes bolivianos se hubieran independizado de los carteles colombianos y preservado cierta libertad de acción en el mercado mundial.- Sobre esta temática cf. el importante estudio de Gonzalo Flores / José Blanes, *Adónde va el Chapare?*, Cochabamba: CERES 1984, p. 165
- 12) Cf. Carlos Balderrama, *El potencial de violencia en el Chapare*, en: Carlos F. Toranzo Roca (comp.), *Las condiciones de la violencia en Perú y Bolivia*, La Paz: ILDIS 1990, pp. 121-124; Raúl Barrios, *Factores externos y generación de violencia en el Chapare*, en: *ibid.*, pp. 125-132; Saúl Lara, *Causas y manifestaciones de la violencia en el Chapare*, en: *ibid.*, pp. 133-136
- 13) Rasso Ruppert, *ibid.*, p. 200
- 14) Cf. sobre esta temática: Diego García-Sayán (comp.), *Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes*, Lima: Comisión Andina de Juristas 1989, *passim*
- 15) Sobre esta temática cf. Richard M. Morse, *El espejo de Próspero. Un estudio de la dialéctica del Nuevo Mundo*, México: Siglo XXI 1982 p. 82 sqq.; Colin M. Mac Lachlan, *Spain's Empire in the New World. The Role of Ideas in Institutional and Social Change*, Berkeley etc.: California U.P. 1988, *passim*; Manfred Mols, *op. cit.*, (nota 3), p. 114 sqq.
- 16) Alvaro Camacho, *Informalidad política. Movimientos sociales y violencia*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 106, marzo/abril de 1990, p. 37
- 17) Carlos D. Mesa Gisbert, *Columna vertebral: Las premisas tramposas de la militarización*, en: PRESENCIA del 31 de marzo de 1991, p. 3
- 18) Cf. el excelente ensayo de Gernot Volger, *Kokainbusiness in Lateinamerika: wirtschaftliche und politische Dimensionen* (= El negocio de la cocaína en América Latina: dimensiones económicas y políticas), en: IBEROAMERIKANISCHES ARCHIV, vol. 16 (1990), No. 2, p. 203 sq.; sobre la conexión del presidente Luis García Meza con los "exportadores" de droga cf. *Plan 001.- FRGE* del 20 de diciembre 1980, contenido en una carta del Teniente Coronel J. López al presidente García Meza (documento del Grupo Especial de Inteligencia No. 2 de las Fuerzas Armadas de la Nación), donde se detalla la necesidad de una "integración vertical de todo el negocio" (p. 1), la conveniencia de "reprimir la producción individual o de tipo artesanal" (p. 2), "la necesidad impostergable de someter a control a los grupos de paramilitares que se han dedicado a asaltar a productores y rescatadores" (*ibid.*), la conveniencia de "disciplinar" a los oficiales del ejército y a los funcionarios estatales que en forma espontánea e indisciplinada se ocupan también de exportar cocaína (*ibid.*) y, sobre todo, la obligación de establecer "un sistema de impuestos de carácter reservado" (p. 2), del cual se esperaba extraer de 200 a 600 millones de dólares anualmente (p. 6 sq.). El documento describe cuidadosamente a todas las instancias oficiales complicadas en el narcotráfico, el rol de altos funcionarios públicos en el mismo y, simultáneamente, todas las facilidades concedidas por el Estado a los "exportadores" de cocaína.
- 19) Richard B. Craig, *El tráfico ilícito de drogas: implicaciones para los países sudamericanos donde se origina*, en: REVISTA OCCIDENTAL, vol. 5 (1988), No. 2 (= 15), p. 109; Dietmar Dirmoser, *Drogen und Politik: Kokainproduktion, Korruption und Macht in Bolivien* (= Drogas y política: producción de cocaína, corrupción y poder en Bolivia), en: LATEINAMERIKA -ANALYSEN UND BERICHT, vol. 9 (1985), pp. 71-110

- 20) Gonzalo Torrico, *Cartagena puede ser el comienzo del fin del narcotráfico*, en: BOLIVIA 2000, vol. 1990, No. 1, Dossier especial, p. XI
- 21) *El narcotráfico es un factor de distorsión de la justicia*, en: PRESENCIA del 31 de mayo de 1987; *Se confirmó protección de autoridades al narcotráfico*, en: PRESENCIA del 6 de julio de 1987; *Piden juicio de responsabilidades contra el ex-ministro Barthélemy*, en: PRESENCIA del 10 de julio de 1987
- 22) Ramiro Julio Crespo, *La reaparición de Antonio Arguedas*, en: HOY (La Paz) del 6 de julio de 1986; *Senador Cabezas: "En el Ejecutivo se interfieren las investigaciones sobre narcotráfico"*, en: PRESENCIA del 8 de mayo de 1987; *Comisión de Constitución: Miembros de la Policía y Ministerio del Interior implicados en narcotráfico*, en: PRESENCIA del 8 de julio de 1987
- 23) *Obispos de La Paz: La amoralidad está destruyendo estructuras de la sociedad boliviana*, en: PRESENCIA del 6 de julio de 1990; *Monseñor Genaro Prata: "Bolivia no es libre, está sometida a la dependencia, al narcotráfico y a la corrupción"*, en: PRESENCIA del 7 de agosto de 1987
- 24) *Inventario de la inmoralidad*, en: EL DIARIO (La Paz) del 15 de septiembre de 1985 (con una interesante lista de otras áreas de corruptibilidad); *Oscar Justiniano Canedo, La corrupción*, en: PRESENCIA del 17 de marzo de 1991; *Fue descubierta y desmantelada red de apoyo al narcotráfico*, en: PRESENCIA del 15 de julio de 1990
- 25) *Paz: el gobierno se esforzará por eliminar la inmoralidad estatal*, en: PRESENCIA del 5 de agosto de 1990
- 26) *Ministro del Interior considera que no hay área exenta de corrupción*, en: PRESENCIA del 20 de diciembre de 1990
- 27) *Washington Post se refiere a renuncia de Rico Toro*, en: PRESENCIA del 6 de marzo de 1991; *EE.UU. esperan amplia depuración administrativa en Bolivia*, en: *ibid.*; *Van tres: renunció ayer Capobianco*, en: LA RAZON del 14 de marzo de 1991, p. 16
- 28) Manuel Benítez Laroca, *UMOPAR libra una batalla desigual contra el narcotráfico en Chapare*, en: PRESENCIA del 18 de marzo de 1990; *Campesinos denuncian atropellos y arbitrariedades de UMOPAR*, en: PRESENCIA del 12 de abril de 1990; *Comunicado del Comando General de la Policía Nacional frente a denuncias de encubrimiento al narcotráfico*, en: PRESENCIA del 18 de agosto de 1987; *Comando policial contra la corrupción en la institución*, en: PRESENCIA del 30 de abril de 1987; *Cnl. Rico Toro recibió \$ 200.000 de García Meza*, en: PRESENCIA del 4 de marzo de 1991
- 29) *Congreso de EE.UU. denuncia corrupción y falta de voluntad en lucha antidroga en Perú y Bolivia*, en: PRESENCIA del 21 de agosto de 1990; *Países andinos: corrupción dificulta lucha contra el narcotráfico*, en: LA RAZON del 14 de marzo de 1991; *Melvin Levitzky, La corrupción: el mayor obstáculo para las leyes anti-narcóticos*, en: ULTIMA HORA del 24 de marzo de 1991, p. 6 sq.; *Cautela en lucha antidroga por transición política*, en: PRESENCIA del 28 de julio de 1989; *Informe XIII: El mayor obstáculo en el proceso de intercepción de narcóticos: las Fuerzas Armadas bolivianas*, en: ULTIMA HORA del 30 de agosto de 1990; *Informe XIII: Esfuerzos en el control antinarcóticos en países andinos obtuvieron mínimos resultados*, en: *ibid.*, p. 15; *Admite Comandante General: Policía atraviesa la peor crisis institucional de su historia*, en: PRESENCIA del 5 de septiembre de 1992

- 30) *El poder judicial y el narcotráfico*, en: PRESENCIA del 3 de agosto de 1987, p. 3; *Ministro del Interior: "Hay que cortar corrupción que acompaña el narcotráfico"*, en: PRESENCIA del 14 de agosto de 1987; *Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, Comunicado del Colegio de Abogados de La Paz sobre el problema judicial*, en: PRESENCIA del 9 de julio de 1987; cf. un caso típico: *Suspendido juez que liberó a presunto narcotraficante*, en: PRESENCIA del 11 de abril de 1990
- 31) *Gobierno disolverá juzgados antidroga*, en PRESENCIA del 5 de abril de 1990; *Supresión de juzgados especiales*, en: PRESENCIA del 6 de abril de 1990; *"Supertribunales" sustituirán a los agónicos juzgados antidroga*, en: PRESENCIA del 5 de abril de 1990; *Corte Suprema contraria a creación de "supertribunales"*, en: PRESENCIA del 6 de abril de 1990
- 32) Cf. Presidencia de la República de Bolivia, *Estrategia Nacional del desarrollo alternativo 1990*, La Paz: s.e. 1990, p. 7
- 33) *Campesinos ratifican estado de emergencia y movilización*, en: PRESENCIA del 25 de julio de 1989; *Cocaleros "serán una muralla" contra infiltración del narcotráfico*, en: PRESENCIA del 6 de julio de 1990; *Campesinos cocaleros apoyan lucha armada*, en: ULTIMA HORA del 12 de abril de 1991, p. 16; *Pacto obrero-cívico de resistencia a militarización...*, en: *ibid.*
- 34) Entrevista al Secretario de Conflictos de la *Confederación Sindical de Constructores* en La Paz el 6 de noviembre de 1990; entrevista con el Secretario de Actas de la CSUTCB en La Paz el 9 de noviembre de 1990
- 35) Entrevista con el Director del *Centro Siñani de Trabajo Rural* en La Paz el 4 de enero de 1991; entrevistas a representantes de los informales de origen indígena (aymara) que fueron trabajadores mineros en La Paz el 21 y 22 de noviembre de 1990
- 36) Entrevista con el Jefe de Programas de la *Cámara Nacional de Industrias* en La Paz el 10 de enero de 1991.- El otro argumento contra la economía informal esgrimido por los empresarios es que esta última conformaría en su mayor parte una actividad no productiva y especulativa y que tendría lugar sin regulaciones de ningún tipo.



3

LAS INTERRELACIONES ENTRE LA ECONOMIA INFORMAL Y LA ESFERA POLITICA

H. C. F. Mansilla

a. Consideraciones preliminares

El aspecto más notable de los nexos entre la economía informal boliviana y el campo de lo político-institucional reside probablemente en el hecho de que la primera ha originado en el segundo mucho menos alteraciones de lo que cabría esperar dada la magnitud actual del sector informal y de su peso creciente en el quehacer económico de la nación. A la labor de los informales se les atribuye aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto, pero no se ha dado en el área de las decisiones gubernamentales, de la acción legislativa, de la conformación de la élite del poder y de la configuración de la opinión pública ninguna modificación que por su esencia y su importancia correspondiese a la dimensión que entretanto ha alcanzado el sector informal.

El reducido volumen de los cambios imputables al sector informal señala la posibilidad de que éste, en el fondo, prolonga y fortalece tradiciones socio-culturales de vieja data, especialmente en el terreno de las pautas colectivas de comportamiento político y tratamiento de instituciones; por otra parte, es casi seguro que los informales se mueven y operan en niveles, ocupaciones y esferas de intereses que están en realidad muy alejadas del mundo político-institucional o, por lo menos, de los puntos relevantes (es decir, con capacidad decisoria) del gobierno y de la clase política. Esto no vale, obviamente, para aquéllos pequeños pero muy poderosos grupos económicos ligados a los segmentos delictivos de

la economía informal (narcotráfico y afines), quienes han logrado (en una proporción mucho más reducida de la supuesta habitualmente) infiltrarse en las capas más altas de la administración pública y de la élite del poder; a la actividad de estos grupos se debe ciertamente el incremento de los fenómenos de corrupción y corruptibilidad en la burocracia estatal, el descenso de la eficiencia de la misma y el erosiónamiento de la legitimidad del Estado y del sistema gubernamental.

Puede aseverarse, empero, que la gran masa de informales ha coadyuvado a consolidar los valores de orientación colectiva prevaletentes en sus contextos sociales de origen y de desenvolvimiento. A pesar de que muchos de ellos logran desarrollar una notable racionalidad instrumentalista en el manejo de recursos escasos en el campo estrictamente económico, tienden simultáneamente a perpetuar una herencia socio-cultural de irracionalismo premoderno, que se manifiesta, por ejemplo, en la preservación de la cultura política del autoritarismo, del patrimonialismo y del caudillismo, en el renacimiento de partidos populistas y en el proceso de recampesinización (1). El retorno a la democracia en 1982 y el establecimiento de un régimen económicamente liberal a partir de 1985 ha sido la obra de instancias formales, como ser los empresarios privados, los partidos políticos y las instituciones estatales. Existen claros indicios de que a los informales les es bastante indiferente la práctica cotidiana de la moderna democracia representativa; el funcionamiento de las instituciones respectivas, la vida interna de los grandes partidos políticos y hasta el destino de los gobiernos elegidos según las reglas de juego democráticas constituyen temáticas por las cuales los informales exhiben un interés evidentemente reducido. Esto es comprensible si se piensa que casi todos ellos están preocupados por problemas muy serios de supervivencia cotidiana.

Se puede afirmar que la cultura política atribuible a los informales no sólo ha robustecido las tendencias preexistentes (favorables al verticalismo, a las prácticas carismáticas de seducción y a los vínculos inmediatos de dominación y subordinación), sino que también ha afianzado la convencional actitud ambigua frente al Estado y sus órganos. Es interesante observar que esta postura ambivalente –identificación débil con el Estado, pero utilización fáctica de sus recursos– es compartida tanto por los informales como por grupos económicos importantes de la iniciativa privada.

Sobre todo los sectores de comportamiento tradicionalista y con carencia de facultades innovadoras dentro de la empresa privada (que posiblemente sean mayoritarios) se muestran propicios hacia un Estado técnicamente caótico, pero de dilatadas dimensiones, que pueda ser aprovechado según los clásicos principios del patrimonialismo y el prebendalismo. No son entonces las actividades industriales o agrícolas las que rinden las mayores ganancias, sino el acceso a créditos baratos, a donaciones internacionales, a contratos para la provisión de empresas estatales, a las licitaciones públicas o simplemente a recompensas, comisiones y fondos reservados provenientes del fisco (2). Un aparato estatal amplio, consagrado a labores productivas, es indispensable para este sistema, que constituye una simbiosis bastante exitosa entre un estatismo mercantilista y un empresariado privado de inclinaciones patrimonialistas premodernas y que florece en un marco de informalidad legal y ambigüedad ética.

Estas afirmaciones generalizantes requieren naturalmente de una seria relativización, ya que el universo de los informales es en sí mismo extraordinariamente complejo, heterogéneo y cambiante, lo que vale también para sus relaciones con el Estado, la empresa privada y el mundo formal. En esta enorme esfera situada al margen o fuera de la formalidad legalmente definida se encuentran segmentos del más variado origen, muchos de los cuales, por lo menos temporalmente, pertenecen igualmente al ámbito totalmente formal-legal. Se trata, en el fondo, de la continuación de una antigua herencia socio-cultural, dentro de la cual los límites entre lo legal y lo ilegal han permanecido deliberadamente diluidos; se puede aseverar que la distinción entre formalidad e informalidad carece muchas veces de sentido en el actual contexto societal boliviano, caracterizado aun fuertemente por los resabios de un orden tradicional, pre-industrial y rural. La diferenciación estricta entre lo formal y lo informal (y su correlato lícito/ilícito) adviene recién con la propensión al "desarrollo", es decir con la modernización incipiente y muy parcial del país, que se traduce en los conocidos procesos de occidentalización y urbanización. Como el universo de la informalidad tiene lugar en la ancha franja de transición de la tradicionalidad a la modernidad, la determinación exacta del sector informal es difícil y precaria.

Esta imprecisión es particularmente perceptible en la relación de los informales con la esfera política, relación altamente compleja

y variable; todo enunciado sobre ella puede quedar invalidado en un lapso breve de tiempo. Uno de los factores que obstaculiza el esclarecimiento de esta problemática reside en la imposibilidad de separar claramente a los informales de los inmensos grupos sociales de pobres, subprivilegiados y desfavorecidos, que disponen, al menos temporalmente, de un trabajo "formal" o que pertenecen al mundo tradicional del campesinado. La escasez de conocimientos empíricos, la confusión conceptual entre informales e ilegales y el hecho de que los informales generalmente no se reconocen a sí mismos como tales contribuyen a que el estudio de los vínculos entre los sectores informales y la política tenga un carácter hipotético.

b. Los informales y los partidos populistas

Aunque parece existir una simpatía bastante amplia de los sectores informales hacia los nuevos partidos populistas, no se puede postular un claro nexo causal entre la expansión de la economía informal y el crecimiento de estos partidos en los últimos años. Es posible, evidentemente, que la declinación del movimiento sindical a partir de 1985, el colapso de los partidos tradicionales de izquierda, la crisis del Estado benefactor, la decadencia de las ideologías marxistas, revolucionarias y socialistas y finalmente el proceso de *desproletarización* (3) hayan liberado un potencial electoral de sus viejas lealtades políticas y lo hayan puesto a disposición de nuevos actores y partidos con una apelación simultánea al autoritarismo convencional y a una programática ideológica caracterizada fundamentalmente por su imprecisión.

Parece en todo caso probable que una porción considerable de los informales sienta una identificación emotiva con los partidos populistas CONDEPA y UCS; en los distritos electorales con un número importante de informales —como en la ciudad de *El Alto*— el triunfo electoral de CONDEPA ha sido abrumador. Otro indicio en esta dirección se deriva de una encuesta indicativa (no representativa) de opinión llevada a cabo en La Paz y Santa Cruz a comienzos de 1991, según la cual los informales tienden o a una apoliticidad casi total o a una simpatía pre-racional por CONDEPA o UCS. Es necesario remarcar, empero, que la afiliación política de los informales es enteramente *volátil e imprevisible*, dependiendo de factores momentáneos y de lealtades de índole en-

deble. Como lo señaló *Jorge Lazarte* (4), la actual atractividad de los partidos populistas no se debe a un interés renovado o incipiente por el juego democrático o por alternativas políticas, sino a que estos sugieren a los informales tácticas para la resolución de problemas cotidianos. Otro elemento que dificulta la aclaración de las inclinaciones políticas de los informales estriba en la imposibilidad de discriminar claramente a estos sectores de los desfavorecidos, subprivilegiados y empobrecidos en general, que tienen una ocupación más o menos legal; a ambos "estratos" les es común el nivel muy bajo de ingresos y de educación. Por otra parte, el sector informal es en sí mismo altamente heterogéneo, desestructurado y carente de órganos institucionalizados para la articulación permanente de sus intereses. En vista de todos estos aspectos y de la "dispersión de liderazgos" (5) entre los informales es muy problemático el determinar con alguna certidumbre su comportamiento y sus preferencias políticas. Ellos configuran un universo social bastante atomizado: en contra de lo sostenido por teorías que conciben la economía informal como la continuación más o menos exitosa de estructuras tradicionales basadas en la solidaridad y la reciprocidad, se puede aseverar que el mundo presente de los informales constituye un tejido social relativamente desorganizado, cuyos individuos despliegan sentimientos de rivalidad y envidia poco propicios a una solidaridad de largo aliento de acuerdo al modelo premoderno. Pero en un sentido los informales parecen reproducir elementos substanciales de la herencia socio-cultural premoderna: su adhesión al caudillismo carismático y su inclinación a dejarse organizar por instituciones de ayuda de la Iglesia Católica o de las agrupaciones protestantes sugieren que los informales persisten en un comportamiento pasivo, proclive al autoritarismo convencional y a esperar todo del Estado paternalista o de órganos similares. (Existe una importante teoría que atribuye aspectos innovadores y genuinamente democráticos a estas organizaciones de los informales [6].)

Los partidos populistas resultan atractivos para los informales por diferentes motivos:

- Ante el creciente desprestigio de los partidos tradicionales y de sus dirigentes y frente a la "devaluación del discurso político tradicional" (7), CONDEPA y UCS parecen encarnar una alternativa que despierta ciertas esperanzas de genuina renovación.

- Al contrario de los partidos de izquierda, que derivan una buena parte de su legitimidad de un proyecto consagrado a transformar el futuro, los partidos populistas bolivianos se presentan como favorables a la iniciativa privada y a la economía de mercado (bajo la reserva de que la programática de estos partidos, si la hay, es esencialmente confusa). Ellos parecen garantizar un presente precario –percibido en cuanto el mal menor
- antes que un porvenir brillante, pero incierto (8).
- La estructuración jerárquica de los partidos populistas, la función central desempeñada por el caudillo carismático de los mismos y la preservación de pautas de comportamiento, valores de orientación y prácticas cotidianas de índole substancialmente tradicional, constituyen elementos identificatorios que corresponden al modo de pensar y obrar de los informales. Estos últimos parecen guiar su actuación política por los parámetros populistas y caudillistas que instauró el MNR en 1952 y que desde entonces han marcado profundamente la conciencia y la praxis políticas de las llamadas clases populares.
- Los partidos populistas, y muy particularmente CONDEPA, propugnan una revalorización de las culturas indígenas del país, otorgando a estas grandes etnias un reconocimiento del que fueron privadas durante siglos. Esta nueva identidad colectiva es aceptada gustosamente por grandes porciones de los informales, cuyo origen étnico aymara o quechua ha sido habitualmente uno de los motivos más importantes para su discriminación de parte de blancos y mestizos y, por ende, la fuente de sus desventajas sociales y económicas. En este sentido los partidos populistas aprovechan las derrotas sufridas por los movimientos exclusivamente indigenistas (como el *katarismo* aymara), cuyas luchas intestinas y cuyo racismo manifiesto han socavado los cimientos de una adhesión sólida y masiva (9). El triunfo electoral de CONDEPA en la nueva ciudad de *El Alto* (1989 y 1991) y también en *La Paz* (en 1991) es probablemente un indicio de la atracción ejercida por este partido sobre informales de origen aymara, que conforman una parte muy considerable de la población de ambas comunas (10).

En este contexto es útil el referirse a una distinción central entre *populismo* y *reformismo*. Algunos rasgos son comunes a ambas corrientes: una ideología de ribetes nacionalistas (como la acentuación de las metas *endógenas* de desarrollo [11], la manipulación de los adherentes y la estructuración autoritaria en el interior del movimiento respectivo. El reformismo postula, sin embargo, una genuina alteración de las relaciones socio-económicas (por ejemplo mediante una reforma agraria seria), el desplazamiento de la clase gobernante, una industrialización acelerada y, en general, una modernización más o menos deliberada del conjunto de la sociedad. Dos casos notables de reformismo han sido la *Revolución Nacional* boliviana bajo el gobierno del MNR y el *Reformismo Militar* en el Perú (1968-1980). El populismo, en cambio, enfatiza aspectos contrapuestos a la tradición occidental de la Ilustración, del Racionalismo y de las ideas democráticas. El partido populista deviene rápidamente una institución paternalista con respecto a sus protegidos: se establece un curioso vínculo pre-racional entre los individuos atomizados y la jefatura carismática, entre las masas desorientadas y la figura autoritaria del caudillo. Debido a la pérdida de la consciencia política (en el caso de los antiguos sindicalizados y los ex-mineros) o a la carencia liminar de la misma (lo que atañe a la mayoría de los informales), los adherentes a los partidos populistas constituyen una *musa a disponibilidad* del caudillo en ciernes; el sistema reproduce, en el fondo, la clásica estructura patronaje y clientelismo (12). Los informales bolivianos poseen muchas de las características típicas de los posibles seguidores de movimientos populistas.

Estos grupos sociales pueden ser cohesionados y dirigidos por un gran orador, que interpele a los poderosos en nombre de los desfavorecidos, que hable el mismo idioma de ellos y que irradie afecto, confianza y, al mismo tiempo, autoridad. El fundador, animador y jefe indiscutido de CONDEPA, *Carlos Palenque*, encarna todas estas aptitudes: es el "emisor térmico" o el "emisor interpelador" (13) que establece una base afectiva de familiaridad con sus adherentes, una aparente supresión de jerarquías entre él y su audiencia; persigue una hábil política comunicacional, que combina un discurso casi religioso con una serie de exigencias socio-políticas altisonantes, pero confusas. Al lado del énfasis en la caridad y humildad cristianas (14), Palenque propugna difusamente una pintoresca ideología anti-imperialista, combate el cos-

mopolitismo, rechaza la lucha de clases y postula la función integrativa de los diversos intereses sociales. Todos estos elementos, anticipados en su tiempo por el peronismo, culminan en una visión utópica, mesiánica y quiliástica de los decursos históricos (*Jach'a Uru* = el gran día), congruente con el específico milenarismo andino (15); éste último es alimentado por la herencia socio-cultural de los adherentes marginales e informales de origen aymara, que constituyen seguramente el núcleo de la afiliación de CONDEPA. En las representaciones mentales de estos mismos grupos Palenque aparece como el "compadre, benefactor, desinteresado, sacrificado patriota, cristiano protector" (16) de los desfavorecidos, y también como el "Defensor de los Pobres", "Hijo del Pueblo", "Enviado de Dios", "Padre del Pueblo", "El que llora por su pueblo" (17), etc. El creador de CONDEPA, sin duda un virtuoso de la moderna comunicación social, reúne las dotes proverbiales del caudillo carismático y del Mesías secular —su popularidad dimana de esta combinación de elementos de religiosidad popular, atracción seductora, fragmentos de milenarismo político y acciones eminentemente prácticas, combinación exitosa que suple la carencia de una ideología clara y de una programática consistente. Desde *Max Weber* sabemos que la legitimidad de los líderes carismáticos reside en sus propias habilidades personales y en la autoridad que sus adherentes les atribuyen antes de toda reflexión; el aura religiosa que los circunda y su nimbo heroico contribuyen a que la fuente de su potestad esté por encima de la necesidad de justificarse racional y democráticamente.

CONDEPA y su jefe se han consagrado a la consecución de pequeñas ventajas y favores cotidianos para sus adherentes —consultorios médicos gratuitos, asesoramiento jurídico, ayudas para comprar algún objeto elemental— que adoptan el carácter de acciones atomizadas, efímeras y erráticas, pero vistosas y hasta importantes para la masa de los informales y depauperados. Los resultados reales de la gestión gubernamental de CONDEPA en la municipalidad de El Alto y en la administración de la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz sugieren que el populismo en el poder tiende a consolidar las prácticas más deplorables de las tradiciones políticas criollas: acrecentamiento de la corrupción, colocación de dilatadas clientelas en la burocracia estatal, incremento de factores irracionales, intransparentes y antidemocráticos en la administración pública y fortalecimiento de una élite del poder signada por la incompetencia y la cleptomanía.

Es muy probable que la acción gubernamental de CONDEPA y UCS, que ya puede vislumbrarse en base a variadas experiencias de administración municipal, se asemeje a los exiguos resultados prácticos alcanzados por regímenes populistas en todo el Tercer Mundo y que, por consiguiente, la participación de los informales en la política –así sea indirectamente– pueda ser calificada de decepcionante. Los escasos éxitos de los gobiernos populistas han consistido en la aplicación de políticas redistributivas, las que, como se sabe, funcionan únicamente en los pocos años de vacas gordas y no crean una base sólida y perdurable para un desarrollo sostenible, técnicamente eficiente e internacionalmente competitivo. La participación de CONDEPA y UCS en los organismos estatales de carácter municipal permite la afirmación de que ambos partidos no han producido ningún aporte digno de mención al proceso de democratización y ni siquiera al de regionalización (transferencia de competencias del centro a la periferia) de la administración pública. Ambos partidos se han destacado más bien por un marcado desinterés referente a los procesos de democratización, han entorpecido diversos intentos de racionalizar la burocracia estatal, han descuidado problemas elementales como la reducción y simplificación de trámites para el ciudadano común y han promovido las viejas usanzas del clientelismo, prebendalismo y caciquismo. En resumen puede aseverarse que estos partidos populistas han coadyuvado a consolidar las prácticas más deplorables de las tradiciones políticas criollas y no han fomentado el surgimiento de una cultura cívica moderna basada en parámetros de transparencia, democracia y racionalidad.

En la situación boliviana contemporánea se han acumulado algunos factores que son propicios a un populismo apoyado en los aspectos étnico-culturales sustentados por los informales de origen rural e indígena. Esta revalorización del acervo cultural aborigen se combina paradójicamente con la utilización de las técnicas más modernas de comunicación social masiva, con una difusa pero efectiva apelación a esperanzas quiliásticas y milenaristas y con una programática deliberadamente ambigua y oportunista. Las facultades de convocatoria y movilización de estos nuevos partidos está por encima de toda duda; en la aleatoria y tornadiza política boliviana no se debe subestimar el papel y el peso que puedan alcanzar los partidos populistas, considerando además que

- las instituciones de la democracia representativa son aún débiles (18);

- que la cultura cívica imperante es todavía aquella del autoritarismo y patrimonialismo;
- que los nuevos actores sociales, como los informales, no tienen otros órganos de articulación de sus legítimos intereses sectoriales;
- y que el indigenismo organizado como fuerza política autónoma (y con ribetes racistas), como en el caso de los partidos kataristas, parece hacer perdido el favor de sus adherentes.

Debido a estos factores es muy posible que el populismo en el poder no produzca una renovación democrática de la sociedad boliviana, sino la preservación del actual estado de cosas. Se puede argumentar, obviamente, que la "informalización" de la política refuerza la dimensión de base de todas las instituciones sociales; la formación de múltiples y pequeños centros de un contrapoder informal, la revalorización del espacio previo al Estado, la promoción de iniciativas de auto-ayuda y la revitalización de organismos fundados en los principios de la solidaridad y la reciprocidad inmediatas parecerían apuntar al surgimiento de una "democracia de bases", localizada fuera del Estado y sus instancias y congruente con la propia herencia socio-cultural de las etnias indígenas. Este robustecimiento de prácticas protodemocráticas en campos profesionales y geográficos claramente delimitados –y de dimensiones muy reducidas– está evidentemente por encima de toda duda; el otro aspecto altamente positivo estriba en que este proceso tiene lugar fuera de los consuetudinarios juegos del poder y los esfuerzos habituales por conquistar una porción del mismo. Es sintomático, sin embargo, que en el campo específico de la política, donde intervienen modelos de organización colectiva de amplio alcance, los informales de origen indígena y, en general, los marginales y desfavorecidos de toda índole, se someten más o menos voluntariamente a sistemas que poseen estructuras internas rígidas y jerárquicas, controles sociales de carácter directo y personal y normas de comportamiento autoritarias, dictadas o sugeridas desde arriba. La democracia de bases no dispone de procedimientos para limitar las formas irracionales de dominio ni los impulsos y actuaciones antidemocráticas de los detentadores del poder. Se trata de una variante premoderna de la democracia del consenso compulsivo, que en territorio boliviano ha florecido en las comunidades campesinas poco influenciadas

por la modernidad occidental ("*democracia de ayllu*" [19]), y se destaca por la discusión más o menos libre —altamente ritualizada— de temáticas circunscritas ocupacional y topográficamente. Pero una vez concluido el debate, los miembros de la comunidad tienen que aceptar como propia la decisión tomada colectivamente, sin que haya ninguna protección para las minorías ni los disensos de ningún tipo. Las teorías indigenistas tienden a contraponer esta democracia directa de las comunidades campesinas (*ayllus*) a la democracia representativa liberal de Occidente, con el argumento de que la primera es más adecuada a las necesidades y tradiciones de los campesinos y, por extensión, de las clases populares bolivianas (20). Estas consideraciones teóricas reflejan, en realidad, las representaciones mentales de los estratos ya urbanizados, pero de origen indígena y campesino muy reciente, estratos de los que provienen simultáneamente los informales y los partidarios de CONDEPA y UCS. No es de extrañar, por ende, que estos grupos *in praxi* apoyen a los partidos populistas, los cuales exhiben elementos de la democracia del consenso compulsivo, estructuras internas autoritarias y una jefatura carismática, además de no disponer de una ideología clara.

En este contexto es interesante el anotar que los sindicatos establecidos y particularmente la dirigencia de la COB tratan de demostrar una gran benevolencia frente a los informales populistas, para no perder del todo su favor; políticamente los estiman como retrasados e inmaduros con respecto a los mineros sindicalizados (21). Tanto los representantes de la COB como dirigentes gremiales y expertos en ciencias sociales creen que CONDEPA y UCS son, en general, favorables al florecimiento de la democracia, pero no así al designio de la modernización política de la nación; se enfatiza el hecho de que ambos partidos han podido prosperar únicamente en periodos de amplia democracia política y vigencia de los derechos de expresión y asociación (22).

Los vínculos entre los informales y los partidos populistas pueden ser esclarecidos en algo si se consideran algunas cuestiones relativas a la realidad actual boliviana. Es interesante el mencionar someramente las diferencias entre CONDEPA y UCS. La primera, fundada en Tiwanaku el 21 de septiembre de 1988, se apoya esencialmente en los informales, desfavorecidos y marginales de origen aymara; por ello su radio geográfico de acción y de captación de votos se restringe a los departamentos de La Paz y

Oruro (en este último con mucho menos éxito). En las elecciones generales de mayo de 1989 CONDEPA obtuvo la primera mayoría relativa en La Paz, ampliando esta victoria en las elecciones municipales de diciembre de 1989, durante la cual logró holgadas mayorías en varias comunas, sobre todo en la ciudad de El Alto. A pesar de percibirse a sí misma como una partido anti-sistema, CONDEPA apoyó en agosto de 1989 en el parlamento la elección de un presidente postulado por una coalición conservadora y recibió a cambio algunos favores, puestos y porciones de poder dentro de las tradiciones más rancias del prebendalismo y del patrimonialismo (23). CONDEPA constituye el caso típico de partido populista con fuertes lazos afectivo-emotivos entre caudillo y masas (24); sus adherentes tienen la seguridad de ser oídos y tomados en serio por su líder (25). Como señala *Carlos F. Toranzo Roca*, el triunfo de CONDEPA en La Paz (1989) significó también que los de "piel morena" —a los que pertenecen mayoritariamente los informales— tomaron la ciudad de La Paz "como sujetos libres" por medio del voto, es decir, "como ciudadanos en uso de sus derechos" (26). Aunque en el fondo se trató de un acto simbólico, éste puede ser interpretado como la irrupción de los marginales y los desfavorecidos económicamente, de los discriminados racialmente y de los desdeñados culturalmente, en un mundo todavía dominado en todo sentido por las minorías blanca y mestiza. En este sentido los informales, mediante su afiliación a CONDEPA, hacen sentir por primera vez el peso político que correspondería a su enorme número.

A pesar de ciertas similitudes, el caso de UCS es bastante diferente. Su jefe y animador, *Max Fernández*, carece de los recursos carismáticos de Carlos Palenque; dispone, en cambio, de mayores posibilidades financieras y de más talento organizativo. UCS está estructurada, por lo menos parcialmente, como una empresa moderna, consagrada a recibir réditos rápidos. Su aparato partidario cubre todo el territorio boliviano. Como el elemento étnico juega un papel secundario, UCS tiene la capacidad de apelar a más estratos y sectores de la población que CONDEPA, y precisamente a aquéllos que económicamente están algo mejor situados. La relación de los adherentes con el partido es más pragmática y utilitaria: se basa en las ventajas materiales y en los servicios que UCS puede brindar a los desfavorecidos (27). UCS se destaca por una ideología aun más difusa que la de CONDEPA;

sus elementos anti-sistema y populistas tienen un sesgo anti-imperialista poco convincente (28). UCS se presenta asimismo como defensora de la propiedad privada y de la economía de mercado. En cierto sentido, el accionar de UCS es similar a las reivindicaciones de las juntas vecinales, que se dedican a exigencias de servicios básicos (demandas propias de habitat) y cuya inserción política es impredecible. (Dadas la volatilidad de las preferencias electorales de los informales y la línea errática de los partidos populistas, es imposible un juicio pronóstico sobre la evolución posterior de los mismos y asimismo sobre el rol político de los informales) (29).

Finalmente hay que llamar la atención en torno a uno de los fenómenos más significativos inherente a la estructuración interna de los partidos populistas. Como se afirmó, la masa de los votantes de CONDEPA y UCS proviene de los sectores sociales que denotan los niveles de ingresos y educación más bajos de la sociedad boliviana; la inmensa mayoría de ellos procede de las etnias indígenas, que hasta hoy están fácticamente excluidas del ejercicio del poder. La cúpula dirigente de ambos partidos exhibe, empero, una composición étnica totalmente diferente: en ella se hallan mestizos y blancos casi en exclusividad. Por otra parte, estos líderes secundarios del aparato —por ejemplo, en la bancada parlamentaria de CONDEPA— no provienen ni del movimiento sindical, ni de las asociaciones de base de los informales y ni siquiera de los gremios representativos de intereses campesinos, sino de otros partidos políticos y del inmenso reservorio que representa la clase media urbana (especialmente del estrato con pretensiones de ascenso social). De esta manera, los partidos populistas reproducen los mecanismos convencionales de reclutamiento de élites, con todas las desventajas e irracionalidades que en Bolivia son propias de ellos.

Por otra parte, es importante señalar que el apoyo de los informales a los partidos populistas puede también ser interpretado como un fenómeno circunstancial. No existe, obviamente, ninguna razón profunda y permanente para pensar que los informales tendrán siempre una preferencia electoral por CONDEPA o UCS. A mediano o largo plazo, cuando se vean los (magros) frutos de la gestión gubernamental de estos partidos, puede ocurrir que el favor electoral de los informales se traslade a otros partidos o coaliciones políticas, por ejemplo a los movimientos indige-

nistas o a partidos que prometan cambios sociales radicales. De entrevistas con representantes de informales más o menos organizados surgió la aseveración de que el apoyo de los informales a CONDEPA y UCS tendría un carácter coyuntural, siendo UCS percibida como la agrupación política más seria y promisoria a nivel nacional (30). Un sector considerable de los informales comparte la opinión de que estos partidos serían agrupaciones de índole caudillista tradicional, y como tales un peligro latente para los procesos de democratización del país (31). Las relaciones entre los informales y la esfera de los partidos políticos está, por lo tanto, abierta a evoluciones que no es posible vislumbrar hoy claramente.

c. Las transformaciones en la élite del poder

Como se mencionó anteriormente, en la clase política tampoco se han dado modificaciones que correspondiesen a la magnitud del sector informal de la economía boliviana. Las transformaciones relativamente leves que se registran en este terreno se insertan más bien en la tradición boliviana de reclutamiento y regeneración de la clase gobernante y del estrato socialmente más elevado del país. Se puede aseverar que, en general, la élite del poder exhibe una notable continuidad desde 1952: mediante el sistema de la cooptación ha ido acogiendo grupos y personas que hubieran exhibido un desempeño más o menos exitoso en el mundo de los grandes negocios y, naturalmente, en el quehacer cotidiano de los partidos políticos. En este último campo se puede advertir que una buena parte de la clase política actual consiste de antiguas contra-élites, opuestas en su tiempo a la "oligarquía" de turno, pero domeñadas por medio de la participación en las delicias que brinda invariablemente el poder supremo —procedimiento que, como se sabe, nunca deja de rendir sus frutos.

Con respecto a los vínculos entre economía informal y clase política se pueden postular las siguientes tesis:

(1) Los sectores no delictivos de la economía informal, es decir, la inmensa masa de los trabajadores por cuenta propia, los mini-empresarios y los integrantes del comercio ambulante, no han tenido prácticamente ninguna ingerencia en la conformación de la élite del poder, ni mediante sus representantes ninguna incumbencia en los asuntos gubernamentales.

(2) Personas y grupos de la porción delictivo-ilegal de la economía informal, ligados frecuentemente al narcotráfico, han logrado una fuerte influencia sobre el funcionamiento cotidiano de ciertas reparticiones públicas —ministerio del Interior, policía, Fuerzas Armadas, poder judicial, fiscalías, administración carcelaria—, con el objetivo primordial de encubrir sus actividades, sin alcanzar, empero, una influencia discernible sobre la legislación o la formulación de políticas públicas. Tampoco puede afirmarse que hayan conseguido introducirse dentro de la élite política propiamente dicha en un número apreciable. Lo que sí puede aseverarse es que los individuos más afortunados provenientes del narcotráfico han sido aceptados por el estrato social más elevado del país como miembros de pleno derecho, es decir por la llamada alta sociedad.

(3) Se puede constatar con alguna seguridad empírica que la casi totalidad de los grupos de mayores ingresos dentro de la economía informal, especialmente los ligados al narcotráfico, está constituida por mestizos y blancos, con una clara exclusión de personas provenientes directamente de las etnias indígenas. Mientras que éstas se consagran a las faenas físicas más duras y menos rentables de la economía clandestina, aquéllos se dedican a las labores de dirección, organización e intermediación, funciones que son mucho menos peligrosas, ciertamente menos visibles en cuanto delictivas, socialmente más aceptadas y financieramente más reductibles. Se reproduce así en el interior de la economía informal la tradicional discriminación de los aborígenes, complementada por los privilegios fácticos de que gozan los mestizos y especialmente los blancos.

(4) Con cierto derecho se puede postular la tesis de que, en realidad, no se ha dado una infiltración de la élite del poder desde afuera y de parte de personas procedentes de la economía clandestina que anteriormente hubiesen pertenecido a estratos bajos de la escala social, sino más bien que individuos de la élite del poder se han dejado corromper por el narcotráfico y actividades afines y han pasado a proteger los intereses de dichos grupos, por una parte; por otro lado, sectores de la clase alta tradicional en las regiones orientales del país (Santa Cruz y Beni), ocupados habitualmente de la ganadería y la agricultura, han "diversificado" sus actividades con algo mucho más lucrativo, como ser el comercio y transporte de la cocaína, mientras que grupos

de la clase alta tradicional de las zonas occidentales (sobre todo aquéllos en proceso de empobrecimiento) han tomado a su cargo los negocios de intermediación ligados al narcotráfico (lavado del dinero mal habido, protección jurídica y política, asesoramiento de inversiones, etc.).

Pero aun considerando todas estas reservas no hay dudas acerca de la impotencia política de los informales relacionados con los sectores no delictivos y de la creciente influencia pública de aquéllos vinculados a la cúpula dirigente del narcotráfico (32). La base de esta última es su enorme poder financiero: en un país donde hasta su aristocracia más opulenta gozó de medios económicos relativamente modestos (por ejemplo a nivel latinoamericano), la nueva clase alta ligada al narcotráfico dispone de recursos monetarios cualitativamente superiores, lo cual a la larga siempre se traduce, así sea de manera indirecta, en la capacidad de infiltrarse en la élite del poder y de intervenir, aunque sólo sea de modo disuasivo, dilatorio o incompleto, en el accionar cotidiano de la administración pública. Según *Godofredo Sandoval* (33), la cúpula dirigente del narcotráfico tendría un cierto ascendiente en los partidos políticos de las derechas en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Esta cúpula, de acuerdo con *Rasso Ruppert* (34), comprendería a unos treinta y cinco clanes familiares, provenientes de la clase alta o del estrato superior de la clase media, y se dividiría en dos grandes grupos según su origen regional. El primero comprendería a las familias tradicionales de las zonas orientales, generalmente propietarias de latifundios y con intereses más recientes en la agroindustria, la banca y el comercio. El segundo estaría conformado por familias de Cochabamba y La Paz, de procedencia social algo más modesta, cuyas esferas habituales de acción serían la administración pública, la alta política y las Fuerzas Armadas. A ambos grupos les compete una función de dirección y coordinación, que incluye igualmente el control sobre las capas inferiores de la organización respectiva, la política de inversiones legales, los contactos con el exterior, la protección a su gente desde los órganos políticos, la corrupción de todo funcionario, policía, juez o militar que haga problemas y el manejo de los flujos financieros mayores.

En lugar de una transformación cualitativa de la élite del poder por inclusión de sectores económicamente exitosos y anteriormente ajenos a ella, se puede presuponer un proceso de sim-

biosis: segmentos de la clase alta tradicional, que ahora configuran la cúpula dirigente del narcotráfico y que no actúan directamente en la arena política, conviven con la clase política propiamente dicha, influyendo en sus decisiones, pero sobre todo con el fin de encubrir sus actividades ilícitas, evitar persecuciones judiciales y desviar o neutralizar acciones de represión al narcotráfico, pero no ejercen un genuino liderazgo político, ni poseen un peso decisivo dentro de los partidos políticos, ni tienen capacidad de contribuir a la formulación de política pública de largo aliento.

Esto no quiere decir, por otra parte, que durante ciertos periodos históricos no hubiese habido una especie de predominio poco disimulado de los sectores ilegal-delictivos de la economía informal sobre la vida política boliviana. Tal fue probablemente el caso del gobierno del General Luis García Meza (1980-1981) y de los breves gobiernos militares que le sucedieron hasta la restauración de la democracia y la instauración de un gobierno civil en octubre de 1982. Personajes importantes y hasta centrales del narcotráfico obtuvieron puestos imprescindibles para encubrir exitosamente toda su actividad ilícita, para eliminar a todos los concurrentes indeseados en el negocio de la droga (por ejemplo, intermediarios colombianos) y para encauzar los principales recursos y dispositivos del aparato estatal con el objetivo de racionalizar y optimizar el "negocio". Si este régimen se hubiese mantenido en el poder, el narcotráfico habría llegado a convertirse en un "monopolio estatal", pero al servicio del grupo social que detentó breve pero intensamente el poder (35). También hay indicios de que durante el gobierno del General Hugo Banzer (1971-1978) organizaciones protegidas o, por lo menos, toleradas por las más altas esferas del Estado, pudieron poner sistemáticamente los cimientos para la producción y el comercio ulteriores de coca/cocaína, y que para ello se utilizaron créditos internacionales avalados por el Estado, fondos de organizaciones internacionales de promoción agrícola y la colaboración abierta y metódica de instancias gubernamentales, particularmente de las Fuerzas Armadas y de la policía (36). Asimismo han surgido voces que vinculan a Max Fernández, fundador y jefe indiscutido del partido populista UCS, con el narcotráfico, aunque no existen pruebas claras de ello (37). Esto no sería un obstáculo para que los informales de los sectores no delictivos prosiguieran en su apoyo y admiración al líder populista.

Finalmente hay que mencionar la posibilidad de que los segmentos empresariales de la economía informal no delictiva ganen en dimensión, relevancia y poder socio-económico, si su desempeño es satisfactorio y si el régimen neoliberal les es realmente favorable. En tal caso es probable que paulatinamente ganen también cierto ascendiente político y que ingresen, así sea en magnitud reducida, a la élite del poder, alterando la composición de ésta. Pero en ese caso, los empresarios informales generalmente se habrán convertido en formales -y su análisis excedería los límites de este estudio. Se trata, en todo caso, de una evolución bastante hipotética, cuyos rasgos específicos aun no se vislumbran en el horizonte histórico (38).

NOTAS

- 1) Cf. Mario Arrieta Abdalla, *Utopía andina, desproletarización y recampesinización*, en: Carlos F. Toranzo Roca / Mario Arrieta Abdalla, *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia*, La Paz: UNITAS/ILDIS 1989, p. 147 sqq.
- 2) Cf. "Aprovechar del Estado" generó utilidades al sector privado, en: PRESENCIA (La Paz) del 15 de septiembre de 1987
- 3) Cf. Carlos F. Toranzo Roca, *La desproletarización e "informalización" y sus efectos sobre el movimiento popular*, en: Toranzo Roca / Arrieta Abdalla, op. cit. (nota 1), p. 130, 132.- En una entrevista realizada el 9 de abril de 1991, el catedrático Carlos F. Toranzo Roca subrayó la coetaneidad de estos fenómenos, poniendo en duda una vinculación de causa y efecto entre la expansión de la economía informal y el florecimiento de los nuevos partidos populistas.
- 4) Jorge Lazarte, *Hoy en Bolivia se confía más en los políticos que menos hablan* (entrevista con Juan Carlos Marañón), en: LA RAZON (La Paz) del 15 de abril de 1991, p.5
- 5) La expresión proviene del catedrático Godofredo Sandoval (entrevista realizada en La Paz el 6 de abril de 1991).
- 6) Sobre esta temática cf. Bernardo Kliksberg (comp.), *Cómo enfrentar la pobreza? Estrategias y experiencias organizacionales innovadoras*, Buenos Aires: CLAD/PNUD 1989, passim
- 7) Jorge Lazarte, op. cit. (nota 4), p. 5
- 8) Carlos F. Toranzo Roca, *Elementos ideológicos y conductas de la nueva derecha*, en: Toranzo / Arrieta, op. cit. (nota 1), p. 98
- 9) Joaquín Saravia / Godofredo Sandoval, *Jach'a Uru: la esperanza de un pueblo? Carlos Palenque, RTP y los sectores populares urbanos en La Paz*, La Paz: ILDIS 1991, p. 129, 152
- 10) *Ibid.*, p. 230.- La diferencia de votos entre CONDEPA y todos los otros partidos fue simplemente abismal (sobre todo en la nueva ciudad de El Alto).
- 11) Casi todo el discurso político de los líderes de CONDEPA y de su brigada parlamentaria está repleto de alusiones a un modelo endógeno de desarrollo, que hasta ahora no ha sido explicitado y ni siquiera esbozado convincentemente.

- 12) Sobre el populismo cf. Gita Ionesco / Ernest Gellner (comps.), *Populismo. Sus significados y características nacionales*, Buenos Aires: Amorrortu 1970
- 13) Saravia / Sandoval, op. cit. (nota 9), p. 61, 63.- En diversos sentidos este tipo de caudillo carismático con una notable habilidad para servirse de los medios modernos de comunicación masiva fue anticipado por Juan Domingo Perón en la Argentina. Cf. la excelente obra de Peter Waldmann, *Der Peronismus 1943-1955* (= El peronismo 1943-1955), Hamburgo: Hoffmann & Campe 1974, passim
- 14) Saravia / Sandoval, ibid., p. 92, 172 sqq.
- 15) Ibid., p. 166, 170, 188 sqq., 198 sqq.
- 16) Ibid., p. 107
- 17) Ibid., p. 109
- 18) En el caso boliviano se trataría de una "democracia a la deriva". Cf. René Antonio Mayorga (comp.), *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social*, La Paz: CLACSO/CERES 1987, passim
- 19) Silvia Rivera Cusicanqui, *Democracia liberal y democracia de ayllu: el caso del Norte de Potosí*, en: Carlos F. Toranzo Roca (comp.), *El difícil camino hacia la democracia*, La Paz: ILDIS 1990, pp. 9-51
- 20) Ibid., p. 11, 49
- 21) Entrevista con el Secretario Permanente de la Central Obrera Boliviana, realizada el 2 de enero de 1991
- 22) Entrevistas con un representante de las Fuerzas Armadas (3 de noviembre de 1990), de la Cámara Nacional de Industrias (10 de enero de 1991), con el Jefe de Prensa de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (15 de diciembre de 1990), con un representante de organizaciones cívicas de ayuda a la comunidad (11 de diciembre de 1990), con un representante de los empresarios de la construcción (2 de diciembre de 1990), y con el Secretario de Actas de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) (9 de noviembre de 1990).
- 23) Cf. Saravia / Sandoval, op. cit. (nota 9), p. 49, 61, 144 sqq.; entrevista con Carlos F. Toranzo Roca, loc. cit. (nota 3)
- 24) Jorge Lazarte, op. cit. (nota 4), p. 5
- 25) Carlos F. Toranzo Roca, *Los rasgos de la nueva derecha boliviana*, en: Toranzo / Arrieta, op. cit. (nota 1), p. 82
- 26) Toranzo Roca, *Elementos...*, op. cit. (nota 8), p. 96 sq.
- 27) Jorge Lazarte, loc. cit. (nota 4), p. 5
- 28) No es superfluo el indicar que el "empresario" más famoso de la cocaína en Bolivia, Roberto Suárez, adoptó una clara posición populista, nacionalista, anti-imperialista y pro-campesina, denunciando sobre todo las violaciones a la soberanía nacional de parte de los Estados Unidos.- Cf. IPE, No. 1008, vol. XXI del 11 de julio de 1983, p. 105 sq.
- 29) Sobre UCS cf. el exhaustivo tratado de Fernando Mayorga, *Max Fernández: la política del silencio*, La Paz: ILDIS/UMSS 1992, pp. 50-54 y el prólogo de Carlos F. Toranzo Roca, *Burguesía chola y señorialismo conflictuado*, en: ibid., pp. 13-29.
- 30) Entrevista con el Secretario de Finanzas de la Confederación Sindical de Gremiales en La Paz el 17 de noviembre de 1990

- 31) Entrevista con el Secretario General de la Asociación y Sindicato de Distribuidores Mayoristas de la Calle Isaac Tamayo, en La Paz el 18 de noviembre de 1990
- 32) Cf. Miguel Urioste, *La economía de la cocaína*, en: PRESENCIA del 22 de julio de 1989, p. 2; Peter McFerran, *Economía informal gana poder político y atrae ayuda externa en Bolivia*, en: PRESENCIA del 8 de noviembre de 1989
- 33) Entrevista con Godofredo Sandoval, loc. cit. (nota 5)
- 34) Rasso Ruppert, *Das Koka- und Kokaingeschäft in Bolivien. Organisation, räumliche Struktur, wirtschaftliche und soziale Effekte* (= El negocio de la coca y la cocaína en Bolivia. Organización, estructura espacial, efectos económicos y sociales), Nürnberg: GERAG 1990, pp. 171-174; René Bascopé Aspiazú, *La reta blanca. Coca y cocaína en Bolivia*, La Paz: Ediciones Aquí 1982, p. 75 sq., 95 sq.; Guillermo Bedregal Gutiérrez / Ruddy Viscarra Pando, *La lucha boliviana contra la agresión del narcotráfico*, La Paz: Amigos del Libro 1989, p. 165 sqq.; sobre los posibles nexos entre los ganaderos de la región del Beni y el narcotráfico cf. Alvaro Pinedo Antezana, *Hacia la extinción de nuestra ganadería*, en: EL DIARIO del 7 de julio de 1991, p. 3.
- 35) Ruppert, *ibid.*, p. 133; R. T. Naylor, *Hot Money and the Politics of Debt*, New York 1987, p. 169; Georg Hafner / Kamil Taylan, *Zum Beispiel Kokain* (= Por ejemplo cocaína), Göttingen 1988, p. 76; Dietmar Dirmoser, *Drogen und Politik: Kokain produktion, Korruption und Macht in Bolivien* (= Drogas y política: producción de cocaína, corrupción y poder en Bolivia), en: LATEINAMERIKA. ANALYSEN UND BERICHTE (= América Latina. Análisis e informaciones), Berlin, vol. 1985, pp. 71-110
- 36) Cf. Eva Dietz, *Der Funktionswandel der Koka in Bolivien* (= La transformación de las funciones de la coca en Bolivia), Saarbrücken/Fort Lauderdale: Breitenbach 1990, pp. 82-87; Rasso Ruppert, op. cit. (nota 33), p. 127 sqq.; Hafner / Taylan, *ibid.*, p. 75 sqq.; Dirmoser, *ibid.*, p. 94 sqq.; Alain Labrousse, *Bolivie: économie politique de la coca-cocaïne*, en: PROBLEMES D'AMERIQUE LATINE, vol. 1987, No. 4856, pp. 105-120
- 37) *Max Fernández acusado de estar vinculado con el narcotráfico*, en: PRESENCIA del 12 de abril de 1990, p. 5
- 38) Sobre los "capitalistas de tez morena" que reinvertirían sus ganancias exclusivamente en Bolivia, cf. C. F. Toranzo Roca, *Los rasgos...*, op. cit. (nota 25), p. 4

POLITICAS PUBLICAS, ECONOMIA INFORMAL Y LAS REACCIONES DE LOS INVOLUCRADOS

H. C. F. Mansilla

a. La Política de la ambigüedad

Ya desde la década de 1970 los sucesivos gobiernos bolivianos persiguen una política similar frente al fenómeno de la economía informal, incluyendo naturalmente al sector ilegal-delictivo. Esta línea directriz combina la tolerancia en la praxis y la condena en la teoría. Con respecto a los segmentos no delictivos, las políticas públicas pueden ser calificadas de una gran indulgencia, puesto que aquellos alivian la grave crisis económica sin pesar sobre el Tesoro General de la Nación. Es muy posible que a muy largo plazo el interés estatal consista en transformar a los informales en trabajadores y empresarios formales, que pagan impuestos y actúan dentro de las normas legales. Los programas efectivos para alcanzar tal fin se distinguen por su modestia y su carencia perenne de recursos adecuados; se trata, en el fondo, de intentos de mejorar el acceso de los informales a los créditos bancarios, por una parte, y de programas de capacitación y formación profesionales, por otra (1). En las estadísticas y en los planes oficiales (2) la economía informal juega un rol francamente secundario, cuando no ínfimo; con respecto al sector delictivo-ilegal esta actitud está signada por una esquizofrenia básica.

Esta última puede ser explicitada mediante el estudio de las políticas públicas predominantes en lo referente al tratamiento del complejo coca/cocaína. Este fenómeno es considerado, por un lado, como algo residual, al que no se debería atribuir importancia

para el desarrollo ulterior del país (3); sus "contribuciones" al ingreso de divisas, a las exportaciones, a la creación de puestos laborales y, en general, al mejoramiento del PIB, son pasadas discretamente por alto. Por otro lado, sin embargo, la economía informal-delictiva es vista como un instrumento apto para conseguir ventajas financieras de parte de organismos internacionales y gobiernos extranjeros: las estrategias para la contención del complejo coca/cocaína que ha propugnado el gobierno boliviano desde 1990 (e implícitamente desde hace mucho más tiempo) comprenden un elemento indisimulado de extorsión. En el contexto internacional ésto significa que los eventuales donantes de fondos y préstamos son confrontados tácitamente con la amenaza de dejar las cosas como están, es decir, de continuar con la tolerancia hacia el complejo coca/cocaína, tolerancia negada por el discurso oficial, pero muy efectiva en la praxis. La estrategia gubernamental (4) consiste en inducir a las instituciones extranjeras a tomar a su cargo los costes de un modelo de desarrollo "alternativo": la conversión de las estructuras económicas informal-delictivas en formal-legales, insinuando que la falta de "cooperación" pertinente llevaría a un mayor florecimiento del complejo coca/cocaína (5). Lo más probable que se desprende de estas tácticas consagradas a efectos de corto aliento es que los sucesivos gobiernos bolivianos no tienen una genuina estrategia de largo plazo para enfrentar de manera innovadora y resuelta los gravísimos problemas emergentes de la economía informal, especialmente de su sector ilegal-delictivo, que se complacen en permanecer en una cómoda perplejidad y que practican el conocido ardid de tratar de sacar ventajas pecuniarias de actores extranjeros mediante amenazas veladas de preservar el *status quo* favorable al narcotráfico. Hasta ahora las políticas públicas frente a estos complicados fenómenos se redujeron a una multiplicación de instancias estatales encargadas más o menos de las mismas tareas, a anunciar enérgicas medidas nunca implementadas *in praxi* y a condescender en realidad a cerrar ambos ojos ante las actividades tan lucrativas y necesarias vinculadas con la economía informal-delictiva (6).

La *Declaración de Cartagena* (Colombia), suscrita el 15 de febrero de 1990 por los presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Perú, reconoce expresamente el "impacto negativo" que el narcotráfico tiene a la larga sobre la economía de los países andinos, pero insiste simultáneamente en enfatizar la soberanía na-

cional de los países involucrados y la necesidad de que los Estados Unidos se hagan cargo de la mayor parte de los costes que demandaría la substitución de la economía informal-delictiva por otra formal-legal. Se supone que con fondos norteamericanos se puede conseguir al mismo tiempo la creación y el fortalecimiento de programas sociales de emergencia y de largo plazo destinados a un futuro "desarrollo integral" sin narcotráfico, un apoyo financiero para las balanzas de pago de los países involucrados, un fuerte soporte para la población directamente afectada y una promoción notable a otras formas de agricultura en la región de cada país dependiente de la producción de coca (7). Una de las críticas centrales y recurrentes a la *Declaración de Cartagena* —aparte de los problemas relativos a la soberanía nacional y a la militarización de la lucha contra el narcotráfico— se refiere al carácter probablemente exiguo de los fondos que los Estados Unidos invertirían en la substitución de la agricultura de la coca por otros cultivos que tuviesen la misma rentabilidad para los campesinos —cosa que, por otra parte, es puesta en duda por la mayoría de los investigadores (8).

La mencionada combinación entre una cómoda perplejidad frente a las implicaciones a largo plazo de la economía informal y el intento —relativamente exitoso— de conseguir ventajas materiales a corto plazo provenientes de agentes externos constituye una constante de la política gubernamental boliviana y, en el fondo, del modo de actuar de la élite del poder desde tiempos inmemoriales. Esta ambigüedad fundamental se origina en la carencia de modelos genuinamente originales de desarrollo y, por consiguiente, en la falta de una perspectiva que supere la mera extrapolación de tendencias y fenómenos factuales del presente, y simultáneamente en la proverbial sobrevaloración de la astucia cotidiana, de la sagacidad práctica y de los ardidés tácticos. En este sentido las políticas públicas arrastran un elemento de ambivalencia que viene desde muy atrás y que deja translucir el carácter improvisado, provinciano e inmedatista de aquéllas.

Se puede argumentar obviamente que los recursos financieros bolivianos no alcanzarían ni con la mejor buena voluntad e inventiva para implementar un plan verdaderamente original y alternativo de desarrollo y que la apelación a las donaciones exteriores se debe simplemente al sentido común y a la obligación moral que tienen las naciones altamente desarrolladas de cooperar a la erradicación del complejo coca/cocaína por ser ellas la

fuente de la demanda de los estupefacientes. Documentos oficiales han señalado con bastante precisión y confiabilidad los gigantescos montos financieros que serían necesarios para que una enorme masa de campesinos se decidiera voluntariamente a substituir las plantaciones de coca por otro tipo de cultivos alternativos sin sufrir serias pérdidas en sus ingresos (9). En el marco de este estudio es superfluo insistir en los conocidos hechos de la rentabilidad excepcionalmente alta de la coca dentro de la agricultura, de la dependencia de cientos de miles de familias campesinas con respecto a esta monocultura y de las estructuras altamente sofisticadas creadas alrededor del complejo coca/cocaína a lo largo de muchos años. Los efectos de éste sobre la economía son sencillamente decisivos, imprescindibles y de una vasta magnitud (10). Es claro que la substitución de la economía de la coca tendría que considerar variables de excepcional relevancia: el país dejaría de percibir ingresos por cientos de millones de dólares, se daría un fuerte estrangulamiento externo de la economía (a causa de los efectos negativos sobre la balanza de pagos); aumentaría significativamente la desocupación abierta, descendería el ingreso promedio de los campesinos y se esfumaría en parte la importantísima función amortiguadora que posee la economía informal en esta época de profunda crisis generalizada.

Por todos estos factores, el gobierno boliviano –y dilatados segmentos de la opinión pública– supone que la eliminación de la economía de la coca requeriría de un stock de capital de por lo menos \$US 3500 millones (11), que necesariamente tendría que provenir de fuentes externas. Un buen argumento de orden ético para justificar el financiamiento externo se basa en el hecho incontrovertible de que el valor generado por la economía de la coca/cocaína es apropiado en un 80% por los países consumidores, alrededor del 15% por los comercializadores y sólo entre el 2 y el 4% por las naciones productoras (12).

Si a pesar de todos estos factores y aspectos factuales se asevera que las políticas públicas bolivianas relativas a la economía informal, y muy particularmente a su sector ilegal-delictivo, representan una especie de continuación de las prácticas convencionales de ambigüedad, inmediatez y carencia de espíritu innovador, ésto se apoya en los siguientes argumentos:

- El gobierno y las diversas instancias de la administración pública no se han destacado precisamente por sus esfuerzos

en pro de la reducción o sustitución de la economía informal-delictiva, sino más bien por una premeditada indolencia con respecto a la totalidad de este fenómeno. No se hizo nada por frenar el florecimiento de la economía informal en sus comienzos; ahora se lo espera todo —programas, ideas, fondos— de la ayuda externa (13).

El insistir en lemas generales (cambiar la economía informal por otra "legal y estable"; canjear coca o la eliminación de ella por desarrollo financiado por los gobiernos y las instituciones exteriores) (14) y el afirmar simultáneamente que todo toma su tiempo, que no habrán medidas de fuerza contra los productores de coca y que los programas de sustitución de cocales implican un desarrollo "integral" significan, muy probablemente, la carencia de modelos de índole innovativa (la cómoda perplejidad ante una problemática ciertamente enrevesada) y la amenaza tácita hacia afuera de dejar las cosas tal como están si no fluyen cuantiosos fondos para financiar el "modelo alternativo".

El hecho de que en los últimos años (y especialmente a partir de 1989) se multipliquen en la prensa (cosa insólita en la historia boliviana) noticias sobre casos de corrupción en la administración pública, se conformen comisiones oficiales para investigar los casos más notorios y se confirmen las peores sospechas acerca de la corruptibilidad de los más altos dignatarios de Estado y de los órganos encargados precisamente de la represión del narcotráfico (Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, organismos policiales, poder judicial, fiscales, etc.), parece indicar que los esfuerzos gubernamentales para la erradicación del complejo coca/cocaína son, en el fondo, muy laxos y que el sistema de la corrupción sistemática brinda obviamente ventajas financieras a las cuales una buena parte de los servidores del Estado no están dispuestos a renunciar fácilmente. Tanto funcionarios del gobierno como portavoces de los cultivadores de coca reconocen que pese a los afanes estatales y a los programas financiados externamente, la producción de coca destinada exclusivamente a fines ilícitos sigue creciendo (15).

Como ya señaló *Rasso Ruppert* (16), los motivos internos para combatir el narcotráfico son muy reducidos, ya que éste actúa como un excelente generador de empleos e ingre-

sos, como una fuente imprescindible de divisas y como la posibilidad, muchas veces única, de un enriquecimiento acelerado de la élite del poder y de la clase alta tradicional. Son entonces las presiones externas, sobre todo las provenientes de los Estados Unidos, las que configuran la causa principal de la lucha contra el narcotráfico —y lo que explica las ambigüedades y contradicciones de esta última, su poco éxito, su carácter vacilante y ante todo su extrema impopularidad. Existen, naturalmente, algunas razones de orden interno que aconsejan la reducción del sector ilegal-delictivo de la economía informal; entre ellas se encuentra el sentimiento de la dignidad nacional, el reconocimiento de los daños económicos, ecológicos y éticos que a largo plazo produce el narcotráfico, la probabilidad de que todo desarrollo basado en este negocio resulte ser a la larga precario y endeble y finalmente la convicción de que la corrupción originada en el narcotráfico termine quizás por contaminar todo el aparato administrativo y por debilitar consiguientemente todo el andamiaje del Estado. No es superfluo el reiterar que estas consideraciones de índole moral y lógica no turban el sueño de los gobernantes y de la élite del poder; la represión del narcotráfico sigue siendo una especie de imposición que dimana del mundo exterior.

Las medidas prácticas emprendidas por el gobierno boliviano para reducir el complejo coca/cocaína se distinguen igualmente por su naturaleza equívoca, contradictoria e insuficiente. Una de ellas —en la mejor tradición burocrático-administrativa derivada de la era colonial española— consiste en crear normas legales e instituciones, cuyas funciones se sobreponen y cuyos objetivos son muy similares. La proliferación de estos organismos se debe en primer lugar al fin, tan prosaico como importante, de dar empleo a dilatadas clientelas partidistas, familiares y regionales, y al propósito tácito de enredar las cosas de tal manera que estas organizaciones terminan por crear serios problemas de competencias cruzadas y atribuciones ambiguas, lo que redundará finalmente en acciones prácticas de efecto muy limitado. La famosa ley 1008 de julio de 1988 ("Ley del régimen de la coca y sustancias controladas") se halla en concurrencia con toda una serie de disposiciones legales anteriores y posteriores; ella prevé

además la creación de una judicatura especial para el tratamiento de los delitos derivados del narcotráfico que posiblemente sea anticonstitucional (17). Ella instaure además figuras jurídicas delictivas (no amparadas por los códigos legales en vigencia) y da vida a una serie de organismos, cuyo funcionamiento es temporal y errático. El mejor ejemplo de ello son los tribunales establecidos por esta ley, que nunca llegaron a cumplir la misión que se les asignó (18). Existen subsecretarías y organismos dedicados a la represión del narcotráfico y a la consecución de un "desarrollo alternativo" que denotan una clara sobreposición de funciones y una correspondiente duplicación de esfuerzos. Entre ellos se hallan: SUBDESAL (Subsecretaría de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos de coca, dependiente del Ministerio de Agricultura), la Subsecretaría de Defensa Social (dependiente del Ministerio del Interior), CONAPRE (Consejo Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación del Uso Indebido de Drogas), CONALID (19) (Consejo Nacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas), CONALAD (Comisión Nacional de Desarrollo Alternativo), DNCSP (Dirección General de Control de Sustancias Peligrosas), DIRECO (Dirección Nacional de Reconversión Agrícola), PIDYS (Plan Integral de Desarrollo y Substitución), y las organizaciones militar-policiales FELCN (Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico), UMOPAR (Unidad Móvil para el Patrullaje Rural), etc. Uno de los motivos centrales para el mantenimiento y la multiplicación de estas instituciones y, al mismo tiempo, para evitar una racionalización de sus funciones reside en que todas ellas brindan buenas posibilidades de dar empleos burocráticos bien pagados a dilatadas clientelas y a especialistas mejor remunerados provenientes de los estratos superiores de las capas medias. Como la problemática "está de moda", muchos de los fondos para proyectos y salarios de estas organizaciones se originan en gobiernos extranjeros y en instituciones supranacionales; el nivel de los sueldos en cuestión es más alto que el promedio de la administración pública boliviana —y las responsabilidades son menores. Así, mediante un "toque" de modernidad se preservan los elementos irracionales y prebendalistas de la tradición premoderna.

La ambigüedad gubernamental se muestra con bastante claridad en la práctica cotidiana de la postulada erradicación de los cultivos excedentarios de coca. La ley 1008 (20) clasifica las zonas productoras de coca en tres categorías: la tradicional (donde históricamente se ha venido cultivando coca para fines consuetudinarios de consumo convencional entre la población indígena), la zona excedentaria en transición (el cultivo de coca es el resultado de un proceso acelerado de colonización y es destinado mayormente a una demanda de objetivos ilícitos) y las áreas no comprendidas en las definiciones anteriores (las plantaciones de coca en estas zonas serán objeto de erradicación obligatoria, ya que se presupone que toda la producción de coca está destinada a metas delictivas). Lo importante es resaltar que la tercera zona, donde no cabe duda alguna acerca de la ilegalidad de su producción, no tiene gran relevancia para los cultivos de coca. La primera región a su vez obtiene el curioso beneficio de que su producción —con ciertas limitaciones— sea considerada *a priori* como dedicada exclusivamente a fines tradicionales y legales y excluida, por ende, de los programas de erradicación. Lo problemático reside en el área segunda (cultivos excedentarios en proceso de transición), que cuantitativa y cualitativamente (superficie, productividad, facilidades de comercialización y refinamiento del producto) (21) resulta ser mayor y más importante que todas las otras zonas juntas; esta región queda sujeta a planes anuales de paulatina reducción y sustitución más o menos voluntaria de los cocales, planes que necesariamente no se implementan (o en proporción muy reducida), debido al alto rendimiento financiero de la coca, a la corruptibilidad de los agentes del orden público y a la política vacilante del gobierno. Es superfluo el señalar aquí que las fuerzas encargadas de la represión del narcotráfico y de la ejecución de los planes alternativos de desarrollo no se consagran primordialmente a la noble tarea de colaborar a los campesinos en la limitación voluntaria de los cultivos excedentarios de coca para fines ilícitos, sino que —siguiendo en ésto tradiciones profundamente arraigadas de comportamiento de los organismos gubernamentales— emplean su tiempo y su poderío militar en la extorsión de los campesinos, los cuales, por múltiples razones, se ven constreñidos a perseverar en el cultivo de la coca (22).

b. El camino hacia la militarización

La tendencia actual, que se puede describir como la adaptación del modelo norteamericano para la represión del narcotráfico, que concentra todas las medidas de interdicción en los países productores de coca y cocaína, ha podido ser aceptado tan fácilmente por la élite boliviana del poder porque nunca se ha dado en los círculos gubernamentales una concepción original para el tratamiento del sector delictivo-ilegal de la economía informal. Casi todos los organismos estatales y para-estatales han preferido, como ya se mencionó, una "estrategia" que desde entonces ha combinado la tolerancia práctica hacia el complejo coca/cocaína con la reprobación verbal. Hay indicios de que este complejo ha gozado de las ventajas derivadas de una neutralidad benevolente de parte del gobierno del General Hugo Banzer (1971-1978) y de la cooperación directa de la dictadura militar (1980-1982); a partir de entonces los sucesivos gobiernos han oscilado entre una arremetida seria contra el narcotráfico y una indulgencia fáctica, o han mezclado ambas tácticas en una política ambivalente, pero a la cual no se le pueden negar variadas ventajas de orden práctico. A partir de la *Declaración de Cartagena* (1990) y de la multiplicación de las presiones norteamericanas en pro de una enérgica ofensiva contra el complejo coca/cocaína, las instancias estatales bolivianas parecen encontrarse en un verdadero dilema; es probable que para salir de él la solución más aceptable con respecto a los gobiernos extranjeros (especialmente el norteamericano) sea el aceptar una estrategia menos laxa y más severa respecto a los productores y comercializadores de cocaína, lo que a la larga implica alguna forma de militarización. En el caso boliviano es, por otra parte, imposible el discriminar claramente entre productores de coca tradicionales y aquéllos que lo hacen para fines ilícitos; es igualmente muy problemático el distinguir entre meros cultivadores del arbusto y fabricantes de pasta de cocaína. Por estos factores y motivos es razonable esperar que cualquier represión seria del narcotráfico y de sus múltiples actividades precursoras conlleve una buena dosis de violencia física, la que, obviamente, puede desatarse contra los campesinos dedicados a la primera fase de todo el proceso.

A pesar de reconocer la importancia de la economía informal, incluyendo tácitamente a su sector ilegal-delictivo, para evitar simplemente una "convulsión social" (23) de proporciones in-

calculables, el gobierno boliviano parece encaminado a partir de 1990 a militarizar la represión del narcotráfico, lo que afectaría más o menos directamente a los campesinos indígenas productores de la llamada coca excedentaria. Ya la *Declaración de Cartagena* (24) contiene los siguientes compromisos: "Es esencial interrumpir la corriente de drogas ilícitas que se dirige del productor al consumidor. Las partes se comprometen a vigorizar las medidas que tomen dentro de sus países para interrumpir la corriente de drogas ilícitas y a aumentar la coordinación y cooperación entre ellas a fin de facilitar esta lucha. Los Estados Unidos están dispuestos a proporcionar la mayor cooperación en el equipamiento y la capacitación de los organismos policiales de las partes andinas. La represión del tráfico de drogas ilícitas es una cuestión, en su esencia, de carácter policial. Sin embargo, ante su magnitud y las diferentes facetas que presenta, y de conformidad con el interés soberano de cada Estado y con su propio ordenamiento jurídico, las Fuerzas Armadas de cada uno de los países, dentro de su propio territorio y jurisdicciones nacionales, también pueden tomar parte".

El gobierno boliviano no ha cesado de interpretar la *Declaración de Cartagena* como una victoria de la propia posición, basada en la tesis "Coca por desarrollo" (gramatical y lógicamente correcto sería "Desarrollo por coca"); el Presidente Jaime Paz Zamora declaró al respecto: "El gran resultado para nosotros de la conferencia cumbre antidrogas es el reconocimiento de la necesidad de la substitución de la economía de la coca por una economía legal. [...] Lo que hemos solicitado es apoyo de toda la comunidad internacional " (25). Observando todo este contexto y el desarrollo ulterior se puede llegar a la conclusión de que el gobierno boliviano llegó a aceptar una represión dura y hasta metódica del narcotráfico, incluyendo todas sus etapas precedentes de producción, a cambio de una considerable ayuda internacional; la militarización sería uno de los precios a pagar por recibir ese "masivo apoyo internacional" (26).

Se trata, obviamente, de una problemática compleja, proclive a las grandes simplificaciones a causa de los aspectos emotivos que subyacen a toda injerencia extranjera. Es evidente que la militarización constituye sólo uno de los componentes del Acuerdo de Cartagena y que no representa necesariamente una intervención directa del ejército norteamericano (27), como lo suponen

no pocos sectores nacionalistas e izquierdistas; pero hay que recordar al mismo tiempo que circulan a nivel semi-oficial versiones muy contradictorias sobre el carácter de la militarización y sobre el verdadero rol de los militares norteamericanos (28). Pero aun admitiendo la tesis gubernamental de que la militarización juega un papel secundario dentro de un proyecto más amplio de desarrollo alternativo, la desconfianza hacia los planes gubernamentales se basa en algunos argumentos nada desdeñables: en ningún momento las fuentes gubernamentales han aclarado en qué consistiría lo *alternativo* del posible desarrollo financiado por el extranjero en compensación por la renuncia boliviana al complejo coca/cocaína; aun aceptando las premisas oficiales la evolución boliviana corre el peligro de depender en un grado muy elevado de instancias externas, tanto para el financiamiento del posible desarrollo "alternativo" como para la determinación del contenido específico de éste; aun sin intervención militar directa de los norteamericanos toda militarización conlleva el peligro de graves enfrentamientos con los campesinos productores de coca, con sus sindicatos y gremios de apoyo y, por consiguiente, el riesgo de un insensato derramamiento de sangre, el cual, por otra parte, no garantiza para nada la eliminación de los cultivos excedentarios de coca. Por último hay que señalar la posibilidad –fundamentada en las tradiciones políticas del país– de que la conjunción de militarización con un probable desarrollo enteramente convencional produzca las lacras clásicas atribuidas a la élite del poder: apropiación privada de una buena porción de los fondos provenientes del exterior, incremento de los fenómenos de corrupción y corruptibilidad, aumento de los actos extra-legales de parte de las Fuerzas Armadas y Policiales con respecto a los productores de coca, envenenamiento general de la atmósfera pública, etc.

Es importante el indicar que importantes sectores sociales ven la militarización de una manera más o menos positiva –en todo caso como un mal necesario dentro de un contexto donde no hay otra salida clara. Los empresarios privados (29), por ejemplo, consideran que se debe aceptar la ayuda norteamericana para la militarización "sin falsos nacionalismos", porque sin ella sería fácticamente imposible la erradicación del narcotráfico. Esta opinión es compartida por todos aquéllos para quienes la proliferación de la economía informal y especialmente de su sector ilegal-delictivo configura un porvenir inseguro y deplorable para la

nación; el crecimiento de este último traería a la larga inestabilidad, corrupción y descrédito internacional, además de un desarrollo interno precario, reñido con los principios del Estado de Derecho y la previsibilidad y con la necesidad de fomentar el avance tecnológico sostenido y una buena formación profesional para la juventud. El reforzamiento del narcotráfico conduciría además a un genuino esclavizamiento de los campesinos cultivadores de coca bajo las mafias de los comercializadores (30).

El carácter ambiguo de la política gubernamental se manifiesta, por ejemplo, en el intento de definir las operaciones represivas contra el narcotráfico y sus múltiples agentes. En declaraciones de prensa, el Ministro Secretario de la Presidencia (31) afirmó que la lucha contra el tráfico de drogas es "eminentemente policial", pero al mismo tiempo agregó que las Fuerzas Armadas tomarán parte en esa contienda "siempre y cuando sea necesario"; admitió que hay "instrucción y preparación del personal militar" para tal objetivo a cargo de asesores provenientes de "gobiernos amigos". Subrayó además que la Constitución Política del Estado atribuye al ejército la función de "garantizar la seguridad interna del país" y que el narcotráfico puede estar vulnerándola, por lo que la intervención de las Fuerzas Armadas sería totalmente legal y comprensible. Pero insistió en que la "participación ampliada del ejército" no significaría militarización. Por lo demás, el ministro señaló que la represión policial y militar se dirigiría exclusivamente contra los narcotraficantes y no contra los campesinos productores de coca, extendiendo simultáneamente el discreto manto del silencio sobre los campesinos que elaboran pasta básica de cocaína, los muchos intermediarios y los vínculos entre los trabajadores rurales y los narcotraficantes. El gobierno ha enfatizado que la represión policial-militar es sólo una parte (32) de una estrategia más amplia para combatir al narcotráfico; los otros componentes serían la prevención y la rehabilitación, por un lado, y el desarrollo alternativo, por otro. Este último ha sido invocado incesantemente por instancias gubernamentales, pero nunca explicitado claramente. Se trata, en el fondo, de retornar al *status quo ante* que había prevalecido en la época en que los campesinos se dedicaban a una variedad de cultivos y antes de que estos se consagren masivamente a la monocultura de la coca y, al mismo tiempo, de financiar esta reconversión para que los productores rurales no experimenten un descenso marcado en sus ingresos. Las

únicas variantes que han surgido se refieren exclusivamente a la intensidad y al ritmo del proceso de reconversión (33); en este sentido se puede aseverar que el desarrollo postulado como "alternativo" no tiene nada de original ni de novedoso y que representa una vuelta al estado de cosas imperante hasta principios de la década de 1970. Persisten dudas de que esto sea factible dada la alta rentabilidad financiera de la coca para los campesinos y la imposibilidad de encontrar cultivos que puedan competir actualmente con ella (34).

La sustitución de cultivos de coca, especialmente de aquella llevada a cabo en un lapso muy breve de tiempo y de manera violenta, puede implicar un "desastre económico" (35) de mayores proporciones, conducir a resultados inesperados de índole negativa (36) y producir a mediano plazo fenómenos de corrupción aun más dilatados que los actuales, y precisamente entre los agentes encargados de la represión militar del narcotráfico (37).

Parece en todo caso plausible la opinión de que el gobierno boliviano ha iniciado el camino hacia la militarización sin ideas claras sobre las múltiples consecuencias que tal medida traería consigo. En los acuerdos firmados entre Bolivia y los Estados Unidos el 9 de mayo de 1990 se prevé explícitamente la intervención de fuerzas militares en la represión de todo el complejo coca/cocaína (38); el texto del convenio se destaca por su ambigüedad al describir las modalidades de esta participación, por la modestia de los fondos aportados por los Estados Unidos y por la carencia de una concepción original con respecto al llamado "Plan Integral de Desarrollo Alternativo", el cual —como ya se mencionó— significaría para los campesinos productores de coca un retorno al *status quo ante*. Por otra parte, hay que reiterar que el interés de la administración pública boliviana por terminar efectivamente con el narcotráfico no es ni muy elevado ni muy homogéneo: la voluntad política dirigida a este objetivo es, en el fondo, fragmentaria, contradictoria y momentánea, no sólo a causa de que no se vislumbra una alternativa realista desde el punto de vista económico-financiero (no existe ningún cultivo que tenga ni de cerca la rentabilidad actual de la coca), sino también porque el narcotráfico ha permeado exitosamente todos los niveles decisivos gubernamentales. Militarmente el poder de los narcotraficantes y de los productores de coca es considerado como muy re-

ducido (39) y sería muy vulnerable a una ofensiva seria de las Fuerzas Armadas.

Finalmente hay que señalar que algunos sectores importantes del gobierno y del mundo académico suponen que una posible solución estaría en la legalización total de la producción de coca y del consumo de cocaína; sólo esta medida provocaría un descenso notable del precio internacional de la cocaína y desestimularía el cultivo de coca. Recién entonces el cultivo de otras plantas se convertiría en una alternativa viable para los campesinos bolivianos (40).

c. Las reacciones ante la militarización

El proyecto de militarización de la lucha contra el narcotráfico ha chocado con una oposición casi unánime, que se nutre, empero, de motivos muy diversos. Uno de los argumentos más usuales proviene de la observación relativa al resultado ya obtenido por programas de sustitución de cacaos, financiados por fuentes externas: la mayor parte de los fondos en cuestión no llegó nunca a los campesinos, sino que se evaporó a su paso por las reparticiones oficiales. La proverbial corrupción de los funcionarios públicos impediría éste y cualquier otro intento importante de iniciar un desarrollo alternativo.

Aunque la resistencia principal contra la militarización parte de los campesinos productores de coca, de los intermediarios y de los sindicatos agrarios, se ha dado también una estimable oposición a tal medida en círculos políticos y académicos. Esta tendencia ve en la militarización ante todo la posibilidad de mayor violencia socio-política (41) y la probabilidad de que la incipiente democracia boliviana sea puesta en peligro por el aumento de la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y el mayor protagonismo que habría que atribuirle al estamento militar (42). En la militarización se percibe un intento de desalentar vías realmente alternativas de desarrollo pacífico y de centrar todos los esfuerzos en soluciones de fuerza que no habrían dado resultado en ninguna parte (43). (Es interesante el advertir que los partidarios más fervientes del cultivo de la coca en cuanto actividad anti-imperialista y ocupación tradicional de las etnias indígenas pasan totalmente por alto los efectos negativos del mismo, que van desde la deforestación de las zonas montañosas subtropicales

hasta los peligros inherentes a una monocultura –cuyos precios de exportación dependen de un mercado mundial extremadamente volátil y de modas circunstanciales–, pasando por el daño permanente que los campesinos causan a sus tierras mediante procesos acelerados de erosión (44). Los ideólogos de la coca extienden el discreto manto del silencio acerca de otras consecuencias igualmente deplorables que el complejo coca/cocaína ha traído consigo: la formación de nuevas jerarquías, estrictas y hasta rígidas, dentro del mundo agrario-campesino dedicado a la "planta sagrada de los Incas", el reforzamiento de diferencias étnico-culturales en el mismo, la intensificación de la discriminación de los indígenas consagrados a esta actividad ilícita y la consolidación de los antiguos obreros mineros y fabriles en cuanto el estrato más desfavorecido en el nuevo contexto social (45)).

Una importante opinión opositora a los planes gubernamentales percibe en la militarización el impedimento de "sólidos consensos políticos internos" y el incremento de los índices de violencia (46) de acuerdo a un esquema de frustración y agresión: aquella medida produciría una "privación de las expectativas" de los campesinos al ocurrir un cercenamiento de sus ingresos y de su capacidad laboral (todo esto debido a una reducción forzosa de las áreas de cultivo de la coca), lo que a su vez elevaría el "potencial de violencia colectiva". Se incrementaría el número de enemigos virtuales del Estado, se crearían "visiones rígidas e inflexibles" acerca de grupos y clases sociales colocadas ahora fuera de la legalidad y vastos territorios serían declarados zonas de guerra. La militarización originaría una "indiferenciación" de los propios objetivos militares, lo que dificultaría y embrutecería las acciones interdicitivas a cargo de las Fuerzas Armadas. Por último se exacerbaría el sentimiento antinorteamericano de los campesinos y de otros sectores sociales y políticos del país, lo que a largo plazo, sólo conduciría a que se intensifiquen los conflictos socio-políticos. Según *Barrios Morón*, la militarización y la consiguiente internacionalización de la lucha contra el narcotráfico motivarían el siguiente circuito de causas y efectos concatenados: "Narcotráfico --> violencia potencial --> inestabilidad política nacional --> ausencia de consenso interno --> pérdida de autonomía política nacional --> injerencia extranjera --> militarización --> ideologización --> violencia" (47).

Con cierta razón la militarización ha sido calificada como una solución de "bajo costo y corto plazo" (48), que no sólo consti-

tuye una fuente de acentuación de problemas económicos y sociales ya existentes, sino que también debilita la capacidad y el potencial bolivianos de inserción internacional. De acuerdo a *Aníbal Aguilar Gómez*, la militarización tendría como consecuencia obviamente la destrucción de las redes del narcotráfico, de las fábricas y los laboratorios clandestinos, el control de las áreas de los cultivos excedentarios de coca y la drástica reducción del impacto financiero derivable del complejo coca/cocaína (49), pero esta misma medida traería consigo una brusca caída del ingreso campesino, una probable baja en el precio de la coca, un despoblamiento de las regiones productoras de coca, una reconcentración de la propiedad de la tierra, un desempleo abierto, mayor pobreza en toda la nación y notables migraciones con rumbos difíciles de precisar (50). La militarización representaría una estrategia que excluiría un desarrollo genuino y sostenido.

Aguilar Gómez concede al mismo tiempo que una de las causas primordiales de la militarización reside en la "falta de confianza" de la "comunidad internacional" y de los organismos pertinentes de los Estados Unidos con respecto a la real eficiencia de las instituciones bolivianas que hasta ahora tenían a su cargo la represión del narcotráfico (51); esta carencia de fiabilidad se debe también a la ausencia de programas y proyectos factibles para el llamado desarrollo alternativo del lado boliviano, a la corrupción reinante en todas las instancias estatales encargadas de combatir al tráfico de drogas, a la duplicidad o multiplicidad de organizaciones y funciones administrativas dedicadas al mismo fin, a la presencia de personas vinculadas al narcotráfico en algunas reparticiones consagradas a su erradicación y al peligro de que surjan bandas y hasta organizaciones paramilitares para proteger más o menos metódicamente al narcotráfico si no se actúa con la debida energía y antelación. Todos estos argumentos —entre los que se distinguen la ambigüedad de las instituciones bolivianas y la ostensible carencia de una voluntad política clara— han pesado indudablemente a la hora de tomar la decisión de militarizar la lucha contra el narcotráfico, que es ciertamente una determinación norteamericana (52).

Mientras que los traficantes de droga se han sumido en un comprensible silencio en torno al problema de la militarización, los campesinos productores de hoja de coca —que en no pocos casos son igualmente elaboradores de la pasta básica de cocaína— re-

presentan el sector social que ha protagonizado la resistencia más vehemente a esta medida. Las organizaciones sindicales y los partidos políticos de izquierda se han hecho eco de estas reivindicaciones de los trabajadores rurales y han coadyuvado a la oposición masiva contra la militarización que se percibe en Bolivia desde hace varios años, pero especialmente desde la firma del acuerdo con los Estados Unidos del 9 de mayo de 1990. El móvil que seguramente subyace a la actitud de los sindicatos y partidos puede ser descrito como el intento de reconquistar espacios y audiencias —y, por lo tanto, influencia política— que las izquierdas han perdido en Bolivia a partir de 1985 en forma masiva.

Los argumentos recurrentes de los representantes campesinos y de los sindicatos contra la militarización se concentran en los siguientes puntos:

- La militarización atentaría contra la soberanía nacional al constituir la decisión de un gobierno extranjero en detrimento de los intereses y de los recursos naturales bolivianos (53).
- La militarización significaría "terror y pobreza en el campesinado", al socavar la fuente principal de ingresos rurales, por un lado, y al conllevar riesgos para la vida de los trabajadores rurales, por otro (54).
- La militarización damnificaría una actividad esencialmente legal —la producción de coca—, que no sería delincuencia, sino laboral; los campesinos productores de coca no tendrían ninguna complicidad con los narcotraficantes (55).

Los modos de argüir de los representantes campesinos y de sus aliados sindicales conforman una ideología convencional en defensa de intereses sectoriales, la que trata de hacer pasar esos intereses particulares por causas generales y dignas de ser asumidas por toda la comunidad (56). Uno de los principales rasgos de esta concepción reside en el ya mencionado tratamiento del cultivo de coca como si éste representase sólo y exclusivamente una actividad tradicional, que en la actualidad adquiere ribetes anti-imperialistas; la argumentación calla deliberadamente toda conexión con el verdadero uso final que se le da a la enorme producción excedentaria de coca. Esta última aparece entonces como la consecuencia más o menos natural de esfuerzos productivos patrióticos, cuyo destino efectivo queda envuelto en un halo de misterio cuidadosamente preservado. Tanto esta conexión con la esfera ile-

gal-delictiva como otros resultados negativos de la monocultura de la coca —erosión de los suelos subtropicales, envenenamiento de ríos y aguas subterráneas con agentes químicos para la elaboración de pasta básica de cocaína, la utilización totalmente ilícita de parques nacionales y áreas protegidas ecológicamente de parte de los campesinos para el cultivo de la "sagrada planta" (57)— son silenciados premeditadamente por los sindicatos.

Dentro de este contexto *ideológico*, emergen como sintomáticas las declaraciones de los máximos dirigentes de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, la representación gremial más importante de los trabajadores rurales dedicados primordialmente al cultivo de la coca. *David Herrada*, su secretario de relaciones, eleva esta actividad a la calidad de lo más valioso de la economía boliviana, a lo que constituiría su baza más importante en el mercado internacional: "Cuando no haya coca, el país no valdrá nada para nadie. Sin coca, perderán el gobierno, los cocaleros, todos. Ahora todos se ocupan de Bolivia, los gringos, los europeos, todos prometen ayuda porque tenemos coca, pero cuando arranquen nuestros cultivos, no valdremos nada" (58). *Evo Morales*, secretario general del mismo sindicato, da a entender que los campesinos de la coca conforman un movimiento político-sindical de considerable envergadura y de índole alternativa y que los intentos gubernamentales por erradicar la producción de coca y el narcotráfico serían, en el fondo, un designio para acabar con una corriente opositora (59). Por otra parte, los sindicatos campesinos han adoptado una posición de fuerza para tratar con el gobierno: la apertura misma de un diálogo con las autoridades pertinentes ha sido condicionado a que éstas previamente declaren nulo el Anexo 3 del acuerdo del 9 de mayo de 1990 y al retiro inmediato del país de los asesores militares norteamericanos y de los agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA) (60).

La beligerancia de los sindicatos campesinos, su reiterada negativa a discutir sus conexiones con el narcotráfico (o, por lo menos, con los intermediarios de este negocio) y su defensa exorbitante de la monocultura de la coca ha conducido a que el gobierno —y muchas otras instancias— sospeche que existe algún acuerdo tácito entre los campesinos productores de coca y los narcotraficantes o que estos últimos hayan infiltrado las organizaciones gremiales campesinas (61). En todo caso no se puede negar una congruencia fáctica de intereses temporales entre ambos grupos.

En este contexto es importante señalar que la desconfianza de los trabajadores rurales con respecto a las autoridades tiene una base bien fundamentada. En todas las declaraciones de los sindicatos agrarios emerge una impresionante lista de promesas gubernamentales no cumplidas, que van desde la carencia de proyectos específicos y fondos suficientes para el desarrollo alternativo hasta la marginalización de los campesinos de toda organización que tenga que ver con la problemática y de todo el proceso decisorio sobre esta materia. Asimismo existe una enorme cantidad de testimonios acerca del innegable involucramiento de las instituciones estatales de represión al narcotráfico y de la agencia norteamericana DEA en actividades delictivas vinculadas precisamente con el narcotráfico: extorsiones y cobros de tributos (de protección, silencio y participación) a los productores inmediatos de coca y de pasta básica; acciones de violencia física hacia los campesinos que "no cooperan" adecuadamente; confiscación de coca y pasta (para ser luego vendida por cuenta directa de las instituciones mencionadas y de la DEA); alianzas ocasionales de estas organizaciones con ciertos grupos de narcotraficantes (en contra de otras bandas adversarias); destrucción y bombardeo de caminos vecinales, etc. (62). De acuerdo a todas las informaciones disponibles y a los datos proporcionados con las personas entrevistadas, no hay duda alguna de que la mayor parte de los agravios aludidos por los campesinos corresponde estrictamente a la realidad. Tenemos así una situación global donde los actores contendientes en su totalidad actúan con doble moral, mala fe y poco respeto por el ordenamiento jurídico de la nación y donde cualquier solución estará probablemente bloqueada por la intransigencia y las ambigüedades de ambos lados.

Las medidas de presión implementadas por los campesinos productores de coca pueden ser agrupadas en tres categorías:

- Bloqueos de caminos y ferrovías, acción complementada a veces por la obstrucción de arterias importantes de tráfico en las ciudades. Esta estrategia fue utilizada en agosto de 1990 y en junio de 1991 (63) con un éxito muy reducido, a pesar del apoyo de la COB y de los gremios de conductores del transporte automotor (64). Estas medidas fracasaron en parte debido a la enérgica actitud del gobierno, a la indiferencia del resto de la población y a la falta de apoyo de otros sectores campesinos no consagrados a la monocultura de la coca (65).

Los acuerdos alcanzados entre las partes contendientes excluyen los puntos genuinamente conflictivos y no hacen otra cosa que diferir a un futuro próximo la dilucidación de la problemática, siguiendo en esto una vieja tradición criolla de dilatar la discusión de lo verdaderamente relevante y concertar soluciones en aspectos estrictamente secundarios. El convenio firmado entre el gobierno y la CSUTCB el 18 de junio de 1991, que puso fin al amago más publicitado de bloqueo de caminos y ferrovías, exceptúa todos los asuntos y las exigencias de parte de los campesinos que motivaron las medidas de fuerza (militarización, rol de la DEA, licitud del cultivo de coca) y se limita a reglamentar temas relativamente marginales, como ser créditos, funcionamiento de organizaciones de cooperación técnica y problemas legales de tenencia de tierras (66). (El acuerdo convalida lamentablemente los asentamientos ilegales de productores de coca en los parques nacionales y en áreas de protección ecológica.) Está demás aseverar que conflictos similares en el futuro quedan firmemente programados mediante un convenio que no satisface a ambas partes: los campesinos no consiguieron que el gobierno desista de los planes de represión militarizada y erradicación forzosa de los cultivos de coca y el gobierno no logró que los trabajadores rurales abandonen voluntariamente tales cultivos de carácter claramente ilegal (67).

- La otra medida de presión consiste en amenazar con la lucha armada. Diversos grupos campesinos productores de coca han manifestado su designio de armarse y de formar unidades de auto-defensa para hacer frente a la militarización y proteger "nuestra coca". El gobierno ha declarado que la constitución de tales "grupos irregulares" armados correspondería al delito de alzamiento armado contra la "seguridad y soberanía del Estado"; el gobierno respondería con la mayor severidad a estos intentos (68).
- Otros sectores campesinos propugnan una estrategia aún más radical, aunque menos realista: la conformación de un Estado nacional "plurinacional y socialista", centrado, sin embargo, en torno a las etnias indígenas que cultivan coca, dotado de todos los órganos y símbolos de un Estado soberano, incluido un ejército, y contrapuesto al actual Estado de blancos y mestizos. El gobierno precisó que tal actitud sería

considerada como sedición y subversión contra el sistema constitucional vigente y contra la democracia (69).

Es poco probable que estos propósitos puedan materializarse. Pero queda irresuelto el problema de los campesinos, que *volens volens* permanecen involucrados en actividades ilícitas (el cultivo excedentario de coca), porque aparentemente la agricultura tradicional no satisface sus expectativas actuales de ingresos; igualmente sin solución queda el dilema del gobierno, que debe y no puede reprimir a fondo la porción ilegal-delictiva de la economía informal ligada al narcotráfico y a la producción de coca y cocaína, porque ello acarrearía un fenómeno masivo de desocupación, carencia de divisas y un descenso general de ingresos. Tal como están las cosas, cabe esperar que no habrán cambios fundamentales en los próximos años y que las ambigüedades de la situación presente serán arrastradas por largo tiempo. La repetición cíclica de los enfrentamientos entre campesinos y gobierno está "asegurada" por la negativa de las bases de los trabajadores rurales de reconocer los convenios firmados entre su representación y los delegados del gobierno (70) y por su determinación de proseguir los cultivos excedentarios de coca (71).

NOTAS

- 1) En general con relación a la situación latinoamericana cf. Ernesto Kritz, *Análisis del sector informal urbano en América Latina*, en: Leticia Sainz (comp.), *El sector informal en Bolivia*, La Paz: CEDLA/FLACSO/ILDIS 1986, p. 60 sqq.; Kritz, *Políticas latinoamericanas en relación al sector informal urbano*, en: *ibid.*, p. 247 sq.; Alberto Bustamante Belaúnde, *El Estado mercantilista y el desarrollo del sector informal*, en: Roberto Hidalgo Trujillo (comp.), *Retos de política económica frente a la crisis social. Perspectivas para los años '90*, Lima: Fundación Friedrich Naumann / Habitat Perú Siglo XXI 1989, p. 77 sqq.; Rosa del Olmo, *La inter-nalización jurídica de la droga*, en: NUEVA SOCIEDAD, N° 112, marzo, marzo/abril de 1991, pp. 102-114.
- 2) *Ex definitione* las actividades de la economía informal no se ven reflejadas en las estadísticas oficiales. En los planes globales de desarrollo a mediano plazo apenas se menciona vagamente la economía informal en toda la esfera de la agricultura, el comercio, la construcción de viviendas y la extracción de oro. Cf. Ministerio de Planeamiento y Coordinación, *Estrategia de desarrollo económico y social 1989-2000*, La Paz: s.e. 1989, pp. 131, 142, 147, 187-202, 467-483
- 3) *Ibid.*, pp. 70-74, 197 sqq.- En este, como en otros documentos oficiales, se reconoce la situación crecientemente negativa de la agricultura formal (*ibid.*, p. 189), pero no se mencionan ni la interacción de la agricultura formal-legal

con la ilegal-delictiva ni las consecuencias destructivas de la agricultura de la coca a largo plazo, por ejemplo en el terreno de la ecología (ibid., p. 58).

- 4) Presidente Jaime Paz Zamora, "Coca por desarrollo" se ha convertido en tesis continental, en: PRESENCIA del 17 de febrero de 1990
- 5) Es imprescindible el mencionar que hay testimonios contrapuestos en torno a la efectividad de proyectos de desarrollo alternativo promovidos por el gobierno. Cf. *Campesinos de Cochabamba pierden interés en el Chapare*, en: PRESENCIA del 17 de marzo de 1991 (sobre las mejores condiciones de vida que representan los proyectos de desarrollo alternativo).
- 6) Gregorio Lanza, *El gobierno no tiene una estrategia nacional contra el narcotráfico*, en: PRESENCIA del 3 de febrero de 1991, suplemento REPORTAJES, p. 3
- 7) *Declaración de Cartagena*, en: ESTADO & SOCIEDAD. REVISTA BOLIVIANA DE CIENCIAS SOCIALES, vol. 6, No. 7, enero/junio de 1990, p. 58 sqq.
- 8) Cf. por ejemplo: Roberto Jordán Pando, *Coca, cocaína, interdicción y narcotráfico*, en: ESTADO & SOCIEDAD, ibid., p. 27; Humberto Vacafior, *El precio de Cartagena*, en: PRESENCIA del 19 de febrero de 1990, p. 2.
- 9) Cf. Presidencia de la República de Bolivia, *Estrategia nacional del desarrollo alternativo. La economía de la coca y el desarrollo económico en Bolivia: un enfoque alternativo*, La Paz: s.e. 1990, p. 21, 36, 38 sq., M8
- 10) El impacto del complejo coca/cocaína se refleja no sólo en los ingresos, sino también en otras variables como el empleo, el comercio exterior, el tipo de cambio, la disponibilidad de divisas y la estructura y el nivel de precios (además de producir cambios substanciales en toda el área productiva y distributiva).
- 11) Ibid., p. A3
- 12) Ibid., p. A4
- 13) Por ejemplo cf. ibid., p. 39; COPPAL analizará incidencia del narcotráfico en región andina, en: PRESENCIA del 23 de julio de 1990; Sólo con la cooperación mutua entre naciones será posible combatir el narcotráfico, en: PRESENCIA del 24 de julio de 1990; Presidente Paz Zamora, "Coca por desarrollo" se ha convertido en tesis continental, en: PRESENCIA del 17 de julio de 1990; Al gobierno no le interesa una sustitución agrícola de la coca, sino un proceso macroeconómico, en: ULTIMA HORA del 23 de abril de 1990; Vertiginosa erradicación de cocales puede quebrar la economía del país, en: PRESENCIA del 21 de agosto de 1990; Participación de países andinos es esencial en guerra antidroga, en: PRESENCIA del 2 de marzo de 1990
- 14) SUBDESAL INFORMA (Boletín de Prensa de la Subsecretaría de Desarrollo Alternativo), año 1, No. 1, 14 de octubre de 1990, passim
- 15) Asesor de la Presidencia de la República, *No obstante esfuerzos, la producción de la coca crece*, en: PRESENCIA del 3 de febrero de 1991 (tercera sección: REPORTAJES), p. 7; Dirigente Evo Morales, *En los hechos no se sustituye la coca*, en: ibid., p. 10.- Cf. los informes con un contenido totalmente diferente provenientes de fuentes oficiales, cuya fiabilidad es dudosa: Informe de Subsecretario: en menos de cuatro meses se superó la erradicación de cocales de un año, en: ULTIMA HORA del 23 de abril de 1990; En el primer semestre promedio de reducción de cultivos de coca fue de 730 ha por mes, en: PRESENCIA del 20 de julio de 1990

- 16) Rasso Ruppert, *Das Koka- und Kokaingeschäft in Bolivien. Organisation, räumliche Struktur, wirtschaftliche und soziale Effekte* (= El negocio de la coca y la cocaína en Bolivia. Organización, estructura espacial, efectos económicos y sociales), Nürnberg: GERAG 1990, p. 185 sq.
- 17) Cf. *ibid.*, p. 190 sqq.
- 18) *Gobierno disolverá juzgados antidroga*, en: PRESENCIA del 5 de abril de 1990; *Supresión de juzgados especiales*, en: PRESENCIA del 6 de abril de 1990; *Corte Suprema contraria a creación de "supertribunales"*, en: PRESENCIA del 6 de abril de 1990
- 19) Mediante el Decreto Supremo 22794 del 9 de mayo de 1991 se otorgó a CONALID la atribución de la coordinación de la "estrategia nacional" contra el narcotráfico (lo que ya lo hacía la ley 1008).- Cf. *Gobierno reglamentó desarrollo alternativo y substitución de coca*, en: PRESENCIA del 1 de junio de 1991
- 20) Cf. *Presidencia...*, op. cit. (nota 9), p. 23 sqq., 31, 35 sqq.; Rasso Ruppert, op. cit. (nota 16), pp. 47-74, 190 sq.
- 21) *Presidencia...*, *ibid.*, p. E50; *La situación legal de la coca*, en: BOLIVIA 2000, vol. 1990, No. 1, Dossier especial: *Historia del tráfico de drogas en Bolivia*, p. XIV; Carlos Krings Fortún, *Cochabamba y la coca*, en: PRESENCIA del 3 de febrero de 1991, tercera sección; REPORTAJES, p. 5
- 22) Cf. Javier Palza Medina, *Sustitución de cocales en 1989*, en: PRESENCIA del 30 de noviembre de 1989; *Cultivos de coca sobrepasan 50.000 hectáreas en Bolivia*, en: PRESENCIA del 12 de agosto de 1990; Raúl Barrios Morón, *Narcotráfico y concertación política andina*, en: PRESENCIA del 19 de octubre de 1989; *Sustitución de cultivos no resuelve producción excedentaria de coca*, en: PRESENCIA del 11 de abril de 1990; *Se requieren \$US 400 millones para emprender erradicación de coca*, en: PRESENCIA del 2 de marzo de 1990; *Existen áreas tradicionales de coca, las demás son ilícitas*, en: PRESENCIA del 16 de julio de 1989; *Se erradicarán 8500 ha de coca en 1990*, en: LA RAZON del 30 de septiembre de 1990
- 23) *800.000 informales evitan convulsión social*, en: PRESENCIA del 14 de abril de 1991; *La informalidad, un mal necesario para el gobierno*, en: *ibid.*- En ambos artículos se hallan declaraciones del Ministro de Trabajo, Oscar Zamora Medinacelli
- 24) *Declaración de Cartagena* (suscrita por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Perú), en: PRESENCIA del 16 de febrero de 1990, sección (REPORTAJES): *La "cumbre" de la coca*, *passim*
- 25) *En Cartagena Paz Zamora destaca reconocimiento a necesidad de substituir economía de la coca por economía legal*, en: PRESENCIA del 16 de febrero de 1990; *Se acordó lucha integral sin precedentes contra narcotráfico*, en: *ibid.*
- 26) Jubel Rubén Ardaya, *Coca por armamentos*, en: PRESENCIA del 18 de marzo de 1990: "El 'éxito' logrado por la tesis boliviana nos hizo creer que logramos sensibilizar al gobernante norteamericano y su apoyo económico iba a fluir para que los bolivianos podamos construir nuestro desarrollo alternativo [...]. Pero la alegría nos duró poco, porque los que estábamos esperando la ayuda económica [...] nos enteramos hay que más bien nos mandarán armas para que los militares intervengan en la lucha contra el narcotráfico".
- 27) *En Lucha contra el narcotráfico Bolivia no aceptará intervención militar directa del Pentágono*, en: PRESENCIA del 9 de julio de 1990; *Asesor de EE.UU. desmiente acción militar contra narcotraficantes*, en: *ibid.*

- 28) *Pentágono planifica guerra contra mafia del narcotráfico*, en: PRESENCIA del 8 de julio de 1990; *Según plan militar de EE.UU. Bolivia será el centro andino de lucha contra el narcotráfico*, en: PRESENCIA del 11 de julio de 1990
- 29) Entrevista con el jefe de prensa de la *Confederación de Empresarios Privados de Bolivia*, La Paz, 15 de diciembre de 1990
- 30) Comandante de la FELCN, *Narcotráfico esclaviza a campesinos bolivianos*, en: PRESENCIA del 14 de abril de 1991
- 31) Gustavo Fernández (ministro Secretario de la Presidencia de la República), *Militarización? NO! Esta es la verdad*, en: ULTIMA HORA del 24 de marzo de 1991; cf. también: *Enfático desmentido del Ministro de Defensa: "No está en marcha ningún plan de militarización de la lucha antidroga"*, en: PRESENCIA del 16 de marzo de 1990
- 32) Sobre esta temática cf. Rasso Ruppert, op. cit. (nota 16), p. 188
- 33) El "modelo integral boliviano", propuesto por Aníbal Aguilar Gómez, se distingue del plan oficial, basado en la militarización, sólo por el énfasis en una "reconversión gradual" y "voluntaria"; las metas de este modelo son totalmente convencionales y pueden ser suscritas por todos los grupos involucrados: "paz social, democracia y desarrollo", "búsqueda y negociación de mercados y condiciones preferenciales para productos bolivianos que tengan ventajas comparativas" (que nunca llegan a ser especificadas).- Cf. Aníbal Aguilar, *Militarización de las áreas productoras de coca*, en: Carlos F. Toranzo Roca (comp.), *Coca por desarrollo y militarización*, Cochabamba: ILDIS/CERES 1991, p. 9 sq., 23 sq.
- 34) El ex-rey de la cocaína, Roberto Suárez, declaró en 1983 que la coca era insustituible en Bolivia por razones económico-financieras y que la confederación sindical campesina debería, por consiguiente, controlar las áreas y los cupos de producción y distribución. Cf. IPE, No. 1008, vol. XXI, p. 105 sq. (del 11 de julio de 1983)
- 35) Huáscar Cajías K., *La substitución de cicales, un desastre económico?*, en: PRESENCIA del 1 de marzo de 1990
- 36) Cf. Hernando Velasco, *La coca en las Naciones Unidas*, en: PRESENCIA del 28 de noviembre de 1989; *Cumbre antidroga reafirmó necesidad de atacar demanda*, en: PRESENCIA del 12 de abril de 1990; Carlos D. Mesa Gisbert, *Las premisas tramposas de la militarización*, en: PRESENCIA del 31 de marzo de 1991; Mesa Gisbert, *Narcotráfico, tenemos las ideas claras?*, en: PRESENCIA del 25 de junio de 1989
- 37) Los casos de corrupción entre oficiales de policía y de las Fuerzas Armadas, encargados de la lucha contra el narcotráfico, ha aumentado en forma alarmante en los últimos años. Cf. *Jefe policial capturado con 40 kg de cocaína*, en: ULTIMA HORA del 24 de abril de 1987; *Informe oficial: comandante de la FELCN/Oruro implicado en tráfico de precursores*, en: PRESENCIA del 14 de abril de 1991; *Implicados altos jefes de la Policía: Fue descubierta red de traficantes de precursores*, en: PRESENCIA del 14 de abril de 1991
- 38) *Notas reversales sobre términos de cooperación adicional entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico de drogas*, en: ESTADO Y SOCIEDAD. REVISTA BOLIVIA DE CIENCIAS SOCIALES, vol. 6, No. 7, enero/junio de 1990; pp. 68-70; el famoso Anexo III del mismo acuerdo (9 de mayo de 1990) lleva el título: *Programa Antinarcóticos. Participación Ampliada de las Fuerzas Armadas de Bolivia*, en: *ibid.*, pp. 82-87

- 39) Estimaciones de Rasso Ruppert, op. cit. (nota 16), p. 202, 204 sq.
- 40) Entrevista con el Profesor Carlos F. Toranzo Roca (La Paz, 9 de abril de 1991); entrevista con el Profesor Armando Méndez Morales (La Paz, 17 de abril de 1991).- Méndez Morales añadió que la dilatación de la economía informal erosiona sólo la legitimidad del Estado sobreprotector e intervencionista; por otra parte, un ordenamiento genuinamente liberal tendría que convivir con una producción y un consumo irrestrictos de drogas.- Desde una perspectiva ideológica diferente cf. Roberto Jordán Pando, op. cit. (nota 8), p. 17; Gonzalo Torrico (Subsecretario de Defensa Social), *Cartagena puede ser el comienzo del fin del narcotráfico*, en: Bolivia 2000, Dossier especial, 1990, no. 1, p. XIII
- 41) Rosa del Olmo, *La militarización generará más violencia*, en: ULTIMA HORA del 24 de marzo de 1991
- 42) *Militarización de la lucha antidrogas?*, en: PRESENCIA del 17 de marzo de 1991; *Partidos latinoamericanos rechazan militarización de lucha antidroga*, en: PRESENCIA del 25 de julio de 1990; *Las iglesias y el problema cocalero*, en: PRESENCIA del 3 de febrero de 1991; *Coca, cocaína: el problema se origina en la pobreza*, en: ibid.
- 43) *Militarización de la lucha antidroga pondrá en peligro la democracia*, en: PRESENCIA del 12 de mayo de 1991; Carlos Krings Fortún, *Chapare: desarrollo primero, coca después*, en: PRESENCIA del 18 de febrero de 1990
- 44) *Presidencia ...*, op. cit. (nota 9), p. 2 sqq., 5, E43 sqq., E50; Gernot Volger, *Kokainbusiness in Lateinamerika: wirtschaftliche und politische Dimensionen* (= El negocio de la cocaína en América Latina: dimensiones económicas y políticas), en: IBERO-AMERIKANISCHES ARCHIV, vol. 16 (1990), No. 2, p. 201; Ana María Vera, *Droga y ecología: un duelo a muerte*, en: ULTIMA HORA del 12 de abril de 1991
- 45) Cf. la excelente investigación de Eva Dietz, *Der Funktionswandel der Koka in Bolivien* (= El cambio de la función de la coca en Bolivia), Saarbrücken: Breitenbach 1990, p. 102, 105, 107
- 46) Raúl Barrios Morón, *Coca, narcotráfico y violencia*, en: PRESENCIA del 15 de febrero de 1990
- 47) Ibid.- Cf. también Humberto Vacaflor, *El precio de Cartagena*, en: PRESENCIA del 19 de febrero de 1990
- 48) Aníbal Aguilar Gómez, op. cit. (nota 33), p. 13
- 49) Ibid., p. 15
- 50) Ibid.
- 51) Ibid., p. 29
- 52) *EE.UU. apoyan militarización de zonas cocaleras*, en: PRESENCIA del 19 de abril de 1991; *Llegarán 60 asesores de EE.UU. para capacitar a 2000 efectivos del ejército*, en: PRESENCIA del 17 de marzo de 1991; *Fue aprobada reestructuración de organismos antidroga*, en: PRESENCIA del 13 de noviembre de 1989
- 53) *Pacto obrero-cívico de resistencia a militarización y Código Minero*, en: ULTIMA HORA del 12 de abril de 1991; Diputado Filemón Escobar, *Erradicación forzosa de la coca generará respuestas violentas*, en: PRESENCIA del 28 de octubre de 1991.

veraron que respetarán el acuerdo suscrito por sus dirigentes, pero que seguirán peleando por sus derechos.

- 68) *Campesinos cocaleros apoyan lucha armada*, en: ULTIMA HORA del 12 de abril de 1991; *Habla Evo Morales...*, op. cit. (nota 59), p. 5, donde se afirma que la lucha armada fue una de las opciones decididas por el Primer Encuentro Andino de Productores de Coca.
- 69) *Propuesta de un nuevo Estado campesino es calificada como "sedición"*, en: PRESENCIA del 23 de abril de 1991.- Sobre esta temática cf. *Mafias armadas del narcotráfico operan en regiones del Chapare*, en: ULTIMA HORA del 29 de marzo de 1992; *Fuerzas combinadas ejecutan gigantesca operación antidroga*, en ibid.
- 70) Rafael Archondo, *Un bloqueo con muchas piedras en el camino*, en: LA RAZON del 23 de junio de 1991
- 71) Sobre las últimas causas de este impasse cf. Amanda Dávila, *Los deseos insatisfechos de la "Única"*, en: PRESENCIA del 23 de junio de 1991; Carlos Krings Fortún, *La coca y la vida*, en: PRESENCIA del 23 de junio de 1991; Emma Robson, *El reemplazo de la gallina de los huevos de oro*, en: ULTIMA HORA del 8 de septiembre de 1991.



III

LA ECONOMIA INFORMAL Y LAS ALTERACIONES EN EL AREA SOCIO-CULTURAL

URBANIZACION SIN INDUSTRIALIZACION: EFECTOS MACROSOCIALES DE LA MIGRACION INTERNA VINCULADA A LA ECONOMIA INFORMAL

Eliana Castedo Franco

Basta revisar las noticias de los principales periódicos bolivianos para detectar un hecho descollante en el contexto del auge de la economía paralela: la migración interna reciente. La existencia de una estrecha relación entre las corrientes migratorias de los últimos años y las fuentes de trabajo informales es una realidad conocida en Bolivia. Las personas entrevistadas en el marco de esta investigación, por ejemplo, no tuvieron dificultad para opinar respecto a ese vínculo. Conforme algunas de ellas se trataría de un proceso con consecuencias positivas para el país en general en el sentido de constituir un factor de integración nacional (1); para otros, por el contrario, originaría graves problemas, sobre todo de naturaleza urbana, al promover el crecimiento acelerado de ciertas regiones en detrimento de otras (2).

Los datos demográficos a disposición confirman el éxodo rural y urbano, especialmente de zonas del altiplano, hacia localidades en los valles y en los llanos que experimentan un desarrollo económico en gran parte gracias a la presencia de ocupaciones vinculadas al eje coca-cocaína y al SIU. El resultado es la creciente urbanización del país aunque existen importantes corrientes poblacionales dirigidas a los distritos rurales conocidos por sus cultivos de coca y sus fábricas de pasta de cocaína. El crecimiento de los centros urbanos no va acompañado de una industrialización que permita a las economías locales absorber de manera productiva la mano de obra que diariamente aumenta con la llegada de nuevos

migrantes. La consecuencia es la marginalidad económica, social y también cultural que abarca a un número cada vez mayor de personas; tendencia manifiesta en el incremento de los barrios marginales sobre todo alrededor de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Este tipo de urbanización, sin embargo, trae consigo repercusiones menos negativas que, sobre todo desde el punto de vista global, son importantes. La distribución espacial de los habitantes provocada por los flujos migratorios de los últimos años contribuye a evitar profundos desequilibrios regionales así como la concentración demográfica en una sola metrópoli con la consecuente primacía de una ciudad desproporcionadamente más populosa que las restantes; dos características muy frecuentes entre los países latinoamericanos.

En 1950 la población boliviana era en un 33,90% urbana y en un 66,10% rural. Hacia fines de la década del ochenta los porcentajes variaron en favor de la cantidad de residentes en centros urbanos que llegó al 51,31% (3). Estimaciones de expertos indican que en el año 2000 el 56,6% del total de pobladores residirá en ese tipo de conglomerados (Villa 1989: 158). No obstante este incremento relevante a nivel nacional, el grado de urbanización que caracterizará al país al iniciarse el siglo XXI corresponderá recién al que tipificaba a la mayoría de las naciones de Latinoamérica en la década de 1970 (Villa 1989: 159). Algunas de ellas ya finalizaron el decenio de 1980 con porcentajes más elevados. Por ejemplo, en la Argentina en esa época el 84% de sus moradores residían en ciudades; en el Brasil el tanto por ciento respectivo fue de 73%; en Chile: 83%; en Ecuador: 55,4%; en Colombia: 70%; en Nicaragua: 56%; en Panamá: 54% y en el Perú: 68% (4). Entre 1976-1988 la tasa media anual de crecimiento urbano en Bolivia fue de 4,4% en tanto que la rural alcanzó el nivel de 1,2% (INE s.f.: 35). Esta evolución se refleja en el desarrollo de las ciudades. De acuerdo con el Censo de 1976 aquel año existían 4 urbes con más de 100.000 habitantes, estimándose para 1988 un total de 7; por su parte, en la segunda mitad de los setenta había una única ciudad que superaba a los 500.000 mientras que hacia fines de los ochenta se elevó a dos ese número (INE 1981: 35 e INE s.f.: 36). La tasa decreciente de fecundidad es también un indicador significativo de la creciente aglomeración de personas en centros urbanos porque la correspondiente a ellos tiende a bajar resultando un promedio nacional menor. Durante el período anteriormente indicado la tasa

global por mujer fue de 5,0 hijos en el país; en el área urbana de 4,2 y en la rural de 6,1 (INE s.f.: 35). Todavía entre 1970-1975 la tasa nacional había sido de 6,50 (Villa 1989: 122).

Si bien la urbanización en la actualidad está indirectamente vinculada a la expansión de la economía informal, la nueva distribución de la población urbana depende en gran medida de dicha expansión porque los departamentos donde ella se da aumentaron su participación en el total. En 1976 el de Santa Cruz tenía al 19,45% de todos los residentes urbanos en Bolivia mientras que en 1988 le correspondió el 21,99%; el de Cochabamba aumentó del 14,13% al 15,09% respectivamente, al mismo tiempo que en los tres departamentos con centros mineros disminuyeron los habitantes de las ciudades. Hacia finales de la década del setenta el departamento de La Paz albergaba todavía al 36,21% en tanto que para 1988 el porcentaje fue de 31,70; en Potosí estuvieron radicados el 9,78% y más tarde, apenas el 7,08%; Oruro pasó del 8,24% a tener solamente el 6,23% (Ministerio de Planificación y Coordinación/INE 1981: 29 e INE s.f.: 36). La ausencia de una base industrial sólida es otra característica del proceso de urbanización que muestra un estrecho vínculo con el auge de la economía paralela. El peso significativo en ella del comercio y de actividades en el área de servicios es un nuevo golpe al de todos modos bajo nivel de desarrollo industrial que alcanzó el país —debido, por ejemplo, a la masiva presencia de productos contrabandeados. El predominio en la industria nacional de sectores tradicionales como la fabricación de bebidas, alimentos, calzados, etc., y el escaso aporte de las manufacturas al PIB son indicadores, ya mencionados, de la incipiente industrialización boliviana. En correspondencia con la profunda crisis del sector durante los últimos años —considerando un índice de 1980 = 100, en 1988 el producto de la industria había llegado a 67.6 (Doria Medina 1990: 20)— cayó la participación de los fabriles en el total de la población ocupada. Si en 1981 se colocaba en tercer lugar como fuente de empleo abarcando al 10% de esa población, seis años después con 7,05% fue desplazado el sector manufacturero a la quinta posición a continuación de la agricultura, los servicios públicos y privados, el comercio y la rama de transportes/comunicaciones (Baudoin 1990: 44).

La escasa absorción de la creciente PEA en ocupaciones industriales no es el único problema derivado de la mayor concentración de personas en centros urbanos; también la infraestructura

urbanística local no se encuentra en condiciones de acompañar el ritmo acelerado del crecimiento demográfico. El resultado es la escasez de viviendas, la ausencia de una buena red de transporte público, la falta de servicios básicos en los barrios marginales, etc. La situación de Santa Cruz de la Sierra será empleada para ejemplificar con mayor detenimiento consecuencias que trae consigo la congregación de individuos en una urbe cuya economía, y en especial su aparato productivo, no está en condiciones de acompañar el ritmo de la expansión poblacional. Antes de ingresar a la presentación de ese caso ilustrativo consideramos conveniente indagar otras facetas del proceso reciente de urbanización que, como fue adelantado, tiene asimismo consecuencias positivas.

a. Economía informal y migración interna

La multiplicación de actividades no registradas en la economía nacional repercutió de manera significativa en la migración interna reciente: aceleró su ritmo, alteró el destino de las corrientes migratorias y frenó la emigración de los departamentos de La Paz y Cochabamba. Además, como factor de atracción y actuando en estrecha vinculación con los factores de expulsión —especialmente la crisis del sector minero y las consecuencias de la aplicación de la NPE— modificó el carácter de la migración. La migración tradicional rural-urbana fue complementada por otras dos: la urbano-urbana y la urbano-rural.

Considerando la población de 5 y más años de edad se constata que entre 1971 y 1976 40.926 personas cambiaron anualmente de domicilio; entre 1983 y 1988 la media descendió a 35.160. Sin embargo, para el lapso 1984-1989 la situación cambió considerablemente debido a que el promedio anual ascendió ya a 54.270 tomando en cuenta únicamente al total de individuos que migraron a una de las diez principales ciudades —las nueve capitales departamentales y El Alto (5). El aceleramiento cada vez mayor del ritmo de migración se observa de igual manera en el promedio válido para 1988-1989 que volvió a aumentar a 85.458 migrantes a dichos centros urbanos. Esta aceleración provoca una "avalancha humana" a cuatro urbes: entre 1984 y 1989 llegaron a Santa Cruz de la Sierra un promedio de casi 35 personas por día; a la ciudad de Cochabamba: 34; a La Paz: 25 y a El Alto: 24. Analizando los flujos migratorios de 1988 a 1989 observamos que la situación

empeoró particularmente para la capital cruceña porque el número de inmigrantes aumentó a 53 individuos diariamente en tanto que el correspondiente a la urbe cochabambina, con un total de 34, mantuvo su promedio de años anteriores. Tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto las cantidades se incrementaron considerablemente al elevarse a un total de 46 personas para el primer caso, y a 41 para el segundo (6).

La dirección de los flujos migratorios durante los últimos años revela la existencia de un vínculo estrecho entre ellos y el auge de la economía informal. El siguiente cuadro muestra que las zonas expulsoras son principalmente aquéllas con centros mineros y las de atracción, los enclaves informales -v. gr. la zona del Chapore- y las urbes con un sistema económico fuertemente impregnado por aquella expansión.

DEPARTAMENTO	% DEL TOTAL DE EMIGRANTES*		% DEL TOTAL DE INMIGRANTES*	
	1971-1976	1983-1988	1971-1976	1983-1988
Potosí	16,98	27,46	8,39	5,61
La Paz	20,63	17,53	17,37	14,86
Oruro	13,00	15,66	9,80	6,12
Cochabamba	18,15	12,08	16,39	32,63
Santa Cruz	9,18	8,74	29,07	23,66
Chuquisaca	10,37	8,11	6,01	5,10
Beni	6,46	5,22	4,45	4,02
Tarija	3,80	4,14	6,50	6,46
Pando	1,39	1,02	1,97	1,47

Elaboracion Propia

Fuente: Villa 1989: 142 e INE 1989a: 56

* Población de cinco años y más

La comparación de los movimientos poblacionales en los períodos 1971-1976 y 1983-1988 muestra que, en correspondencia con la evolución económica, en la segunda fase el departamento de Potosí fue el único en aumentar de manera considerable su participación en el total de emigrantes y que en el de Cochabamba el éxodo se redujo significativamente. La decadencia de la produc-

ción minera explica que 60% del total de emigrantes procedan de la región del altiplano, —que incluye también a La Paz y a Oruro— donde, entre otros, se encuentran los distritos mineros de Catavi, Siglo XX, Quechisla, Colquiri, Caracoles, Huanuni, San José. Asimismo es debido a esa decadencia que de las tres regiones del territorio boliviano solamente la zona altiplánica haya conocido un aumento de emigrantes mientras que en los Llanos y de manera considerable en los Valles la emigración desminuyó. Es sobre todo el auge del cultivo de la hoja de coca en la zona del Chapare el que permite entender la reducción de la emigración cochabambina —lo que tiene un gran peso en el total regional— así como el hecho de que la mayoría de los inmigrantes para el quinquenio 1983-1988 haya decidido establecerse en el departamento del Valle. De igual manera, por ese auge el departamento de Santa Cruz fue desplazado a la segunda colocación durante los años ochenta cuando recibió 23,66% de los migrantes; un porcentaje menor al del período anterior, lo cual explica que desde el punto de vista de la participación porcentual en el total de inmigrantes haya caído el correspondiente a las llanuras así como el caso del Altiplano. Cabe destacar que el departamento paceño se distingue de los otros mineros porque al contrario de ellos allí disminuye la cantidad de individuos que emigran. La ubicación de la ciudad de El Alto y de los Yungas en su territorio explica esa diferencia por constituir ambos un polo de atracción importante también para los expulsados de las minas paceñas. Un elevado porcentaje de quienes migraron recientemente a El Alto, el 75% en 1988 (Sandóval y Sostres 1989: 38), procedían del mismo departamento. En resumen tenemos que los tres departamentos receptores de los flujos poblacionales ocurridos durante la última década son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. La novedad que trae la presencia de la economía informal es el lugar privilegiado que adquiere Cochabamba colocándose, como fue indicado, en primer lugar si se toma en cuenta los migrantes recientes, y en segundo lugar, antes que La Paz, considerando los migrantes de toda la vida (7).

La vinculación entre migración reciente y fuente informal de trabajo tiene validez especialmente para individuos pertenecientes a estratos bajos, urbanos y rurales, de la sociedad. Debido a su limitada formación profesional, a la carencia de capital o de un acceso ventajoso a créditos entre otras razones, esos individuos no cuentan con otra alternativa de (auto-) empleo que no sean las actividades de la economía paralela. Aquellos de estratos medios y

altos consiguen, mayoritariamente, ubicarse en el sector formal de la economía. Sin embargo, lo hacen sobre todo en puestos que recibieron un impulso considerable para expandir gracias al auge de la informalidad. Es por ejemplo el caso de la serie de cargos ejecutivos, de diferentes categorías, en bancos, casas importadoras, hoteles y restaurantes, canales de televisión, tiendas comerciales, agencias de turismo, etc. que tuvieron un imponente auge en vinculación con la necesidad de legalizar las ganancias del tráfico de cocaína. Por este motivo se dio durante la década pasada también un intenso flujo migratorio entre las principales ciudades cabeza de departamento. Del total de migrantes de cinco y más años de edad que entre 1984 y 1989 se establecieron en las diez (8) ciudades más importantes del país el 34,37% emigró de las capitales departamentales y la mayoría lo hizo de La Paz, Oruro y Cochabamba (9). El 42% de los paceños migró, en el mismo lapso, a la capital cruceña y el 33% a la cochabambina así como el 40% de los orureños; por su parte, los cochabambinos en un 45 por ciento prefirieron migrar a Santa Cruz de la Sierra. Las economías pujantes gracias a la presencia de actividades informales explica la atracción que ejercen Cochabamba y Santa Cruz para habitantes de las restantes capitales. Los inmigrantes entre 1988 y 1989 a la urbe citada en primer término procedieron en un 52% de alguna de aquéllas; en el caso cruceño se trata del 36% (INE 1989b: 19). En este contexto es oportuno destacar también que del total de personas nacidas en la ciudad de La Paz residentes en 1989 en la capital oriental, 51 por ciento había llegado entre 1984 y 1989 y de los que vivían en la cochabambina el 59%; por su parte, el 85% de los cruceños (10) establecidos en Cochabamba migró en ese quinquenio; el 37% de los potosinos y el 27% de los orureños radicados en Santa Cruz y, finalmente, el 29% de los cochabambinos que vivían en 1989 en Santa Cruz de la Sierra.

La otra dirección que rompe la tradicional rural-urbana es la protagonizada principalmente por los ex-mineros que de centros urbanos se dirigieron a las zonas rurales del Chapare y de los Yungas buscando obtener (mejores) ingresos con el cultivo de la hoja de coca o por lo menos trabajando como "pisacocas". El descenso acelerado del precio de la hoja de coca durante los últimos años frenó en cierta medida este flujo migratorio y no faltaron los casos en los cuales la precariedad de la nueva situación obligó a las personas a retornar a las ciudades y de esa manera a afianzar aún más el proceso de urbanización.

b. Efectos de los flujos migratorios recientes en la distribución regional de la población

Al analizar la crisis económica de los años ochenta en Bolivia estudiosos coinciden en tipificarla como expresión de la decadencia del modo de acumulación vigente desde la Revolución Nacional de 1952 (11). La investigación de los movimientos migratorios de reciente data, por su parte, revela que uno de los objetivos de aquella revolución se vió definitivamente consolidado en la década pasada. Trátase de la denominada "Marcha hacia el Oriente", concebida con el fin de incentivar el traslado de la población de la región altiplánica, de elevada densidad, hacia los llanos casi totalmente despoblados. La migración interna vinculada a la expansión de la economía informal tiene como consecuencia el afianzamiento del eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz que sustituye al anterior compuesto por La Paz-Oruro-Potosí.

El análisis de las corrientes migratorias mostró que el departamento de Cochabamba recibió el mayor número de inmigrantes entre 1983 y 1988; antecediendo a los de Santa Cruz y La Paz que en el período anterior, entre 1971 y 1976, fueron los dos primeros. Los tres departamentos están ubicados en las tres regiones principales del territorio nacional, con lo cual el hecho de que en ellos se concentre el 71,15% (12) de los migrantes durante el quinquenio de la década de 1980 no significa que a ese grado de concentración corresponda el predominio de una zona sobre las otras.

Por el contrario, representa una distribución más equitativa de la población en los términos siguientes:

DISTRIBUCION REGIONAL DE LA POBLACION (en porcentajes)

	1950	1976	1988
Altiplano	56,4	52,7	49,5
Valles	29,6	27,5	27,8
Llanos	14,0	19,8	22,7

Elaboracion Propia

Fuente: Villa 1989: 127; Min. de Planeamiento y Coordinación/INE 1981: 29 e INE s.f.: 36

La concentración demográfica en el Altiplano hasta los años cincuenta del presente siglo correspondía al predominio de la minería como principal fuente generadora de divisas. Epoca en la cual la región valluna cumplió la tarea de abastecer con productos agrícolas a los centros urbanos y a los distritos mineros, en tanto que los llanos —exceptuando el breve período del auge de la goma entre fines del siglo pasado y comienzos del presente— jugaron un rol económico marginal. La densidad de cada zona correspondía con su función económica. En el Altiplano la densidad era de 5,17 habitantes por km², en los Valles: 5,89 y en los Llanos: 0,55 de acuerdo con datos oficiales del Censo de 1950 (13).

Para acabar con ese desequilibrio económico y demográfico y también con la intención de mejorar la situación desastrosa en la que se encontraba el sector agropecuario y de disminuir la importación de productos agropecuarios factibles de ser producidos en el país, el gobierno del MNR llevó a cabo "la apertura y el desarrollo de las riquezas del Oriente" (Reye 1970: 28).

A pesar de la relativa diversificación que alcanzó la economía boliviana a partir de la segunda mitad de los años cincuenta la minería, concentrada en el Altiplano, continuó siendo el eje principal de su articulación hasta el derrumbe del precio internacional del estaño, en 1985. En el contexto de la crisis del sector minero no sorprende el hecho, ya mencionado, de que los departamentos de Potosí y Oruro perdieron población urbana entre 1985 y 1988 —en el caso potosino los pobladores rurales igualmente disminuyeron de un total de 591.320 a 435.100 (14) en ese período— en tanto que aquéllos con crecimiento sostenido en la actualidad, es decir, Santa Cruz y Cochabamba, aumentaron su colectividad urbana. La población urbana y la rural decrecieron en la zona occidental del país sin que las ciudades de La Paz y El Alto así como la región de los Yungas hubiesen logrado frenar ese proceso gracias al crecimiento demográfico que las caracterizó. En 1950 le correspondía a la zona del Altiplano el 61,48% de la población urbana del país y el 53,31% de la rural; para el año 1988 los datos correspondientes son de 45,01% y 48,20% respectivamente (15). En los valles estaban a principios de los años cincuenta, 24,21% de los residentes urbanos y 32,69% de los rurales; y hacia fines de los ochenta, la proporción urbana cayó a 22,46% y la rural a 29,92%. Los llanos aumentaron su participación tanto en el total de la población urbana —de 14,31% pasó a 26,17%— como en el de

la población del campo que subió de 13,99% a 16,24%. Una consecuencia relevante de esta nueva situación —donde se da una distribución regional más equitativa de la población— es la de que en Bolivia tienden a desaparecer los desequilibrios regionales constituyendo el país una de las excepciones entre las naciones latinoamericanas porque en él no existen diferencias en el nivel de desarrollo económico de sus tres regiones principales similar a las que se dan v.gr. en el Brasil entre el paupérrimo Noreste y el Sur, altamente desarrollado. Esto no quiere decir que en el interior de cada región no encontremos desniveles de ese tipo. Considerando la situación en los llanos, justamente por el auge que algunas de sus localidades experimentan en la actualidad, observamos un acentuado contraste entre el atraso de Cobija, capital del departamento de Pando, y el progreso de Santa Cruz de la Sierra.

A diferencia de la situación en décadas pasadas ahora cada región cuenta con un importante centro en torno al cual giran los departamentos que la componen, el que a su vez se encuentra en una interdependencia económica, política y cultural con los centros de las otras zonas. Las ciudades de La Paz y El Alto en el Altiplano, la ciudad de Cochabamba en los Valles y la de Santa Cruz de la Sierra en los Llanos por su ubicación dispersa a lo largo de las principales zonas geográficas no dan lugar al predominio de una sobre las otras. La ausencia de ese predominio permite que el regionalismo en la actualidad sea entendido de modo diferente al de años atrás. De acuerdo con Romero Pittari los nuevos movimientos regionalistas antes que "constituir (...) un pretexto para aislarse, para separarse del conjunto", constituirían "una base para promover una acción colectiva encaminada a participar en el establecimiento de decisiones en distintos planos, desde el local hasta el de la nación, y donde la dimensión territorial se halle representada." (Romero Pittari 1989: 95) Lo que se persigue sería, "[...] una cierta autonomía del municipio y la región que, sin perder vínculos con los intereses globales de la sociedad, consiga una aproximación del poder al ciudadano, en contraposición a las formas tradicionales de organización social construidas en torno a una idea del poder centralista, autoritario y monopolizador de la racionalidad." (Romero Pittari 1989: 95) Es en este nuevo contexto socio-económico que la descentralización deviene un tema relevante para la discusión y el enfrentamiento políticos, y que los Comités Cívicos se tornan los portadores más representativos de

los intereses regionales. En calidad de actores sociales defienden esos intereses que como sucede con el Comité Pro-Santa Cruz están orientados a obtener el reconocimiento nacional acorde con el peso económico alcanzado; o como el de Potosí, que pretende frenar el proceso de decadencia desencadenado por el derrumbe minero. Retomando las reflexiones de Romero Pittari cabe resaltar que "a diferencia de los tradicionales movimientos sociales que oponían las clases populares a las oligarquías o al Estado [...] por el control del poder político, para transformar las relaciones sociales y la cultura, la novedad del movimiento regional (contemporáneo, E.C.F.) estriba en su intento de redistribuir territorialmente el poder desde la sociedad civil, robustecida por la revitalización de una cultura común y así influir en los procesos de cambio social. Estos movimientos regionales pasan a través de las clases y las ideologías, revolucionarias o conservadoras, pues sus integrantes se reclutan en distintos grupos y en todo el espectro ideológico." (Romero Pittari 1989: 96)

Los procesos de metropolización característicos de muchos países latinoamericanos originan un desequilibrio al interior de sus sociedades porque reúnen un elevado –y en algunos casos un elevadísimo– porcentaje de la población total en la capital. Una de las situaciones más extremas es la de Montevideo, la cual en 1987 albergó al 48,7% de todos los residentes en el Uruguay (16). Pero también están aquéllas de países grandes como Argentina donde el 40,3% de la población vive en Buenos Aires; Santiago de Chile con el 36,5%; Ciudad de México con el 25,1% o Caracas en Venezuela también con 25,1%; o las de los países pequeños como Panamá y Nicaragua cuyas capitales concentran el 29,7% y el 21,7% respectivamente (Müller-Platenberg 1990b: 28). La magnitud de esta concentración demográfica se aprecia al comparar los porcentajes correspondientes a las capitales con los de las ciudades ubicadas en segundo lugar. Por ejemplo, Córdoba en la Argentina tiene únicamente el 3,5% del total de habitantes; Guadalajara en México el 4,3% y Maracaibo en Venezuela, el 5,4% (Müller-Platenberg 1990b: 28). Hay excepciones como las de Brasil, Colombia, Ecuador (17), entre las que se encuentra Bolivia. En la evolución de la cantidad de habitantes que residen en sus tres ciudades más importantes se observa una tendencia contraria a la propia de la metropolización; lo que muestra el siguiente cuadro:

POBLACION DE CIUDADES PRINCIPALES
(en porcentajes)

CIUDAD	1950	1976	1988
La Paz	8,84	13,77	10,45
Santa Cruz de la Sierra	1,42	5,52	8,26
Cochabamba	2,68	4,41	6,30

Elaboracion Propia

Fuente: Escóbar de Pabón y Ledo García 1988: 31 e INE s.f.: 36

La prosperidad de las actividades informales operando como factor significativo en la definición del destino de las corrientes migratorias de los últimos años favorece una distribución espacial de la población boliviana más equitativa entre las tres regiones principales. El Chapare, con sus suelos favorables para el cultivo de la hoja de coca más apropiada para la elaboración de la cocaína, descongestiona la región de los Yungas, ubicada en el Altiplano, y, simultáneamente contribuye a frenar en cierta medida el crecimiento acelerado de la ciudad de Cochabamba. La incorporación de la capital oriental al circuito de la economía informal, especialmente en el eje coca-cocaína, permite mantener el rol descolante del departamento de Santa Cruz como polo de desarrollo en los llanos a pesar de la crisis en la comercialización de muchos de los productos típicos de la zona como el algodón, la caña de azúcar, diferentes tipos de madera, etc. Esta redistribución de la población a lo largo de las diferentes zonas del territorio boliviano tiene repercusiones relevantes en la realidad nacional debido al significado que tradicionalmente ha tenido y tiene la cuestión regional en la política, la economía, la sociedad y la cultura del país. Significa ésto que la migración interna reciente vinculada a la expansión de la economía informal por la dirección que caracteriza a sus principales corrientes contribuye a poner fin al predominio de una región sobre las otras y, de igual manera, a evitar la metropolización en Bolivia. La ausencia de una metrópoli en el país no significa que sus habitantes se encuentren libres de los problemas propios de una gran ciudad. Ellos abundan en cada una de las capitales departamentales, especialmente en aquéllas de acelerado crecimiento en la actualidad, como es el caso de la ciudad de San-

ta Cruz elegida para ilustrar con mayor detenimiento las repercusiones de un proceso de urbanización acelerado y carente de una base industrial sólida.

c. Superurbanización sin base industrial sólida: el caso de Santa Cruz de la Sierra

Dos factores decisivos influyeron en la decisión de elegir a esta ciudad para ilustrar de manera más detallada el impacto que tiene la migración interna reciente en el proceso de urbanización. En primer lugar, el ritmo acelerado de su crecimiento poblacional que coloca a Santa Cruz de la Sierra a la cabeza de todas las urbes bolivianas en lo referente a la evolución demográfica del país durante los últimos años. En segundo lugar, la gran importancia del contingente migratorio en ese crecimiento.

La tasa media anual de aumento de población de la capital del departamento de Santa Cruz es la más elevada entre 1976-1988 que con 6,1% supera de lejos al promedio nacional de 2,7% (INE s.f.: 35 y 288). Las restantes capitales se colocaron por debajo de aquél: así por ejemplo Cochabamba creció a un promedio de 5,6%, La Paz a 1,8% y Oruro a 2,9% (INE s.f. 240, 264 y 308). En números absolutos los principales centros urbanos evolucionaron de la siguiente manera:

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE CIUDADES PRINCIPALES

CIUDAD	1976*	1980	1985	1988
Cochabamba	204.684	260.324	317.251	403.600
La Paz	635.283	812.641	992.592	976.800+
Oruro	124.213	152.234	178.393	176.700
Potosí	77.397	96.887	113.380	110.700
Santa Cruz de la Sierra	254.682	338.643	441.717	529.200

Elaboracion Propia

Fuente: INE 1981: 35, INE 1986: 38 e INE s.f.: 36

* para 1976 son datos del Censo y los restantes años son estimaciones oficiales

+ incluye datos de El Alto

La población en Santa Cruz de la Sierra aumenta tanto por la elevada tasa de su crecimiento vegetativo como por la masiva inmigración hacia su territorio. Con una de las más altas tasas de natalidad y una de las más bajas en mortalidad infantil -73 muertes en cada mil niños para el período 1976 - 1988 (18)- crece vegetativamente a un ritmo de 3,4% por año (Reye s.f.: 9). Por su parte, la participación de la migración en el aumento de habitantes en este centro urbano es significativa: de 1950 a 1976 fue de 34,6%; de 1976 a 1980 de 58,8% y entre 1980 y 1986 el porcentaje correspondiente disminuyó a 52,2 (Casanovas y Rojas 1988: 32).

Tendencia que no sorprende considerando que la capital cruceña se constituyó en el principal punto de llegada tanto para la mayoría de las personas que migraron en 1984 como para aquéllas que lo hicieron en 1988; existiendo una supremacía aun frente a la ciudad de Cochabamba —en el caso de departamentos el del valle se encuentra en primer lugar por la presencia de las zonas dedicadas al cultivo de la coca en el Chapare, según ya fue indicado páginas atrás— en los términos que muestra el siguiente cuadro:

CIUDAD	Inmigrantes*	Inmigrantes+
	1984	1988
Santa Cruz de la Sierra	23,51%	22,56%
Cochabamba	22,61%	14,58%
La Paz	16,45%	19,59%
El Alto	16,01%	17,35%
Oruro	6,76%	8,02%
Sucre	4,74%	6,10%
Tarija	3,78%	2,13%
Potosí	3,61%	6,56%
Trinidad	2,27%	2,84%
Cobija	0,27%	0,28%

Elaboracion Propia

Fuente: INE 1989b: 19-20

* Población de cinco años y más

+ Población de seis años y más

La preferencia de quienes emigran, especialmente desde la región occidental del país, por la capital oriental resulta del hecho que Santa Cruz sigue ofreciendo mejores oportunidades de trabajo tanto en el área urbana como en su zona agrícola de influencia. La intensa imbricación entre economía formal y economía informal provoca una prosperidad de tal magnitud que la urbe cruceña y su entorno constituyen un polo de atracción también para las masas expulsadas de regiones mineras del altiplano. Del total de inmigrantes de 1988 6,36% procedían de Oruro, 1,82% de Potosí, 19,1% de La Paz y el restante 72,7% de los valles y del interior del mismo departamento (INE 1989b: 19).

La velocidad de su ritmo de crecimiento es una de las características resaltantes del desarrollo cruceño, cuyos inicios en los años cincuenta resultaron de la política económica implementada por el MNR a partir de la Revolución Nacional de 1952. De acuerdo con la economista Moscoso tres son las etapas principales del progreso económico: la sustitución de importaciones de 1954 a 1969; el crecimiento hacia afuera entre 1970 y 1980, y, finalmente, desde 1981 la actual, de crisis económica y terciarización de la economía (Moscoso 1990: 6-8). Antes de los beneficios que le trajo la "Marcha al Oriente" llevada a cabo por el gobierno revolucionario de 1952 el único auge que vivió la ciudad, económicamente hablando, fue el que produjo la explotación de la goma entre 1880 y 1910. Después volvió a sumergirse en el letargo del atraso hasta que llegó la "vigorosa iniciativa estatal" (Prado 1989: 13), encaminada a partir de las recomendaciones de técnicos internacionales reunidas en el Plan Bohan (19). Con la construcción de una infraestructura básica de transporte —la principal obra fue la carretera Santa Cruz-Cochabamba—, programas de colonización en regiones de las llanuras orientales y la asistencia técnica y financiera para los nuevos productores se buscó despoblar el Occidente del país así como producir para dejar de importar, aprovechando los suelos fértiles de la zona cruceña. Respondiendo a los propósitos antes enunciados la producción regional durante el primer periodo estuvo orientada al mercado interno con la intención de acabar con la importación de productos básicos tales como: azúcar, arroz, madera y petróleo. En 1964 se alcanzó el objetivo de no importar más azúcar e inclusive se llegó a exportar algunos excedentes. El cultivo de la caña y la fabricación de azúcar y alcoholes constituyeron las principales actividades seguidas del cultivo de arroz sobre todo

a cargo de pequeños agricultores en las zonas de colonización. Paralelamente a la ampliación de la frontera agrícola se extrajo madera fina y de construcción destinada al consumo del país así como a la exportación. A su vez, el incremento en la explotación de petróleo benefició a la región principalmente a través de las regalías del 11% que generaron para el departamento. Hacia fines de la década del 60 el modelo de sustitución de importaciones "se fue agotando al haberse saturado el mercado interno de aquellos productos que la región estaba e condiciones de producir sin utilizar tecnología muy sofisticada o grandes capitales." (Moscoso 1990: 7) Ese momento coincidió con el inicio de una época más favorable para las exportaciones de materias primas debido a los altos precios del mercado mundial. En consecuencia, los productores regionales se orientaron principalmente hacia la producción de algunos rubros no tradicionales de exportación, sin abandonar definitivamente la destinada al mercado interno; llegando a adquirir las exportaciones no tradicionales especial importancia para la economía regional. Entre 1970 y 1979 los principales componentes de aquéllas fueron algodón, azúcar, madera aserrada y semi-elaborada, petróleo y gas natural (Moscoso 1990: 7). Cabe destacar que paralelamente a las agroindustrias se impulsó el desarrollo de otras industrias especialmente orientadas al consumo directo del mercado interno o como insumos del sector agropecuario regional. Los rubros más destacados fueron: alimentos, bebidas, textiles, plásticos, alambre, metal-mecánica. De esta manera la meta de lograr una diversificación económica del país alcanzó un relativo éxito (20) que justificó los esfuerzos estatales realizados para fomentar la agricultura y la agroindustria del Oriente boliviano. Región que entre 1952 y 1975 habría recibido un apoyo financiero de aproximadamente 250 millones de dólares de acuerdo con estimaciones conservadoras (Arze 1979: 268). Ese apoyo, en realidad, se concentró principalmente en el departamento cruceño donde entre 1970 y 1975 los cultivos de caña y de algodón se expandieron notablemente: la superficie cultivada con caña de azúcar que en 1970 era de un total de 32.000 hectáreas creció a 42.353; por su parte, el cultivo de algodón aumentó de 7.150 hectáreas a 50.000 (Ormachea 1987: 32). Durante la década de 1970 se conformaron complejos productivos industriales que reflejan el creciente desarrollo cruceño: el complejo azucarero; el complejo maderero que cuenta con varias plantas laminadoras de fabricación de pisos de madera, parquet, diversos tipos de

láminas; el complejo aceitero con fábricas de refinación de aceites comestibles y manufactura de grasa vegetales, velas, jabones, alimento para ganado; el complejo textil con plantas de hilado y tratamiento de algodón, y el complejo de alimentos balanceados que utilizan como materia prima el maíz, sorgo, soya, harina de hueso, etc. (Grupo de Estudios Andrés Ibañez 1986: 95-96). El mayor volumen de capital invertido estaba concentrado en la industria azucarera, la industria papelera y la aceitera; las dos últimas contaban con una tecnología avanzada y las tres mantienen relación con el mercado internacional. A pesar de este desarrollo industrial para principios de 1980 se estimó que la gran empresa no representaba ni el 10% del total de fábricas del departamento (Grupo de Estudios Andrés Ibañez 1986: 101). Si bien existe una agricultura comercial también en los valles de Tarija, Chuquisaca y Cochabamba es la cruceña la que provee mayoritariamente de los cultivos agrícolas destinados a la industria: en 1985 (21) abarcando el 24% de la superficie nacional cultivada en el departamento de Santa Cruz se produjo el 72% del total de caña de azúcar; el 94% del algodón; el 93% de soya (Roca 1987: 142). Ese mismo año el azúcar constituyó el 4,64% de las exportaciones no tradicionales y el 0,24% del valor total de las exportaciones del país, mientras que los porcentajes correspondientes al algodón fueron de 1,74% y de 0,09% respectivamente; la soya, por su parte, adquirió mayor relevancia durante los últimos años constituyendo en 1988 el 19,07% de las exportaciones no tradicionales —en 1980 equivalía al 4,06%— y al 3,35% de las exportaciones globales (INE s.f.: 148). El aporte de la producción agrícola cruceña para el mercado interno es también significativo. En 1985, por ejemplo, participó con el 61% del total nacional de arroz, el 12% de trigo —que constituyó casi el 100% del trigo destinado a la molinería—, y con el 22% del maíz "aunque cubre el 80% del maíz duro destinado a las fábricas de alimentos" (Roca 1987: 142). El dinámico desarrollo en Santa Cruz provocó una creciente participación de la economía cruceña en el PIB nacional, la cual en 1952 era de apenas un 2.6% (Arrieta et al. 1990: 194); en 1987, por el contrario, alcanzó ya el nivel del 22.3% (Moscoso 1990: 4). Crecimiento basado principalmente en la expansión de los sectores primario y terciario de la economía (Arrieta et al. 1990: 195), donde el auge de las actividades informales jugaron un decisivo rol. El siguiente cuadro ilustra de manera sintética la dinámica que caracterizó a los sistemas económicos departamentales que muestran claramente un decrecimiento o un sos-

tenido crecimiento según el sector de la economía nacional al que las ocupaciones regionales estén mayoritariamente vinculadas:

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO
(en porcentajes)

DEPARTAMENTO	1980	1981	1982	1983	1984	1985
La Paz	29.1	29.0	27.5	27.4	26.5	26.0
Santa Cruz	20.7	21.0	22.3	22.7	23.5	24.1
Cochabamba	17.2	17.4	17.8	17.8	17.7	17.8
Potosí	9.2	9.1	8.9	8.9	8.8	8.8
Oruro	8.1	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7
Chuquisaca	6.7	6.7	6.7	6.5	6.5	6.5
Tarija	4.8	4.8	4.8	4.6	4.8	4.8
Beni	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4
Pando	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9

Fuente: Inch 1988: 28

La caída de los precios en el mercado mundial que afectó a las exportaciones de la región así como la recesión de la economía nacional que causó la reducción de la demanda interna de los productos regionales, en su mayoría alimentos, provocaron una grave crisis en el aparato productivo del departamento y aceleraron la terciarización de la economía cruceña durante la década de 1980.

En el caso del azúcar, por ejemplo, el país se vio afectado también por la disminución de la cuota de exportación preferencial de Estados Unidos que se redujo de 13.000 a 6.000 toneladas métricas (Escobar 1988: 114-115). En consecuencia, la producción local de caña de azúcar cayó de un total de 2.345.760 toneladas métricas en 1980 a 1.801.002 siete años más tarde; la semilla de algodón, por su parte, disminuyó de 12.000 a 6.450 (Cámara Departamental de Industria y Comercio s.f.: 71) De acuerdo con la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ): "la hipertrofia (sic) del Sector terciario de la economía [...] viene a ser fruto de la incoherencia del modelo económico, que ha privilegiado un proceso de descapitalización creciente de los sectores pro-

ductivos vitales de la economía, en favor, fundamentalmente, de los sectores económicos especulativos e improductivos del país, lo que ha derivado en la agudización de la dependencia económica externa, que resta viabilidad a la nación y por consiguiente, agudiza la crisis presente' "(CORDECRUZ 1982 citado por Arrieta et al. 1990: 198) Esta evolución se refleja en la composición del PIB departamental durante los últimos años de acuerdo a los siguientes datos estadísticos:

**PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ**
(millones de dólares)

RAMA	1980	1983	1987
agricultura, caza, sevic. y pesca	196	161	232
petróleo crudo y gas natural	140	108	97
manufactura	193	142	156
elec., gas y agua	9	11	15
construcción y obras públicas	77	51	43
comercio	101	87	105
transporte, almac. y comunicac.	74	85	111
establec. finan. y prop. de viviendas	139	125	107
servicios comunales soc. y personales	43	43	37
servicios bancarios imputados	(18)	(15)	(8)
servicios de la adm. pública	77	88	74
servicios domésticos	4	5	5

Fuente: Cámara Departamental de Industria y Comercio s.f.: 70

La evolución de la estructura ocupacional de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como centro de la economía departamental refleja la terciarización que la ha caracterizado durante los últimos años. Los datos entre 1966 y 1988 nos ofrecen la dinámica de dicha evolución:

**OCUPACION POR SECTORES
EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA**
(en porcentajes)

	1966	1988
SECTOR PRIMARIO	9	5.7
agricultura y forestación	8	3.7
minería y petróleo	1	2.0
SECTOR SECUNDARIO	30	23.5
industria	19	12.7
construcción	11	10.8
SECTOR TERCIARIO	48	70.6
comercio	13	24.8
servicios	29	35.7
transporte	6	10.1
SIN ESPECIFICACIONES	13	--

Elaboracion Propia

Fuente: Köster 1978: 101 y Moscoso 1990: 11

El aumento considerable del porcentaje de personas activas en las ramas de servicios y comercio se debe a la expansión reciente de la economía informal y al mismo tiempo tiene relación con el arribo masivo de migrantes de otros departamentos y de las provincias cruceñas, es decir, con la explosión demográfica que caracteriza a la capital cruceña.

La década de 1980 es percibida por los cruceños y calificada por especialistas en urbanística como "una etapa de decadencia de la planificación e implementación urbana en Santa Cruz"; para todos, su crecimiento se está dando de "manera dispersa y a saltos." (CORDECRUZ 1989: 7). Evolución totalmente opuesta a la que caracterizó a la expansión de la mancha urbana en los decenios anteriores cuando la estructura de la ciudad se extendió en forma de anillos obedeciendo al modelo planteado por la consul-

tora ítalo-brasilera TECHINT en 1964 (22). En 1966 comenzaron las obras de pavimentación así como los servicios públicos de agua potable, alcantarillado cloacal, energía eléctrica, drenaje pluvial, etc. La explosión demográfica de los años siguientes, sin embargo, rompió con la planificación urbana que acompañaba el crecimiento de Santa Cruz; muy pronto el proyecto Techint resultó obsoleto —él previó una población de apenas 180.000 habitantes para 1990 (Romero 1988: 44)— y en 1975 el Plan Regulador tomó a su cargo el intento de controlar en cierta medida, por lo menos, "la avalancha de las corrientes migratorias y loteamientos populares; ampliando la estructura propuesta por Techint." (CORDECruz 1989: 5) De acuerdo con el dirigente cruceño Dabdoub "los efectos migratorios desmesurados han producido, no sólo el crecimiento inorgánico de la ciudad, sino también se ha constituido una marginalidad social y económica, que es fuente generadora de conflictos sociales y caldo de cultivo de demagogos y oportunistas que pretenden su consolidación política partidaria local, queriendo convertir a Santa Cruz en el [...] centro de atracción para nuevos emigrantes." (Dabdoub 1988: 4)

La incapacidad de la capital cruceña de enfrentar las avalanchas humanas de los últimos años tiene como una de sus manifestaciones más visibles y dramáticas el crecimiento acelerado de la población establecida en los "núcleos marginales que adoptan el nombre inocuo de barrio vecinal." (Molina 1988: 119) En dichos núcleos no hay luz, agua, las calles no tienen nombres ni números las casas, etc., es decir, "la acción municipal no se demuestra de ninguna manera" (Barbery 1988: 142). Según datos del Plan Regulador el acceso de los cruceños a los servicios públicos tenía las siguientes características en la segunda mitad de la década de 1980:

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

POBLACION	SERVICIOS PUBLICOS	
20%	Tiene:	Alcantarillado pluvial Alcantarillado sanitario Agua potable Red de energía eléctrica Pavimentación
10%	Tiene:	Agua potable Energía eléctrica Alcantarillado
27%	Tiene:	(uno o dos servicios) agua energía eléctrica
43%	No tiene ningún servicio público	

Fuente: Romero 1988: 45-46

Además de la incapacidad de la economía cruceña para absorber de manera productiva la creciente mano de obra migrante está la falta de "mecanismos de incorporación paulatina de la nueva población (para hacerla) sentir que [es] parte de la ciudad [...]" (Prado 1988: 10). Por el contrario, prevalece "un hermetismo total, la existencia de los 'cruceños' y 'los demás', [que] es un problema que existe [...]" (Prado 1988: 10) Una dificultad grave que de acuerdo con Prado no se la resuelve con "las prácticas paternalistas o de beneficencia (porque) ir a los barrios nuevos, hacer algún programa de educación, repartir alimento de vez en cuando, son cosas muy puntuales, que no tocan el meollo del problema." (1988: 10) En las dimensiones que lo caracteriza influye de manera decisiva la procedencia de los migrantes, que como fue indicado proceden de regiones culturalmente diferentes a la cruceña agregando una fuente nueva de conflictos sociales que se suma a los propios de un inmigración masiva de personas.

La Unión de Instituciones Cruceñas (UNICRUZ) realizó una investigación acerca de la situación de los barrios populares y constató que el aumento acelerado de la población marginal tenía, hacia fines de los años ochenta, tres fuentes principales de origen: la migración inter-departamental, la migración de las provincias cruceñas y el crecimiento vegetativo de la ciudad. De otros departamentos, especialmente de la región de los valles, procedía el 64% de aquella población; el 23.6% correspondía a la migración interna y únicamente el 8.8% era nativa (Soliz 1989: 45). Por otra parte, el 47.7% de los migrantes residentes en los barrios periféricos indicaron la búsqueda de trabajo como principal motivo para su traslado, en tanto que el 38.8% lo hizo por motivos familiares y apenas el 10% por estudio (Soliz 1989: 51). La primacía de los inmigrantes por necesidades laborales destaca que ellos se encuentran en edad de trabajar, con lo cual no sorprende que el resultado sea el aumento de la proporción del total de PET nacional que se concentra en la capital oriental, según observamos en el siguiente cuadro:

% DE LA PET DE CIUDADES CAPITALES

CIUDAD	1980	1984	1989
Cochabamba	14,41	18,61	19,29
La Paz	44,69	43,97	32,76
Oruro	8,33	8,10	8,27
Potosí	5,10	4,32	4,99
Santa Cruz de la Sierra	18,53	17,31	24,05

Elaboración Propia

Fuente: INE 1986: 323 y 325 e INE s.f.: 241, 265, 289, 309 y 335

De acuerdo con la investigación ya citada los marginales generan "su propio 'empleo de refugio' en una amplia gama de actividades vinculadas al mercado" (Soliz 1989: 79). Algunas de esas actividades son: el pequeño comercio con una mayoría de mujeres; la construcción practicada en base a "pequeños contratos de obra"; el servicio público de transporte empleando los propios automóviles; "los pequeños talleres mecánicos y de servicio de aire y desllantado; los pequeños puestos de venta de comida; los

pequeños talleres de carpintería; los puestos de reparación de zapatos; los pequeños talleres domiciliarios de confección de prendas de vestir; el arreglo de jardines y muchas otras. (Soliz 1989: 79). La evolución de la relación entre asalariados y no asalariados durante la década del ochenta ilustra esa situación:

**POBLACION OCUPADA
SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL
(en porcentajes)**

CATEGORIA	1980	1988
<i>ASALARIADO</i>	63.3	56.8
empleado	33.4	33.1
obrero	21.9	16.3
empleada doméstica	8.0	7.4
<i>NO ASALARIADO</i>	36.7	43.2
cuenta propia	26.0	36.2
familiar sin remun.	4.3	3.2
patrón o empleador	5.2	2.2
profesional indep.	1.2	1.5

Fuente: Moscoso 1990: 10

Como fue indicado en páginas anteriores, los trabajadores por cuenta propia se establecen mayoritariamente en el comercio minorista, son generalmente migrantes recientes y sufren más con la inestabilidad laboral de su ocupación. La población nativa, por el contrario, así como "los migrantes antiguos, son los que tienen tasas de participación mayor y más estable en la actividad económica desarrollada por cuenta propia." (Rojas Rosales 1988: 102). La precariedad del tipo de inserción económica que en general caracteriza a los migrantes no impide, sin embargo, que ellos en su gran mayoría decidan establecerse definitivamente en Santa Cruz de la Sierra: el 59.7% de la población marginal hacia fines de la década de 1980 no retornaba a sus lugares de origen en ningún momento y el 24.7% lo hacía solamente una vez al año y por vacaciones (Soliz 1989: 52).

La institución a cargo de la planificación del crecimiento urbano de la ciudad de Santa Cruz, el Plan Regulador, constata que anualmente un total de 80.000 personas, que se desplazan a esta capital desde el interior del país en busca de mejores condiciones de vida, "llegan para incorporarse a la marginalidad". (Ibáñez 1988: II) Ni la estructura económica ni la infraestructura urbana están en condiciones de asimilar el contingente de inmigrantes, especialmente a aquéllos que no cuentan con una formación profesional o técnica sólida. Una manifestación visible de esa evolución se encuentra en las calles céntricas de la ciudad y alrededor de los mercados; en la segunda mitad de 1980 más de 5.000 menores desamparados se ganaban la vida en las calles cruceñas (Ibáñez 1988: II). Por otra parte, los robos y estafas, la violación de mujeres y de menores, los asesinatos por robo, atracos a mano armada, asesinatos de cambistas y taxistas forman parte de la cotidianidad cruceña, además de los crímenes derivados o vinculados con el narcotráfico en lo que se conoce como el "ajuste de cuentas". El desarrollo de la delincuencia local ha alcanzado tal magnitud "que la cárcel pública tiene más del triple de reclusos en relación con su capacidad física de albergue", denuncia un conocido jurista de la ciudad (Ibáñez 1988: II). En 1974 la policía había registrado 370 delitos denunciados; diez años más tarde, en el primer semestre de 1984, el número ascendía a un total de 5.901 casos, lo que equivaldría a una cifra anual de aproximadamente 11.802 delitos comunicados a las autoridades pertinentes (Durán 1988: 56).

Los datos anteriores hacen referencia principalmente a los sectores de la sociedad vinculados con las actividades económicas que caracterizan al SIU y a los niveles más bajos del eje cocaína. A continuación citaremos de manera un poco prolongada trechos publicados en *Reflejos*, una revista cruceña de amplia difusión local, porque los textos seleccionados resumen de manera acertada algunas de las características del tipo de influencia que personas activas en los niveles altos del tráfico de cocaína tienen en el acontecer cultural de Santa Cruz de la Sierra.

La presencia perniciosa de la droga como producto que se consume y como fuente de acumulación de riqueza es descrita por los autores de la revista en los siguientes términos:

"A medida que pasa el tiempo nuestra sociedad se vá (sic) corrompiendo ante la mirada tranquila de los 'industriales de la cocaína; quienes se encuentran libres, y para comprobar esa situa-

ción sólo bastan estos datos: en Santa Cruz, según la Asociación de Drogadictos Anónimos, existen cerca de cincuenta mil drogadictos, lo que equivale al cincuenta por ciento del total de drogadictos en todo el país, pareja a esta realidad, está la denuncia que hizo el Centro de Estudios Jurídicos [...] en el sentido de que existen instaladas en nuestra ciudad 70 prostíbulos, 20 moteles, 35 centros nocturnos, 400 casas de juego, y los crímenes aumentan cada día que pasa." (23)

También se lee que:

"El dinero fácil ha hecho abrir tiendas, boutiques, autoventas, licorerías, restaurantes, centros de diversión nocturna, etc. en dimensiones nunca vistas hasta ahora. Se viaja a Miami o Panamá como ir a Cotoca o Montero (localidades cercanas a la ciudad, E.C.F.). Las modas y los modos de vida de corte extranjero, están acabando con los rasgos ya débiles de nuestra identidad cultural [...]. La presencia de una nueva arquitectura, llamada arquitectura de la 'pichicata', son las expresiones de una nueva clase que, en breve, suplantará a la cultura cruceña [...]. Mientras que algunos sectores protestan por la presencia de los campesinos del occidente del país y para a zafra claman a gritos la presencia de mano de obra barata, tanto para la producción como para el servicio doméstico, esa clase 'cruceña' se festeja con paisanos vestidos o disfrazados de mariachis mexicanos, consume bebidas importadas y no contribuye absolutamente al fomento de la educación, la salud y la cultura. Basta ver la contribución que los nuevos ricos prestan a la Casa de la Cultura 'Raúl Otero Reiche', al Asilo de Ancianos, a los hospitales y escuelas, mientras en una sola noche derrochan miles de dólares americanos de origen dudoso." (24)

La expansión que caracterizó a la economía informal durante los últimos años tiene repercusiones negativas —como las ya indicadas— para la sociedad cruceña pero así también contribuyó a su modernización al dinamizar ciertas áreas de la economía local como el sector financiero, el de servicios y la rama comercial. La gravedad de esta evolución consiste en que las actividades propias de esos sectores están orientadas fundamentalmente a actuar sobre las pautas de consumo de los individuos y con ello originan una "incoherencia" entre el estilo de vida "moderno" que fomentan y la base económica precaria que lo sustenta. Por otro lado, si bien la acelerada urbanización vinculada a dicha expansión trae consigo problemas para la economía y la infraestructura urbana

locales, el hecho de que los inmigrantes provengan de las regiones occidentales del país puede constituir un primer paso para superar la animosidad entre cambas y collas que es un "viejo problema en la integración nacional." (Maclean Stearman 1987: 23)

NOTAS

- 1) Consultar en el anexo correspondiente las entrevistas realizadas con representantes de las instituciones.
- 2) Consultar en el anexo correspondiente las entrevistas realizadas con representantes de las instituciones.
- 3) Ministerio de Hacienda y Estadística s.f.: 11 e INE s.f.: 36. La población nacional estaba concentrada en la zona del Altiplano y en los valles.
- 4) Fatheuer/Würtele 1990: 181; Müller-Platenberg 1990a: 192; Eckel 1990: 201; Dombois/ Krauthausen 1990: 222; Rediske 1990: 240; Hoffmann 1990: 254 y Dirmoser 1990: 267.
- 5) Villa 1989: 142; INE 1989a: 56 e INE 1989b: 20. El Alto que había crecido como parte de la ciudad de La Paz fue declarada urbe autónoma en septiembre de 1988. Esta medida político-administrativa interrumpió la explosión urbana de la capital paceña y con sus 307.400 habitantes en 1988 (INE s.f.: 36) se ha convertido en la cuarta ciudad más grande del país.
- 6) INE 1989b: 19-20. Aunque los datos estadísticos abarcan el periodo anterior a la declaración de El Alto como urbe autónoma, ofrecen información desglosada de la referente a la ciudad de La Paz.
- 7) Santa Cruz es el departamento que se encuentra en primer lugar considerando los migrantes de toda la vida (INE 1989a: 55).
- 8) Las diez ciudades más importantes son las nueve capitales departamentales --La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Sucre, Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija-- y la nueva ciudad El Alto.
- 9) INE 1989b: 20. De otros países emigraron a Bolivia entre 1984 y 1989 un total de 11.366 personas (INE 1989b: 20).
- 10) Para todos los porcentajes presentados en el párrafo cf. INE 1989b: 19-20. Estos datos estadísticos esconden profundos conflictos sociales por las diferencias que existen entre los bolivianos de una u otra región del país.
- 11) Entre otros cf.: Grebe 1983: 86; Krempin 1989: 3-4.
- 12) El Altiplano abarca el 27,8% de la superficie territorial de Bolivia; los valles, el 13,2% y los llanos los restantes 59% (Villa 1989: 127).
- 13) Ministerio de Hacienda y Estadística s.f.: 11. La densidad nacional en 1950 fue de 2,75 habitantes por km² (Ministerio de Hacienda y Estadística s.f.: 11).
- 14) INE 1986: 41 e INE s.f.: 36. Catástrofes naturales contribuyeron al éxodo rural.
- 15) Para todos los porcentajes presentados en el párrafo cf. Ministerio de Hacienda y Estadística s.f.: 11 e INE s.f.: 36. Esta redistribución regional no significa que al interior de cada una de las regiones no existan zonas densamente pobladas y otras casi deshabitadas, especialmente en los Llanos.

- 16) En 1970 ese porcentaje fue aún más elevado habiendo alcanzado el nivel de 50,7% (Müller-Platenberg 1990b: 28).
- 17) En el Brasil São Paulo congrega al 11,6% de la población total de 1987, colocándose la ciudad de Rio de Janeiro en segundo lugar con el 7,4%; a Guayaquil le corresponde el 14,85% de los habitantes del Ecuador en 1987 y a la capital Quito el 13,7%; en Colombia Bogotá tiene al 17,1% y Medellín el 7,7% (Müller-Platenberg 1990b: 28).
- 18) INE s.f.: 288. El valor de la ciudad de La Paz es de 71,0 y el correspondiente a la capital cochabambina de 78 (INE s.f.: 240 y 264).
- 19) Se califica así al conjunto de medidas propuestas por Merwin Bohan en su "Informe de la Misión Económica de los EE.UU. en Bolivia."
- 20) La evolución que caracterizó la producción de los productos agrícolas de mayor relevancia para aquella zona es la siguiente:

**REGION DEL ORIENTE: CRECIMIENTO
DE LA PRODUCCION AGRICOLA**
(en toneladas métricas)

PRODUCTO	1950	1964	1975
Azúcar	342.953	1.950.500	2.366.500
Arroz	10.000	123.500	126.560
Algodón (semilla)	126	1.230	40.890
Café	1.000	5.360	14.900

Fuente: Arze 1979: 268

- 21) No existen datos más actualizados como lo destacan Moscoso 1990 *passim* y Arrieta et al. 1990 *passim*, entre otros.
- 22) El Plan TECHINT que fue elaborado a partir de 1959 y aprobado en 1967 proponía hacer de Santa Cruz de la Sierra una "ciudad jardín" (Prado 1989: 109).
- 23) *Reflejos*, 1.9: 18, Santa Cruz de la Sierra. La revista es publicada semanalmente desde 1986.
- 24) Carvallo 1986: 18. El precio de la revista --5 bolivianos en 1991-- permite suponer que su público lector se encuentra entre los miembros de los estratos medios y altos de la sociedad cruceña, con lo cual adquiere mayor relevancia el tenor crítico de las afirmaciones realizadas.

ASPECTOS CULTURALES DE LA EXPANSION DE LA ECONOMIA INFORMAL

Eliana Castedo Franco

Si para caracterizar efectos sociales de la economía informal fue relativamente fácil encontrar en la migración interna vinculada a su expansión un punto de partida heurístico valioso, tipificar repercusiones culturales no resulta tarea tan simple. A diferencia de lo que sucede con los fenómenos sociales, los de la esfera cultural escasean tanto en las noticias de los periódicos nacionales como, salvo contadas excepciones (1), en estudios realizados por científicos dedicados a investigar la realidad del país. Aquéllos se concentran en la descripción y explicación del actuar político de actores colectivos definidos sobre todo en base a su situación de clase, descuidando asuntos referidos a los patrones culturales que moldean la convivencia diaria entre los bolivianos; a la mentalidad que condiciona los términos y el ritmo del desarrollo nacional, etc. Debido a estas limitaciones originadas en la escasez de literatura apropiada, los temas a ser abordados inevitablemente estarán marcados por la precariedad del análisis.

Al analizar algunas consecuencias macrosociales de los movimientos poblacionales relacionados con la propagación exitosa de las actividades económicas informales quedó sin ser mencionado que los migrantes así como los miembros de la sociedad receptora poseen un sistema valorativo que determina sus relaciones sociales.

La convivencia de ambos grupos en un mismo espacio geográfico desencadena un proceso de aculturación durante el cual

tanto el recién llegado como el residente experimentan transformaciones en esa escala de valores y, consecuentemente, en las normas de comportamiento. Al definir el destino principal de los flujos migratorios la economía informal condiciona, indirectamente, el tipo de aculturación que tendrá lugar porque fija los grupos de personas que entrarán en contacto. El análisis de los movimientos migratorios en el capítulo anterior mostró que en la mayoría de los casos las ocupaciones del eje coca-cocaína y del SIU atraen especialmente a individuos de las ciudades y del campo del altiplano hacia los valles y los llanos. En Bolivia esos desplazamientos poblacionales no se limitan a ser solamente un traslado geográfico a lugares de menor altitud y temperatura más elevada; es también un "traslado" cultural por el carácter multiétnico que caracteriza al país. La zona altiplánica ha conocido una mayor influencia aymara, en tanto que la quechua predominó en la valluna; en las llanuras, por su parte, a causa de la relativa irrelevancia de sus tribus aborígenes predominó la cultura blanca occidental pero con un matiz, el cambia, propio de la región. Debido a la operatividad de esa multiétnicidad moldeando la vida social boliviana no es lo mismo, por ejemplo, para el emigrante campesino de origen aymara enfrentarse a la sociedad urbana de La Paz que, atraído por el boom económico que las caracteriza, tener que hacerlo con la cambia de Santa Cruz de la Sierra o la quechua de la capital cochabambina (2). A su vez, el ex-minero dedicado al cultivo de la planta de coca en la región del Chapare vive otra realidad que la de aquél dedicado al comercio ambulante en las calles de la urbe cruceña. Desde la perspectiva de la sociedad receptora de los flujos migratorios la presencia de la economía informal juega, de igual manera, un papel importante en el proceso de aculturación. Acelerando el ritmo de la migración ella aumenta considerablemente el volumen de inmigrantes resultando muy difícil para la colectividad de residentes enfrentar la nueva situación, que la mayoría percibe como una verdadera invasión. Este sentimiento dificulta enormemente las condiciones de asimilación e integración de quienes llegan, más todavía cuando son culturalmente distintos a los nativos. Estos no permanecen indiferentes a la presencia de los inmigrantes, especialmente en caso de que ellos no constituyan una pequeña minoría marginalizada carente de influencias en la sociedad global, viéndose obligados a reaccionar en defensa de la propia identidad. Algunas modalidades que adoptan las reacciones de la colectividad residente serán ilustradas en base al

análisis de lo que ocurre en Santa Cruz de la Sierra, ciudad receptora del mayor número de inmigrantes en la actualidad.

La aculturación es un proceso que no se origina exclusivamente a partir del encuentro en un mismo habitat social de grupos étnicamente diferentes; ella también ocurre en otras situaciones donde la distancia cultural entre sus protagonistas carece de una causa étnica. El caso de los ex-mineros "relocalizados" en la ciudad de El Alto servirá de ejemplo. Siendo que la mayoría de ellos son aymaras cabe suponer que no encontrarían grandes dificultades a residir en un centro urbano impregnado por la cultura aymara. Sin embargo, la realidad resalta que los problemas que enfrentan los ex-mineros y sus familias no son menores. Aunque étnicamente no existen profundas diferencias entre ellos y los alteños, la cultura minera que traen consigo y que moldea su acción social no se adapta fácilmente a una ciudad cuya realidad socio-económica cultural está impregnada por el origen rural de sus habitantes por el florecimiento de las actividades informales.

Así como existen procesos culturales que se derivan del aumento que ha caracterizado a la economía informal durante los últimos años, puede observarse también la operatividad de factores de esa naturaleza alimentando dicha expansión. Algunos son identificables gracias al análisis de las características culturales de la ocupación no registrada. Ella, además de constituir una fuente de ingreso ilegal es provisoria y no exige un elevado nivel de calificación profesional. Ni el carácter provisorio ni el bajo grado de instrucción son propiedades exclusivas de la fuente informal de trabajo; se las encuentra, de igual manera, en empleos que ofrecen el sector formal de la economía. Tampoco la práctica de un oficio a margen de la ley es una experiencia nueva y ajena a la mentalidad colectiva boliviana porque ella está regida por valores sociales que colocan en un lugar secundario la pregunta por la legalidad o ilegalidad del medio empleado para obtener un ingreso. Siendo un valor que goza de legitimidad social el de que cada individuo "aproveche su oportunidad", hay ausencia de una sanción social negativa a quienes cuentan con un (auto-) empleo en los circuitos económicos informales; lo que ha permitido que miles de individuos accedan a ellos sin tener una necesidad evidente y urgente de conseguir recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Este comportamiento caracteriza principalmente a personas activas en el sector formal de la economía, quienes por la crisis de la década

análisis de lo que ocurre en Santa Cruz de la Sierra, ciudad receptora del mayor número de inmigrantes en la actualidad.

La aculturación es un proceso que no se origina exclusivamente a partir del encuentro en un mismo habitat social de grupos étnicamente diferentes; ella también ocurre en otras situaciones donde la distancia cultural entre sus protagonistas carece de una causa étnica. El caso de los ex-mineros "relocalizados" en la ciudad de El Alto servirá de ejemplo. Siendo que la mayoría de ellos son aymaras cabe suponer que no encontrarían grandes dificultades al residir en un centro urbano impregnado por la cultura aymara. Sin embargo, la realidad resalta que los problemas que enfrentan los ex-mineros y sus familias no son menores. Aunque étnicamente no existen profundas diferencias entre ellos y los alteños, la cultura minera que traen consigo y que moldea su acción social no se adapta fácilmente a una ciudad cuya realidad socio-económica y cultural está impregnada por el origen rural de sus habitantes y por el florecimiento de las actividades informales.

Así como existen procesos culturales que se derivan del auge que ha caracterizado a la economía informal durante los últimos años, puede observarse también la operatividad de factores de esa naturaleza alimentando dicha expansión. Algunos son identificables gracias al análisis de las características culturales de la ocupación no registrada. Ella, además de constituir una fuente de ingreso ilegal es provisoria y no exige un elevado nivel de calificación profesional. Ni el carácter provisorio ni el bajo grado de instrucción son propiedades exclusivas de la fuente informal de trabajo; se las encuentra, de igual manera, en empleos que ofrece el sector formal de la economía. Tampoco la práctica de un oficio al margen de la ley es una experiencia nueva y ajena a la mentalidad colectiva boliviana porque ella está regida por valores sociales que colocan en un lugar secundario la pregunta por la legalidad o ilegalidad del medio empleado para obtener un ingreso. Siendo un valor que goza de legitimidad social el de que cada individuo "aproveche su oportunidad", hay ausencia de una sanción social negativa a quienes cuentan con un (auto-) empleo en los circuitos económicos informales; lo que ha permitido que miles de individuos accedan a ellos sin tener una necesidad evidente y urgente de conseguir recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Este comportamiento caracteriza principalmente a personas activas en el sector formal de la economía, quienes por la crisis de la década

pasada han visto disminuir sus remuneraciones y ganancias —sea por la caída de los precios de sus productos en el mercado internacional como pasó con muchos agroindustriales del oriente, o por la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos/salarios de miembros de las clases medias activos en dependencias públicas o de la empresa privada— y se valen de alguna actividad no registrada para recuperar las pérdidas financieras sufridas durante los últimos años. Es decir, las tres propiedades de la actividad informal (ilegalidad, inestabilidad y escasa capacitación) no exigen ninguna transformación profunda en la ética laboral del ciudadano boliviano que se propone utilizarla como fuente de ingreso. Consecuentemente, esta "familiaridad" facilita el tránsito del individuo de un sector a otro de la economía nacional sin mayores dificultades de orden profesional ni obstáculos de índole moral. Por esa razón es posible sostener que en la proliferación de la economía paralela además de factores económicos actúan, de igual manera, factores culturales; en el sentido de existir una determinada mentalidad colectiva que permite la expansión de aquella hacia sectores sociales que ingresan a sus circuitos ocupacionales por otros motivos que no son los de asegurar la propia supervivencia. En el momento de definir las medidas destinadas a erradicar la dependencia del sistema económico nacional de las actividades informales es importante tomar en cuenta también a los factores culturales si se quiere asegurar el éxito de la implementación de esas medidas.

a. Economía informal e identidad cultural

Cuando los procesos de reorientación y acomodamiento a una nueva situación son tan profundos que llegan a cuestionar los valores y las normas de la persona sometida a esa experiencia, pueden desencadenar una crisis de identidad en el individuo y extenderse de tal manera que también abarque a grupos sociales completos. La nueva situación se deriva de la interrelación con miembros de otros círculos culturales, la cual adopta varias modalidades. Entre las más conocidas está la del campesino que migra a la ciudad. Allí enfrenta un cuestionamiento por parte del mundo urbano a su estilo de vida, sus formas de vestir, sus típicas maneras de construir la vivienda, sus costumbres de alimentación, su concepción de la división del trabajo entre el hombre y la mujer, etc.

Otro caso frecuente es el de los inmigrantes de origen étnico diferente al de los miembros de la sociedad receptora. Tanto el hombre del campo como el migrante (de una etnia distinta de aquella a la cual pertenecen los integrantes de la colectividad donde llega) se hallan en una relación tensa entre asimilación e identidad. En esa situación juega un rol decisivo el hecho de si existe o no de parte de los migrantes una valoración positiva de los símbolos, los valores y las normas vigentes entre los nativos. Una valoración de ese tipo es el primer paso hacia la adopción de las nuevas pautas valorativas y de las reglas de conducta que provoca una crisis en la identidad cultural del individuo, pero que a su vez facilitará enormemente la integración del recién llegado.

La inexistencia de estudios que brinden información acerca de las dimensiones sociales, culturales y psicológicas de los procesos de aculturación que acompañan la expansión de la economía informal —con motivo de los encuentros que provoca entre grupos de personas con raíces culturales diferentes— impide conocer con cierta profundidad características de la crisis de identidad que resulta del choque cultural que vive el ex-minero relocalizado en El Alto. Lo que resta es ofrecer una aproximación, aunque muy general, a esa situación a partir de los datos disponibles.

El ex-minero relocalizado en El Alto, El Alto, ubicado al oeste de la ciudad de La Paz sobre una meseta a 4.000 m.s.n.m., fue su zona rural hasta que a partir de los años sesenta el acelerado crecimiento demográfico la transformó en un populoso barrio marginal. A pesar de la inhóspita geografía que la caracteriza —con temperaturas más bajas que en la sede de gobierno, fuertes vientos, ausencia casi total de vegetación— los flujos de inmigrantes no disminuyen y, como ha sido expuesto, los alteños residen hoy en la cuarta urbe más populosa del país. Procedentes mayoritariamente de las regiones rurales del departamento paceño y también del de Oruro y de Potosí viven en un "mosaico de villas y urbanizaciones yuxtapuestas" (Sandóval y Sostres 1989: 31) divididas en tres zonas: la Norte, la Sur y la Central, de reciente aparición. Se estima que para fines de la década de 1980 casi el 40% de la población de diez años y más pertenecía a la PEA y que la mayoría de las personas ocupadas estaba incorporada al SIU. Hecho que se explica tomando en cuenta que la urbe alteña recibe la mayor cantidad de mano de obra migrante, de origen campesino y no calificada (Sandóval y Sostres

1989: 41). Los empleados asalariados de El Alto trabajan en la administración pública, la policía, el magisterio y otras dependencias estatales ubicadas en la ciudad de La Paz; de la misma manera que los obreros ocupados en las escasas empresas industriales de la zona, reciben bajos salarios y laboran con una carga horaria que "en no pocos casos" sobrepasa las 48 horas semanales (Sandóval y Sostres 1989: 44). Esta situación tiene como consecuencia que cada vez más individuos buscan mejorar sus ingresos a través del autoempleo, resultando una estructura ocupacional con los TCP como categoría dominante (3).

A fines del decenio de 1980 la gran mayoría de los ex-mineros relocalizados en El Alto procedían de los centros mineros de Corocoro, Caracoles, Matilde, Colquiri en el departamento de La Paz; de Catavi, Consejo Central Sur en el de Potosí y de Huayuni, Morococala, Bolívar en Oruro (4). El 35% de ellos trabajó en COMIBOL más de 20 y el 40%, entre 10 y 19 años. Por esta razón muchos de los que estuvieron importantes períodos de sus vidas en las Empresas Mineras Estatales tienen grandes dificultades para desprenderse de la cultura obrera y conseguir insertarse en un ámbito urbano donde predomina el subempleo, "las relaciones sociales heterogéneas y la indefinición de referentes culturales."

(Sandóval y Sostres 1989: 151) El éxodo involuntario a la ciudad "convirtió al trabajador minero en migrante anónimo. De ser el 'centro de irradiación o iluminación', pasó a engrosar las filas de la población marginal de los centros urbanos [...]" (Sandóval y Sostres 1989: 149).

El ex-minero llegó a la ciudad acompañado de su familia; la que en promedio cuenta con seis miembros. De manera similar al resto de relocalizados que partieron a otros centros urbanos los residentes en El Alto constituían una población predominantemente joven. El 56% del total tenía en 1987 menos de 19 años de edad y el 28% se encontraba entre los 20 y 39 años. Por otro lado, del conjunto de esa población, la proporción de varones (51%) era ligeramente mayor a la de las mujeres (49%). La escolaridad que los caracterizó era alta, superior a la media de la población del país (cuarto curso básico), en lo que a años de instrucción se refiere, y estaba próxima al resto de relocalizados migrantes e otras ciudades. Existían jefes de familia, varones y mujeres, que habían cursado hasta el nivel intermedio o que llegaron a concluir el ba-

chillerato. Si bien la tendencia del mayor grado de escolaridad era favorable a los varones, no deja de llamar la atención el bajo porcentaje de mujeres mineras sin ningún grado de instrucción. Asimismo, el nivel de estudios de los hijos de mineros relocalizados tiende a sobrepasar al de sus padres. El nivel relativamente alto de instrucción que en conjunto tienen los miembros de este grupo influye en sus aspiraciones y expectativas ocupacionales, que sin embargo no encuentran una fácil satisfacción en las precarias condiciones de vida que les ofrece El Alto; ciudad donde son marginalizados.

Debido al reducido mercado de trabajo la inserción del ex-minero relocalizado se dio principalmente a través de las ocupaciones informales. La gran mayoría de ellos, el 60%, se incorporaron "temporalmente como trabajadores por cuenta propia, o empleados en pequeñas actividades artesanales, de servicios o comerciales" (Sandóval y Sostres 1989: 154). Sobre todo las mujeres (5) trabajaban en el sector de servicios y en el comercio -porque para los hombres la ejecución de ese tipo de tareas se opone radicalmente a su formación proletaria. Ellos prefirieron incorporarse a los programas promovidos por el Fondo Social de Emergencia (6) y por la Alcaldía de El Alto, vinculados con la auto-construcción de viviendas, la construcción de galerías filtrantes, o actividades de limpieza de la ciudad y apertura de zanjas, etc. Aun teniendo asegurada una fuente de ingreso los mineros migrantes consideraron su traslado de las minas a la sociedad urbana como "una degradación en sus condiciones de vida." (Sandóval y Sostres 1989: 153) La mayor frustración de los relocalizados es no encontrar posibilidades de acceso a un trabajo estable que les permita, a su vez, prolongar su condición de obrero. Lanzados a un mercado laboral dominado por fuentes de empleo inestables, provisionarias que exigen del individuo mucha versatilidad, capacidad de improvisación y rápida adaptación a una demanda mudante, los ex-mineros no están preparados para enfrentar con éxito los nuevos medios que deben utilizar para obtener sus ingresos. La nueva situación que este grupo social se ve obligado a enfrentar, sin embargo, es más compleja porque abarca asimismo la esfera de sus pautas de consumo.

Las minas además de ser un espacio de producción constituyen "un escenario vital que identifica una forma de vida y de pensar de los trabajadores del socavón" (Sandóval y Sostres 1989:

148). De ahí que la emigración forzada no solamente acabó con su rol de clase obrera conductora de los movimientos populares sino transmó la rutina familiar y modificó las pautas de consumo. Al establecerse el ex-minero con su familia en El Alto enfrenta también una nueva situación en relación a la reproducción. En los centros mineros él contaba con la garantía de acceder a servicios básicos como alimentación, salud, vivienda y educación aunque hayan sido precarios; en la ciudad no existe más ese tipo de protección por parte del Estado. El migrante y sus familiares se encuentran abandonados a la propia suerte y capacidad de conseguir los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades. En la actualidad, esos procesos de adaptación a las condiciones de vida urbana provocan graves problemas entre los miembros de la familia minera.

En El Alto se ha consolidado una cultura aymara urbana debido a la necesidad de los migrantes indígenas de mantener su identidad frente a los blancos de estratos altos y medios, con acentuada orientación occidental, ubicados principalmente en la ciudad de La Paz. Cultura que es el resultado de un proceso de "adaptación y de transformación" (UNITAS 1988: 179) durante el cual tanto la sociedad receptora como los inmigrantes experimentan cambios a nivel de los valores, las normas, las costumbres, los ideales, etc. que definen su acción social. Al emigrar hacia la ciudad los campesinos llevan consigo valores, expectativas, pautas de comportamiento de la cultura aymara, los cuales son mantenidos en el nuevo habitat en la medida en que se adaptan a él.

Ejemplos de esta "continuidad en la transformación" (Ströbele-Gregor 1990: 96) son la concepción de la sociedad y el paradigma de interpretación aplicados por los migrantes en la aprehensión de la realidad nueva a la que se ven enfrentados, que mantienen los principios "jaqi" y "q'ara" (7). Por otro lado, el automóvil, el asfalto, los modernos sistemas de difusión y de información imprimen un ritmo más acelerado a las relaciones humanas en el día a día y trastocan las concepciones tradicionales de espacio y tiempo del residente campesino (UNITAS 1988: 179). En este proceso de aculturación los centros de residentes, clubes deportivos culturales y a los conjuntos folklóricos constituyen verdaderos "espacios de reproducción de la cultura de origen y de socialización de los recién llegados." (Sandóval y Sostres 1989: 58) Estos refugios culturales, sin embargo, no son suficientes para

amortiguar el choque cultural que sufre el ex-minero al enfrentar su nueva realidad. El tiene dificultades para encontrar un empleo estable y acorde con su conciencia proletaria; enfrenta problemas familiares causados por las limitaciones impuestas al estilo de vida que conocían en las minas y, simultáneamente, se ve obligado a actuar en una sociedad dual. Desde el punto de vista de su economía ella está dividida en un sector industrial moderno bastante débil y un poderoso SIU; culturalmente hablando la moldean valores y normas de la cultura occidental, por un lado y de la creciente sub-cultura aymara, por el otro. El relocalizado encara la complejidad de su nuevo habitat a partir de la cultura minera que trae consigo, cargada de "sus propios códigos, mitos, héroes y patrones sociales" (Sandóval y Sostres 1989: 153). De ella aprovecha algunos elementos para vencer los obstáculos que se presentan. Un elemento muy valioso al que recurre es la capacidad organizativa gracias a la cual el proletariado minero logró realizar muchas de sus metas. Las "Asociaciones de Trabajadores Mineros Retirados" o la "Asociación de Mineros Relocalizados sin Techo" son algunas de las organizaciones fundadas por los mineros relocalizados con la intención de defender sus nuevos intereses de obtener una vivienda, una buena educación para los hijos, cuidados médicos para la familia, etc. Estas instituciones contribuyen además a apaciguar la angustia individual ante la incertidumbre de la situación personal y familiar, en un mundo nuevo, desconocido y por eso amenazador. Agravando todavía más el estado existencial y emocional del ex-trabajador de las minas la percepción que de él tiene la colectividad nacional está en total oposición con la que tenía en el pasado. El sentimiento hacia el antes temido minero "ha dejado de ser de admiración para convertirse [...], en compasión. La imagen del minero es la del 'relocalizado' que recorre las ciudades en búsqueda de trabajo y que ha ido a formar parte de los cordones de pobreza que existen en las principales (urbes) [...]. Las políticas asistenciales realizadas por instituciones femeninas, de Derechos Humanos, de la propia Iglesia e incluso de las universidades y los partidos políticos, revelan esa nueva imagen que los mineros han proyectado de sí mismos: 'caídos en desgracia' después de haber sido orgullosos de su condición de clase." (Cajías 1987: 90) Santa Cruz de la Sierra y el "turbión cultural". El caso del ex-minero relocalizado en El Alto mostró que la llegada del migrante a una determinada sociedad lo coloca en la necesidad de adaptarse a ella para lograr una mayor

o menor integración y de esa manera se ve sometido a un proceso de aculturación. Cuando los que llegan constituyen un gran número de personas provocan en la sociedad receptora también alteraciones: en su escala de valores y en las pautas de comportamiento que la caracterizan. Esas alteraciones pueden ser tan profundas que los miembros de la colectividad sufran, por su parte, una crisis de identidad. Es lo que sucede entre los cruceños. De acuerdo con los datos estadísticos expuestos Santa Cruz de la Sierra es la ciudad que recibe la mayor cantidad de inmigrantes durante los últimos años. Esa particularidad le acarrea, sin embargo, una serie de graves problemas no solamente de índole económica y urbana como los ya presentados sino, de igual modo, de naturaleza socio-cultural.

Fernando Prado, un estudioso de la realidad de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, describe "lo que sucede en el alma del cruceño de hoy" como un estar enfrentado al "violento turbión cultural que se ha desatado sobre su habitat tradicional." (1987:19-20) La repentina, incontrolable y tempestuosa llegada de masas de agua, el turbión, forma parte de la historia de la capital oriental, ubicada a orillas del río Piray. No pocos de sus pobladores se han visto enfrentados alguna vez en la vida con "la llegada del turbión" (8): los pobres moradores en las márgenes del río de modo obligado porque no tienen alternativa para vivir en lugares más seguros, y los menos ricos y los ricos durante alguna vacación escolar, un paseo de fin de semana o un descanso dominical.

Frente a los procesos sociales que acompañan el acelerado crecimiento urbano de la ciudad cruceña es un hecho conocido por todos que sus habitantes se sienten ante una avalancha, un atropello que arrastra, una invasión sin control. El prejuicio colectivo (9) acusa a los "collas", esto es a los pobladores de los valles y del Altiplano, de ser los protagonistas de ese "turbión". Dejando de lado la pregunta por la validez de la acusación lo que indica inequívocamente esa acusación es el deseo y la necesidad de la población cruceña de controlar la migración a su territorio porque su acelerado ritmo "asfixia" a los nativos. Científicos y políticos también alertan sobre las dimensiones de la expansión urbana, que es básicamente "irracional, anárquica y especulativa" (Barrero 1988: 22). De acuerdo con ellos, es imposible en la actualidad "ignorar el dilatado cinturón de miseria que rodea la parte central

de la capital cruceña [...] o desconocer "el dilema que proviene del contraste entre la tradición cultural nativa y las manifestaciones culturales que traen las corrientes migratorias." (Peña 1989: 4) Estos problemas y otros están originando investigaciones (10) acerca de la realidad regional que no ocultan más, como lo hacían antes, el elevado costo social implícito en la modernización que la caracteriza.

"Buscando identidad", "Soy Camba", son textos de adhesivos muy usados por los automovilistas que circulan por la ciudad. Es importante resaltar que no se afirma "soy cruceño" sino "soy camba" porque se pretende incorporar en la defensa de la identidad local a los sectores populares nativos, calificados anteriormente de manera despectiva como "la cambada". Es decir, se va tomando conciencia de que sólo lo Cruceño puro que excluye lo Camba popular "no tendría la fuerza necesaria para oponerse a lo externo" (Prado 1987: 19). El cruceño tradicional se da cuenta de que tanto sus valores como su forma de vivir sufre mutaciones profundas en una sociedad donde "todo se monetariza, todo se hace por plata, (donde) ya no existe la amistad ni la palabra de honor, (y) ya no se respetan las jerarquías sociales y raciales, ni el apellido." (Prado 1987: 20) Actualizando usos, costumbres, ceremonias nativas que fueron olvidadas durante su aculturación en los cánones de la cultura occidental, intenta preservar su identidad cultural. Esa necesidad es la que explica el repentino surgimiento de programas de televisión, radiales, o secciones en los periódicos locales dedicados a actualizar el pasado camba de la ciudad. Es el caso de la "Revista Cruceña de Cultura" o de la revista "Guapay", editada por "un grupo de intelectuales, preocupados con el rescate de los valores tradicionales del pueblo cruceño (Cooperativa Cruceña de Cultura 1986: 186). Lo es también el del suplemento dominical TUPAMBAE del periódico El Deber, o el programa televisivo "Jenecherú" que "procura dar a conocer no solo los grupos étnicos del Oriente con sus costumbres, etc. sino que está rescatando una serie de expresiones culturales del cruceño (Cooperativa Cruceña de Cultura 1986: 209). Los nombres de restaurantes y confiterías como "Cuimbaé", "Chuy", "La casa del camba", "Las tinajas", "Tropicamba", "Santa Cruz" (COTAS 1988: 539-548) revelan, asimismo, esta tendencia de rescatar elementos de la tradición cultural para enfrentar la invasión de lo foráneo.

Una encuesta realizada por la Cooperativa Cruceña de Cultura "con el fin de cuantificar las opiniones del cruceño" sobre problemas locales y regionales, las relaciones con el poder central y el rol de los partidos mostró que para los sectores de la clase alta la amenaza más peligrosa para la cultura cruceña es el "desarrollo económico" mientras que los grupos populares "ven en el 'colla' el principal enemigo [...]". Lo extranjero, por el contrario, "no tiene mucho peso" (Cooperativa Cruceña de Cultura 1986: 307). Común para ambos estratos sociales es la sensación de avasallamiento a su identidad y la reacción de buscar refugio en las tradiciones. Acompaña esta búsqueda la censura al tráfico de cocaína que simultáneamente se expresa. Fue así en ocasión de la conmemoración del "Día de la tradición", el 2 de abril, cuando "miles de hombres y mujeres asumieron [...] el compromiso de combatir moralmente el grave problema social derivado del comercio ilícito y uso indebido de drogas, sacando a relucir valores y expresiones tradicionales de Santa Cruz" (11). La necesidad de actualizar el pasado que tiene la población cruceña debido a las profundas mudanzas de vida que trae consigo el ritmo vertiginoso de la modernización local también se manifiesta en la práctica de costumbres que indirectamente contribuyen a legalizar los "narcodólares". El caso más conocido es la fiesta de Carnaval, la cual para "el cruceño en particular" sería "un reencuentro con su idiosincracia, de donde procura sacar y renovar las fuerzas de resistencia a la despersonalización de su pueblo, que es avasallado por varios factores [...]" (Carnaval 1991: editorial). Este tipo de reencuentro con las "buenas costumbres" (Carnaval 1991: editorial), sin embargo, expresa de manera sintética la ambivaencia de la población de Santa Cruz de la Sierra frente a las características de su modernización: por un lado, reivindica la vigencia de sus tradiciones y, por el otro, para ponerlas en práctica recurre a modernas tecnologías como lo hace en la creación y puesta en movimiento de los carros alegóricos que desfilan durante el corso; de igual modo, expresa su rechazo público al narcotráfico al mismo tiempo que aprovecha de la riqueza que él produce para ostentar lujo en las más diversas ocasiones sociales. Existe por lo tanto una estrecha interrelación entre la necesidad de actualizar el pasado y el ritmo vertiginoso de la modernización cruceña, que en gran parte debe su opulencia actual a la prosperidad que trae el éxito del tráfico internacional de la cocaína.

El desarrollo cruceño tampoco es una experiencia fácil para quienes escogieron a Santa Cruz de la Sierra como destino de su migración, especialmente para los individuos de estratos bajos y de origen aymara o quechua. Ellos enfrentan una serie de dificultades que comienzan ya con el idioma puesto que en la capital oriental se habla con exclusividad castellano (12). Asimismo el clima cálido y tropical exige profundos cambios en la indumentaria de este grupo de personas, que es naturalmente más apropiada para las temperaturas elevadas del Altiplano o de los valles bolivianos. Adaptar la vestimenta a la nueva situación climática es un proceso penoso, y hasta doloroso, porque el vestido es un elemento de identidad cultural muy importante (13). Para el colla de estratos medios y altos los problemas son menores porque su acervo cultural, impregnado ciertamente por elementos aymaras y quechuas, es básicamente occidental como el que predomina entre los cruceños. Estos y los migrantes del propio departamento o de las restantes localidades nacionales enfrentan, conjuntamente, un acelerado proceso de modernización que cada cual enfrenta de la mejor manera posible. Para los miembros de la sociedad receptora "el cambio [...] [que] sucede con rapidez [...], da lugar a una imagen de avasallamiento [...]" (Bowles s.f.: 45). La ausencia en la comunidad cruceña de "un sentimiento de evolución en el cambio" provoca "serios problemas de identidad colectiva" (Molina 1990: 18). Una manera de enfrentarlos es responsabilizar a las culturas andinas como origen de la crisis local. La acusación de que los collas son responsables por la suciedad y la creciente criminalidad en la ciudad, por la "pérdida de valores", etc. es un prejuicio colectivo que cumple una función relevante a nivel emocional de las personas que lo difunden. Ese prejuicio define un chivo expiatorio para explicar el origen de las dificultades que el cruceño moderno enfrenta diariamente y, de esa manera, le permite "esquivar" el cuestionamiento de la propia responsabilidad en el complejo y multifacético proceso de modernización que vive.

En tanto que los anteriores datos describen la aculturación de la sociedad cruceña como sociedad receptora, el ejemplo de los ex-mineros relocalizados en El Alto mostró algunas de las dificultades que enfrenta el individuo que migra hacia un habitat social diferente del suyo. La constante en ambas situaciones es la presencia de la economía informal en calidad de "detonador". Ella, indi-

rectamente, actúa en los procesos que desembocan en la transformación de la identidad cultural de los cruceños y de los ex-mineros relocalizados en la ciudad alteña. Si bien desde la perspectiva del individuo el proceso de readaptación a la nueva situación existencial acarrea penosos problemas, para el país la mayor interacción entre los diferentes grupos étnicos puede constituir una base favorable para afianzar la integración nacional.

b. La mentalidad inherente a la informalidad

La mentalidad —la manera de pensar característica de una persona o de una colectividad que está definida por los valores a los cuales se adhieren— condiciona el relacionamiento del individuo con su entorno natural y social, de lo cual resulta un determinado modo de actuar. La ocupación no registrada como fuente de trabajo nos remite a una parcela de ese modo de actuar: aquella vinculada con el comportamiento del ciudadano boliviano frente a la necesidad de obtener un ingreso que le permita satisfacer sus carencias materiales e inmateriales. Esto es, la ética laboral que orienta la actuación de los miembros de la sociedad en el mercado de trabajo. Fue indicado que valores constitutivos de esa ética permiten el tránsito de un sector a otro de la economía.

Destacamos que uno de ellos —el de que cada individuo "aproveche su oportunidad"— funciona como principio rector y explica la existencia de prácticas laborales en el sector formal de la economía nacional que analizadas con un poco de atención exhiben propiedades similares a las que caracterizan a las ocupaciones informales.

A lo largo de los capítulos precedentes y sobre todo en aquél dedicado a la presentación de la creciente erosión sufrida por la legitimidad del Estado durante los últimos años, ya se hicieron abundantes referencias acerca de fuentes formales de ingreso que como tales, sin embargo, tienen una relación bastante estrecha con la ilegalidad. Nos referimos a la serie de cargos públicos en la policía, la aduana, la burocracia, las empresas estatales, etc. Resta, por lo tanto, mostrar la naturaleza provisoria y el bajo nivel de capacitación profesional que son los otros dos rasgos que el cargo público posee en común con el (auto-) empleo informal. En el oficio público la inestabilidad laboral está definida principalmente por la duración del gobierno de turno que, de no ser interrumpido,

pido por un golpe de Estado, constitucionalmente es de cuatro años. El Estado se vale del puesto en la administración pública como fuente de trabajo —en 1988 cerca del 40% del Presupuesto General de la Nación estaba destinado al pago de sueldos y salarios (Cossío s.f.: 10)—, para las crecientes clases medias urbanas que de lo contrario estarían desempleadas. Desde la óptica del partido o de la coalición que gobierna, otorgar un empleo en las reparticiones estatales es recompensar al individuo por favores que realizó para dicho partido o coalición de partidos. Todo ello dentro del esquema clientelista que todavía caracteriza a las relaciones sociales y a la cultura política en Bolivia donde resulta fácil decir " 'necesito tantos asesores' o 'preciso con urgencia, tantas secretarías' sin sugerir siquiera de dónde se sacará el dinero para el pago de sueldos y otros gastos que implica la contratación de este tipo de funcionarios" (14). Debido a que el empleo público es otorgado en función de una necesidad política, la pregunta por la idoneidad profesional de la persona beneficiada no juega ningún papel relevante. De manera similar a lo que se indicó en relación a la actividad informal aquí tampoco es necesario contar con una calificación acorde con las exigencias de la fuente de ingreso. El, en la mayoría de los casos, está en relación inversa con la capacitación de quien lo recibe.

La presencia masiva de miembros del sexo femenino (15) desempeñando tareas en las áreas de comercio y de servicios del SIU es un indicador valioso del tipo de relación existente entre calificación profesional y trabajo informal. Las mujeres se valen de las ocupaciones no registradas para incorporarse al mercado de trabajo justamente porque el bajo nivel de instrucción, característico de la mayoría, no constituye un obstáculo para el (auto-) empleo en ese sector. Los reducidos montos de capital necesarios así como la escasa capacitación requerida para asegurar un ingreso, en muchos casos superior a los que se obtienen en ramas del sector formal, favorecen la integración de la mujer en la economía paralela, especialmente de personas provenientes de los sectores populares de la población cuyo acceso a las instituciones de la educación formal ha sido tradicionalmente restringido. La discriminación femenina en el sistema educativo nacional se refleja en el hecho que no solamente la campesina cuenta con un bajo nivel de escolaridad. Considerando la población de cinco años y más de las ciudades en 1988 es posible constatar que las mujeres

constituyen el 66,6% de los analfabetos; de las cuales el 55,5% tiene 30 años o más (INE s.f.: 40), es decir, se hallan en edad laboral.

La estrecha relación entre inserción en el mercado informal de trabajo y escasa instrucción manifiesta, por ejemplo, en el microcomercio de la ciudad de La Paz, donde en 1983 "tres de cada cuatro eran mujeres con un nivel de escolaridad más bajo que el conjunto de la PEA femenina y que los hombres ocupados en similar actividad" (Escóbar de Pabón 1988: 118), no es una característica exclusiva del sexo femenino. De modo general es posible afirmar que los TCP, hombres y mujeres, presentan bajos niveles de escolaridad y calificación porque no existen mayores restricciones de tipo profesional para la entrada de nuevos trabajadores a las actividades del SIU. Además, la condición migratoria de muchos de los informales explica su escasa instrucción debido a que los que llegan de áreas rurales cuentan, generalmente, con ningún o con un pésimo nivel de escolaridad. Los dos cuadros estadísticos siguientes muestran, por un lado, la situación a nivel nacional y, por el otro, con el caso de la ciudad de La Paz, cual la propia de las urbes principales respecto de la relación entre años de estudio y empleo informal:

**PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA PEA
URBANA INFORMAL POR SECTORES Y SEXO
1980**

	TOTAL	HOMBRE	MUJER
Servicio doméstico	3.6	5.7	3.5
Familiar	5.0	6.3	3.8
Semiempresarial	7.4	7.3	7.7
TOTAL	7.5	8.2	6.3

Fuente: Casanovas y Escóbar de Pabón 1988: 57

**LA PAZ: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA
PEA Y DE LOS MICROEMPRESARIOS POR SEXO
1983**

PEA	TOTAL	MICRO COMERCIANTES
Hombres	8.2	5.9
Mujeres	6.3	4.1
TOTAL	7.5	5.1

Fuente: Escóbar de Pabón 1988: 105

La ausencia de calificación tanto del hombre como de la mujer activos en el sector informal repercute de igual manera en el campo de sus ocupaciones: ambos evidencian una falta de conocimientos de mercadeo, contabilidad, manejo de crédito o de personal. Por esa razón, es frecuente encontrar en los barrios populares de las principales ciudades cursos de adiestramiento para que los informales aprendan a mejorar la calidad de sus productos o de sus servicios.

La mano de obra poco calificada también abunda en actividades del eje coca-cocaína. La situación educativa de la población en la región del Chapare hacia principios de 1990 es una prueba de ello. El 26% de los campesinos no tenía ningún grado de escolaridad; el 3.8% cursó el nivel medio y únicamente el 1.3% hizo estudios en la Normal y universitarios. Una buena cantidad de las mujeres estudió hasta el quinto básico; el 4.45% asistió a la Normal y a la Universidad y el 37.5% eran todavía analfabetas. Tomando en consideración el grado de instrucción de toda la familia se constató que el analfabetismo caracterizaba al 31% de la población (Rivera s.f.: 11). Este profundo déficit educativo no impide, sin embargo, ser activo en la economía de la coca. El "zepe", encargado de transportar la materia prima a las fábricas de pasta de cocaína, no necesita de años de estudio para llevar a cabo su faena de trabajo. Ella consiste en transportar sobre los hombros un tambor con 50 libras de hojas de coca (Canelas & Canelas 1983: 202), caminando por lo general durante 4 o 5 días, con muy poco descanso

(Aguiló 1988: 60), en plena selva. Tampoco el "pisacoca" requiere de conocimientos escolares ni universitarios para mezclar con sus pies las hojas ya remojadas en tinas de kerosene, sal, acetona y ácido sulfúrico (Weatherford 1987: 22).

Tanto en el SIU como en el circuito económico de la coca y de la cocaína existen actividades que exigen una formación profesional más sólida. Es el caso de los químicos que trabajan en las fábricas productoras de la base y del clorhidrato de cocaína o el de los pilotos de avionetas y helicópteros, encargados de llevar precursores y alimentos a las fábricas escondidas en la selva.

Asimismo, están aquéllos que tripulando aparatos "Cessna 206", "Centuriones" o bimotores "Séneca II o III" (Pinedo 1991: 49) introducen dinero y sacan la "merca", aterrizando en cualquier camino o pista clandestina abierta en pleno monte, con espacios reducidos que los obliga a realizar maniobras peligrosas que suelen provocar accidentes graves. De igual manera en la serie de actividades relevantes para el "blanqueo" de los narcodólares se necesita del trabajo de profesionales; por ejemplo el de los empleados de banco y en caso de que se trate de sumas millonarias de dólares americanos, la contribución de los mismos banqueros.

Estas excepciones no invalidan, sin embargo, la estrecha relación entre bajo nivel de instrucción y ocupación informal que sigue siendo la constante para la inmensa mayoría de quienes operan en las diferentes ramas de la economía paralela.

Casi todas las personas activas en esa economía que fueron interrogadas durante esta investigación indicaron que no necesitaron de una capacitación especial para desempeñar con éxito su oficio, a pesar de que en algunos casos existía una gran diferencia entre él y la actividad practicada a principios de la década de 1980, como muestra el siguiente cuadro:

INFORMALES ENTREVISTADOS EN 1991

OCUPACION ACTUAL	OCUPACION(ES) ANTERIOR(ES)
carpintero	minero
vendedora de tarjetas	vendedora de leche
camarero	empleado en empresa aérea, en empresa de importaciones, en pensiones
	ama de casa
vendedora de material escolar, relojes, etc.	
como personal de limpieza en una cooperativa	maestro rural
vendedor de mat. escolar	universitario
vendedora de cosméticos	vendedora de mercaderías
	vendedora ambulante
dueña de tienda de aparatos electrónicos	
vendedor de billeteras, carteras	albañil
vendedora de lencería	vendedora "de todo"
vendedora de "asadito", empanadas, refresco de "mocochini"	cocinera
cargador de mercaderías	cocinero, tractorista,
lavandero	
vendedor de ropa	albañil

El carácter provisorio del (auto-) empleo no registrado es especialmente evidente en las ocupaciones desarrolladas en torno al eje coca-cocaína; sobre todo en aquellas tareas menos importantes y más castigadas por las irrupciones del Estado y sus agentes con la intención de erradicar el cultivo de la hoja y la fabricación de la droga. En el caso de los "pisacocas" además de la persecución policial de la cual son objeto está la destrucción de sus pies y manos con motivo de los precursores empleados durante la faena que realizan; daño que muy pronto los obliga a abandonar el oficio lu-

crativo. En términos generales es posible afirmar que para los individuos activos en el SIU ubicado tanto en las principales ciudades como en las pequeñas urbes alrededor de las zonas de cultivo de la coca y también para aquéllos que obtienen sus ganancias practicando ese cultivo y otras actividades del eje, la inestabilidad laboral está definida por la duración del auge de la economía informal. Es por eso que entre los entrevistados, como se puede leer en el anexo correspondiente, no escasean las manifestaciones de un deseo claro: obtener un trabajo que garantice cierta seguridad a largo plazo.

El cargo público tiene en común con la actividad informal su naturaleza provisoria y el bajo nivel de calificación exigido para su desempeño, además de caracterizar a ambas un tipo específico de vinculación con la ilegalidad. La existencia de esa vinculación, sin embargo, no las invalida, en la generalidad de los casos, como fuentes de ingreso socialmente reconocidas. Aceptación social que explica que en la actualidad la economía paralela próspera reemplace al Estado prebendario en bancarrota como fuente prodigiosa de ganancias —también si se trata de comba tir la informalidad, según fue expuesto en el capítulo dedicado a las políticas públicas frente a ese fenómeno—, para individuos de diferentes estratos de la sociedad boliviana. En el cumplimiento de esa función es posible distinguir dos momentos: el primero, donde la ocupación no registrada es aprovechada sólo para mejorar la remuneración legalmente adquirida y, el segundo, donde aquélla sustituye completamente a ésta. Con motivo de la relocalización, que alcanzó también a la administración pública, se estima que hasta octubre de 1987 cerca de 30.000 funcionarios estatales (Arauco 1988: 21) perdieron su empleo y es de suponer que debido a la crisis de las principales actividades del sector moderno de la economía, ellos mayoritariamente hayan encontrado en ocupaciones informales un sustituto para el oficio que ejecutaban. Por su parte, los casos en los cuales la prosperidad del SIU y del eje coca-cocaína es utilizada para aumentar el ingreso personal y familiar ya fueron indicados con motivo de la presentación de la corrupción que carcome cada vez más al Estado boliviano en sus distintos niveles.

El origen de la aceptación social de las prácticas laborales anteriormente mencionadas es la mentalidad colectiva que predomina en Bolivia. Impregnada por la perspectiva del corto plazo, del

"inmediatismo" no presenta profundas diferencias moldeando la acción social sea en el marco de la legalidad o en el de la informalidad. La ética laboral ilustró que en los dos ámbitos, el de la ley y el de la ilegalidad, el comportamiento del individuo en el mercado de trabajo se orienta por los mismos valores y principios rectores. Consecuentemente, no es posible hablar de la existencia de una mentalidad inherente a la informalidad en un sentido estricto (16). Tampoco se puede afirmar que es "debido a una 'sobresaturación' de la información sobre el narcotráfico, [que] la sociedad boliviana ha ido perdiendo, la conciencia de los tremendos daños que está ocasionando, esta actividad delictiva" (Irusta y Poirot 1986: 17). Es la articulación de las prácticas laborales informales en el sistema valorativo de una colectividad –dividida en ricos y pobres pero también en "pícaros e ingenuos, éstos últimos son los que creen en la Justicia, en la Moral [...]” (17)– que sobrevalora el consumismo, el enriquecimiento veloz y no la honestidad del trabajo, la formación profesional ni el rendimiento, la que explica –además de las conocidas causas de origen económico– que dichas prácticas constituyan el centro de gravitación de economía, política, sociedad y cultura de la Bolivia contemporánea.

NOTAS

- 1) La obra de Xavier Albó sobre la cultura aymara y la de H.C.F. Mansilla acerca de los rasgos de la herencia hispano-católica que moldea la realidad boliviana son algunas de las más importantes y valiosas excepciones.
- 2) La composición étnica de la población boliviana en 1982 era la siguiente:

GRUPO ETNICO	% DEL TOTAL DE LA POBLACION
Indígenas quechuas	25,4
Indígenas aymaras	16,9
Mestizos	31,2
Blancos	14,5
Otros grupos	12,0

Elaboracion Propia

Fuente: Statistisches Bundesamt 1991: 28

- 3) La estructura ocupacional de El Alto en 1988 fue expuesta en el capítulo sobre las características de la expansión del SIU.

- 4) Para el análisis de la situación del ex-minero relocalizado en El Alto nos basamos principalmente en la obra de Sandóval y Sostres 1989.
- 5) Una mujer minera explica el origen de esa situación cuando afirma: "Las mujeres pueden trabajar más. Los hombres no, porque ellos tampoco han sido vendedores. Aquí, para la gente de la ciudad, la vida es un poco fácil, el hombre ya no tiene vergüenza de ir a vender. Por qué no decir la verdad. Aquí vemos gente masiva, joven, hombres muy fuertes, robustos, que están vendiendo una cosita. Mientras que allá, nuestros muchachos, desde los 17 años ya estaban trabajando en el interior de la mina. Los hombres sienten vergüenza porque su trabajo ha sido otra cosa. Ellos están acostumbrados a otro nivel de trabajo." (Sandóval y Sostres 1989: 154)
- 6) El Fondo Social de Emergencia está destinado al financiamiento de programas de asistencia al relocalizado.
- 7) "jaqi" y "q'ara" son los términos aymaras para indígenas y blancos respectivamente (Albó et al. 1983: 81).
- 8) "La llegada del turbión" es la calificación que se da, en la región oriental de Bolivia, al repentino crecimiento del volumen de agua en los ríos.
- 9) El carácter generalizador del prejuicio colectivo como opinión o concepción simplificada acerca de algo o de alguien "facilita" la relación de la persona con ese algo o alguien ; de ahí la amplia difusión de prejuicios entre los miembros de toda sociedad.
- 10) Las publicaciones cruceñas de los últimos diez años muestran la acelerada propagación tanto de reflexiones científicas como de aproximaciones artísticas a los diversos problemas que acompañan el progreso departamental. Además de las obras de las ciencias sociales analizadas a lo largo de este estudio cabe destacar, por ejemplo, la exitosa obra de teatro de Oscar Zambrano "La última fiesta" y el conjunto de ensayos de Herman Fernández "Libertad puesta a prueba" o el de Gunter Holzmann "Se acabaron los carretones".
- 11) " 'Sello rojo' para los narcotraficantes" en: El Mundo, Santa Cruz de la Sierra 28.12.1989
- 12) A pesar de que la mayoría de las personas étnicamente hablando pertenecen a la cultura quechua y a la aymara, la dominante es la occidental de ascendencia europea, propia de la minoría blanca. El predominio del castellano como vehículo para la comunicación social, aun después del reconocimiento de las lenguas andinas como idiomas oficiales del país, refleja esa dominación cultural. La creciente castellanización entre los bolivianos aparece en datos estadísticos que indican el idioma habitual de la población. En 1950 el castellano lo era para el 36% de los habitantes, el quechua para el 37% y el aymara para el 25%; en 1976, los que hablaban la lengua de origen español ascendían al 54%, en tanto que el 27% empleaba al quechua y el 19% al aymara para comunicarse con los otros (Calderón 1984: 41). Estimaciones oficiales para 1988 indican que en la actualidad casi el 90% de quienes viven en Bolivia se valen del castellano, siendo que de ese porcentaje el 27,53% usa también el quechua y el 21,99% el aymara en sus relaciones sociales. Solamente el 49,12% emplea con exclusividad el castellano(INE s.f.: 44).
- 13) El problema de la indumentaria como elemento de identidad cultural lo tiene también el campesino que migra a un centro urbano con similar acervo

cultural al suyo. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres campesinas aymaras que migran a El Alto y viven el drama de tener que sustituir sus polleras tradicionales por el vestido de origen occidental para facilitar su integración en la realidad urbana.

- 14) "El 'imperio' de las secretarias" en: Presencia, La Paz 10.10.1986
- 15) En el capítulo que sigue será analizada con mayor atención la relación entre la mano de obra femenina y la economía informal.
- 16) El análisis de la "sobreevaluación de las apariencias" como un valor de la mentalidad colectiva boliviana, tarea del siguiente capítulo, mostrará una vez más la validez de esta aseveración.
- 17) "Se busca militantes honestos" en: Opinión, Cochabamba 11.1.1991.

3

LA AMBIVALENCIA DE LA ECONOMÍA INFORMAL

Eliana Castedo Franco

Así como sucede en el ámbito económico, de igual modo en el socio-cultural las ocupaciones paralelas dejaron de ser un fenómeno marginal. De manera decisiva ellas influyen en dos esferas fundamentales de la realidad nacional: en la estructura social y en la mentalidad colectiva. Esa influencia la ejercen al contribuir a la transformación de algunos de sus rasgos constitutivos, amén de fomentar la conservación de otros. Con ello las consecuencias de la expansión de la economía informal no se circunscriben a la organización social y al estilo de vida de quienes tradicionalmente constituyen la masa de informales; abarcan, además, valores y normas de individuos que no están involucrados directamente en ese tipo de economía.

Debido a la profundidad de la crisis que sacudió a la economía boliviana las actividades informales devinieron refugio para miles de ex-mineros, ex-empleados públicos y privados, ex-obreros; pero también para agroindustriales, pequeños y medianos agricultores, policías, jefes de aduana, maestros, abogados, jueces, etc. Si bien la pérdida del puesto de trabajo, la disminución del poder adquisitivo de salarios y sueldos o la caída del precio de productos agrícolas en el mercado internacional y/o en el interno son factores económicos que explican la necesidad de recurrir a aquellas actividades para asegurar un (mejor) ingreso, ellas dejan de ser un fenómeno solamente económico porque favorecen la persistencia de determinados patrones en la estructura socio-

cultural del país. Es lo que sucede cuando las ganancias que facilita una labor informal son gastadas de acuerdo con pautas de consumo vigentes o cuando en la división social del trabajo de las ramas de la economía que aquí nos ocupa, son empleados criterios similares a los utilizados para definir la pirámide social que ordena las relaciones interpersonales./En Bolivia, el origen étnico de los individuos juega un rol decisivo en la estratificación social; igualmente, en el reparto de tareas al interior de los diferentes ejes económicos informales. Asimismo, la modalidad de consumir los ingresos de procedencia inoficial responde a las expectativas de una mentalidad colectiva en la cual predomina la sobrevaloración de las apariencias. Un valor social que permite a las personas ostentar la riqueza alcanzada gracias al cultivo de la hoja de coca, a la comercialización de la cocaína o al contrabando, etc., sin que interese el origen, ilícito o no, de los medios empleados para conseguirla. Es de esta manera que los individuos activos en la economía informal aprovechan pautas de comportamiento en vigencia para consolidar la propagación de sus actividades con la consecuencia de que, al mismo tiempo, contribuyen al mantenimiento de aquéllas. Es decir que las ocupaciones no registradas cumplen una función de continuidad al estimular y fomentar la conservación de determinados componentes de la acción social. Sin embargo, suscitan, por otro lado, transformaciones que permiten afirmar que en la sociedad boliviana contemporánea se constata —como ya lo indicó Germani es una característica de todo proceso de modernización— una "extensión creciente de la acción electiva y (una) disminución correlativa del campo de aplicación de la acción prescriptiva" (1978: 15). El desempeño de esta función de cambio será ilustrado a partir del análisis de las modificaciones en el rol femenino provocadas por la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo facilitada por las opciones informales de (auto-) empleo, por un lado y de la gama de alternativas culturales que surgen a consecuencia de un contacto mayor con el resto del mundo, por el otro. En la evolución del rol de la mujer se va consolidando la tendencia definida por Germani, en el sentido de que aquélla cuenta con nuevas y variadas posibilidades para configurar su futuro, perdiendo cada vez más validez la prescripción social que establece al matrimonio como la única vía favorable para su realización personal. Por otro lado, las inversiones realizadas en esferas vinculadas con quehaceres recreativos y de esparcimiento, debido a la necesidad de "blanquear" nar-

codólares, abren una serie de opciones para que el ciudadano común amplíe su horizonte cultural participando de ellas.

Esta presencia ambivalente de la economía informal en el ámbito de las normas o pautas de comportamiento y de los valores que las orientan y definen no permite obtener una conclusión definitiva acerca de su papel en el contexto del progreso del país. Si desde el punto de vista económico resulta relativamente fácil prever el precio que la colectividad nacional está pagando al hacer de las actividades paralelas el motor que pone en marcha y mueve de manera decisiva su sistema económico, constituyéndolas en tabla de salvación coyuntural de una crisis estructural, las cuestiones concernientes al significado socio-cultural de la existencia del oje coca-cocaína y del SIU carecen de tal carácter unívoco. La economía paralela fomenta el mantenimiento de ciertos rasgos de la estructura social y de la mentalidad colectiva que frenan la modernización de Bolivia y, simultáneamente, acelera la transformación de otros que favorecen la "institucionalización creciente del cambio" (Germani 1978: 15).

a. La economía informal como factor de continuidad

Más allá de las transformaciones económico-sociales y culturales que son producto indiscutible del auge de las fuentes informales de ingreso --aceleración de la urbanización en determinadas regiones, deterioro de estructuras productivas tradicionales, acelerados procesos de aculturación, etc.-- existen características de la realidad nacional que reciben un significativo refuerzo a partir de dicho auge. La importancia de las dos características seleccionadas para ilustrar la función que cumple la economía informal como factor de continuidad, vale decir, el origen étnico en cuanto criterio de división social y la sobrevaloración de las apariencias, resulta del hecho que ambas constituyen principios fundamentales en la dinámica de la vida social boliviana. La presencia de etnias diferentes en Bolivia tiene por consecuencia que en la estructuración horizontal y vertical de las relaciones sociales le corresponda a la ascendencia étnica del individuo jugar un rol decisivo en la definición de su rango, de su status dentro de la colectividad de la cual forma parte. Es decir, la pertenencia a una de las etnias no solamente constituye factor decisivo para una situación común de vida sino también criterio relevante, además del ingreso

y del grado educativo, de estratificación social. La discriminación étnica es tan poderosa que ni siquiera la riqueza, acumulada por ejemplo gracias al tráfico de cocaína, llega a negarla y/o superarla. El indígena rico continúa siendo considerado un indígena. Su solvencia económica, por vía de regla (1) no le permite compartir la mesa, ser parte de la familia, del círculo social del blanco de estrato medio o alto. Solamente sus descendientes acorde con el bienestar material que han logrado y en caso de adquirir una socialización en cánones de la cultura occidental pueden alcanzar, como mestizos, un mayor prestigio social y el ingreso a estratos sociales superiores. Esta segregación por el color de piel se reproduce en las configuraciones sociales resultantes de la práctica de los quehaceres no registrados. Tanto en la distribución de las tareas al interior de cada circuito de la economía paralela como en la ubicación de las personas en el continuum de actividades formales y actividades informales, la procedencia étnica es factor decisivo cuando se trata del acceso a ocupaciones mejor o peor remuneradas y de buena o mala reputación.

De igual manera es importante considerar la sobreestimación que hace la comunidad de la capacidad de ciertas personas de ostentar su bienestar material porque es la vigencia de ese valor la que explica la ausencia de sanciones sociales negativas en contra de aquellos individuos enriquecidos gracias a una participación exitosa en ocupaciones que no provienen de la economía oficial. Puede suponerse que de existir censura social muchas personas no habrían arriesgado el ingreso al circuito económico informal. Al peligro de la persecución policial por la ilegalidad de las actividades se sumarían los inconvenientes de un rechazo por parte de los otros así como la marginación de la propia colectividad. Todo ello frenaría, en cierta medida, la propagación de ese tipo de actividades, circunscribiéndolas a un puñado de necesitados de los estratos medios urbanos y a los millares de desocupados y sub-empleados de los barrios marginales de las urbes en acelerado crecimiento y de los poblados atrasados.

El origen étnico como criterio de división social. La operatividad de la ascendencia étnica --en calidad de estigma en unos casos o como cualidad positiva favorable en otros-- en los conglomerados sociales organizados en torno a las unidades económicas no incorporadas a la economía oficial tiene su máxima expresión en la división social del trabajo al interior del eje coca-

cocaína. Los quehaceres de menor reputación social, mayor riesgo de vida y medianos beneficios financieros son ejecutados por una inmensa mayoría de indígenas del Altiplano, de los valles y del Oriente boliviano mientras la comercialización de la cocaína y, en especial, el "blanqueo" de los narco-dólares está a cargo de ciudadanos de extracción blanca o mestiza. Sin llegar al sensacionalismo es posible afirmar: cuanto más blancas las manos más alejadas se encuentran del polvo blanco y de su base vegetal, la hoja de coca. Es una verdad por todos conocida que las personas que "lavan" dichos dólares generalmente no tienen necesidad de entrar en contacto directo con el estupefaciente; su tarea consiste en introducirlos en los circuitos financieros del país y del extranjero, donde ellos ya cuentan con una valiosa experiencia e importantes conexiones. En las informaciones que trae la prensa nacional acerca de la detención de connotados narcotraficantes se constata, observando las fotos de los detenidos, que ellos mayoritariamente no son de tez oscura. Esto queda definitivamente comprobado al examinar sus apellidos. Entre los casos de mayor repercusión local e internacional están por ejemplo los del "Rey de la cocaína", Roberto Suárez, del ex-Ministro del Interior, Luis Arce Gómez, y otras personas conocidas a nivel nacional, como el corredor de automovilismo Oswaldo "Pikín" Perrogón Ribera, Jorge Roca Suárez alias "Techo de Paja", Carmelo Domínguez, Humberto Gil y Bismarck Arredondo Alvarez (2). Por el contrario, los individuos detenidos por haber servido de "mulas" transportando la cocaína fuera del país o los cestos con hoja de coca en la zona del Chapare (los llamados "zepes") la mayoría de las veces no son blancos y sus rasgos físicos revelan un origen indígena. También aquí los apellidos delatan esa procedencia: Manaira, Quisbert, Choque, Apaza, etc. (3) corresponden a nombres de origen quechua, aymara, tupí-guaraní, propios de nativos de pueblos en el Altiplano, en los valles interandinos o en el Oriente. La operatividad de la ascendencia étnica en el momento de adjudicar las tareas necesarias para el funcionamiento de la economía de la coca es analizada por Aguiló. En su opinión, "la forma piramidal de la organización en torno del narcotráfico es más rígida y brutal que la misma sociedad global urbana: los niveles de poder, cuidadosamente delimitados, ejercen una vigilancia en sus inmediatos inferiores dentro de la propia organización." (Aguiló 1988: 71) Conforme a este autor la estructura social y étnica del narcotráfico tendría como peones en el estrato más bajo a chiriguano y tupí-guaraníes; un escalón más

arriba a indígenas quechuas y aymaras repartidos en funciones como cultivadores de la hoja de coca, "pisacocas". Ya en los estratos medios y superiores se encontrarían mayoritariamente individuos de origen urbano, transportando y comercializando el clorhidrato de cocaína.

El modo de realizar el combate contra el narcotráfico es otra manifestación de la discriminación étnica. Las cárceles están llenas de indígenas y mestizos así como de uno que otro blanco pobre, que no pueden contratar buenos abogados en su defensa y son víctimas de "una estructura judicial esencialmente corrupta y mercenaria" (Canelas & Canelas 1983: 176).

Asimismo, en el sector informal urbano es más fácil encontrar a individuos de extracción indígena, aymara, quechua o tupiguaraní entre los vendedores callejeros que entre aquéllos que se dedican al contrabando en gran escala y, generalmente, cuentan con la fachada de una casa importadora legalmente establecida. Basta hojear las páginas amarillas de la guía telefónica de una ciudad, v.gr. la de Santa Cruz de la Sierra, para encontrar, por un lado, la proliferación de dichas casas y, por el otro, constatar la procedencia étnica de sus propietarios: apellidos de clara raigambre europea (COTAS 1988: 298-323) y no Mamani, Cusicanqui, Quispe, son los más frecuentes. Estos en cambio aparecen en las listas de los miembros de las asociaciones de minoristas o vendedores ambulantes así como entre nuestros entrevistados pertenecientes a examinar las unidades productivas del SIU. La inmensa mayoría de los dueños de las microempresas, de los asalariados o de los parientes no remunerados que producen al margen de la ley son de origen indígena o mestizo; en tanto que los empresarios y empleados y obreros de las unidades legalmente constituídas son principalmente blancos (4).

Las entrevistas realizadas pusieron en evidencia esta manifestación de la vinculación de la ascendencia étnico-cultural con la fuente de trabajo. Ellas mostraron que entre los vendedores ambulantes existía una sobrerrepresentación de personas con claro origen indígena mientras que aquéllas ocupadas en actividades formales eran mayoritariamente blancas o mestizas (5). Ese resultado ilustra un rasgo constitutivo de la realidad socio-económica boliviana: el predominio de un grupo étnico en el desempeño de un determinado tipo de quehaceres económicos. En las ocupaciones de carácter informal se encuentra la masiva presencia de

indígenas, en tanto que con mayor probabilidad los individuos que no lo son aseguran su supervivencia gracias a un ingreso que proviene del sector formal de la economía. Concibiendo el sistema económico como un continuum de actividades formales y actividades informales es posible imaginar que paralelamente a él corre otro constituido por las diferentes etnias a las cuales pertenecen las personas económicamente activas. Dejando de lado las combinaciones posibles entre los tipos de quehaceres económicos y los diversos grupos étnicos para considerar únicamente las situaciones extremas, resulta que el diagrama de la relación entre ambas variables es el siguiente:

actividad formal <-----> informal
económica

origen blanco <-----> indígena
étnico

Con el auge de la economía paralela las uniones puras —el caso de la persona blanca desempeñando una actividad formal o el de una persona indígena desempeñando una actividad informal— se hacen cada vez más escasas porque da lugar a un profundo proceso de mestizaje étnico-cultural y a una creciente imbricación entre el sector formal y el sector informal de la economía con la consecuente desaparición de las fronteras rígidas entre los extremos opuestos. Lo que no quiere decir que ellos dejen de existir puesto que para las mayorías indígenas residentes en el campo o en los barrios marginales de las ciudades el acceso a una buena educación básica y a una sólida formación profesional le está vedado, principalmente debido a la precariedad del sistema educativo público. Por ello la reproducción de su subsistencia depende de trabajos mal remunerados en los centros mineros, en fábricas privadas y estatales o en empresas agro-industriales del Oriente por un lado, o del desempeño de labores informales, por el otro. Las minorías blancas, por el contrario, cuentan con recursos finan-

cieros que les permiten asegurarse un lugar en colegios, institutos técnicos y universidades privados, lo que a su vez abre las puertas de una amplia gama de organizaciones económicas legalmente establecidas que garantizan salarios y sueldos elevados.

La sobrevaloración de las apariencias

La ausencia de investigaciones que brinden información acerca de aspectos de la mentalidad colectiva boliviana dificulta enormemente el tratamiento de los efectos que en ella tiene la propagación de las actividades informales. A pesar de esta situación se justifica examinar la interrelación entre ese tipo de actividades económicas y la sobrevaloración de las apariencias como valor social; vale decir, la sanción positiva que reciben en la sociedad aquellos comportamientos individuales y colectivos destinados a ostentar la riqueza. Como fue adelantado, consideramos decisiva la influencia que tiene la vigencia de este valor entre los miembros de la sociedad en la propagación de las ocupaciones paralelas.

Hacer "rápidamente dinero, en la mayor cantidad posible y por cualquier medio" (Canelas & Canelas 1983: 136) es un valor fundamental en la definición de los cánones de convivencia entre los bolivianos. Que uno de los medios más empleados durante los últimos años sea el cultivo de la hoja de coca destinada a la elaboración del clorhidrato de cocaína, la comercialización de la droga o el contrabando de productos de vestir y medicamentos, etc., no impide que el bienestar material logrado pueda ser mostrado a través de un estilo de vida suntuoso. Es decir, no interesa de dónde proviene la riqueza, cuál su origen, sino lo que vale es poseerla y poder mostrarla. Consecuentemente la narco-arquitectura, el uso de vehículos de renombradas marcas internacionales y precios elevados, la organización de fiestas privadas fastuosas o de acontecimientos sociales para lucir una vestimenta costosa y joyas valiosas son aceptados como símbolos válidos de una posición social destacada.

De esta manera antes que el trabajo honesto, la profesionalidad en el desempeño de las tareas asumidas, la seriedad en el cumplimiento de los acuerdos efectuados, se estimulan la astucia, la picardía o el engaño en la ejecución de trabajos que aseguran un acceso rápido a fortunas menores o mayores.

Esta sobrevaloración de las apariencias deviene menosprecio, o por lo menos subvaloración, de la fuente de trabajo legal que no permite acumular riquezas. Es la situación de la cual se queja Patroclo –personaje de la novela premiada "Jonás y la ballena rosada" (6)– durante el diálogo que sostiene con su yerno:

- "...Mis archienemigos son los pichicateros.
- Los pichicateros? Nunca lo imaginaría. Qué te hicieron? - indagué-.
- Me robaron la gloria- expresó Patroclo-.

La desgracia de mi suegro, según contó, fue que cuando él aullaba en la pobreza, resultaba tarea titánica enriquecer. Y cuando prosperó el juego había mudado tanto, que jóvenes aventureros lo superaban en fortuna en pocos meses. Se sentía como el alpinista que ha escalado la montaña, y en la cima descubre que han tendido un funicular que recorre en cinco minutos el trayecto antes arduo y peligroso. El manzano de los frutos de oro, del cual muchos cosechaban, se llamaba cocaína. Desde que el país exportaba toneladas de polvo blanco los valores se habían despatarrado. Hoy nadie se ocupaba de engordar honradamente, en jugar las reglas del capitalismo de la manera directa como hizo Patiño [...].

La pérdida de gloria que lamenta Patroclo es la privación del reconocimiento social del cual gozaba; sociológicamente hablando se trata de una pérdida de status social. El motivo también lo da a conocer este personaje cuando relata que antes resultaba "tarea titánica enriquecer" mientras que ahora es solamente una cuestión de "pocos meses" abrazar una fortuna, mayor o menor según sea el caso, en base a la cosecha exitosa del "manzano de los frutos de oro": la cocaína. Patroclo, dedicado a la venta de carne, no consigue suficientes ingresos para financiar un estilo de vida suntuoso y, en consecuencia, pierde posición social también frente a aquellos individuos que se enriquecieron ilegalmente.

Vestir a la última moda parisiense, italiana o brasileña; usar el mayor número posible de joyas en diseños llamativos y originales; conducir autos importados de marcas japonesas, alemanas y norteamericanas reconocidas mundialmente; frecuentar los mejores restaurantes, piano-bares, whisquerías y discotecas; divertirse en

casa con los últimos "video-games" o viendo los recientes musicales en la pantalla del aparato de video más moderno; asistir a shows artísticos con cantantes y conjuntos artísticos españoles, mexicanos, argentinos pagando para ello una entrada de por lo menos 30 US\$ --suma equivalente al salario mínimo vigente en el país (7)-- son formas de ostentación con aceptación social. La ausencia de un rechazo por parte de la colectividad de la fortuna de origen sospechoso permite entender la necesidad en la que se encuentran sus dueños de darla a conocer públicamente. Para ello aprovechan todas las ocasiones que resultan de las costumbres vigentes y también, de otras que hacen surgir. Esto significa que grupos de personas con condiciones financieras están inventando ocasiones para lucir el lujo alcanzado. Ellas crean oportunidades para ostentar socialmente sus niveles de ingreso y, de ese modo, competir con el vecino, el amigo o el pariente y de ser posible llegar a "vencerlo". En la esfera de la educación se encuentra una manifestación significativa --por el contraste que origina con la calamitosa situación del sistema educativo público-- de un nuevo uso impuesto en la sociedad por aquellos individuos que pueden financiar los gastos que conlleva su puesta en práctica.

Trátase del conjunto de actos festivos realizados en centros escolares particulares al concluir el jardín de infancia e ingresar al ciclo básico. En décadas pasadas cuando la riqueza proveniente de la pujante economía informal no existía, la única fiesta pomposa por su importancia era la organizada por los alumnos que concluían sus años escolares y recibían el título de "Bachiller en Humanidades". Ahora, festejar la "graduación" del "kindergarten" no es otra cosa que la ocasión impuesta por los ricos y los nuevos ricos para exponer lo que ellos están en condiciones de financiar: vestuario y premios de sus hijos (8). La vigencia social de una escala de valores que tiene en la sobrevaloración de las apariencias uno de sus componentes más valiosos explica que los enriquecidos gracias al auge de la economía informal sean aceptados por la colectividad nacional, vale decir, también por quienes no son activos en ella. Un conocido indicador del grado de aceptación que pueden alcanzar los enriquecidos "informalmente" es el otorgamiento de cargos de elevada categoría en instituciones sociales, clubes deportivos y demás entidades culturales (9), o los casos de "mecenas" financiando con donaciones el carnaval cruceño o la fiesta del Gran Poder en La Paz, dos de los ejemplos más conoci-

dos. Asimismo, en las ciudades que constituyen centros de la expansión de las actividades informales como Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, o en los pequeños poblados al estilo de Santa Ana de Yacuma, Toco, Chinahoto, —en cada lugar de acuerdo con sus particularidades de crecimiento económico y dimensiones demográficas— se encuentran, con relativa facilidad, manifestaciones (no pocas veces groseras) de la opulencia alcanzada. En la ciudad cochabambina describe Weatherford que "los llamados 'narco-chic', [...] viven en nuevos barrios suburbanos en casas que (parecen) chalets suizos, haciendas españolas o casas de campo inglesas, todas rodeadas de imponentes cercas de hierro, paredes coronadas con fragmentos de vidrios rotos y cuidadas por enormes perros guardianes [...]" (Weatherford 1987: 10).

De manera similar a lo que ocurre con la ética laboral del ciudadano boliviano encontramos en la sobrevaloración de las apariencias otro principio rector de la mentalidad colectiva que explica, una vez más, la creciente imbricación entre actividad formal y actividad no registrada en el sentido de que ambas posibilitan un estilo de vida similar, siendo sumamente difícil detectar a partir de sus características la base real de su sustento económico. De este modo queda abierta la posibilidad de emplear a las ocupaciones informales como un medio rápido de enriquecimiento sin temer una censura social. Además, la participación de personas "decentes" (10) en aquellas actividades con el propósito de mejorar o de asegurar su elevado standard de vida, colocado en peligro por pérdidas financieras durante el desempeño de actividades formales, tampoco recibe sanciones negativas.

b. La economía informal como factor de cambio

Después de haber examinado algunas consecuencias de la presencia de la economía informal condicionando el destino de los flujos migratorios recientes, no resulta difícil concebirla como un factor de cambio social. Acelerando el crecimiento demográfico de las ciudades y poblados vinculados a su circuito de actividades desencadena una serie de modificaciones en la infraestructura urbana de aquéllos de manera similar a la que fue ejemplificada con el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A la par provoca profundos procesos de aculturación entre los miembros de diferentes grupos étnicos que atraídos por la prosperidad

económica de las ocupaciones informales se reúnen en un mismo espacio geográfico. Con la situación del ex-minero relocalizado en El Alto y la llegada del "turbión cultural" a la capital cruceña fueron ilustradas dos combinaciones posibles de encuentros de esa naturaleza. Siendo que en este capítulo interesa indagar transformaciones que afectan a la sociedad en su totalidad y que actúan sobre elementos de la acción social investigaremos fenómenos globales, como la incorporación de la mujer al mercado laboral y el mayor contacto de los bolivianos con el resto del mundo.

La masiva presencia femenina en las actividades informales, especialmente en las del SIU, es una realidad conocida con efectos hasta ahora escasamente investigados en lo referente al rol que las mujeres tienen en la sociedad y en la política nacionales.

Debido a su incorporación activa en el mercado de trabajo se presentan alteraciones en el tipo tradicional de relación con el hombre, con los hijos así como también en la clase de vínculos que existen entre sí y hacia afuera por parte de los miembros de la familia. Esta serie de cambios no deja de tener significatividad en una sociedad como la boliviana con marcados rasgos de machismo donde además el núcleo familiar goza de un lugar privilegiado en las relaciones interpersonales. Si para millares de mujeres la existencia de una economía subterránea próspera significa la oportunidad de asegurar un (buen) ingreso superando obstáculos típicamente femeninos como la falta de formación profesional o la abundancia de deberes familiares, de manera similar para cientos de personas ofrece la ocasión de superar el aislamiento al que está condenado el país por su mediterraneidad. Es decir, el auge de la economía informal puede ser visto como un factor que fomenta un mayor contacto de los bolivianos con el resto del mundo en dos sentidos: el mundo "entra" en Bolivia, por ejemplo a través de las emisiones en directo que realizan los canales de televisión, de acontecimientos mundiales como la "Copa 90" de fútbol desde Italia, o, más recientemente, la guerra del golfo pérsico; y, por otro lado, ciudadanos del país "entran" en el mundo con los viajes que hacen al exterior por cuestiones de trabajo, estudios o vacaciones. Es la riqueza que generan algunas de las actividades paralelas, especialmente las vinculadas al tráfico de la cocaína, la que, en la mayoría de los casos, facilita el financiamiento de los gastos generados por esta conexión internacional. El acceso a los sucesos que acontecen fuera de las fronteras nacionales, ya sea

desde un rincón del hogar a través de las imágenes emitidas por el televisor o gracias a la permanencia personal en otros países, puede constituir un primer paso para que el individuo transforme sus pautas de comportamiento y valores a partir de la variedad de experiencias nuevas a las que es sometido.

Creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo

El porcentaje de mujeres en edad de trabajar que son inactivas bajó de 81,63% en 1976 a 71,24% en 1988 y la participación femenina en la fuerza de trabajo aumentó de 22,43% a 30,30% en el mismo período (INE 1981: 304 e INE 1989a: 70). La caída del poder adquisitivo del salario/ sueldo o la pérdida de la fuente de ingreso del jefe de familia, provocadas por la profunda crisis económica de la última década fueron factores decisivos que obligaron a la mujer a buscar un (auto-) empleo para contribuir con sus ganancias a la satisfacción de las necesidades materiales de la familia. Las actividades informales jugaron un papel decisivo en el éxito de esa búsqueda porque facilitaron a la mujer su incorporación activa en el mercado de trabajo. Este tipo de actividades económicas ofrece la ventaja de que se adaptan bastante bien a las limitaciones profesionales que le son impuestas a miembros del sexo femenino tanto por el cumplimiento de sus deberes familiares como por la discriminación que sufre, por ejemplo, al obtener una educación deficiente o al no tener acceso a créditos bancarios para financiar una fuente de ingresos propia.

La situación laboral femenina en los principales centros urbanos del país, que deben su expansión demográfica de la última década al reciente auge de las ocupaciones informales, muestra la importancia que para la mujer tiene la existencia de esa clase de quehaceres. Del total de personas del sexo femenino que están ocupadas en El Alto en 1988 el 78,53% trabaja en el sector informal, siendo el 61,38% de ellas trabajadoras por cuenta propia (TCP) (11). Entre 1976 y 1986 el crecimiento de la PEA masculina en la ciudad de Cochabamba fue a un promedio anual del 4,52% mientras la femenina creció a una tasa próxima al 6%. Tanto a mediados de los setenta como en la segunda mitad de los 80 el 60,1% de las mujeres ocupadas eran activas en el SIU. A pesar de esta constante ocurrió un cambio importante en ese período. Se dio un desplazamiento al interior del sector informal. Si en 1976 el 30,5%

de las mujeres activas en él lo eran como empleadas domésticas, diez años después lo fueron únicamente el 4,1% debido a que las TCP pasaron a ser el 42,6% y ya no el 28,3% del periodo anterior (Escóbar de Pabón y Ledo García 1988: 66 y 77). Analizando la situación en la capital cruceña se constata en el mismo espacio temporal una evolución similar. La tasa de crecimiento anual acumulativo de la PEA masculina fue del 6,74% y la femenina del 9,12%, con lo cual la participación del empleo femenino en el empleo total se incrementó de 29% a 34% entre 1976 y 1986. En ese lapso la actividad comercial también ganó importancia. Si en 1976 solamente el 22% de las mujeres trabajaba en el comercio —el 62% en los servicios y el 14% restante en la manufactura—, una década después lo era ya el 41%, habiendo pasado a segundo lugar la ocupación en el sector de servicios con el 39% y aumentado la participación en la manufactura, principalmente en la artesanía, al 15%. Tendencia que se refleja en la relación entre asalariadas y no asalariadas que en 1976 era de 67,1% a 32,9% y en 1986 de 49,7% a 50,2% (Casasnovas Sainz y Rojas Rosales 1988: 57, 63 y 65).

Coincidiendo con las observaciones efectuadas durante las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación (12), casi la mitad de las vendedoras ambulantes que fueron interrogadas durante un estudio realizado en la ciudad de La Paz, entre septiembre de 1986 y julio de 1987, señaló a la crisis económica como causa principal para verse obligadas a ganar dinero de esa manera.

"Si mi marido ganara más plata no tendría yo necesidad de trabajar" es una afirmación muy común de las vendedoras." (Arteaga 1988: 22) El desempeño de una labor remunerada es uno de los recursos que las mujeres aplican para enfrentar la recesión económica además de una serie de estrategias familiares, como la disminución del gasto familiar, encaminadas a asegurar la supervivencia. La relativa flexibilidad en el horario de trabajo así como la facilidad de ubicar el puesto de trabajo en la misma vivienda o en caso de que ello no sea posible, la de poder llevar a los hijos al lugar donde aquél está ubicado son características de algunas ocupaciones informales que permiten entender que tanto las mujeres que ya estuvieron empleadas como aquéllas que ingresan por primera vez al mercado de trabajo (que buscan una ocupación con el propósito de mantener a la familia o el de contribuir con su ingreso a sostenerla), prefieran dedicarse al comercio en pequeña escala, y a otras actividades similares, en lugar de tener un em-

pleo fijo asalariado. Los bajos niveles de escolaridad y cualificación profesional así como la carencia de un capital inicial o las dificultades para acceder a los créditos (13) son otros factores que obligan, sobre todo a la mujer urbana de los estratos bajos, a incorporarse a las diferentes ramas del SIU.

Actividades propias de ese sector como la venta de comida, de productos alimenticios (choclo, pan, etc.) o la costura de camisas y pantalones, el lavado y planchado de ropas ajenas constituyen, en realidad, una prolongación del trabajo doméstico en la esfera del mercado.

Las mujeres de los estratos medios urbanos, mejor calificadas que las activas en el sector informal, con necesidad de llevar un ingreso al hogar encuentran una fuente que lo asegure en entidades económicas cuya expansión depende indirectamente del auge de la economía paralela. Es el caso de las secretarías, cajeras, auxiliares de contabilidad de las agencias bancarias; de las recepcionistas y relacionadoras públicas de los hoteles; de las empleadas de las agencias de turismo; de las dueñas de boutiques, perfumerías, tiendas con ropa de niños, etc. De esta manera, también para la mujer de clase media es relevante la existencia de una economía informal próspera.

Los términos de una relación asumida por la unión conyugal reconocida socialmente y de la interacción entre padres e hijos varían en función de las mutaciones en la sociedad. Las que se dan en el rol de la mujer provocan la lenta desaparición de la familia patriarcal. Tanto la cohesión familiar como la distribución del poder sufren alteraciones morfológicas que transforman a la familia como institución social porque, con mayor frecuencia (14), la tarea de la mujer no se limita solamente a la satisfacción de las necesidades inmateriales (afecto, educación, etc.) sino que abarca también la de las materiales (alimentación, vestimenta, etc.). De la necesidad de incorporarse al mercado de trabajo resultó la necesidad, para las mujeres, de organizarse socialmente en defensa de sus intereses particulares. En correspondencia con los diferentes estratos sociales a los que ellas pertenecen existen en la actualidad un creciente número de instituciones femeninas destinadas a mejorar la situación de sus integrantes. Así por ejemplo, los "Clubes de Madre" en los barrios marginales de las principales ciudades; los "Comités Femeninos" adjuntos a los Comités Cívicos departamentales (15). El resultado es que no solamente en el mercado laboral

se constata una presencia más activa de miembros del sexo femenino; lo mismo sucede en la sociedad civil y en la vida política del país --que ya conoció la actuación de una Presidenta de la República (Lidia Gueiler que gobernó entre 1979-1980) y de diputadas de diversos partidos (16).

Mayor contacto con el resto del mundo

El aumento de canales de televisión en el contexto de una población cada vez más alejada de los establecimientos escolares; la capacidad financiera de traer al país shows artísticos de elevado costo en contraste con la creciente dependencia de donaciones de productos alimenticios básicos; la proliferación de lugares de esparcimiento como restaurantes y discotecas equipadas con la tecnología más moderna, en crasa oposición con el cierre de hospitales y puestos sanitarios; el incremento de vuelos al extranjero por parte de la compañía aérea nacional Lloyd Aéreo Bolivia no (LAB) en acentuada disparidad con la deplorable infraestructura vial de los barrios marginales en las principales ciudades son discrepancias que caracterizaron la realidad socio-cultural boliviana durante la década de los ochenta. Una de las causas principales de esa evolución es la disparidad existente entre los medios financieros de que disponen determinados grupos de personas por un lado, y, el Estado, por el otro. Mientras éste se hunde en una aguda crisis de recursos, aquéllos acumulan cada vez más riqueza gracias a su participación en los diferentes eslabones de la cadena de actividades productivas y de distribución desarrolladas en torno a la economía informal. Además estos "empresarios de la informalidad" necesitan "blanquear" parte de sus ganancias y para hacerlo se valen de una serie de mecanismos que les aseguran la realización de inversiones en ramas económicas legales.

Dando continuidad a esa tradición tan difundida entre empresarios bolivianos de no invertir en la producción, las inversiones son hechas, mayoritariamente, en el comercio y en el sector de servicios. La adquisición de canales televisivos, la compra-venta de automóviles lujosos, la importación de electrodomésticos o de material de construcción y decoración para las mansiones de los pudientes de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz; la apertura de suntuosos restaurantes, bares y otros lugares de esparcimiento son algunos de los frecuentes ejemplos de

la manera de invertir. Que las inversiones tengan el destino mencionado aparece, a primera vista, como poco beneficioso para la población en general porque favorece el consumo de un puñado de individuos privilegiados con ingresos elevados. Sin embargo, examinando con mayor detenimiento los efectos de las modalidades empleadas para legalizar el dinero ilegal pone al descubierto algunos que pueden constituir base importante para transformaciones profundas en la esfera socio-cultural.

En un país como Bolivia, sin salida al mar y con enormes obstáculos geográficos para establecer una red satisfactoria de caminos y carreteras que fortalezca el intercambio entre sus ciudades y poblados y con las naciones vecinas, no sorprende que predomine una percepción de la realidad impregnada, necesariamente, por ese aislamiento. Ahora la situación cambió para muchas personas que cuentan con la oportunidad de ampliar su horizonte cultural gracias a ocasiones que, indirectamente, resultan de la propagación de las actividades informales. Una de las más extendidas es la de asistir a una variedad muy grande de programas televisivos gracias al elevado número de canales de TV. Este se incrementó notablemente entre 1980 y 1988 cuando de un total de 26 aumentó a 47 en todo el país (17). En 1987 el presidente de la Asociación de Drogadictos Anónimos denunció durante su participación en un seminario que la multiplicación de estaciones de televisión era un "fenómeno generado por el narcotráfico" (18). Correspondiendo con esa denuncia estadísticas oficiales revelan que en el departamento del Beni, con escasamente el 3,36% de la población nacional, existen seis canales mientras en el de La Paz, con 30,07% hay ocho (INE s.f.: 36 y 390). La creciente incursión de la pequeña pantalla en la cotidianidad de la mayoría de los bolivianos se refleja también políticamente. Mientras que las campañas electorales de 1978, 1979 y 1980 no pudieron contar con ese medio de comunicación de masas, en 1985, "la televisión fue el medio de mayor difusión de mensajes políticos." (Rivadeneira Prada 1989: 45) Por otro lado, las sumas cuantiosas de dinero disponibles gracias al auge de actividades vinculadas con el narcotráfico permiten a algunas estaciones de TV equiparse con la tecnología más avanzada y estar en condiciones de ofrecer al tele-espectador transmisiones al vivo de programas deportivos, musicales, informativos de repercusión internacional y de interés nacional y/o local. Otorgando al país "un toque" de modernidad al

contribuir que su población no quede marginada de los acontecimientos mundiales: conflictos bélicos, elecciones presidenciales, disputas deportivas, encuentros culturales, etc.

El número de pasajeros transportados por vía férrea fue de un total de 1.711.000 en 1980, ascendiendo a 2.302.000 en 1983. Aunque la cantidad bajó a 1.392.621 en 1987 (INE 1986: 283 y INE s.f.: 207), considerando tanto el tráfico por la red andina como el propio de la red oriental, el movimiento de viajeros se mantiene en dimensiones elevadas considerando la profunda crisis económica que agobia al país. Lo mismo sucede con las personas que viajan por vía aérea: 303.354 volaron fuera del país en 1980 y 353.343 cuatro años más tarde. En estrecha conexión con este tráfico están los viajes realizados en el marco del contrabando. Especialmente los trenes hacia la Argentina, Brasil y Chile llevan a un gran número de pasajeros con este tipo de ocupación. El tráfico aéreo se ha intensificado con la apertura de nuevas rutas y con el aumento de la frecuencia de los vuelos con puntos de destino de gran significado para la exportación e importación de lo necesario a la economía informal. El viajero, por el motivo que sea, al verse enfrentado con otros modos de pensar, sentir y vivir de la gente que va conociendo los compara con los de su propia colectividad y de ese modo puede hacerse consciente de las normas y valores de su cultura. Ella, que es lo habitual en el individuo, se va alterando para facilitar la superación de las dificultades provenientes del enfrentamiento con lo desusado porque está obligado a modificar sus pautas de comportamiento para poder moverse, nuevamente, a sus anchas y con relativa seguridad y confianza en ese universo socio-cultural que le era antes desconocido. Todo este proceso que en un primer momento constituye una experiencia personal, lentamente abarca a un conjunto de individuos y se extiende por toda la sociedad. El viajero se puede constituir, consecuentemente, en un agente de cambio. También están los casos de las personas que como prueba del status social adquirido, recorren con paquetes turísticos veinte ciudades en cinco días con la intención no de conocer sino de sacar fotos para mostrarlas y contar anécdotas en el reducido círculo de parientes y amistades.

Es interesante observar en este contexto la proliferación de agencias de viajes especialmente en los centros urbanos con acentuada presencia de la economía informal como las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz.

El mayor contacto con el resto del mundo a través de los viajes al exterior y/o por intermedio de la diversidad de programas televisivos puede constituir un importante vehículo para que un número de personas cada vez mayor obtenga la posibilidad de asimilar informaciones nuevas que las obliguen a tomar conciencia sobre sí mismas y consecuentemente incorporar alteraciones en su comportamiento. Los aspectos positivos y negativos, para el individuo y para la colectividad en general, de esas alteraciones merecen un análisis profundo imposible de llevar a cabo en el marco de este estudio.

Si bien la presencia ambivalente de la economía informal en la esfera socio-cultural contribuye al mantenimiento de rasgos de la estructura social y de la mentalidad colectiva --por ejemplo, la adscripción étnica del status social o la astucia y deshonestidad en lugar del rendimiento como base de ingreso-- que frenan la modernización de Bolivia y simultáneamente, acelera la transformación de otros favorables a ella --como la creciente emancipación femenina y el rompimiento del aislamiento cultural de la población--, su impacto en el desarrollo global del país tiene claramente un carácter negativo. La prosperidad de las ocupaciones informales agudiza el desfase existente entre las manifestaciones socio-culturales de ese desarrollo y su precaria base económica. Retomando la mencionada relevancia adquirida por los medios modernos de comunicación de masa, y en especial la de la televisión, es posible ilustrar aspectos de ese desfase.

En 1968 se fundó el canal estatal (Televisión Boliviana, Canal 7) y en 1976 la primera estación universitaria, en Tarija. Sólo entre octubre de 1984 y febrero de 1985 se establecieron diez canales privados, sobre todo en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (Rivadeneira Prada 1989: 37). Fue a partir de 1985 que comenzó la consolidación del sistema privado de TV, el cual en la actualidad desplazó al canal estatal y a los canales universitarios además de haber debilitado significativamente a la radio --que medio que sufrió con la crisis económica debido a su dependencia de la importación de insumos. Con dicha expansión exitosa se multiplicó "la presencia del hecho informativo, a través de las imágenes, en los hogares bolivianos." (Mesa Gisbert 1988: 13). Asimismo, "las elecciones, el Congreso, el Palacio de Gobierno, los municipios, los debates políticos, etc., son parte de la experiencia cotidiana que antes había estado limitada al ámbito específico de

la clase política." (Mesa Gisbert 1988: 13-14) Uno de los resultados más relevantes de esta evolución es "el impacto decisivo de la televisión en el manejo de campañas electorales que se acercan cada vez más a los estilos electorales de las democracias occidentales, en los que se hace cada vez más importante el problema de la imagen en desmedro de los contenidos." (Mesa Gisbert 1988: 18) De acuerdo con Rivadeneira Prada la técnica empleada, por ejemplo en las elecciones generales de 1989, fue la del "Social Marketing" que "parte de la idea de que una campaña política puede y debe conducirse con los mismos criterios que rigen para la promoción social de productos de uso material." (Rivadeneira Prada 1989: 85) Uno de los principales problemas que conlleva esta modernización es que de hecho la dependencia creciente de las campañas electorales de los medios electrónicos hizo que los costos de ellas se hayan "multiplicado geométricamente disminuyendo la oportunidad igualitaria para todos." (Mesa Gisbert 1988: 21) Tendencia que por su lado facilita la creciente influencia de las personas que gozan de un bienestar económico gracias a sus actividades en la economía informal. Con lo cual las campañas políticas tienen en por lo menos dos aspectos una estrecha relación con el auge de dicha economía. El primero resulta de las inversiones realizadas por parte de individuos vinculados al narcotráfico para adquirir canales televisivos y el segundo, consiste en las contribuciones financieras que ellos realizan apoyando a determinados candidatos que consiguen de esa manera solventar los gastos de su candidatura. Si bien por un lado aquella estrecha relación contribuye a la modernización del proceso electoral por el otro, significa afianzar una de las principales características del proceso de modernización en Bolivia: la precariedad de su base económica. La exitosa propagación de la economía informal golpea la frágil industria nacional y con ello el país se aleja cada vez más de la meta anhelada por sus habitantes de obtener un estadio de desarrollo conducente a la autosuficiencia.

NOTAS

- 1) Existen contadas excepciones a esta regla que de todas maneras son casos más frecuentes que los que se dieron antes de la Revolución Nacional de 1952. Uno de sus logros fue justamente la ruptura con el orden oligárquico donde dominaba el status adscrito según la pertenencia racial del individuo.
- 2) Debido a la resonancia internacional y local de estas acusaciones la prensa nacional ofrece abundante información sobre ellas a partir de 1988.

- 3) "Agente antinarcoóticos y su mujer pasarán a la Fiscalía", en: El Deber, Santa Cruz de la Sierra 21.12.1989 y "Condenado a 3 años de cárcel chofer que transportó ocho kilos de droga en una llanta", en: El Mundo, Santa Cruz 23.12.1989.
- 4) La literatura sociológica en Bolivia no ofrece información sólida acerca de la interrelación existente entre el origen étnico del individuo y la ocupación que desempeña debido a la escasez de investigaciones acerca de las características de la estructura social en el país.
- 5) Véase la respuesta otorgada a la pregunta nº 20 por parte del vendedor de material escolar en Santa Cruz de la Sierra.
- 6) Montes Vannuci 1987: 74-75. Con esta novela el escritor boliviano José Wolfgang Montes Vannuci recibió el premio "Casa de las Américas" de 1987 en Cuba. El subrayado de la cita es nuestro.
- 7) "Ministro ratificó montos de aumentos salariales", en Presencia, La Paz 7.2.1991.
- 8) También está el conjunto de costumbres y tradiciones que reciben un nuevo incentivo a partir del auge de la economía informal. En la ciudad de Santa Cruz el ejemplo más ilustrativo es el festejo del Carnaval; una ocasión para el despilfarro colectivo del dinero que los cruceños podrían emplear para corregir fallas que trae consigo el crecimiento urbano acelerado.
- 9) Aquí juega un papel importante el origen étnico del individuo: las entidades sociales y culturales a las que él tenga acceso dependerá, también, de su ascendencia étnico-cultural.
- 10) Esta es una designación popular para las personas que pertenecen a los estratos medios y altos de la sociedad, generalmente de piel blanca.
- 11) Sandóval y Sostres 1989: 67. Si se considera al empleo doméstico como parte del SIU el porcentaje de mujeres informales se eleva a 81,11%, y tomando en cuenta solamente a las no asalariadas el porcentaje de trabajadoras por cuenta propia es de 78,16% (Sandóval y Sostres 1989: 67).
- 12) Consúltese las entrevistas realizadas con las dos mujeres informales.
- 13) Un medio empleado con mucha frecuencia por la mujer para acceder a un determinado capital es el préstamo de dinero de parientes y/o amigos.
- 14) Este es un desarrollo que abarca en primer lugar a la mujer de los estratos medios urbanos puesto que es una vieja tradición entre las mujeres campesinas, las de los centros mineros y las de los barrios populares de las principales ciudades.
- 15) Dada la creciente presencia de entidades femeninas en la vida nacional fueron seleccionadas las entrevistas realizadas con una representante de los Clubes de Madres y con una del Comité Femenino de Santa Cruz de la Sierra.
- 16) Algunas de las diputadas más conocidas son Gloria Ardaya del MIR y Remedios Loza de CONDEPA.
- 17) El total de canales de televisión en 1980 no incluyen a los de Pando porque no conseguimos el dato (INE 1986: 19 e INE s.f.: 231, 254, 277, 299, 325, 352, 370).
- 18) "Según Drogadictos Anónimos: Multiplicación de canales de TV está conectada al narcotráfico", en: El Mundo, Santa Cruz de la Sierra 9.5.1987.

A MANERA DE EPILOGO:

LA PRESION DEMOGRAFICA, LA PERMANENCIA DE LA INFORMALIDAD Y LAS PARADOJAS DE LA MODERNIZACION EN BOLIVIA

H. C. F. Mansilla

Es muy probable que la enorme magnitud del sector informal boliviano resulte de cuatro fuentes interconectadas entre sí: la persistencia de viejas tradiciones laboral-culturales, el crecimiento explosivo de la población, las migraciones del campo a la ciudad y –naturalmente– la crisis del ámbito formal de la economía. Diversos factores tienden a desplazar la población de las zonas rurales hacia las urbanas, como la elevación del nivel educativo, la erosión progresiva de los suelos agrícolas, la división excesiva de las unidades de producción en el campo y, en general, la presión demográfica. En las últimas décadas han coayudado al incremento poblacional algunos factores pertenecientes al desarrollo modernizante, como ser el mejoramiento de los standards higiénicos, la influencia de la incipiente previsión médica y social, la construcción de una red de escuelas rurales, la ampliación de la infraestructura vial, la diversificación de los mercados y, por cierto, la prolongación de la esperanza individual de vida. Este modesto proceso de modernización se ha conjugado, empero, con la preservación de patrones culturales claramente premodernos en el terreno de la vida familiar e íntima, y esta combinación de elementos dispares ha causado una genuina explosión demográfica. Las grandes ciudades ejercen, por otra parte, una irresistible atracción sobre las masas empobrecidas –pero mejor informadas que en tiempos anteriores–, puesto que ellas representan la posibilidad de mejores oportunidades de trabajo, bienestar, educación y salud (por lo menos para la generación de los hijos de los migrantes). El

enorme incremento poblacional urbano ha colocado en el mercado laboral a una masa tan colosal de gente joven que busca empleo que de todas maneras (es decir: aun sin crisis económica) se habría saturado totalmente el sector formal (1).

En Bolivia las tasas medias de incremento demográfico subieron del 2,4% p.a. en los años 1953/1961 al 2,8% p.a. para el período 1979/1985, volviendo a bajar a partir de entonces (2). La población urbana aumenta a un ritmo del 4,4% p.a. y alcanza el 4.8% en las ciudades más grandes; la población económicamente activa crece, sin embargo, en un 2,8% p.a. (60.000 nuevos entrantes anuales alrededor de 1989) (3). Paralelamente se puede constatar la conservación de técnicas muy tradicionales en casi todas las faenas agrícolas, juntamente con el predominio de sistemas arcaicos en la tenencia de predios rústicos, en la comercialización de los productos respectivos y en las prácticas pecuarias.

La consecuencia es un rendimiento efectivo muy bajo por hectárea (entre los más reducidos de América Latina), el deterioro creciente de los suelos y la pérdida de competitividad en la producción alimentaria (4). Ha sido una medida clara y premeditadamente modernizadora, la *Reforma Agraria* de 1953, la que, al destruir el latifundio, al expulsar a los segmentos no indígenas del campo (en el Occidente del país) y al afianzar los valores aborígenes en el mundo campesino, tuvo resultados contraproducentes, como ser el retorno de prácticas anticuadas, la consolidación de una visión tradicional del mundo y, por consiguiente, un descenso marcado de la productividad. Se calcula que en 1997 "la producción agropecuaria de Bolivia, de acuerdo a la tendencia predominante desde hace treinta años, habrá caído en más de la mitad con relación a 1953, cuando empezó la reforma agraria, mientras por otro lado, en los mismos treinta años la población habrá aumentado al doble, o sea de unos 3,5 a 7,0 millones de personas" (5).

Estas paradojas originadas por decursos modernizantes tienen que ser consideradas en el análisis de las causas y perspectivas de la economía informal. No hay duda, por otra parte, que el renacimiento de una forma muy elemental de propiedad y empresa privadas en el marco de la informalidad ha contribuido a que ésta última adquiera en un lapso de tiempo muy breve la reputación de ser uno de los pilares del nuevo modelo (neo)liberal. Teóricos y propagandistas del liberalismo se han consagrado a ce-

lebrar las virtudes que la economía informal tendría en común con la del libre mercado, como la flexibilidad, la prescindencia del Estado y sus agencias, la utilización racional de recursos muy escasos, la desregularización burocrática y el énfasis en la propiedad privada. Estos elementos han coadyuvado seguramente a que instituciones supranacionales (como el Banco Mundial) lleguen a fomentar proyectos de ayuda al sector informal (6). Es muy probable que éste, compelido a ahorrar recursos y, simultáneamente, a emplear a grandes masas laborales, se transforme en un segmento relativamente dinámico, capaz de generar tecnologías adaptadas a los requerimientos inmediatos del entorno social. Pero las limitaciones a su desarrollo ulterior y a la evolución técnico-económica general y a largo plazo del país son probablemente insalvables: el sector informal engendra muy pocos aportes realmente innovativos y substanciales con respecto a un proceso sostenido de crecimiento y acumulación, y menos aun en el ámbito de mejoras educacionales, tecnológico-científicas y organizativas. Si se aplica el parámetro de la competitividad internacional contemporánea, las perspectivas para la economía informal del área andina no son de ninguna manera promisorias (7).

La apología de la economía informal deja de lado algunos de los aspectos y problemas más graves con que están confrontadas hoy en día las sociedades andinas. El nexo causal entre la presión demográfica y la proliferación del sector informal, el desbarajuste de la producción alimentaria en conexión con la reforma agraria, el incremento poblacional en relación con una mejor asistencia médica y la vinculación entre mejores oportunidades educativas y la generación de desempleados provenientes de escuelas, institutos y universidades, constituyen algunos de los temas desatendidos adrede por las teorías favorables a la economía informal, temas, empero, que son esenciales para comprender el carácter mediocre y ambiguo de la modernidad alcanzada en Bolivia. Este descuido es comprensible si consideramos que el análisis de estas cuestiones subestimadas podría poner al descubierto variados aspectos sombríos e irritantes de la identidad colectiva --a ninguna corriente ideológica o política le conviene desentrañar los fenómenos negativos que podrían provocar dudas e incertidumbre acerca de uno de los objetivos más apreciados por toda la nación boliviana, que es el grado de modernización alcanzado entretanto, por más modesto que éste sea en realidad.

Los enfoques indigenistas, que perciben en la economía informal la prosecución de una forma tradicional y aun válida de vivir y producir (y no la consideran como una mera estrategia de supervivencia), pasan igualmente por alto todo lo deplorable asociado a ella. La existencia de relaciones laborales similares a un esclavismo contemporáneo es callada discretamente; de manera semejante se echa el manto del silencio sobre los orígenes de la informalidad actual, que tienen que ver más con la agudización de la crisis económica que con la continuación de modos de vida ancestrales. Este contexto no es proclive al ahorro interno, a las inversiones o al adelanto profesional de muchos de los involucrados.

Por otra parte, estas teorías encubren los lazos de la economía informal con el complejo coca/cocaína y con el narcotráfico, es decir con un ámbito claramente ilegal-delictivo, de cuya expansión no se puede esperar sensatamente ningún impulso constructivo para un desarrollo bien fundamentado, sostenido e internacionalmente aceptado. El complejo coca/cocaína, donde trabaja de modo precario un número excepcionalmente alto de indígenas, irradia una dinámica económica y política bastante alejada de las genuinas tradiciones aborígenes, destruyendo el tejido de reciprocidades sociales, propio de la cultura andina, estimulando la propagación del modelo más burdo y despiadado de relaciones humanas mercantilizadas y desplazando al olvido el tratamiento ecológico-conservacionista que las etnias indígenas daban a sus faenas agrícolas y a sus relaciones con la Tierra y los recursos naturales.

Es de justicia reiterar que la economía informal ha evitado, como se sabe, una crisis aun mayor en los terrenos del empleo y de los ingresos, sobre todo después del colapso de la economía minera (1985) y que los informales han exhibido un talento inusual en la administración de los bienes escasos y en una ingeniosa inventiva para domeñar circunstancias particularmente arduas. En muchos sentidos la informalidad prolonga, sin embargo, prácticas y hábitos que vienen de muy atrás y que deben ser calificados de irracionales, autoritarios y perjudiciales al proceso combinado de modernización y democratización; el funcionamiento cotidiano de la economía informal profundiza las viejas usanzas en la escurridiza esfera de la corrupción y la corruptibilidad, auspicia una dilatación del burocratismo y del comportamiento ilícito de los funcionarios públicos, erosiona la legitimidad y la autoridad moral

del Estado y de sus agencias, promueve el crecimiento de los partidos populistas y coadyuva, así sea indirectamente, a que la élite del poder se renueve con la inclusión de individuos del más dudoso carácter.

En este sentido se puede aseverar que la economía informal consolida las pautas colectivas de comportamiento, típicas de la cultura del autoritarismo (y justamente sus tradiciones más lamentables); la informalidad se revela como un notable factor de continuidad. Así es como la economía informal parece ahondar las divisiones étnico-ocupacionales ya existentes: blancos y mestizos se concentrarían en el sector formal y los indígenas en el informal, agudizando de esta manera un rasgo marcadamente premoderno de la sociedad boliviana (8).

El complejo coca/cocaína, que de ninguna manera puede ser disociado del sector informal en Bolivia, ocasiona efectos de gran magnitud en el campo político, que tampoco pueden ser calificados de positivos. La internacionalización del combate al narcotráfico y la ingerencia creciente de agencias del gobierno norteamericano encargadas de la implementación de esa acción represiva van a conducir seguramente a que una parte considerable de las políticas públicas bolivianas sean decididas o, por lo menos, influidas por instancias situadas en el extranjero (9). Se puede argüir, con alguna razón, que en esta época de soberanías nacionales en camino de disolución y de organizaciones supranacionales con competencias decisorias, la preservación de un poder nacional genuinamente soberano resulta ser un anacronismo. Pero aun en el caso de que la internacionalización sea necesaria (porque la laxitud y la corrupción neutralizan la acción represiva de los organismos nacionales consagrados a luchar contra el narcotráfico), se puede aseverar que el traslado (libremente consentido?) de atribuciones gubernamentales bolivianas, estrictamente delimitadas, a manos norteamericanas, puede traer consigo nuevas formas de violencia e irracionalidad. Este proceso incluiría una dependencia aun mayor de fondos y asignaciones presupuestarias norteamericanas y, por otra parte, acentuaría la militarización (10) ya existente de la represión al narcotráfico. En etapas más avanzadas, ésta última produciría un florecimiento inusitado de sentimientos y tendencias nacionalistas e indigenistas, el incremento del desempleo, la intensificación de la pobreza, la reducción del flujo de divisas disponibles y hasta el surgimiento de movimientos guerrilleros.

Mientras que, por una parte, los partidarios de la economía informal desdeñan premeditadamente toda la gama de secuelas vinculadas a su sector ilegal-delictivo, la contraparte norteamericana, por otra, no disfruta de ninguna autoridad ética a causa de la actuación errática de los organismos represores del narcotráfico, de la corruptibilidad de sus miembros, del doble juego del gobierno en Washington (11) y de la poca voluntad de éste para reducir la demanda de drogas en los Estados Unidos.

Las constantes reuniones internacionales del más alto nivel, como la segunda cumbre presidencial de Cartagena (febrero de 1992) (12), dedicadas a suprimir el narcotráfico y a concebir un modelo alternativo de desarrollo, que substituya al complejo coca/cocaína, no han conseguido ni lo uno ni lo otro y han generado sólo resultados inocuos. Es de esperar, entonces, que la nación boliviana siga dependiendo del sector ilegal-delictivo de la economía informal por muy largo tiempo, puesto que éste parece ser, por el momento, irremplazable (13). La economía informal seguirá, por ende, ejerciendo su ambigua influencia sobre los ámbitos cultural, político e institucional, cuyas consecuencias a largo plazo no serán probablemente demasiado benéficas para el conjunto de la sociedad, aunque puedan resultar positivas en terrenos bastante delimitados. Los defensores de la economía informal --las corrientes nacionalistas e izquierdistas, los teóricos del movimiento sindical y los ideólogos indigenistas-- se olvidan del hecho de que la economía informal no ha contribuido hasta ahora a resolver los problemas más graves del país, como la presión demográfica, la producción de alimentos y la destrucción del medio ambiente (14).

NOTAS

- 1) Cf. Jörn Altmann, *Überleben im Schatten* (= Sobrevivir en la sombra), en: DER ÜBERBLICK, vol. 27, No. 3, septiembre de 1991, p. 6 (sobre la conjunción de factores --push and pull factors-- que causan el éxodo rural y simultáneamente la fuerza de atracción de las ciudades).
- 2) Ministerio de Planeamiento, *Estrategia de desarrollo económico y social 1989-2000*, La Paz: s.e. 1989, p. 34
- 3) Ibid., p. 9
- 4) Ibid., p. 189
- 5) Luis Antezana Ergueta, *La cuestión agraria*, en: PRESENCIA del 8 de marzo de 1992, p. 2 (Antezana fue presidente del Consejo Nacional de Reforma Agraria y miembro del partido político que llevó a cabo esta gran obra de reorganización de la vida campesina).

- 6) Cf. Rainer Teztlaff, *Auffangbecken? Die Strukturanpassungsprogramme und der informelle Sektor* (= Colchón de amortiguamiento? Los programas de ajuste y el sector informal), en: DER ÜBERBLICK, vol. 27, No. 3, septiembre de 1991, pp. 14-16
- 7) Hay que considerar, además, que el sector informal orienta su producción y sus servicios hacia los segmentos de la población con el nivel más bajo de ingresos y nivel educativo. No es probable que ésto contribuya a promocionar los impulsos innovativos que podrían estar inmersos en el sector, máxime si a éste le falta el contacto íntimo con el cambiante nivel internacional de desempeño técnico-económico.- Cf. Gerald Braun, *Verdrängen, fördern, formalisieren? Entwicklungsstrategien für den informellen Sektor* (= Reprimir, fomentar, formalizar? Estrategias de desarrollo para el sector informal), en: DER ÜBERBLICK, loc. cit., pp. 11-13
- 8) Cf. Federico Aguiló, *El complejo coca/cocaína*, en: BUSQUEDA. REVISTA SEMESTRAL DE CIENCIAS SOCIALES (Cochabamba), vol. 1, No. 1, marzo de 1989, p. 15; Eva Dietz, *Der Funktionswandel der Koka in Bolivien* (= El cambio de función de la coca en Bolivia), Saarbrücken/Fort Lauderdale: Breitenbach 1990, pp. 102-105, 108 sqq.
- 9) *Países productores de coca soportan demasiadas presiones*, en: PRESENCIA del 28 de octubre de 1991; *Guerra al narcotráfico entre la represión y el desarrollo*, en: PRESENCIA del 9 de febrero de 1992
- 10) Sobre esta temática cf. José Antonio Quiroga, *Paradojas de una responsabilidad compartida*, en: NUEVA SOCIEDAD, No. 102, julio/ agosto de 1989, pp. 169-172
- 11) Cf. *La doble moral del combate al tráfico de cocaína*, en: PRESENCIA del 28 de octubre de 1991
- 12) Aníbal Aguilar, *Bolivia se acerca a "Cartagena II" sin estrategia ni consenso*, en: PRESENCIA del 3 de febrero de 1992
- 13) Cf. *Es muy difícil sustituir economía de la coca*, en: PRESENCIA del 16 de julio de 1991; *Se mantiene como tendencia incremento del narcotráfico*, en: PRESENCIA del 29 de septiembre de 1991; Joseph B. Treaster, *Esfuerzos no redujeron flujo de cocaína a EE.UU.*, en: LA RAZON del 29 de septiembre de 1991
- 14) En comparación con estos dilemas realmente serios, otros asuntos muy publicitados, como la pérdida paulatina de la soberanía nacional, parecen adquirir una significación secundaria.



ANEXOS

EL COMPLEJO COCA/COCAINA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

H. C. F. Mansilla

En contra de concepciones muy difundidas entre los campesinos bolivianos, sus gremios de representación sindical y los partidos de izquierda, se puede hoy en día afirmar que

(A) la economía de la coca (y su derivación inevitable: la cocaína) no preserva de ninguna manera las estructuras tradicionales y premodernas en los campos familiar, productivo y distributivo (que estaban basadas en las ancestrales relaciones de reciprocidad y parentesco), sino que ha introducido, de manera más o menos brutal e irreversible, los nexos "modernos" del mercado, la monetarización de todas las interacciones entre los campesinos, la individualización de las labores productivas y las típicas alienaciones del capitalismo urbano.

(B) El enorme incremento de las plantaciones de coca no ha servido para difundir los antiguos métodos agrícolas, que, como se sabe, estaban más o menos armonizados con los delicados ecosistemas de los suelos andinos, sino que ha contribuido masivamente a aumentar los desarreglos ecológicos, a introducir nuevas formas de deterioro medioambiental y a acelerar de una manera hasta ahora desconocida el ritmo de la devastación de los grandes bosques húmedos de las regiones tropicales y subtropicales.

Los órganos de representación gremial campesina y los grupos políticos afines a ellos, de tendencia izquierdista, nacionalista o populista, intentan demostrar que la producción de coca es, en el fondo, la inofensiva continuación de una actividad consagrada por

una larga tradición histórica no mercantil, sino más bien religiosa y dedicada a fines rituales de solidaridad ancestral, Aunque evidentemente una porción reducida de la producción actual de coca (menos del 10% del total) sigue consagrada al llamado consumo tradicional de la población aborigen del país y a la elaboración del mate de coca, nueve décimas partes de la misma son destinadas al prosaico objetivo de la fabricación de pasta básica y ulteriormente de cocaína pura y no a la continuación de una "valiosa herencia socio-cultural autóctona".

Esta prevalencia de inexactitudes premeditadas y de una ideología justificatoria de un hecho difícilmente justificable en términos de un estricto examen lógico e histórico, determina que la mayoría de los campesinos cocaleiros y sus organizaciones sindicales se vean más o menos impedidos de percibir la magnitud, la di rección y los resultados previsibles de su actividad en la esfera de la ecología y de la conservación de recursos naturales (suelos!) a largo plazo, causando de esta manera –muchas veces de modo involuntario– un gran daño a la nación y a generaciones futuras. Hasta ahora las organizaciones campesinas han extendido el discreto manto del silencio sobre los daños medioambientales que resultan de la monocultura de la coca. En una apasionada defensa de la producción de coca en cuanto continuación de un quehacer ancestral y (actualmente) como una forma auténtica de economía anti-imperialista, los dirigentes sindicales y campesinos (y no pocos políticos) pasan por alto premeditada y generosamente fenómenos como

- la tala indiscriminada de los bosques tropicales y subtropicales, que pertenecen a los ecosistemas naturales más frágiles del planeta, especialmente los situados en laderas de montaña;
- el erosionamiento y empobrecimiento de los suelos agrarios, fenómeno generalmente irreversible;
- la destrucción de la fauna y la flora y, por consiguiente, de una porción importante de la diversidad biológica; y
- la contaminación del subsuelo y de los ríos mediante la utilización masiva de agentes químicos de la más variada especie.

Hay que considerar, por otra parte, que la inadecuada percepción de la temática ecológica de parte de los campesinos cocaleiros en las regiones subtropicales tiene que ver también con su ori-

gen social-geográfico. La visión colectiva del trópico es prácticamente la misma que sustena el grueso de la población boliviana, que puede ser descrita someramente como la incomprensión basada en la ignorancia, la ingenuidad y, por ende, en falsas ilusiones.

Se supone que las regiones tropicales son espacios físicos esencialmente iguales al Altiplano o a los valles mesotérmicos y que las mismas técnicas agrícolas usadas en tierras altas y frías pueden ser aplicadas sin más al nuevo entorno (sub-)tropical. Estos grupos sociales no comprenden, sobre todo, la inmensa precariedad de los suelos (sub-) tropicales y el hecho de que las zonas tropicales no son tan ricas y productivas como ellos suponen. Los colonos comparten la muy difundida (y falsa) opinión de que las tierras tropicales son potencialmente fertilísimas. El frondoso manto tropical induce equivocadamente a esta creencia popular acerca de la riqueza intrínseca y no aprovechada de los suelos tropicales. Es interesante el resaltar que los grupos indígenas selváticos, que deben ser diferenciados nítidamente de los colonos provenientes de las etnias quechua y aymara del Occidente boliviano, practican una política claramente conservacionista con respecto a los suelos tropicales: no desbrozan sino el terreno absolutamente indispensable para cultivos muy reducidos y mixtos (ninguna monocultura); no destruyen la fauna y no quemar las arboledas (1).

La masa de colonos dedicados en Bolivia a la producción de coca reproduce actitudes propias de regiones mineras: el suelo tropical es percibido como una mina, a la que hay que explotar en el lapso de tiempo más breve posible, tratando de extraerle el máximo provecho y sin cuidar mucho por su situación a mediano y largo plazo. Se lo abandona rápidamente cuando decae su productividad o se lo vende a otro colono (2); el entorno tropical es visto "como algo hostil y extraño en un primer momento y como algo carente de valor después" (3). Esto conduce a desincentivar inversiones serias y de largo aliento. Se advierte una marcada tendencia a la maximización de beneficios (estrictamente monetarios) en un periodo mínimo de tiempo, lo que conlleva la descomposición de los vínculos primarios (por ejemplo, de los sistemas de solidaridad orgánica) y la introducción del trabajo asalariado y la monetarización de las relaciones humanas en su forma más cruda y primitiva. La nueva liquidez crea obviamente nuevas oportunidades de empleo (esencialmente temporal) y consumo (rápido), pero también inflación, diferenciación social, nuevas estratificaciones

basadas en el poder financiero, inestabilidad familiar y desequilibrios psíquicos (4). La "planta sagrada" termina en una economía profana en alto grado, desacralizada, pervertida y desnaturalizada (5). Este aspecto es importante para comprender la magnitud del desastre ecológico, pues esta descomposición de la sociedad campesina tradicional y de sus valores conduce a

- que se pierda toda relación afectiva con la tierra,
- que se pierda el interés por mejorarla con inversiones dirigidas a largo plazo y a generaciones futuras, y a
- que se diluyan los antiguos conocimientos pro-ecológicos de los campesinos andinos (por ejemplo se abandona la agricultura hecha a base de terrazas, graderías y pozas, la combinación de cultivos de variadas especies con un adecuado espaciamiento entre las plantas y la conservación de árboles altos que sirven de protección solar y de resguardo a la erosión del suelo [6]).

Se puede aseverar que la monocultura de la coca, tal como es practicada actualmente en suelos montañosos subtropicales, con su alta densidad de plantas por unidad de superficie, sus pocos cuidados por los efectos colaterales sobre el medio ambiente y su devastación de las arboledas protectoras ha contribuido simultáneamente a

(a) la crisis medioambiental más grave que conoce Bolivia y

(b) al aniquilamiento, por lo menos parcial, de un ordenamiento social premercantil mediante la introducción de grandes migraciones de los más diversos grupos étnicos y sociales en un lapso brevísimo de tiempo, por medio de la monetarización de la vida cotidiana y el surgimiento del mercado y del trabajo asalariado.

La monocultura de la coca origina además un avance permanente de la frontera agrícola (que puede ser calificado como un ritmo exponencial), que no retrocede ni ante los parques y reservas naturales protegidas de toda incursión humana por la legislación vigente. Parques nacionales como el de Isiboro-Sécure están siendo invadidos por dilatados grupos campesinos consagrados casi exclusivamente a cultivos ilegales de coca, sin que las autoridades pertinentes puedan o quieran tomar las medidas que corresponderían para evitarlo. La enorme expansión de la frontera agrícola

tropical apunta al hecho de que el trópico boliviano y sus ecosistemas se han transformado en una región que tiene que resolver problemas surgidos en ámbitos geográficos y ecológicos totalmente diferentes, sin poseer el fundamento para ello en lo referido al medio ambiente, a los recursos y a las posibilidades de soportar grandes masas poblacionales.

La causa de la devastación ecológica asociada al complejo coca/cocaína que puede ser considerada como la más importante reside en la magnitud actual de los sembradíos de coca. Tanto en el Perú como en Bolivia el ritmo de crecimiento promedio de los sembradíos se estima en un 10% anual. Debido al efecto acumulativo el área dedicada a la coca ha sufrido un aumento del 100% en los últimos ocho años; se estima que en Bolivia hay de 70.000 a 100.000 hectáreas consagradas casi exclusivamente a esta especie (7). La destrucción del bosque subtropical y tropical es, sin embargo, significativamente mayor, ya que el área talada y luego erosionada y abandonada es por lo menos 4 veces mayor que la destinada específicamente a las plantaciones de coca, ya que incluye los espacios utilizados por las vías de acceso, la vivienda, las pozas de maceración, los terrenos circundantes de las propiedades individuales y, además, una notable cantidad de terrenos desbrozados que permanecen sin uso agrícola, industrial o habitacional.

Puede aseverarse, en líneas generales, que el ritmo de deforestación de estas regiones de "nueva colonización" es actualmente exponencial, lo que se debe fundamentalmente a que este tipo de utilización de suelos agrícolas es, a nivel mundial, de una productividad bastante baja. Se puede afirmar que la baja fertilidad de estos suelos está correlacionada con la alta susceptibilidad de los mismos a la erosión. Según un estudio del Alto Huallaga en el Perú, el 47% de los suelos de ladera subtropical denota un grado de susceptibilidad a la erosión que llega a niveles muy agudos, mientras que el 38% tendría un nivel intermedio, solamente el 8% un nivel bajo y únicamente el 6% de los mismos no estaría afectado por la erosión (8). La situación en los Yungas y el Chapare bolivianos no es fundamentalmente distinta. La estrategia seguida por los colonos es la de un avance permanente adentrándose en la selva tropical y dejando tras sí laderas desérticas o estepas peladas y probablemente inaptas para todo otro tipo de agricultura y, lo que es más grave aun, incapaces de regenerarse, es decir, de volver a dotarse de un manto vegetal comparable al original. El daño a lar-

go plazo y a escala mundial es sencillamente enorme e imposible de ser cuantificado. Esta estrategia de cultivos itinerantes (*shifting cultivation*) puede coincidir con criterios de supervivencia y obedecer, por lo tanto, a una lógica estrictamente individual; pero como indica *Eduardo Bedoya Garland* (9), "es la racionalidad individual del colono la que provoca una tragedia colectiva".

Debido a la represión de que es objeto, los colonos dedicados a la monocultura de la coca prefieren regiones apartadas y, sobre todo, escarpadas, es decir, con pendientes muy pronunciadas. Aunque a este respecto los campesinos reproducen una vieja tradición, hay que puntualizar que estos terrenos son los más susceptibles a un erosionamiento rápido, irreversible y de consecuencias muy extensas. Una vez desbrozado el terreno elegido, quemado el manto vegetal y destruida la arboleda, la primera cosecha puede ser excelente debido a los muchos nutrientes contenidos en las cenizas, pero ya la segunda cosecha es de resultados bastante más mediocres a causa de la falta de nutrientes naturales contenidos en los suelos —un fenómeno muy conocido y expandido en casi todos los suelos subtropicales y tropicales— y también porque el manto de humus es muy reducido en altura (o profundidad). Las fuertes lluvias tropicales arrastran hacia abajo esta delgada capa vegetal y dejan como secuela la roca viva. Las cosechas subsiguientes tienen un rendimiento declinante (y aceleradamente!). Además este tipo de cultivo incrementa dramáticamente el peligro de aluviones, deslizamientos de tierras, destrucción y carreteras y empeoramiento de la situación de las laderas situadas inmediatamente debajo de las zonas de "apertura". Es importante llamar la atención sobre el hecho incontrovertible de que la deforestación de las partes altas de las cuencas hidrográficas limita la capacidad de absorción de humedad/agua de estas zonas; el agua de las lluvias tiende a escurrirse en mayor cantidad y velocidad de las que preveían cuando existía una vegetación densa. La consecuencia es bien conocida: presuponiendo un régimen pluvial constante, la cantidad de aguas arrastradas por los ríos es bastante mayor y produce inundaciones en las regiones bajas de las cuencas respectivas, las que tienden a aumentar con el paso de los años. Los programas de reforestación no han podido, en ninguno de los países involucrados, alcanzar ni de lejos el ritmo de la deforestación ocasionada por la tala de los bosques tropicales, tanto en lo que se refiere a la extensión de sembradíos de coca como a la explotación maderera y a la ampliación de las explotaciones ganaderas.

La deforestación originada por los colonos llamados cocaleros alcanza también a las tierras que estos siembran con cultivos para su propio sustento y para productos de panllevar, ya que también aquí implementan métodos de tala, siembra y fertilización que son fundamentalmente inadecuados y nocivos para los suelos tropicales. A estos terrenos hay que añadir como erosionados irreversiblemente los que se utilizan para los llamados servicios auxiliares de la elaboración de la pasta básica de cocaína: campamentos, caminos de acceso, pistas de aterrizaje, laboratorios, depósitos (de tambores de coca, de precursores y afines, de víveres, combustible, etc.) y, en escala nada despreciable, para las llamadas pozas de maceración. (Las altas fluctuaciones en el precio de la hoja de coca y la posibilidad de incrementar los propios ingresos mediante labores que no requieren de una preparación o formación técnica y ni siquiera de insumos demasiados sofisticados, han llevado a que grupos cada vez más dilatados de campesinos intenten "agregar valor" a su producción de hojas de coca mediante la elaboración "casera" de pasta básica de cocaína. Para ello construyen las pozas de maceración y utilizan cantidades crecientes de precursores y otros productos químicos sin tener prácticamente ninguna información técnica sobre los riesgos colaterales de tal uso y provocando mediante su descarte/eliminación totalmente irracional los daños ecológicos más graves y duraderos.)

La opinión convencional entre los campesinos acerca de la planta de coca está envuelta en mitos poco científicos que, por ejemplo, minimizan los daños ecológicos específicos causados por ésta, particularmente por su monocultura. Esta planta prefiere suelos arcilloso-arenosos de buen drenaje y marcada pendiente, lo que fomenta —si no hay un buen terraceo y una adecuada mixtura con toda una diversidad de otras plantas— un escurrimiento demasiado acelerado de las aguas pluviales y de riego artificial. Además, al contrario de lo expresado por los gremios que manifiestan los intereses sectoriales de los campesinos cocaleros, la coca cultivada bajo el apremio de una alta rentabilidad exige intensos y repetidos trabajos de deshierbe (por lo menos tres veces al año), remoción de la tierra hasta 15 cm de profundidad y limpieza de las zonas aledañas, particularmente de las franjas situadas por encima de los cocales (10). Debido a su alto requerimiento de luz solar, intensa y permanente, la coca induce a la tala de los grandes árboles tropicales —algunos de los cuales han tardado generaciones en de-

sarrrollarse—, los cuales son preservados, como se sabe, para las plantaciones de cafetales y otros, que necesitan precisamente de algo de sombra y protección solar para alcanzar su punto óptimo. Por todo ésto se puede afirmar que la coca y especialmente su monocultura no son de ninguna manera neutrales (es decir: inofensivas) con respecto a la conservación de los ecosistemas naturales, a pesar de ser probablemente originarias de la región. En este sentido comparten los problemas medio ambientales y los dilemas a largo plazo de todas las especies cultivadas de modo exhaustivo y comercial.

Uno de los factores más serios es el alto grado de contaminación/polución causado por elementos externos aplicados en la monocultura más o menos comercial y que afectan los subsuelos y los ríos. En el caso boliviano y peruano se puede hablar de que los campesinos hacen un uso cada vez mayor de abonos y fertilizantes químicos (sintéticos) en detrimento de los abonos naturales de origen ancestral. Se trata en general de fertilizante químicos inorgánicos, que se degradan biológicamente de modo lento y permanecen en el suelo o subuelo superior por periodos de tiempo extremadamente largos. No son neutrales con respecto al erosionamiento y a la salinización de los suelos. En el caso de la coca, "dada su elevadísima rentabilidad y la ignorancia de los cultivadores, los niveles de aplicación de estos agroquímicos superan todo lo razonable" (11). Exactamente lo mismo puede afirmarse de la utilización de herbicidas, pesticidas, fungicidas, insecticidas y productos afines. La lentísima degradación de éstos y su gigantesca expansión en aguas fluviales y lacustres han causado ya una enorme destrucción entre las especies hidrobiológicas y entre la fauna terrestre, especialmente entre los animales que dependen de los alimentos vegetales. Pero como mediante la cadena biológica de alimentación toda la fauna está entrelazada entre sí y es dependiente, en última instancia, de aquellos pequeños animales, se pone en peligro toda la diversidad zoológica del país.

Otro de los problemas mayúsculos que afectan al medio ambiente de las zonas subtropicales y tropicales reside en la utilización masiva de los llamados precursores y de otros insumos químicos para la elaboración de la pasta básica de cocaína y para las etapas subsiguientes de la refinación de esta droga. En las pozas de maceración y en los laboratorios más sofisticados se emplean cantidades realmente impresionantes (e irracionales) de ke-

rosene (más de 10 millones de litros), ácido sulfúrico (32.000.000 de litros), cal viva, acetona, tolueno y papel higiénico. Los desechos, sin ningún tratamiento, son arrojados a los ríos y arroyos, causando una gran mortandad entre la fauna ictiológica, los anfibios, crustáceos y reptiles de todo tipo. Este envenenamiento progresivo de los ríos tropicales llega a afectar grandemente las corrientes de la cuenca amazónica propiamente dicha. Resultados similares se han detectado con los herbicidas, pesticidas y defoliantes usados por la DEA y las agencias encargadas de la erradicación de las plantaciones de coca (12).

Es indudable que la producción de coca no tradicional (destinada a la elaboración de cocaína) ha servido para paliar la gravísima crisis económica que vive Bolivia desde hace ya más de una década y para elevar, así sea modestamente, los ingresos promedio de los campesinos dedicados a estas labores. Este sector ilegal-delictivo de la economía informal ha contribuido paradójicamente a evitar un descalabro mayor de la economía boliviana, a brindar ocupación, así sea transitoriamente, a miles de desocupados y a generar un flujo nada despreciable de divisas. Pero simultáneamente ha coayuvado masivamente a ocasionar y a incrementar una crisis de una envergadura aun más relevante —porque se trata de la base natural de la nación—, devastando los precarios y frágiles ecosistemas de las regiones subtropical y tropical, poniendo en peligro la existencia misma del bosque húmedo y, por ende, de un factor determinante en la regeneración del oxígeno atmosférico y afectando la ya dañada diversidad biológica del planeta, de la cual dependen, después de todo, las generaciones del futuro. Las ventajas a corto plazo de ciertos grupos sociales pueden convertirse en enormes desventajas irreversibles para todos en una perspectiva de largo plazo. La erradicación de cicales con medios químicos puede agravar este panorama desolador.

NOTAS

- 1) Cf. Eduardo Bedoya Garland, *Las causas de la deforestación en la Amazonia peruana: un problema estructural*, s. l.: Institute for Development Anthropology / USAID 1990, p. 41
- 2) José Blanes, *Migraciones, colonización y narcotráfico en Bolivia*, en: Varios autores, *Desarrollo amazónico: una perspectiva latinoamericana*, Lima: CIPA/ INANDEP 1990, p. 225
- 3) *Ibid.*, p. 233

- 4) Cf. Alejandro Camino, *Coca: del uso tradicional al narcotráfico*, en: Diego García-Sayán (comp.) *Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes*, Lima: Comisión Andina de Juristas 1989, p. 101 sq.; Ana María Vera, *Droga y ecología: un duelo a muerte*, en: ULTIMA HORA (La Paz) del 12 de abril de 1991, p. 2
- 5) Kevin Healy, *The Boom within the Crisis: Some Recent Effects of Foreign Cocaine Markets on Bolivian Rural Society and Economy*, en: D. Pacini / C. Franquemont (comps.), *Coca & Cocaine: Effects on People and Policy in Latin America*, Peterborough (N. H.): Cultural Survival 1986, pp. 101-143; Eduardo Bedoya Garland, *The Expansion of Coca Production in Upper Huallaga and the Chapare Valley*, manuscrito no publicado (1990), passim
- 6) Marc J. Dourojeanni, *Impactos ambientales del cultivo de la coca y la producción de cocaína en la Amazonía peruana*, manuscrito de la Universidad Nacional Agraria (Lima 1990), p. 286
- 7) Cf. Diego García-Sayán, *Narcotráfico y región andina: una visión general*, en: D. García Sayán (comp.), op. cit. (nota 4), p. 21 sq.; Henry Oporto Castro, *Bolivia: el complejo coca/cocaína*, en: *ibid.*, p. 171, 174
- 8) Eduardo Bedoya Garland, *Intensification and Degradation in the Agricultural Systems of the Peruvian Upper Jungle: The Upper Huallaga Case*, en: Peter D. Little / Michael M. Horowitz / A. Endre Nyerges (comps.), *Lands at Risk in the Third World: Local-Level Perspectives*, Boulder/Londres: Westview Press 1987, p. 292
- 9) Eduardo Bedoya Garland, *Las causas...*, op. cit. (nota 1), p. 26
- 10) Marc J. Dourojeanni, op. cit. (nota 6), p. 285
- 11) *Ibid.*, p. 288.- Cf. también Jorge Giusti, *Producción, tráfico y consumo de drogas: su significación económica y social*, Santiago: CEPAL 1991, p. 115 sq. (documento de circulación restringida); *La coca provoca catástrofe ambiental en el Chapare*, en: EL DEBER (Santa Cruz) del 22 de febrero de 1992
- 12) Para las consecuencias ecológicas del uso de productos químicos tanto en la elaboración/refinamiento de cocaína y en la erradicación cf. Giusti, *ibid.*, p. 106 sqq., 179 sq. (con una lista completa de estos agentes químicos).- Otros datos referidos al Alto Huallaga en: Marc J. Dourojeanni, op. cit. (nota 6), p. 289 sq.- Para una lista detallada de estos agentes químicos y las cantidades usadas cf. *Industrias químicas deben controlar sobreproducción*, en: EL DEBER (Santa Cruz) del 26 de febrero de 1992

2

SINOPSIS DE LA ENCUESTA DE OPINION PUBLICA

Eliana Castedo Franco

En el marco de este estudio se realizaron un total de cuarenta y cuatro entrevistas de profundidad con representantes de diferentes "pressure groups" así como con personas activas en ocupaciones informales. Este instrumento de investigación fue aplicado a residentes en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra entre fines de 1990 y el primer semestre de 1991. Fueron entrevistados miembros de las siguientes instituciones:

CONFEDERACION DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA (CEPB)

- Jefe de Prensa de CEPB (L.P.)
- Jefe de Programas y Servicios de Cámara Nacional de Industria (L.P.)
- Empresario constructor (miembro de CEPB) (L.P.)
- Representante de la Cámara de Industria y Comercio (S.C.)

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (COB)

- Secretario Permanente (L.P.)
- Secretario de Conflictos (L.P.)

- Secretario de Conflictos de Confederación Sindical de Constructores (L.P.)
- Representante de Federación de Constructores (S.C.)
- Secretario General del Sindicato de Electricistas y Plomeros (S.C.)

CONF. SIND. UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIA (CSUTCB)

- Secretario de Actas de CSUTCB (L.P.)
- Representante de la Federación Unica de Trabajadores Campesinos (S.C.)

FUERZAS ARMADAS (FF.AA.)

- Miembro de las FF.AA. (L.P.)

PARTIDOS POLITICOS

- Secretario de Relaciones del Movimiento Revolucionario Tupac Katari (L.P.)
- Miembro del Movimiento Bolivia Libre (L.P.)
- Miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Nueva Mayoría (L.P.)
- Miembro de Unidad Cívica Solidaridad (L.P.)
- Miembro del Partido Revolucionario del Pueblo (L.P.)
- Miembro de Unidad Cívica Solidaridad (S.C.)
- Miembro de Unidad Cívica Solidaridad (S.C.)
- Miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Nueva Mayoría (S.C.)

INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

- Representante de la Corporación de Desarrollo Regional de Santa Cruz CORDECRUZ (S.C.)
- Representante de la Corporación de Desarrollo Regional de Santa Cruz CORDECRUZ (S.C.)

INSTITUCIONES FEMENINAS

- Representante del Comité Cívico Femenino (S.C.)
- Representante de la Coordinadora de Clubes de Madres (S.C.)

INSTITUCIONES DE APOYO A INTEGRANTES DEL SECTOR INFORMAL

- Secretario de Finanzas de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales y Comerciantes Minoristas (L.P.)
- Representante de la Asociación de Distribuidores Mayoristas de la calle Isaac Tamayo (L.P.)
- Representante de una Institución Cívica de Promoción Semi-Rural, en El Alto (L.P.)
- Director del Centro Siñani de Trabajo Rural, en El Alto (L.P.)
- Directora del Centro de Tecnología Intermedia (S.C.)
- Secretario Ejecutivo de Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (S.C.)
- Director de Planificación Nacional de Fundación "Promoción y Desarrollo de la Microempresa" (S.C.)

Por su parte, los resultados en relación al origen y al nivel de instrucción de los informales interrogados fueron los siguientes:

ENTREVISTADO	L. ORIGEN	ESCOLARIDAD
<i>Entrevistados en La Paz</i>		
vendedora de tarjetas	Cochabamba	bachiller
camarero	La Paz	universitario
carpintero	La Paz	bachiller
vendedora de material escolar	La Paz	bachiller
personal de limpieza en una cooperativa	s.d.	maestro rural
<i>Entrevistados en Santa Cruz</i>		
vendedora de asadito	Vallegrande	2o. Básico
cargador	Santa Cruz	s.d.
vendedor de ropa	Sucre	2o. Básico
vendedor de mat. escolar	Cochabamba	incompleta
vendedora de cosméticos	Cochabamba	2o. Básico
vendedor de billeteras	Oruro	s.d.
dueña de tienda de aparatos electronicos	La Paz	no asistió a la escuela pero sabe leer
vendedora de lencería	La Paz	3o. Básico

Debido a que el objetivo de esta investigación es analizar las repercusiones políticas, sociales y culturales de la reciente expansión de la economía paralela y no propiamente la situación peculiar que caracteriza al informal, la mayoría de los individuos entrevistados (un total de 31) pertenecen a instituciones legalmente establecidas y cuentan, por lo tanto, con una ocupación formal. De ellos no interesó, en realidad, la naturaleza de su fuente de empleo sino, más bien, la opinión personal o institucional respecto de los procesos socio-económicos de la actualidad nacional. Por otra parte, la creciente participación de la mujer en el mercado laboral y la mayor presencia que tiene en la vida social y política del país hizo necesaria la incorporación significativa de miembros del sexo femenino en la muestra. Las características globales de la muestra empleada las presenta el siguiente cuadro:

CIUDAD	SEXO		OCUPACION		TOTAL
	fem.	masc.	formal	informal	
La Paz	2	20	17	5	22
Santa Cruz	9	13	14	8	22
TOTAL	11	33	31	13	44

En cuanto a la realización propiamente dicha de las entrevistas cabe destacar que salvo contadas excepciones no fue necesario repetir las preguntas de los cuestionarios, lo cual habla en favor de su acertada formulación. La diferencia entre los interrogantes planteados a representantes de los diversos grupos de presión y a los informales originó una variación en la duración de las conversaciones con unos y otros. Las entrevistas con el primer conjunto de entrevistados se prolongaron bastante porque en ellas abundaron las preguntas abiertas o libres que permitieron al entrevistado contestar a su manera: al no encontrarse ante la alternativa de tener que escoger entre respuestas concretas él gozó de libertad para expresar y exponer su opinión sobre el tema tratado; opinión que nos interesaba conocer. Las personas ocupadas en actividades informales fueron sometidas, por el contrario, a un interrogatorio con predominio de preguntas cerradas, en el sentido de que el interrogado pudo responder o "sí" o "no", o en todo caso brindar una determinada y, generalmente, breve información acerca de un acontecimiento específico de su vida personal o familiar. Dado el carácter no representativo de la muestra, los resultados no permiten obtener cuadros estadísticos relevantes; por ello, aquéllos han sido empleados para ilustrar algunas de las conclusiones de los análisis realizados que fueron presentadas a lo largo de los capítulos que componen este estudio. En estrecha vinculación con ese procedimiento los investigadores pusieron énfasis, en el momento de seleccionar a las personas a entrevistar, en las que brindarían mayor información sobre los temas a cargo de cada uno.

Del total de entrevistas realizadas fueron seleccionadas 12 para ser transcriptas completamente.

Representantes del empresariado: (3) Fueron seleccionados tres miembros de la CEPB para conocer la opinión de uno de los

sectores de la economía formal más afectados por la prosperidad de las actividades informales.

Representantes de los sectores populares: (3) Fueron seleccionados: un representante de la COB debido al rol central que le correspondió jugar al sindicalismo en la vida política del país; un miembro de la UCS dado el creciente significado que tiene entre los informales y, finalmente, un representante de El Alto, ciudad con gran número de migrantes.

Representantes de instituciones femeninas: (2) Fueron seleccionadas dos: una representante de los sectores populares y otra, representando los intereses de mujeres de estratos medios y altos.

Los informales (4) Fueron seleccionados cuatro: dos mujeres y dos hombres.

En la transcripción empleamos [...] para indicar que el texto fue incomprendible o que las afirmaciones realizadas no eran una respuesta a la pregunta planteada, y e.i. para abreviar el término economía informal. A continuación los cuestionarios:

GUIA DE PREGUNTAS PARA REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES

1. ¿Cuál es la posición de su institución frente a la expansión alcanzada por la economía informal durante los últimos diez años?
2. ¿Cree Ud. que se puede afirmar que la economía informal ha sido en su conjunto benéfica para el país?
 - a) por haber evitado un desempleo mayor que el actual?
 - b) por reintegrar al país un monto importante de divisas?
 - c) por la continuación de una vieja tradición laboral/ocupacional?
3. ¿Supone Ud. que las grandes migraciones que se han dado últimamente (por ejemplo: de los centros mineros a las regiones subtropicales y a las aglomeraciones urbanas) son (o no) benéficas para la totalidad de la sociedad boliviana y para

la integración de los diferentes grupos étnicos en la nación boliviana?

4. ¿Cree Ud. que la disolución de la llamada "centralidad minera" es a largo plazo algo positivo para el país?
5. ¿Cree Ud. que el crecimiento de la economía informal ha significado un debilitamiento del movimiento sindical y de los partidos de izquierda?
6. ¿Supone Ud. que la expansión de la economía informal pueda ser desfavorable a la educación y formación profesional de los jóvenes?
7. ¿Cree Ud. que los individuos y grupos vinculados al narcotráfico
 - a) han ganado influencia política y hasta conseguido incrustarse en los más altos niveles gubernamentales y que
 - b) son aceptados por la sociedad, gozando de un prestigio social genuino y no sólo como "nuevos ricos" ?
8. ¿Qué opina Ud. de la idea de que la economía informal es la respuesta adecuada de la economía de libre mercado frente a un Estado sobreprotector, monopolista, paternalista y encargado de las más diversas funciones empresariales, culturales y sociales, recobrando así la sociedad civil su relevancia frente a un aparato excesivamente burocrático?
9. ¿Qué opina Ud. acerca del alto grado de corrupción que la prensa menciona con respecto a la administración pública:
 - a) tiene que ver con el crecimiento de la economía informal?
 - b) erosiona la solidez y la credibilidad del Estado?
10. ¿Cuál tipo de mentalidad fomenta la economía informal
 - a) una de corto aliento, inmedatista y consumista, o
 - b) una de responsabilidad, con cualidades empresariales, innovadoras y organizativas?
11. ¿Cree Ud. que la preponderancia de la economía de la coca-cocaína es favorable para una atmósfera donde se confunde lo lícito y lo ilícito, desfavorable al ahorro interno y al proceso de democratización?

12. Se atribuye a Conciencia de Patria (CONDEPA) y a la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) un gran éxito en la captación de los votos de los "informales". ¿Cree Ud. que estos partidos
 - a) representan un real peligro para el proceso de modernización y democratización del país
 - b) o que ellos son, en el fondo, partidos de comportamiento convencional y de mentalidad tradicional?
13. ¿Supone Ud. que la estrategia oficial: "Coca por desarrollo" va a aumentar la dependencia de Bolivia con respecto al financiamiento externo de nuestro desarrollo y el peligro de la militarización del combate al narcotráfico (por ejemplo mediante la correspondiente "ayuda" norteamericana)?
14. ¿Qué opina Ud. de la muy extendida idea de que en el fondo el gobierno tolera generosamente toda la economía informal, incluyendo en primer lugar sus sectores ilegal-delictivos, a causa de sus efectos sobre el empleo y el ingreso, a pesar de que el mismo gobierno afirma que combate el narcotráfico y que trata de transformar los "informales" en "formales" ?
15. ¿Qué opina Ud. de la nueva actitud de los partidos de izquierda y de los sindicatos que se han dedicado a defender la producción y los usos "tradicionales y ancestrales" de la coca?

GUIA DE PREGUNTAS PARA INFORMALES

1. ¿Cuáles empleos/ocupaciones ha tenido Ud. desde 1980?
2. ¿Ha sido Ud. afectado(a) por la Nueva Política Económica a partir de 1985?
3. ¿Cuál actividad desempeña en la actualidad?
 - a) está contento(a) con ella?
 - b) le permite obtener ingresos suficientes?
4. ¿Necesitó alguna cualificación profesional o técnica para conseguir/ejercer su ocupación actual?
5. ¿Qué opina su familia sobre la situación actual de Ud.
 - a) los hijos con respecto al futuro profesional?
 - b) la esposa/el esposo con referencia a la asistencia médica?

6. ¿Ha tenido Ud. que cambiar de vivienda desde 1985
 - a) con ventaja/desventaja?
 - b) (los hijos) cambiar de colegio/escuela?
7. ¿Ha debido Ud. acercarse a los familiares/parientes para recibir ayuda financiera/no financiera en los últimos años?
8. ¿Cómo reaccionaron los parientes y amigos ante su nueva ocupación (informal)?
9. ¿Se siente Ud. inseguro(a) por tener que desempeñar una actividad al margen de la ley?
10. ¿Estuvo/está afiliado(a) a algún sindicato? ¿Qué opina del movimiento sindical?
11. ¿Qué le parecen los partidos políticos? Está contento(a)/descontento(a) con la democracia?
12. ¿Qué le parece el partido del compadre Palenque/UCS? Se siente comprendido(a) por el compadre Palenque o por Max Fernández?
13. Su ocupación actual le permite ahorrar algo? ¿Cómo era antes?
14. ¿Qué opina del narcotráfico? Debe prohibirse el cultivo excedentario de coca?
15. ¿Cree Ud. que la administración pública debe ayudar a los informales o dejarlos en paz? En caso positivo
 - a) mediante créditos blandos?
 - b) mediante programas de reinserción social?
16. ¿Qué opina del Fondo Social de Emergencia/ahora FIS?
17. ¿Qué opina de la represión militar en el Chapare?
18. ¿Hace o tiene Ud. algún plan/ilusión para el futuro?
19. ¿Se siente Ud. comprendido(a) por la labor de los Comités Cívicos?
20. ¿Cree Ud. que su actividad actual tiene que ver con el hecho de no ser blanco(a)/criollo(a)?
21. Para hallar/desempeñar su actual ocupación Ud. tuvo que cambiar de lugar de residencia/población/ciudad? ¿Desde dónde vino Ud.?
22. ¿Tuvo problemas o más bien ventajas con el traslado?

**REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACION
DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA**
(La Paz)

Respuesta a 1

- "La CEPB no ha desarrollado acciones para incorporar la e.i., sin embargo ha estado orientada en todo momento a la formalización de la economía porque ésto implica en primer lugar un aumento de los ingresos del gobierno, en segundo lugar, el potenciamiento del sector formal del empresariado privado. En ese sentido la Confederación ha estado bastante preocupada por el crecimiento de la e.i. y ha tratado en todo momento de hacer de que se formalice la economía. Ahora, el pensamiento de la Confederación al respecto es de que en la medida en que la economía se sincerice en sus distintos aspectos la e.i. va a tender a desaparecer."

Respuesta a 2

- "Yo creo que la e.i. ha beneficiado un tanto en haber evitado un desempleo mayor; muchas de las personas que quedaron desempleadas han encontrado en la e.i. una forma para poder subsistir, eso sería."

Respuesta a 3

- "No. El problema de la insuficiencia de servicios básicos en el resto de las regiones y la concentración que hay en La Paz, Cochabamba y Oruro de servicios aunque a la vez son deficientes han hecho de que de cierta manera la gente se traslade a los centros, pero eso ha afectado el salario real de las personas porque crea un exceso de oferta de trabajo (sic). Por tanto no es beneficioso ni para las personas que se trasladan ni para el país en general porque hace bajar el salario de las personas."

Respuesta a 4

- "Yo creo que sí, tiene que ser positivo. En la medida que los sindicatos actúen como monopolios porque los sindicatos son como unos monopolios que actúan y cuando hay mayor concentración tienen mayor poder y eso, si es mal utilizado, tiene problemas a nivel del mercado de trabajo, imposibilita también el tomar acciones en cuanto a la disminución del aparato del

Estado cuando tenemos empresas que son deficitarias como el caso de COMIBOL."

Respuesta a 5

- "El crecimiento de la e.i. en la medida que ya no están estas personas sindicalizadas probablemente signifique un debilitamiento del movimiento sindical. Por otra parte, los partidos de izquierda frente a una situación económica muy difícil de la gente que está viviendo en la informalidad no representa básicamente sus anhelos de superación, de mejor vida, de mejor economía y habría sido un factor también para debilitar los partidos de izquierda."

Respuesta a 6

- "No. Las personas que entran a trabajar desde muy joven tienen un costo de oportunidad de todas maneras así no habría habido e.i.. Si en un hogar se necesita que además del padre también trabajen los hijos sean éstos menores de 14 años o jóvenes entre 14 y 18, existiera o no la e.i. deberían trabajar de todas maneras. Yo no creo que haya afectado a la educación; lo que sí es que hay que tomar en cuenta que tienen un costo de oportunidad de dedicarse a la fuerza de trabajo o de educarse, en este caso el costo de oportunidad de educarse es muy alto y tienen que entrar a la fuerza de trabajo y colaborar con algunos ingresos a su familia."

Respuesta a 7

- "Bueno, no creo que gente vinculada al narcotráfico haya conseguido incrustarse en los altos niveles gubernamentales, probablemente han ganado cierta influencia política. Yo creo que son dos cosas distintas: una es la influencia a nivel gubernamental pero creo que no hay influencia; pero a nivel, digamos, de la influencia política que puedan tener en determinados sectores populares probablemente sí."

Respuesta a 8

- "La verdad es que la e.i. funciona en forma más adecuada en la economía de libre mercado porque en realidad no existen restricciones institucionales para entrar en el mercado, hay muy pocas normas, básicamente la información se tiene en la e.i. a través de los precios y las personas que actúan en la e.i. se mue-

ven en la medida como se orientan los precios y funciona más cerca de una economía marginal. La economía de libre mercado tiene una explicación teórica que es la economía marginal donde no hay restricciones al entrar al mercado, donde los precios guían a los agentes económicos, donde a través de los precios se transmite toda información. Yo creo que es donde más se da la economía de libre mercado pero no creo, como dice la pregunta, que sea una respuesta a, un Estado sobreprotector, monopolista, paternalista.

Yo creo que son aspectos distintos, el Estado de todas maneras tiene que seguir un rol subsidiario de controlar la economía, de desregular la economía, de dictar normas básicas y las reglas del juego digamos que tienen que ser permanentes en el tiempo. Pero el hecho que haya sido sobreprotector, paternalista en el pasado ha dado lugar a la formación también de una economía privada que vivía dependiendo del Estado. Probablemente ahora esos mismos empresarios privados que ya no viven del Estado, que viven gracias a la eficiencia de sus empresas, al esfuerzo de sus empresas y que están actuando también dentro de una economía de libre mercado."

Respuesta a 9

- "En relación al alto grado de corrupción de la administración pública yo creo que sí tiene que ver con el crecimiento de la e.i., puesto que, dónde se origina la corrupción: se origina especialmente en el hecho de que hay demasiada burocracia en la administración pública. La burocracia existe porque hay demasiada [...] en el manejo de la cosa pública, entonces, en la medida de que disminuya la [...], disminuya la burocracia también disminuye la corrupción. Ahora, como hay demasiada burocracia la gente empieza a ir por el lado más fácil que es la informalidad, en la medida en que haya corrupción y burocracia habrá informalidad. Es lógico que la corrupción va erosionar de todas maneras la solidez y legitimidad del Estado."

Respuesta a 10a

- "La e.i. se desarrolla muy en el corto plazo y entonces la rentabilidad que se está esperando siempre es en muy corto plazo; en ese sentido las empresas nacen, duran meses y nuevamente desaparecen, están muy orientadas por los ciclos que existan en

ese momento o cual sean las demandas estacionales en los mercados."

Respuesta a 10h

- "Yo creo que tienen bastantes cualidades empresariales, innovadoras y organizativas; más bien se adaptan muy fácilmente a los cambios. Uno puede ver fácilmente en los mercados negros que hay acá: cuando empiezan carnavales ellos tienen cosas de carnavales, cuando empiezan las clases tienen para clases, cuando es Navidad tienen las cosas de Navidad y cuando es San Juan tienen todas las cosas de San Juan. Es decir, tienen una capacidad empresarial muy grande de adaptarse fácilmente a los cambios que se dan en cada momento, sea estacional o sea un problema de moda, y la organización que tienen ellos de pequeñas unidades les permite adaptarse a esto. Es muy difícil que empresas grandes con muchos empleados, con muchos obreros, maquinarias destinadas a ciertas actividades o niveles de producción puedan adaptarse como por ejemplo lo hacen los que trabajan en la informalidad."

Respuesta a 11

- "Yo creo que en esta pregunta habría que separar dos cosas: la economía de la coca y la cocaína tiene un efecto muy grande en la economía, especialmente a nivel de las distorsiones que causa en la economía nacional. En primer lugar, podríamos hablar del mercado de trabajo; en el mercado de trabajo tiene un aspecto desfavorable sobre el salario real en el sector agrario, el salario real es muy alto y desincentiva que trabajadores campesinos puedan estar trabajando en actividades distintas de la coca. Ahora, en el mercado de las divisas también tiene un efecto distorsionador porque si no habría la actividad de la coca probablemente tendríamos la necesidad de subir aún más nuestro tipo de cambio; después, a nivel de valor agregado que se va generando en la economía con la coca también tiene efectos sobre el consumo y sobre el nivel de importaciones; especialmente distorsiona la economía en ese sentido. En la medida que se quede mayor valor agregado de la coca, la economía podría aumentar, sería más bien favorable al ahorro interno. No creo que en ese sentido sea desfavorable, va a depender básicamente de cual es la cantidad del valor agregado. Ahora, muchos estudios dicen que el valor agregado que se tiene en la

economía es muy pequeño, que todo el valor agregado se queda más bien afuera, por tanto ese sería un aspecto desfavorable para nuestra economía. Ahora, evidentemente que si la economía de la coca empieza a hacer que nuestro país tenga una dependencia excesiva de esta actividad, probablemente el proceso de democratización de nuestro país puede verse en peligro, no solamente en peligro sino que podemos estar dependiendo de gente que se maneje en el campo ilícito de la economía."

Respuesta a 12

- "Yo no creo que sean un peligro real para el proceso de democratización del país pero sí son un peligro real para el proceso de modernización, básicamente por lo que son partidos con mentalidades tradicionales que no quieren el cambio a pesar que en la Unidad Cívica Solidaridad existe un empresario privado a la cabeza; igual sucede en el caso de CONDEPA porque el que está ahí a la cabeza también al margen de sus actividades como periodista también es un empresario privado. Sin embargo, la forma de pensar de estas dos personas hacen de que sean muy convencionales sus comportamientos y que tengan una mentalidad tradicional. Pero sinceramente no creo que sea un peligro para el proceso de democratización del país."

Respuesta a 13

- "Bueno, aquí hay que analizar dos aspectos: Bolivia tiene que analizar si no existiera la ayuda americana que es lo que tendría que hacer con la coca y en la medida que dependamos demasiado de la coca y nuestra economía no pueda subsistir sin ella, entonces, obviamente, Bolivia tiene que hacer algo y ésto significa tener un desarrollo alternativo y a la vez empezar a reducir lo que son las plantaciones de coca o sea tiene que entrar [...] bastante fuerte. Pero si no sería capaz de hacer ésto obviamente tiene que buscar el apoyo de afuera y si el buscar el apoyo de afuera significa mayor dependencia es otro problema. Lo que pasa es que si nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios medios tenemos que buscar la ayuda de afuera, de alguien que nos pueda ayudar en erradicar el narcotráfico. En este caso no solamente está la ayuda americana también pueden estar los europeos; no sé, buscar la militariza-

ción de la zona con fuerzas de las Naciones Unidas, ese tipo de cosas porque aquí hay que darle soluciones prácticas. Aquí hay mucho del problema nacionalista de la gente que dice que no deben entrar los americanos, que es un atentado como: si pensamos de que somos capaces nosotros solos de erradicar, entonces entremos a erradicar solos pero si no somos capaces debemos buscar ayuda de otros lados, o sea, financiamiento requerimos para hacer desarrollo alternativo y necesitamos de fuerzas militares o policías para erradicar el narcotráfico."

Respuesta a 14

- "Yo creo que esa es una idea equivocada, no he escuchado que esa idea exista. Como decía al principio en la medida en que haya demasiada burocratización, y en la medida de que haya [...] la e.i. va tener una fuente de subsistencia. El hecho de que las reglas del juego han ido cambiando en estos últimos cinco años después de la nueva política económica en que se empieza a manejar la economía en forma más transparente, disminuyendo la [...] por ejemplo en la parte del manejo de los aranceles, hace de que varios sectores de la e.i. empiecen a entrar a la formalidad y yo creo que ese es el punto básico en esto porque de otra manera mientras existan aspectos demasiado burocráticos y haya corrupción, por este hecho entonces el gobierno no tiene los incentivos necesarios como para [...]."

Respuesta a 15

- "Bueno, los partidos de izquierda en primer lugar han perdido una base muy importante de apoyo entonces tienen que buscar otro tipo de aspecto donde puedan estar vigentes; igualmente los sindicatos después de la pérdida de poder relativo que tenían dentro de la sociedad civil, tienen que buscar otros aspectos como este de la coca. Vuelvo a decir, que por lo menos el decreto que se refiere a erradicar las plantaciones de coca deja una parte de la producción que está dedicada a conservar las tradiciones ancestrales del consumo de la coca; pero en este momento el excedente de la producción sobre el consumo dedicado a la actividad ilícita del narcotráfico que debe ser erradicado. Yo creo que la cosa está bastante clara: si ellos tienen una actitud de defensa es porque necesitan de una bandera para seguir vigentes."

**REPRESENTANTE DE LA
CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIA
(La Paz)**

Respuesta a 1

- "Desde el punto de vista de la Cámara la expansión de la e.i. es un hecho negativo desde varios puntos de vista. Una de las incidencias más importantes de la expansión de la e.i. es el efecto de terciarización de la economía. Esto quiere decir que la economía se dedique más a actividades especulativas que a actividades propiamente industriales con generación de valor agregado. La intención de la Cámara va más bien dirigida a la generación de actividades productivas con generación de valor agregado lo más acelerado posible."

Respuesta a 2a

- "Sí. Evidentemente la expansión de la e.i. tiene dentro de todo lo negativo que significa el crecimiento de la e.i. tiene como efecto positivo desde un punto de vista el empleo de una gran masa de personas, de fuerza de trabajo que de otro modo no tendría alternativa de producción dentro del circuito normal de la economía."

Respuesta a 2b

- "No, no necesariamente. El efecto de divisas es desde mi punto de vista es más bien pobre por lo mismo que le explicaba anteriormente en términos de que al ser una actividad principalmente especulativa más que de comercio no tienen incidencia favorable en nuestra balanza de pagos."

Respuesta a 2c

- "No es precisamente algo que se pueda tomar como un aspecto positivo. Habría más bien que basarse en el concepto de que la e.i. sí evidentemente emplea gran número de empleados que de otro modo estarían en la indigencia por no ser captados dentro del circuito normal de la economía, en el sector industrial, en las que toda esta masa de trabajo colabore en un actividad que genere un valor agregado, que genere nuevas posibilidades de exportación de productos, una mayor [...] para el producto interno bruto, etc. dentro del marco de la economía formal."

Respuesta a 3

- "Las migraciones que se han ocurrido más que por un efecto de la e.i. se producen por la caída de la actividad minera; como un efecto necesario, como una válvula de escape de la caída de la actividad minera, de todas las actividades mineras. Sin embargo, ésto da lugar a la conformación de los cinturones de pobreza que rodean a las urbes, a los centros poblados y ésto implica toda una serie de efectos negativos colaterales en términos de condiciones de salud, condiciones laborales, etc. que no favorecen en absoluto a la intención de un equilibrio migratorio. Es una migración forzada originada en la escasez de fuentes de trabajo."

Respuesta a 4

- "Sin duda. Uno de los males, de los efectos negativos de la economía boliviana ha sido la concentración en una sola actividad productiva, ligada necesariamente directa o indirectamente a la actividad minera, y la diversificación de la actividad económica sin duda que favorece a la economía boliviana."

Respuesta a 5

- "Pienso que sí porque las reglas de juego de la e.i. son básicamente de libre mercado. Esto no sólo en Bolivia, ésto ocurre en todos los países donde se generan importantes grupos de circuitos informales de producción. Sus reglas del juego obedecen más bien a las leyes del libre juego, entonces este tipo de mentalidad no es conducente al movimiento sindical ni muchos menos a las tendencias de izquierda."

Respuesta a 6

- "Si se quiere como un efecto negativo que se tiene como una de las características de la informalidad en términos de que normalmente por lo menos en Bolivia lo central de la e.i. está ligada al comercio y viene a darse lugar a poblaciones flotantes con bajísimos índices de educación y mucho menos formación profesional que no favorecen naturalmente a la educación y tecnificación de este tipo de gente."

Respuesta a 7

- "Como economista es imposible dar una opinión sobre ésto sin tener una base de sustentación que permita una opinión al

respecto. Por eso me [...] dar una opinión definitiva. Sin embargo, existen en el Parlamento leyes que están dirigidas al control de este tipo de actividades ilícitas que favorecerían mucho en términos de prestigiar y regularizar las actividades económicas, sociales, etc. [...] sino consolidar el prestigio de las instituciones del país naturalmente."

Respuesta a 8

- "Opino que el camino hacia una economía de libre mercado no debe ocurrir a través, por la vía de desarrollo de la e.i. El camino hacia una economía de libre mercado debe ocurrir a través de las instituciones del país con legislaciones que favorezcan la economía de libre juego, con una estabilidad económica, con el apoyo del gobierno en términos de financiamiento, infraestructura, garantías a la [...] etc. que permitan un ambiente adecuado para la inversión; único medio para lograr un desarrollo equilibrado y justo. En cambio la e.i. representa una respuesta desordenada, no necesariamente favorable al país por su falta de apego a normas de tributación y otros aspectos; sin reglas de juego en cuanto a urbanización, registros, controles etc. que necesariamente cualquier sociedad que quiera crecer en términos equilibrados debe obedecer."

Respuesta a 9

- "Evidentemente. Una de las razones de crecimiento de la informalidad es por un lado la corrupción naturalmente porque si no hubiera corrupción no habrían incumplidores desde un punto de vista; no habría incumplimiento. Pero desde otro punto de vista también la administración pública juega un rol importante en el desarrollo de la e.i. poniendo excesivas trabas burocráticas para la formalización de pequeñas industrias y todo aquello que conforma la e.i. Evidentemente en la medida en que la corrupción alcance grados mayores en esa medida se erosiona obviamente la credibilidad de las instituciones del Estado."

Respuesta a 10a

- "Básicamente si tuviera que elegir una de las dos alternativas que Ud. está mencionando tendría que irme a que la e.i. por su naturaleza misma representa una mentalidad cortoplacista porque es básicamente especulativa. En Bolivia la e.i.

está representada principalmente por grandes grupos comerciantes, que fomentan actividades como el contrabando y no así en otros países donde la e.i. está representada por otros tipos de actividades no necesariamente el contrabando, el comercio y actividades especulativas.

En cambio en Bolivia, en el caso nuestro, está representado por una actividad típicamente especulativa y como tal tiene necesariamente que representar una mentalidad cortoplacista. Sin embargo, en cuanto a la otra alternativa respecto a que si estamos hablando de responsabilidad, cualidades empresariales innovadoras y organizativas sí porque son grupos tal como dice Hernando de Soto o como describe en el caso peruano. Estamos tratando de grupos que tienen una gran capacidad de innovación; desarrollan sin ningún apoyo estatal ni de otra naturaleza, no tienen fuentes de financiamiento de organismo internacional mucho menos y tal precisamente ya que lo citamos a Hernando de Soto, son capaces de generar grandes inversiones de miles de millones de dólares en diversas actividades sin ningún apoyo. Esto tiene que representar obviamente una naturaleza innovadora, organizativa y de responsabilidad en sus actividades. Que sea o no apegada a la ley es otra cosa, otra cuestión; pero la innovación, la capacidad organizativa existe."

Respuesta a 11

- "Indudablemente en la medida en que la economía se impregna de aspectos ilícitos de transfondo. Para nosotros en Bolivia no podemos hablar de un PIB real y que exista un PIB con asterisco que sea el que incluya a toda la actividad ilícita; entonces se impregna en todas las instituciones y como resultado se polemiza sobre aspectos que [...] se desvirtúan valores tradicionales, se corrompe la sociedad, se pierde el valor en las instituciones y naturalmente en una sociedad de esa naturaleza es más difícil, o se perjudica el ahorro interno y a un proceso de democratización transparente."

Respuesta a 12a

- "No pienso así porque evidentemente, esta posición es muy personal mía, la postura de los partidos señalados es de tipo populista y este tipo de actitudes normalmente tiene este tipo de discurso político tiene un éxito muy coyuntural y no creo

que puedan significar un real peligro para el proceso de modernización y democratización del país."

Respuesta a 12b

- "No, no pienso que sea así porque precisamente por lo que mencionaba en términos de que el discurso político de estos partidos es de tipo coyuntural, es de tipo especulativo coyuntural. A mi manera de ver con respecto a esas cuestiones y al ser coyuntural indudablemente se alejan de una mentalidad tradicional."

Respuesta a 13

- "Una cosa es la estrategia coca por desarrollo y otra cosa es cómo se financia esta estrategia. La estrategia misma obviamente representa una respuesta no sólo de Bolivia sino de todos los países involucrados dentro de este interés de eliminar a la coca.

Obviamente representa una salida quizás única para nosotros poder enfrentar con cierto éxito los problemas que la coca representa en Bolivia. El manejo político, la capacidad de negociación del gobierno y los términos en que se financia esta estrategia es otra cosa muy distinta. Es decir, si el gobierno no tiene capacidad de negociación y cede en términos de soberanía en cuanto a las decisiones de militarización en el combate al narcotráfico y otras medidas que impone la ayuda norteamericana eso es más bien debido a la falta de capacidad de negociación gubernamental más que a la debilidad de la estrategia de la coca por desarrollo en sí misma."

Respuesta a 14

- "No. Tenemos que aclarar que hasta el momento cuando yo me he referido a e.i. me estoy refiriendo a e.i. digamos no incluida la actividad del narcotráfico. Pero aquí se menciona directamente a la e.i. incluyendo la actividad del narcotráfico entonces tendríamos que hacer una distinción y el gobierno evidentemente ve [...] como una de sus principales tareas [...] como la de generación de empleo más que tolerando, aceptando la necesidad de las circunstancias. El gobierno no es capaz y ningún gobierno creo que sería capaz de dar la suficiente cantidad de empleos para la fuerza laboral que ha quedado desempleada con los cambios de la Nueva Política

Económica [...]. Entonces, más que tolerar generosamente es una aceptación obligada para una gran masa de fuerza de trabajo que de otro modo se vería desempleada y representaría un peligro social de magnitudes si es que no tuviera este tipo de actividad. Y en cuanto a la parte de transformar informales en formales evidentemente es un esfuerzo del gobierno. Me ha tocado participar en varios proyectos que tratan de convertir al informal en formal por la simple razón de que el gobierno se ve en la necesidad de incrementar, ampliar la base tributaria que es el sustento del Tesoro General de la Nación, que es el sustento de la economía en Bolivia. Obviamente, una de las metas más importantes, más trascendentales que el gobierno se tiene impuesto en cuanto a la e.i. es incorporarla en los circuitos con fines básicamente tributarios. Entonces, obviamente, esta intención es real pero la capacidad de hacerlo es una cuestión muy distinta."

Respuesta a 15

- "Pienso que un partido cualquiera sea de izquierda o de derecha que pierde actualidad, que pierde paulatina y progresivamente la capacidad de ser escuchado en diferentes sectores tiene que apoyarse necesariamente en determinados slogans o determinadas creencias populares con el fin de abarcar mayor audiencia. Uno de los caminos rápidos para hacer ésto, para captar audiencia en sectores empobrecidos es el apego a ciertas tradiciones ancestrales dándoles eventualmente un mérito o una altisonancia muy gran de que le permita una captación, especulando un poco la idea. No quiero que se interprete como una falta de respeto a la tradición misma de la coca como tal dentro de las creencias más íntimas de nuestro pueblo, pero otra cosa es la utilización chauvinista que se puede hacer sobre el tema."

**REPRESENTANTE DE LA
CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Santa Cruz de la Sierra)**

Respuesta a 1

- "La Cámara de Industria y Comercio tiene nomás a lamentarse con la expansión de la e.i. Consideramos que el gobierno debe buscarlos mecanismos para integrar, cada vez más, a los dis-

tintos estratos de la población que permanecen en la e.i. El problema que nosotros como Cámara tenemos con la e.i. es principalmente porque el gobierno tributa de forma excesiva a los sectores formales de la economía y deja de preocuparse por incluir otros sectores mismo que pequeños pero los puede incluir y ampliar su base tributaria. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de incluir ese grande sector informal a la economía boliviana no estamos hablando solamente de expandir la base tributaria sino, por el contrario, racionalizar la base del tributo: cobrar poco pero cobrar bien y cobrar de todos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el sector de la pequeña industria que hace parte de la economía formal del país es excesivamente tributado, no solamente la pequeña industria; pero me limito a colocarlos a ellos como ejemplo porque hace poco tuvimos una reunión donde ellos se quejaban y hablaban de que entre tasas, impuestos y patentes llegaban a pagar más de 53 al año; entonces que de alguna forma inviabilizaba los negocios de ellos. Entonces, si bien es cierto que la e. i. al expandirse consigue generar empleo, tiene alguna función social; por otro lado, penaliza a todos los sectores que hacen parte de la economía informal (sic) del país."

Respuesta a 2

- "Si hablamos del narcotráfico como economía informal moralmente es perversa pero nosotros sabemos que económicamente ha sido benéfica por la gran cantidad de divisas que trajo al país y que permitía dinamizar la economía del país. Ahora, si nosotros hablamos también del contrabando, no sólo del contrabando de moviidades sino de todos los artículos, de bienes de consumo que vienen de la Argentina, de Brasil, de Chile nosotros creemos que ha sido más perversa que benéfica. Si bien es cierto que genera, por un lado, empleo por otro lado, quita empleo a la gente ocupada en el sector formal, deja de contribuir con sus tributos al gobierno, perjudica a las empresas legalmente establecidas en el país que no tienen condiciones de competir con estas empresas ilegales, con esta e.i. Entonces por ese lado de hecho sí ha sido perjudicial. En forma global yo creo que la e.i. ha beneficiado al país si lo hablamos en los términos del narcotráfico [...]. El narcotráfico está vigente hasta hoy en día. Un punto interesante para analizar la importancia del narcotráfico en la economía boliviana es necesariamente en

la hora que se implantó el 21060 en Bolivia en el año 1985. La recesión fue violenta, estamos hablando de una recesión violenta en un país que ya es pobre, que ya era muy pobre en esa época, que ya tenía una deuda social muy grande. Entonces, no nos olvidemos que el narcotráfico solamente en la producción de la hoja de coca genera a los campesinos de la zona del Chacabambes, no sé, 300 o 400 millones de dólares y las divisas que genera el narcotráfico para el país son superiores a las exportaciones de estaño. Entonces, por ese lado podemos hablar realmente de la magnitud del narcotráfico en la economía boliviana, en la e.i. sobre todo. Entonces, si eso es cierto el narcotráfico ha servido para atenuar la situación catastrófica que debió haber vivido Bolivia cuando se implantó el 21060."

Respuesta a 3

- "Fíjese, la primera pregunta [...] pienso que no porque estas migraciones, las últimas, principalmente éstas que han venido de los centros mineros fueron, se dieron como respuesta al Decreto 21060, a las medidas recesivas para contener la hiperinflación de Bolivia que se dio hasta el año 85, el año 86. Entonces, pienso que no porque grandes migraciones que al verse desocupados en los centros mineros se vinieron en dirección, por ejemplo, a estas regiones más tropicales como Santa Cruz. Vinieron a ocupar la ciudad y la ciudad no tiene capacidad para absorber toda esta gente que viene; no tiene los medios de estructura, no cuenta con servicios de salud, no cuenta con la vivienda suficiente, no cuenta con la educación suficiente. Entonces, no podría ser de esta manera benéfico, por lo contrario. Hay un gran descontrol.

Yo pienso que se debería ver la forma de relocalizar todo este grande contingente de gente, poblacional. Puede ser en Santa Cruz, en Oruro, en Potosí, en los lugares de las minas de donde ellos vienen pero en alguna actividad en las cuales ellos sean capaces. Puede ser en la agricultura, puede ser en la pecuaria pero evitar que ellos migren a la ciudad. Inclusive en la misma ciudad ellos no tienen lugar de trabajo, no tienen campo porque no tienen la formación hasta para hacer trabajos sencillos. No pueden ser ocupados aquí por nosotros. Es muy difícil que ellos ocupen [...] mercado laboral en la ciudad. Debería haber un proyecto más profundo por parte del gobierno, si es posible de instituciones internacionales que cola-

boren a recolocar a estas personas, a recolocar este grupo poblacional. La segunda parte de esta pregunta: para mí no es tan relevante. Es importante sí que los grupos étnicos se conozcan, tengan contacto; pero pienso que hay otros factores más importantes que tengan un contacto. Hacen parte de culturas diferentes; tenemos una forma de pensar y de vivir un tanto diferente de la región tropical a la región andina pero si hay una integración todo bien. Pero no pienso que es ese el punto fundamental de la migración. La migración se ha dado más que todo por necesidades económicas."

Respuesta a 4

- "Sí; claro, cómo no! No sólo a largo plazo como a corto plazo ya es algo positivo para el país. Nosotros vemos, por ejemplo, que el país ha diversificado sus exportaciones. Pues, es que el país no podía continuar a ser un país monoprodutor y mono-exportador solamente de algunos, de estaño principalmente. Entonces, la descentralización de la actividad económica, destinar recursos, fuerza, capacidad a nuevas actividades económicas como ser la agricultura, la pecuaria en Santa Cruz y otras actividades industriales que existen en La Paz, actividades industriales que. No vaya a ser que queda sujeto solamente a las oscilaciones del precio del estaño: que cuando baja, el país entra en crisis y cuando sube, el país se recupera. Entonces, esta descentralización de la actividad económica boliviana en torno a la minería es necesaria y muy benéfica. Debía haberse dado hace mucho tiempo. Es más, también debemos complementar que la actividad minera es una actividad que se agota pues, se agotan los minerales y no son recursos renovables [...]. El concepto de que los mineros representaban la vanguardia proletaria del país. Pienso que debe superarse y ya está siendo superado poco a poco. Porque nosotros vemos que a cada día en otras regiones del país la clase proletaria —que ya también está perdiendo vigencia hasta la propia denominación— va aumentando, va siendo cada vez más significativa. A qué me refiero: el número de empleados, el número de personas que tienen y disponen solamente su fuerza de trabajo como instrumento para sobrevivir y que ven den su fuerza de trabajo está creciendo cada vez más en otros sectores. Hablo específicamente de Santa Cruz que es la región que mejor conozco. Por el propio crecimiento que se está dando en Santa Cruz. Entonces no

es justo considerar a los operarios mineros como representantes de este sector en el país y las aspiraciones pueden ser diferentes. Aspiraciones del obrero minero con las del obrero en nuestra región. Claro que en términos de mejora de condiciones de vida y tantas otras luchas y reivindicaciones ellos tienen ideas comunes. Por otro lado en otro tipo de exigencias hay particularidades hasta por las propias condiciones geográficas. Entonces, pues cada región debe tener su propio representante y debe exigir de acuerdo al lugar donde se está desarrollando."

Respuesta a 5

- "El debilitamiento de los partidos de izquierda hoy en día no está tan ligado, pienso yo, al crecimiento de la e.i. Está más ligado a los hechos que han sucedido en el mundo como un todo, me refiero a la perestroika, [...] a la caída de los regímenes en Europa del Este, a la tendencia mundial de implantar economías de mercado. Entonces, todos estos hechos obligan a la izquierda a repensar su posición [...]. Por otro lado, nosotros tenemos todavía fresca la experiencia de gobiernos populistas, como ser el de la UDP que ha sido desastroso para el país como un todo no solamente para la izquierda, para la derecha, para todo mundo. Y como era un gobierno populista que aparentemente se tildaba de izquierda –no sé cuán de izquierda hubiese sido [...]–, pero entonces por sí solo perdió crédito. Inclusive se probó que el pueblo mismo con recesión pero prefiere vivir con estabilidad. [...] Pienso que la gente más que de la recesión que se provocó con el 21060 no se olvida de la hiperinflación de los años anteriores [...]. El crecimiento de la e.i. de hecho le resta un poco de fuerza al movimiento sindical [...]. De hecho al movimiento sindical sí le quita fuerza porque la gente cuando hace parte de la e.i. no hace parte de ningún sindicato."

Respuesta a 6

- "Sí. Pienso que sí. Los excesos son nocivos [...]. Nosotros estamos en un país donde la informalidad es la regla no la excepción [...]. La informalidad hoy vigente en la economía boliviana realmente es nociva para la educación y la formación profesional de los jóvenes. Un profesional estudia en una universidad y aprende economía formal, aprende a trabajar o dirigir una empresa dentro de los moldes formales [...]. Toda la for-

mación que los estudiantes, que los universitarios reciben gira en torno a la formalidad económica. Entonces, si ellos vienen para meterse a trabajar en la e.i. la tendencia es que fracasan, a menos, con la excepción de los hábiles que se desarrollan bien en cualquier lugar."

Respuesta a 7

- "Pienso que sí. El dinero ha conseguido comprar muchas cosas y también, por qué no, ha conseguido financiar políticos y ha conseguido financiar campañas. Si ha conseguido incrustarse en los más altos niveles gubernamentales no lo sé. Pero la falta de crédito hoy en día en las autoridades públicas no porque sea de tal o cual partido sino en general es tan alta que nosotros vemos que renuncian ministros; hay denuncias de narcotráfico dentro del gobierno [...] cosas inexplicables dentro del molde de la justicia, normalmente no serían lógicas. Entonces pienso que sí: el poder de los narcotraficantes si bien no han conseguido infiltrarse tan alto a nivel político por lo menos han conseguido comprar altas autoridades políticas en el país.

Sí, son aceptados por la sociedad y pienso que si son aceptados es por culpa nuestra, por nosotros mismos. Porque nosotros tenemos toda la potestad para rechazar a un narcotraficante pero como somos un país de pobres se nos puede comprar con cualquier cosa.

No quiero decir que se nos compre éticamente, moralmente pero en un país pobre es así: cuando la gente es pobre realmente hasta por necesidad le rinde pleitesía a cualquier narcotraficante. Por eso pienso que si no habrán ganado un prestigio social como hombres de bien o de intelecto pero sí son aceptados y tienen presencia en la sociedad cruceña particularmente, que es donde estamos nosotros también metidos [...]. A la hora de estar con ellos no les decimos sus verdades en la cara pero nos pueden dar plata para carnavalear y ser padrinos de comparsas y de esas cositas. Entonces es una hipocresía y después se habla y se les da palo."

Respuesta a 8

- "No. La respuesta al Estado paternalista, al Estado empresario, al Estado monopolista no es la e.i., por lo contrario. Fíjese bien: lo que se plantea es que el Estado se retire de los lugares, de los sectores de la economía en los cuales él no tiene nada

que hacer; no quiere decir que el Estado se mande mudar y desaparezca y no haga nada. Por lo contrario: el Estado debe permanecer en aquellas funciones que le son propias. La respuesta adecuada es la economía formal. Solamente que una economía en la cual las empresas privadas y el Estado cumpla su papel [...]. Lo que reivindica el empresariado, la iniciativa privada es que el Estado se retire de aquellas funciones en las cuales no es necesario que él esté, no justifica que son actividades que la empresa privada las puede hacer y con más eficiencia. Consideramos que el Estado debe abocarse a aquellas funciones sociales que le son inherentes: educación, salud, infraestructura colectiva, esas son funciones propias del Estado [...]. No es que sea la e.i. la respuesta, es la economía formal pero la economía de libre mercado. Eso es lo que se plantea, la propuesta [...]. La e.i. se genera tanto, se puede generar tanto en una economía en la cual el Estado participa de forma excesiva como en una economía en la cual el Estado no participa de forma excesiva; tanto en un lado como en el otro se puede desarrollar con toda claridad la e.i. La e.i. es más que todo una respuesta a nuestra pobreza, nuestra falta de alternativa [...]. Por otro lado, el exceso de participación del Estado en la economía sí puede, podemos decir, que puede llevar a la e.i. Porque cuando las tributa a las pequeñas empresas en exceso ellas agarran y se hacen clandestinas para no tener que pagarle ese tributo al Estado."

Respuesta a 9

- "El alto grado de corrupción con respecto a la administración pública no tiene a ver mucho con la economía. Tiene a ver sí porque en determinados sectores de la economía el sector públicopermite que la e.i. y la economía ilegal se desarrolla a través de la coima [...], pero no es por el desarrollo de la e.i. en sí que hayan corruptos en el sector público [...]. La corrupción en función básicamente de dos factores: uno de ellos y el principal, es función de la pobreza de nuestra sociedad, nosotros somos pobres, somos una sociedad que tiene un ingreso per cápita anual creo que poco superior a los 600 dólares, eso no da. En la medida que somos pobres nos vendemos por cualquier cosa [...]. Un guardia en la calle usted lo compra por 10 pesos porque gana 50 pesos al mes, con 50 se muere de hambre entonces los diez le hacen falta [...]. El segundo factor -y este fac-

tor que yo pienso la prensa no lo toca debidamente— es de que hay corrupción y exceso de corrupción se debe necesariamente al exceso de intervención del Estado en la economía. El Estado es dueño de muchas cosas en el país [...]. El Estado legisla mucho, entonces la respuesta a todo ese exceso es la corrupción. Qué es lo que posibilita que haya corrupción en pagar un patente, y todas esas cosas: el exceso de legislación por parte del Estado. Como se dice 'hecha la ley hecha la trampa'. Qué es lo que hace, por ejemplo, que hayan grandes desvios de sumas de dinero. Cuando una empresa del Estado que no tendría necesidad de existir, construye una obra como es del Estado se le puede robar [...]. El origen de la corrupción está en que el Estado legisla con exceso la economía [...]."

Respuesta a 10

- "Pienso yo que la e.i. trae beneficios a corto plazo, inmediatista [...]. Por otro lado, no nos olvidemos que una mentalidad de responsabilidad con cualidades empresariales, innovadoras y organizativas como dice aquí su pregunta: no puede, no va a [...] nunca a la informalidad [...]. Si es que la e.i es fomentada es solamente por una del corto plazo, por una mentalidad inmediatista [...]."

Respuesta a 11

- "[...] Tiene usted toda la razón. Nosotros sabemos que el origen del recurso es ilícito, es ilegal, es inmoral inclusive. Sin embargo, se puede incorporar a una actividad lícita y de esa manera colabora la cocaína a [...] entre estos dos conceptos. No es desfavorable. Es favorable porque la cantidad de divisas y de riqueza que genera es grande pienso yo. Hace nomás con que gran parte de estos recursos sea canalizada a la red bancaria; entran a la red bancaria muchos de estos recursos de actividad ilícita; se transforman en actividad lícita, en inversiones, en capacidad constante y autosustentada de generar riqueza. Entonces de esa manera estamos hablando que ahorramos, que aumentamos el ahorro interno. Es una pregunta complicada que yo no sabría responderle a ciencia cierta: si es favorable o desfavorable al proceso de democratización."

Respuesta a 12

- "Yo le confieso que pienso que sí. [...] representan un peligro a la modernización del país. Porque con todos sus defectos el

país ha sido encaminado por las políticas liberales, neoliberales. Pienso yo que ha sido encaminado quizás no todavía en el camino correcto pero en el menos equivocado. [...] La propuesta particularmente de CONDEPA es de la implantación de un modelo que vaya en contra del modelo neoliberal que implantó el MNR. [...].

Un modelo de un Estado interventor, de un Estado socializante que solamente socializa perjuicios porque en nuestros países atrasados lo que se han socializado son las deudas y la pobreza. Entonces, en este aspecto pienso que sí, que es un peligro. UCS tiene algunos fundamentos, tiene algunos posicionamientos pero lo que sorprende en UCS es la fuerza económica que tiene el partido [...]."

Respuesta a 13

- "[...] Si hay una militarización del combate a los campesinos productores de coca ahí estamos hablando de un caos para el país. Pero si es para combatir una actividad ilícita yo particularmente veo que no hay mucho riesgo, no hay grandes misterios. Pienso yo que sería positivo [...].

Nosotros ya dependemos del financiamiento externo. El éxito en lo que se refiere a estabilización de la política neoliberal implantada por el gobierno de Victor Paz dependió mucho del financiamiento externo. Entonces, nosotros ya dependemos mucho de financiamiento externo y depender un poco más o un poco menos ya tanto le hace. Lo importante de "Coca por desarrollo", de este proyecto es que consiga diversificar la producción de Bolivia y que no solamente se quede [...] a la coca. [...]"

Respuesta a 14

- "Hay que dividir dos campos: uno es la e.i. del narcotráfico y otra es la e.i. del contrabando de ropas, perfumes y de todas esas cosas que se venden en las ferias; los pastilleros, todos los pequeños talleres, talleres de servicios, reparación. Entonces, el gobierno actúa con determinada hipocresía y usa los conceptos de una actividad para proteger la otra. Si nosotros hablamos que el gobierno en aras de mantener el empleo, de no provocar, de no aumentar el desempleo del país, de no combatir frente a la e.i. Estamos hablando a los contrabandistas hormigas, a los talleres pequeños de servicios que no emiten facturas, a los pequeños productos fabricados [...].

Si el gobierno no los combate en aras de que esta gente siga trabajando, siga manteniendo su fuente de ingreso no serían perjudicados por la [...] está muy bien. Habrá que ver la forma de tratar de meterlos a la economía formal poco a poco. Pero si por otro lado el gobierno bajo estos argumentos que le he dicho de no perjudicar la fuente de ingreso de estos pequeños sectores le da la espalda, se hace la vista gorda al narcotráfico en sí, estamos hablando de una actitud hipócrita, inmoral. Porque si el primer análisis escapa a los moldes de la legalidad, es decir esto es ilegal porque toda actividad económica tiene que tributar, tiene que tener determinado tienen un objetivo social, digamos. Pero la otra ya no tiene nada que ver, el narcotráfico es inmoral [...]."

Respuesta a 15

- "Bueno, yo particularmente no tengo nada en contra de que los campesinos planten coca y masquen coca; hace parte de la cultura de ellos. Está muy bien y que se haga té de coca y se venda la coca y se la explote con sus cualidades curativas que ella tiene."

REPRESENTANTE DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA
(La Paz)

Respuesta a 1

- "De un apoyo digamos completo a los compañeros que se denominan de la e. i. que en todo caso están afiliados a una organización que es la Confederación de Gremiales. Nuestra posición es de un franco apoyo. La COB no rechaza a la e. i. de ninguna manera."

Respuesta a 2

- "Es muy relativo puesto que la e.i. por una parte, digamos desde el punto de vista técnico, es un fenómeno económico que está al margen por ejemplo del problema tributario y también de la cuestión legal, jurídica. Pero naturalmente que el hecho mismo que se produzca digamos una reactivación que no esté liderizada por el Estado ni por la empresa privada sino más bien en un contingente de la población que ha buscado caminos digamos viables para sobrevivir eso indica que, obviamente, ha reportado un beneficio al país. Por lo menos un bene-

ficio de tipo social porque permite paliar un poco la crisis en que se encuentra el país."

Respuesta a 2a

- "Relativamente, porque aun al margen de la existencia de la e.i. existe un 20% más o menos de la población económicamente activa que está sin trabajo; un porcentaje importante está en el subempleo que utiliza a la e.i. como medio de vida. No ha sido obviamente evitado el desempleo pero sí paliado en algo."

Respuesta a 2b

- "Indirectamente porque la e.i. por el hecho de ser informal no tributa o si hay alguna tributación es muy tenue, muy poca y naturalmente que eso implica que no ingrese mucha divisa aunque hay un sector de la e.i. que comercializa productos del exterior y de importación o exportación, entonces eso podría dar un viso de que hay un movimiento de divisas en favor del país pero definitivamente digamos como un puntal de la economía no aporta, es decir, no hay un aporte importante de divisas con referencia a la economía."

Respuesta a 2c

- "Eso también es relativo. Más bien podríamos decir que en Bolivia es nuevo porque si nos remontamos más o menos hasta los años sesenta en Bolivia no existía la e.i., es a partir de la segunda mitad o sea a partir de 1976/77 cuando ya se da con mayor importancia el crecimiento de la e.i.. Sin embargo, hay una tradición que en las culturas andinas su sistema de comercialización nunca ha sido muy formal, entonces la formación de mercados, de ferias deviene justamente de esa cultura pero vuelvo a reiterar es un fenómeno nuevo en Bolivia como en Latinoamérica obviamente."

Respuesta a 3

- "Obviamente que sí. El trasplante o las migraciones de importantes sectores de la población a lugares o a zonas del país donde no había un desarrollo relativo es importante por cuanto se da mayor posibilidad de desarrollo territorial; entonces es importante y consideramos que en ese sentido los grupos que han emigrado."

Respuesta a 4

- "Dos aspectos habría que puntualizar en ésto: el aspecto meramente económico que tendría como base la generación de divisas que se basa en la economía de la minería y el otro problema sería la centralidad minera en el campo, por ejemplo sindical. Consideramos que básicamente el país es un país minero y tiene gran potencialidad. No creemos de que sea positivo a largo plazo en el aspecto por ejemplo económico y menos en el aspecto social y en el sindical; fundamentalmente porque el sector minero del proletariado es el que le ha dado vida al movimiento sindical. Entonces esa centralidad que últimamente está siendo o parece ser desplazada por otros contingentes sociales como son los campesinos no resulta muy positivo, por cuanto la experiencia que tienen los grupos mineros es el fruto del árbol de años de sacrificio y de luchas; entonces los compañeros campesinos y otros grupos, como los informales por ejemplo, son, particularmente los informales, políticamente retrasados por decir, pero no están al nivel de los mineros entonces en ambos aspectos nosotros vemos con bastante suspicacia que a largo plazo esa centralidad pueda ser positiva para el país."

Respuesta a 5

- "No, sino más bien podríamos señalar que la e.i. ha significado no un fortalecimiento por lo que le decía anteriormente son grupos que no tienen digamos mucha experiencia en las luchas sindicales pero eso mismo más bien podría ser un potencial en el futuro y ha sido por ejemplo en la anterior gestión de la COB. Yo le hablo del 87 al 89 en esa época donde el movimiento minero ha sido sumamente vapuleado por lo tanto casi derrotado en materia sindical pero la Central Obrera y los grupos sindicales se ha fortalecido con el movimiento de la e. i.; entonces nosotros no consideramos que pueda ser un elemento de debilitamiento para el movimiento sindical en la medida en que las organizaciones sindicales puedan educar y dar mayor participación a estos grupos."

Respuesta a 6

- "También es relativo porque tanto el Estado como las organizaciones sociales pueden y tienen la posibilidad de explotar y explorar, ingresar en estos grupos que forman la e.i. más bien

para dar otro tipo de educación que no sea también la formal, la educación del Bachillerato en Humanidades sino otro tipo de educación, que sea una combinación de ambas: de la formación académica tradicional y también darles algunos elementos técnicos. Específicamente que la e.i. a la larga pueda convertirse en una economía formal, positiva para el desarrollo de país, ordenada."

Respuesta a 7a

- "Sí. Lastimosamente se está constituyendo en una verdad; más que en niveles gubernamentales diríamos en algunos poderes, básicamente en el poder judicial donde el poder del narcotráfico ha desarrollado una importante actividad que ha determinado que no se aplique la norma jurídica positiva y que los jueces y los funcionarios del poder judicial hayan tenido que entrar en esta economía y que por otra parte ha impedido, vuelvo a reiterar, la aplicación de la ley porque se ha maleado y se ha torcido la ley, podríamos decir, en función a las influencias económicas que han ejercido estos grupos."

Respuesta a 7b

- "Obviamente que es negativo y falta de una educación y cultura digamos en la mayoría de la gente que acepta o que da cierto status social a estas personas que están ligadas al narcotráfico por el factor fundamentalmente económico y la influencia que tiene y ésto se ha visto en el Oriente boliviano, por ejemplo con la familia Suárez que son benefactores de la población, una especie de Mecenas donde la población obviamente por el atraso y por la poca atención que da el Estado a las fuentes de trabajo, a la educación, al desarrollo se apoyan en estos elementos o en esta estructura del narcotráfico y, obviamente, ahí puede moverse con bastante facilidad este grupo delictivo. Eso es negativo desde todo punto de vista."

Respuesta a 8

- "También eso es relativo. Obviamente que sí porque un Estado sobreprotector determina que la población se vea inerme frente a las arremetidas por ejemplo del problema de la privatización de las empresas públicas, sobre la aplicación exacerbada del neoliberalismo y otro tipo de, digamos, de aplicación económica entonces la e.i. no siendo una respuesta adecuada,

es decir, como un sistema económico que pueda ser aceptado por la sociedad y por el Estado por el hecho mismo de que es informal implica que está fuera de la norma jurídica y de todas maneras es una alternativa que el Estado debe dar mayor atención para poder formalizarla y además incentivar a un desarrollo, siendo economía informal pueda pasar a la formalidad pero dando mayor fuentes de trabajo, en fin.

No, obviamente que no porque lo ideal sería dar las posibilidades más idóneas también a la sociedad civil para que pueda desarrollar la propia sociedad, porque si el Estado se arroga todas las obligaciones de la cultura, etc. se está llegando a lo que señala la anterior pregunta: a un Estado sobreprotector, es como un padre que a sus hijos les da todo y no les permite un desarrollo individual e independiente. Debe haber un equilibrio en las obligaciones que tiene el Estado con la sociedad y la propia sociedad con el Estado de manera que se pueda dar algunas áreas a la sociedad civil que pueden ser manejadas con más idoneidad, por ejemplo el campo de la cultura pero no lo de la educación pues la educación es del Estado."

Respuesta a 9a

- "Puede haber una relación cuando en la e.i. están participando algunos grupos delincuenciales como el narcotráfico, entonces eso implica lo que señalábamos: que el narcotráfico tiene un poder tan fuerte que da la posibilidad de una corrupción más profunda al interior de la administración pública."

Respuesta a 9b

- "Naturalmente eso es indiscutible, en todas partes no sólo en Bolivia y ahora se ve con bastante fuerza eso y estamos en este momento viviendo una situación política tan difícil que el Estado en este caso el gobierno se ve en una situación también difícil, porque no puede cortar la corrupción que se ha exacerbado bastante."

Respuesta a 10a

- "Obviamente que sí. Lastimosamente porque los propios elementos que están insertos en la e.i. no basan su actividad con proyección al futuro sino muy relativamente y por otro lado fomentan una mentalidad consumista en el sentido de que una gran parte de la e.i. se dedica al comercio de artículos de im-

portación o de contrabando pero una actividad, yo me atrevería a decir, consumista galopante porque venden de todo, fomentan el consumismo."

Respuesta a 10b

- "Obviamente que se puede, naturalmente, pero los elementos insertos en la e.i. tendrían que ser los primeros a hacer una especie de reflexión, de auto-reflexión para que el propio Estado organizaciones sociales puedan ayudarlos."

Respuesta a 11

- "Sí, eso es verdad aunque reiteradamente negada por los compañeros productores de coca, pero ellos están en una especie de defensa de su economía pero existe eso, es decir, se confunde lo ilícito con lo lícito, por cuanto el excedente de coca producida por los campesinos productores naturalmente que tiene un canal que se desvía hacia el narcotráfico, hacia la producción de cocaína.

Evidentemente es desfavorable porque no es un ahorro internoreal, es muy aleatorio. Primero que no hay un ahorro interno porque el gran excedente que produce el narcotráfico sale al exterior, ahora, lo poco que se puede ahorrar no tiene fundamento real, es decir, no está basado en una productividad normal, por ejemplo, de la industria establecida. Entonces es desfavorable también al proceso democrático porque los grupos de narcotráfico se van incrustando e infiltrando en diferentes sectores sociales que en determinado momento van adquirir o ya han adquirido cualquier poder político."

Respuesta a 12a

- "No, yo creo que no, de ninguna manera; en todo caso el hecho de que esta economía informal y los elementos que están ahí se identifiquen con determinados partidos políticos, estos pueden ser que hayan nacido al calor de la presencia masiva de personas dedicadas a la e.i. pero básicamente siendo partidos políticos que tienen un programa. Yo pienso que pueden ser elementos que colaboren a que se de un cauce más político digamos a la economía."

Respuesta a 12b

- "Más bien que no. Son partidos nuevos que han emergido al calor de lo que nosotros decimos populismo, pero este gran

contingente de personas que se apoyan o se inscriben en estos partidos no han encontrado en los partidos políticos tradicionales una respuesta a sus inquietudes, a sus reivindicaciones, entonces considera que estos partidos pueden ser tal vez la posibilidad de acceder a una mejor situación, económica, social y de vida."

Respuesta a 13

- "Obviamente que todo crédito, toda dependencia del factor exterior en lo que se refiere a la economía produce una dependencia, si vale la reiteración, negativa para el país. Por otra parte, nosotros consideramos que este problema "coca por desarrollo" hasta este momento no pasa de ser un enunciado, no hay en la práctica ese desarrollo captado en fuentes extranjeras o en países europeos en este caso, que hayan podido, digamos, desarrollar las áreas donde se produce la hoja de coca por cuanto hasta este momento han sido muy pocas las aportaciones o casi ninguno los aportes que se han captado, entonces nos parece que es más un cliché político que una política efectiva.

Sí, eso ocurre porque da la posibilidad para que las Fuerzas Armadas a través de sus organismos de represión puedan incursionar en el campo y sin discriminación alguna combatir, no combatir específicamente al narcotráfico sino a los campesinos productores o no de coca, y además está inscrito en una política de mayor trascendencia: lo que se denomina la guerra de baja intensidad que es un programa, un proyecto implementado por el gobierno norteamericano, entonces consideramos que es negativo."

Respuesta a 14

- "Si nosotros hablamos de la e.i. pareciera que estamos hablando de una actividad delincinencial que no es así y señalábamos que la e.i. está influenciada en algunos aspectos en esta cuestión del narcotráfico pero puede haber una e.i. sin la participación del narcotráfico, entonces el gobierno no tiene otra posibilidad, es decir, el gobierno y la propia estructura del Estado. Es el hecho mismo de que no tenga los recursos económicos para solventar, mantener una economía, por ejemplo el Tesoro General de la Nación a través de los tributos o sin hablar del Tesoro para mantener a esa gran población que está desocupa-

da y está ambulando por las calles pero que tiene la posibilidad de llevar a sus hogares un pan. Esos recursos económicos no provienen del Estado sino de la generación que hace la e.i. y posiblemente también de actividades ilícitas entonces el gobierno tolera pues totalmente, ahora que habría que definir hasta que punto la e.i. está influenciada por lo que se llama el narcotráfico porque el concepto de e.i. no es obviamente un delito: si la economía no se ajusta al encuadramiento legal en materia tributaria y jurídica, por ejemplo, un vendedor ambulante muy rara vez tiene una patente, una autorización y además un puesto fijo o paga tributos, generalmente inclusive hay negocios bien establecidos en el comercio que se los puede identificar claramente que no dan factura entonces aunque ellos no quisieran están en la e.i.

Obviamente que incluye a estos sectores. El Estado no tiene las posibilidades, los elementos necesarios ni el Estado como digamos estructura de la sociedad y en este caso más particularmente tendríamos que referirnos al gobierno porque el gobierno es el que maneja el Estado a través de algún partido político, de un programa, entonces en el caso concreto de Bolivia y en la actualidad el gobierno no tiene las posibilidades ni la intención digamos de combatir sinceramente a lo que se llama el narcotráfico o la actividad delincencial que está confundida o incrustada en la e.i.

Eso es un poco relativo; el problema de la informalidad no es problema del Poder Ejecutivo específicamente es un problema social, económico, macroeconómico; no es el resultado del manejo gubernamental-administrativo, es el resultado de una economía global, obviamente que el gobierno para que pueda formalizar a la e.i. tendría que tener un nuevo programa donde uno de sus puntos sea formalizar a la economía pero para ello obviamente que necesita de recursos económicos, técnicos en fin; es un problema supranacional."

Respuesta a 15

- "Yo creo están en lo correcto porque al margen de que hubiera una intención velada digamos de proscribir en su totalidad la hoja de coca se está también afectando contra la cultura de los pueblos, de los diferentes pueblos en territorio nacional; es una actitud legítima de defensa."

**REPRESENTANTE DEL
"CENTRO SIÑANI DE TRABAJO RURAL"
(La Paz)**

Respuesta a 1

- "Es un fenómeno que merece estudio porque no comporta factores negativos como inicialmente se creía sino que también comporta aspectos positivos."

Respuesta a 2

- "No sé exactamente; pero ciertamente entre los aspectos positivos que la experiencia va demostrando es que ha posibilitado el empleo de muchos sectores que anteriormente estaban desempleados.

Luego que ha fomentado una responsabilidad de pequeñas empresas o de pequeñas iniciativas que han incidido en formas rentables de autosustento, de automantenimiento. Finalmente, que por efecto de una competitividad de características propias al interior de la lógica informal ha promovido una serie de iniciativas novedosas que en buena parte recuperan recursos propios del país."

Respuesta a 2a

- "Ciertamente."

Respuesta a 2b

- "Lo primero más claro que lo segundo."

Respuesta a 2c

- "También."

Respuesta a 3

- "[...] compleja porque por un lado es verdad que ha habido una redistribución de la población relocalizada en varios sectores del país y una ubicación asimismo en varios sectores del trabajo. Lo poco que he conocido al respecto es que ha habido un sector que se ha ubicado en áreas de producción directa, del sector primario. Un sector que creo que no es menor o sea que también es considerable dada la cierta especialidad de mano de obra de los mineros que se ha ubicado en el sector secundario y tengo también testimonios bastante cercanos de otro sector,

aunque no sé el porcentaje, que se ha ubicado en la actividad terciaria. Me temo que este último porcentaje sea mayor que los otros dos."

Respuesta a 4

- "[...] respuesta clara al respecto."

Respuesta a 5

- "Lo cierto es que el crecimiento del sector informal en parte ha significado el surgimiento de nuevas modalidades de organización popular. En cuanto al grado de incidencia en el debilitamiento de los dos sectores mencionados no tengo una idea cabal."

Respuesta a 6

- "Bueno, no sé si respondo bien pero esta expansión por el momento de una manera digamos un tanto inmediata está dando respuesta económica a muchos sectores jóvenes que no están profesionalizados. Sin embargo, pienso que de no atenderse este fenómeno emergente de la e.i. más bien me inclino a pensar que sería una forma errónea de tratar de resolver o sea de no encarar la profesionalización de sectores jóvenes."

Respuesta a 7a

- "Pienso que sí."

Respuesta a 7b

- "También."

Respuesta a 8

- "Bueno, da la impresión de que tuviera varias preguntas pero fundamentalmente no creo que el sector informal sea la respuesta ante el proceso de decrecimiento del Estado, de los aparatos estatales. Pienso que por ahora constituye una media respuesta un tanto imperfecta. Ahora, no creo tampoco que esta solución temporal, imperfecta, inmediata que hoy se está dando deba ser la respuesta que el país espera para no sólo fortalecer el sector civil sino también [...] el sector estatal y mucho más para fortalecer la capacidad productiva del país. Pienso que los economistas deben tener alternativas mucho menos espontaneistas, más racionales, más estructuradas, más profesionaliza-

das. Dicho en dos palabras: pienso que la expansión del sector informal constituye una especie de tabla de salvación hoy por hoy pero que no debe constituir la respuesta a la crisis económica del país, sobre todo de tipo laboral."

Respuesta a 9

- "Primeramente, que no es un fenómeno de ahora; segundo, que no tenemos estudios serios como para hacer comparaciones con el pasado e incluso para basarse en afirmaciones para futuros fenómenos similares; tercero, que como dice el refrán "cuando el ruido suena piedras lleva". Es probable que haya un inquietante grado de corrupción sobre todo en momentos en que el país empieza a ser sujeto de una serie de apoyos externos pero personalmente no puedo tener una visión digamos cerciorada de este fenómeno del que toda la gente habla."

Respuesta a 9a

- "No lo sé."

Respuesta a 9b

- "Eso ciertamente."

Respuesta a 10

- "Pienso que ambas alternativas son verdad en cierta manera. Es verdad que su visión un tanto inmediatista y de solución de lo [...] sobre lo importante puede ser o sea es verdad pero así mismo pienso que de una manera un tanto pragmática y ahí está el peligro de que a veces margina la profesionalización respectiva. Pero que a veces también crea unos hábitos de responsabilidad empresarial a pequeñas escalas en medio de sectores populares que sería interesante estudiar y perfeccionar."

Respuesta a 11

- "Pienso que sí."

Respuesta a 12a

- "Parece que la pregunta encerrara una doble vertiente. Uno en cuanto a la [...] de estos partidos mas bien de corte populista y otro de la incidencia en el futuro. En cuanto a lo primero, aparentemente para ese objetivo capitalizan el voto de buena parte del sector informal. En cuanto a lo segundo, no estoy claro."

Respuesta a 12b

- "No tengo una idea formada al respecto."

Respuesta a 13

- "Lo segundo veo más claro que lo primero."

Respuesta a 14

- "No tengo tampoco una figura muy clara al respecto porque por un lado, aparentemente pareciera haber una voluntad decidida de neutralización de estas formas corruptas pero por otra parte, pareciera haber una política no muy estructurada de encarar los aspectos positivos y negativos del fenómeno de la e.i. Respecto a lo segundo yo sigo manteniendo que el fenómeno informal comporta factores negativos y positivos. Por tanto, no sólo se trata de que la política gubernamental haya de alguna manera de reprimir este fenómeno sino mucho más: de estudiarlo para detectar las potencialidades positivas para la economía nacional."

Respuesta a 15

- "En principio me parece correcta la actitud de defensa de la identidad cultural de nuestras mayorías indígenas en el símbolo de la coca. Pero no se puede circunscribir una actitud a solo ver esa faceta de la medalla. Creo que también ha de tomar en cuenta la otra faceta del riesgo y de la incidencia del narcotráfico."

**MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO
DE LA UNIDAD CIVICA SOLIDARIDAD
(Santa Cruz de la Sierra)**

Respuesta a 1

- "Obviamente estamos convencidos de que ésto ha sido provocado por el desempleo, por la falta de empleo que da el gobierno. Y creemos que la gente no tiene por qué buscar la forma de llevar el que comer a sus hogares. Para evitar estas [...] el gobierno debería buscar la forma de crear empleo para toda la población."

Respuesta a 2

- "Diría que no. No es benéfica porque no está reglamentada y prácticamente está descontrolada."

Respuesta a 3

- "No, no son benéficas. No pueden serlo porque son migraciones totalmente interesadas, diríamos, por busca de una vida mejor, no por una simple integración. Vendría a ser una integración para el país en cuanto a las etnias, a las nacionalidades que tiene el país. Vendría propiamente a intremezclarse y a uniformar en ciertos aspectos a las etnias. Todas las migraciones están creando una serie de cinturones de pobreza de miseria y no pueden ser benéficas de ninguna manera."

Respuesta a 4

- "Si se refiere a que está centralizada la minería en el Occidente, creo que sí, que tiene que ser benéfica porque tendríamos [...] ampliar nuestro espectro [...]."

Respuesta a 5

- "Yo diría que los partidos de izquierda se han debilitado no por el crecimiento de la e.i. sino porque ya están, digamos, un poco obsoleta. El movimiento sindical se ha visto deteriorado, diría yo, por la falta de credibilidad de los grupos que están afiliados a estos sindicatos en cuanto a lo positivo de las gestiones que puede realizar un sindicato en favor de los empleos."

Respuesta a 6

- "Sí, positivamente. Al existir una e..i. donde los jóvenes directamente pueden entrar a ganar dinero, entonces ellos se acostumburan rápidamente a trabajar y ganar sus propios medios. Propiamente no requieren ya de una profesión para poder trabajar."

Respuesta a 7

- "En ambos casos diría que no. Porque en el caso de la sociedad, la sociedad si bien los acepta como miembros de ella en forma prácticamente obligada, diría, por su situación económica de nuevos ricos. Pero de aceptarlo por sí mismo, no los acepta. Generan empleo o prácticamente son tipos de dinero. No están incrustados profundamente en la sociedad. Y a niveles gubernamentales: no."

Respuesta a 8

- "Depende cómo lo miremos y cómo se maneje el Estado en relación a esa situación. Porque nosotros hablamos de una e.i., prácticamente hablamos de los comerciantes que están en la calle, en fin.

Y si eso es producto de un contrabando, entonces tenemos un mal manejo del Estado en cuanto al control de la importaciones al país. De todos modos eso viene a ser negativo para el mismo Estado. [...]"

Respuesta a 9

- "Bueno. La corrupción en el país siempre ha existido, de una u otra manera. Ahora, lo que sí tenemos es una denuncia pública prácticamente de los medios de comunicación en este respecto. Antes no se la publicitaba como se lo está publicitando hoy en día.

Y actualmente sí ha aumentado la corrupción tremendamente. Por supuesto que sí; también la libre expresión en estos momentos permite que se denuncie mucha corrupción que hay en altos niveles del gobierno. Porque si no estaríamos en democracia no se podría denunciar. Por supuesto que sí (erosiona la credibilidad del Estado, E.C.F.). La corrupción que tenemos en el gobierno, prácticamente viene a fomentar el ingreso de mercaderías al país por ese medio que es corrupto: contrabando."

Respuesta a 10

- "De ninguna manera empresarial; es inmediatista. La gente por mera necesidad se dedica a ese comercio, a esa actividad. (...)"

Respuesta a 11

- "Es desfavorable al ahorro interno, por supuesto. Es desfavorable. Bueno, si hablamos de prácticamente de, porque es un comercio totalmente ilícito y la economía que genera este tipo de negocios, de industria no va directamente a las arcas del Estado.

No beneficia en nada al Estado, simplemente para cierto grupos que están dedicados a este tipo de actividad. No hay ahorro interno. Completamente dañino y negativo (para el proceso de democratización, E.C.F.). Porque todo lo que sea ilícito va contra el pueblo o el Estado; lo que totalmente va contra del

pueblo o del Estado no podría ir en favor de la democracia que es el sostén de [...] de un país."

Respuesta a 12

- "Por supuesto que no. Prácticamente en caso de la UCS, diríamos, no representa un peligro para el proceso de modernización y democratización del país puesto que este partido propugna el cambio, prácticamente. Entonces, no puede ser un peligro. Más bien es una garantía de la democratización. (El partido vincula, E.C.F.) un gran sector que no está incorporado y un gran sector que se siente defraudado, prácticamente, por el gobierno de turno."

Respuesta a 13

- "Por supuesto que sí. Sigue llegando plata y siguen llegando controles externos al país. Los famosos "asesores". Es una dependencia mayor."

Respuesta a 14

- "Genera empleo, los libera de cierta responsabilidad. Entonces, tiene que tolerarlo, pues. No es combatido. Yo diría que el narcotráfico se busca controlarlo pero bajo ciertas condiciones. Es conocido de que, prácticamente, los narcodólares han estado de cierta forma sustentando la economía del país. Y bueno, lo controla y lo combate porque así se lo están mandando y está condicionado a cierta ayuda externa el que lo combata o no lo combata, el que lo controle o no lo controle."

Respuesta a 15

- "Bueno, es una reacción lógica. Han perdido vigencia en ciertos aspectos, entonces tienen que buscar otras banderas para mantenerse en vigencia. Sí, es positivo (ese cambio, E.C.F.) porque se están dedicando más a lo nuestro y no a lo externo como estaban antes. [...]"

REPRESENTANTE DEL COMITE CIVICO FEMENINO
(Santa Cruz de la Sierra)

Respuesta a 1

- "Bueno. Nosotros para empezar no somos una entidad de lucro, simplemente somos de coordinación [...]. La e.i. al menos

en Santa Cruz creo que se ha, no sé si habría que ponerle atajos siempre y cuando esa e.i. pagara. Pero como este país es un país tan pero tan especial que al incumplido en realidad se lo premia.[...]"

Respuesta a 2

- "Me imagino que hasta cierto punto ha sido benéfica porque como dice aquí habría evitado un desempleo mayor. Mal que mal la gente ha tenido fuentes de trabajo aunque sea en empresas que no han, o en esta e.i. Que ha habido que la gente tampoco ha cumplido con sus obligaciones tributarias pero sí ha dado empleo. Eso ha sido una parte buena, digamos. Ha evitado que la gente venga a integrar los cinturones de miseria de las distintas capitales."

Respuesta a 3

- "Si hubieran sido unas migraciones ordenadas pienso que sí. Pero yo la invito a usted a que vaya a ver al Norte, la invitaría yo a que vaya a ver todos esos [...] llegando de la Chiquitania. Los han puesto a esta gente relocalizada. Estropean el monte que da pena, realmente: siembran aquí, tumban más allá, tumban más a sido benéfica para cualquier lugar del país donde los hubieran acomodado. Pero lamentablemente no ha sido así. Bueno. Aquí hay lugares ya donde están asentados algunos grupos étnicos. Yo creo que ha habido una integración cultural porque donde estén ellos practican sus costumbres; ellos practican perfectamente bien aquí. Como vivimos en democracia también no se les puede privar a nadie que realicen, no digo sus ritos, sus costumbres que nosotros acá no tenemos."

Respuesta a 4

- "Eso yo no le puedo contestar porque no conozco ni una mina."

Respuesta a 5

- "Páselo porque ..."

Respuesta a 6

- "Yo creo que es desfavorable porque en esta e.i. muchas veces ahí trabaja todo el mundo. A la gente no le interesa si estudia o

no estudia. La cuestión es que es la plata. [...] Hay gente de esta gente relocalizada que no quieren entender de que los muchachos vayan a colegio. Entonces es a que trabajen ya sea de lustrero, de vende periódicos, de una cosa de otra, de vende chucherías, lo que sea. Entonces, yo creo que no ha beneficiado eso. Es que ellos tienen otra mentalidad también, no?. Hacer plata, hacer plata, a que hagan el centavo. No les interesa el estudio porque piensan que está perdiendo el tiempo, piensa que el hijo está perdiendo el tiempo estudiando cuando debería ser algo más para la economía de la familia."

Respuesta a 7

- "Yo creo que los grupos vinculados al narcotráfico no han conseguido incrustarse ni en la política ni en los altos niveles gubernamentales. Pero sí yo creo que han comprado conciencia. Ellos, como personajes, yo pienso que no por lo que uno lee, pero sí han comprado a todo el mundo, yo creo, por lo que uno lee. [...] Aquí son rechazados. Aquí hay un grupo de clubes si quiere ingresar uno que se sabe que ha estado metido en esas cosas no lo aceptan. Más que todo ahora y si ya estaba adentro de una institución y saben sus correrías, automáticamente lo expulsan."

Respuesta a 8

- "[...] Tanto burocraticismo que hay que no lo deja trabajar al contribuyente o al comerciante. Lo más triste en este caso es que a esta e.i. que no está ni registrada, a esa nadie le hace nada. Sin embargo, este aparato tributario no le saca el dedo al comerciante, al que está legalmente inscrito y por eso siempre han habido problemas en la Cámara de Comercio [...]"

Respuesta a 9

- "Con todo. La credibilidad del Estado se viene abajo. [...] Toda esta corrupción es debido pues a la pobre economía, a los pagos que les hacen. Si un empleado público ganara relativamente bien no tienen necesidad de estar robando, hágame el favor. Para mí que erosiona la solidez y la credibilidad del Estado."

Respuesta a 10

- "Es consumista."

Respuesta a 11

- "Es desfavorable al ahorro interno porque la gente que tiene su plata, o la que hace su ..., no lo quiere tener aquí, porque aquí no tienen garantía para sus cosas [...]."

Respuesta a 12

- "Estos informales se van al que más les [...]. Pienso yo que es un peligro: ésto de pagar a la gente. La cosa debe ser natural; debe uno hacer su campaña limpia, no comprando conciencia."

Respuesta a 13

- "Eso para mí es un 'bla-bla' porque las cosas van a seguir como siempre, nomás. Lamentablemente los bolivianos somos puro boca. Decimos que vamos hacer coca por desarrollo y el otro día yo he ido a Cochabamba y cualquier cantidad de sembradíos a la orilla de la carretera. Eso qué es, qué es eso? Están marchando los cocaleros a La Paz. Porque, qué es lo que les ofrecen? Le dicen que suspendan la coca pero qué alternativas le ofrecen? Qué le van a dar para que haga? [...]"

Respuesta a 14

- "El gobierno, pues, le fomenta. El tiene que tolerar para tener contenta a esta pobre gente; tiene que permitirle todo en realidad. [...] El gobierno tolera; tiene que seguir tolerando porque quiere tener contenta a la gente que sabe que le va a sacar un voto."

Respuesta a 15

- "También es su negocio de ellos. Los utilizan, nomás."

**REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA DE LOS
CENTROS DE MADRES DEPENDIENTES DE CARITAS
(Santa Cruz de la Sierra)**

Respuesta a 1

- "Nuestra organización más que todo ha visto de que en estos últimos diez años ha crecido de gran manera el desempleo. Ya nuestros compañeros no tienen fuentes de trabajo; de tal manera que las mujeres nos hemos visto en la necesidad de salir a la calle no importa qué cosas haciendo: tal vez cargando canastos con frutas, otras vendiendo refrescos, anticuchos y así, una serie de trabajos que hace la e.i."

Respuesta a 2

- "Yo no creo que la e.i. sea un beneficio para el país, más bien a lo contrario. Yo pienso que la e.i. ha traído grandes problemas por el hecho de que la mujer ha tenido que salir de su hogar para buscar la subsistencia de la familia, y eso también ocasiona de que tengamos que abandonar a nuestros niños mucho más tiempo que anteriormente.

Yo pienso que esa forma de empleo no es positiva. Es negativa por el mismo hecho de que es un trabajo como su nombre lo dice informal forma la mujer que sale a trabajar fuera de su hogar no está protegida, en primer lugar, ni por la Ley General del Trabajo ni tampoco no tienen una seguridad social."

Respuesta a 3

- "Tampoco eso ha sido beneficioso puesto que hemos visto que grandes mayorías de compañeros mineros han tenido que ser echados de sus fuentes de trabajo, y por lo tanto hemos visto mayor mendicidad en la gente que viene realmente desde los centros mineros hacia santa Cruz buscando mejores vidas. Y ahí tenemos pruebas de la gran cantidad de compañeros mineros que están vendiendo limones y, en fin, buscándose la forma de subsistir. [...]"

Respuesta a 4

- "No, realmente para los sectores populares no es positivo por que el hecho de que los mineros hayan perdido fuerza dentro de lo que es la COB, me parece, que ha sido una buena táctica del pre sidente para poder esparcir un movimiento tan fuerte como era el de los mineros. [...]"

Respuesta a 5

- "[...]"

Respuesta a 6

- "Realmente no es positiva. No es positiva desde el punto de vista de que en un hogar donde es solamente la mujer la que tiene que sostener la canasta familiar, ya ese hecho de que sea la jefa del hogar la que mantiene a su familia no da lugar ni margen de dinero para poder hacer educar a sus hijos; muchos menos para llevarlos a ser un profesional. [...]"

Respuesta a 7

- "Sí. Eso estamos viendo, no? Porque realmente los grandes narcotraficantes hasta hoy no sabemos que ellos estén, digamos, en gran cantidad pagando la culpa, que realmente deberían ellos pagar las consecuencias de su riqueza que ellos tienen. Porque ellos se enriquecen con la destrucción de la gente humilde que agarra el vicio porque, pues, no tiene una fuente de trabajo y lo toma como una distracción. Eso de drogarse y de estar inconscientes para no poder acordarse de que es un ser humano y una persona que necesita vivir con todos los derechos que le corresponden. Realmente (están incrustados en los más altos niveles gubernamentales, E.C.F.). Bastante, por eso es que cuando, digamos, uno de esos llamados pez gordo caen, rápido nomás ya lo sueltan porque tienen influencia dentro del mismo gobierno con tal motivo. [...]"

Respuesta a 8

- "[...]"

Respuesta a 9

- "Pues, como dice el nombre muy clarito corrupción digamos los trabajadores de instituciones gubernamentales se ven, pienso yo, en la necesidad de hacer y pedir coimas y tal vez hacer sus mañas dentro de las mismas computadoras para obtener más dinero, por el mismo sueldo tan bajo que ellos perciben."

Respuesta a 10

- "Realmente consumista, no? Porque hay veces que no alcanza ni para el día también lo que se vende. La e.i. no soluciona problemas de ninguna cuenta, simplemente del momento."

Respuesta a 11

- "Bueno, yo desde que tengo uso de razón yo supe siempre que la coca se cultivaba en Bolivia por el hecho de que nuestros habitantes de Occidente siempre ha sido como parte de su alimentación el coquear. Desde ese punto de vista yo creo que la coca no es mala sino más bien lo malo existe en la elaboración de la cocaína, con ya, digamos, preparativos químicos. Eso yo creo que es malo. Pero no creo que el cultivo de la coca sea malo porque también trae, digamos, beneficios para las familias campesinos de Occidente."

Realmente hay confusión. La gente piensa que al hablar de coca ya estamos hablando directamente de la cocaína. Pero eso se tendría que hacer conocer a la gente: que la coca no tienen ningún producto químico desde el momento de su cultivo, sino más bien desde la fabricación porque ya lleva compuestos químicos que hacen tal vez enriquecer a unos, y los cocaleros como sembradores tampoco son ricos porque siempre a ellos se les paga el precio [...]"

Respuesta a 12

- "Pues mire, en cuanto a política partidaria yo tengo muy poco conocimiento. No estoy yo muy compenetrada de ésto. No, no le puede responder esta pregunta."

Respuesta a 13

- "Pues mire no creo, no?. No creo nada de eso, de la "Coca por desarrollo". Porque a qué desarrollo estamos hablando cuando realmente, digamos, los que deberían tener crédito para poder cultivar la tierra se les pide un montón de requisitos que es imposible que un campesino pueda cumplir con eso. No, no creo. [...]"

Respuesta a 14

- "Yo pienso que este modelo de e.i. no nos lleva a nada bueno. Porque, si vemos desde el punto de vista como están tratando de [...] al sector popular, más que nada, pienso que tratan de adormecernos para que no nos demos cuenta de la real situación que tiene Bolivia. [...]"

Respuesta a 15

- "[...] Ellos (los cocaleros, E.C.F.) están realmente conscientes de que están defendiendo una fuente de trabajo, no? Y si ellos defienden una fuente de trabajo, pues yo creo que están en su pleno derecho de hacerlo. Si los partidos de izquierda están apoyando a estos compañeros que están en lucha, pienso que es una buena actitud pero no solamente sería empujarlos a que salgan en marcha sino que también los partidos de izquierda den una solución definitiva a este problema porque ya hace bastante tiempo [...]"

VENDEDORA DE TARJETAS EN LA CALLE (La Paz)

Respuesta a 1

- "Primero llevaba a Cochabamba leche, luego tarjetas; ahora, actualmente vendo tarjetas y traigo tarjetas desde Lima."

Respuesta a 2

- "Sí pues, porque ha disminuido tanto la venta que se ha muerto en todo aspecto para todos."

Respuesta a 3

- "Viajo a Lima y traigo tarjetas y vendo."

Respuesta a 3a

- "No, no pues como voy a estar contenta, me hubiera gustado trabajar en una oficina o tener alguna profesión."

Respuesta a 3b

- "No, no tan bueno pero más o menos para subsistir sí."

Respuesta a 4

- "No."

Respuesta a 5

- "A mis padres pues les hubiera gustado que yo sea profesional, pero lamentablemente ellos se quejan."

Respuesta a 5a

- "Nada, son muy pequeños todavía y no se dan cuenta."

Respuesta a 5b

- "No debe estar muy contento pero tiene que conformarse; no tenemos seguro pues, tendríamos que ver la posibilidad de asegurarse porque es mucho y si uno quiere hacerse atender particularmente gasta mucho."

Respuesta a 6

- "Sí porque yo radicaba en Cochabamba y he tenido que venirme acá."

Respuesta a 6a

- "Relativamente con ventaja porque hay más movimiento acá, entonces uno puede trabajar mejor acá."

Respuesta a 6b

- "No, no."

Respuesta a 7

- "No."

Respuesta a 8

- "No satisfactoriamente pero tienen nomás que conformarse."

Respuesta a 9

- "Sí, pues es un poco riesgoso porque es grave pasar las aduanas, pero... pasa."

Respuesta a 10

- "No. Que ofrecen muchas cosas pero que nunca llegan a dar lo que ofrecen."

Respuesta a 11

- "Ninguno me convence. Estoy contenta porque estamos creyendo más tranquilos; no estamos teniendo nada de ley marcial ni nada."

Respuesta a 12

- "No, no me gusta; tampoco (la UCS, E.C.F.). No, por ninguno de los dos."

Respuesta a 13

- "No, gano lo justo.
Porque los precios no subían para empezar, entonces digamos una cosa valía diez dólares se podía ahorrar de un dólar, en cambio ahora no se puede porque aparte de que suben las cosas ya no alcanza."

Respuesta a 14

- "Que es una plaga y lamentablemente nuestros hijos corren serios riesgos. No porque a no ser que les [...] por otros cultivos tampoco les pueden quitar la fuente de trabajo a los que cultivan la coca."

Respuesta a 15a

- "Debería darnos ciertas ventajas para poder pasar. No tan excesivamente como nos quieren cobrar."

Respuesta a 15b

- "Claro, debería darnos más posibilidad, acomodarnos."

Respuesta a 16

- "No estoy informada."

Respuesta a 17

- "Que está muy bien porque tiene que controlarse, no puede haber tanto narcotráfico porque antes había frutos ahora ya ni frutos no se puede sacar."

Respuesta a 18

- "Mejorar mi negocio."

Respuesta a 19

- "No."

Respuesta a 20

- "No."

Respuesta a 21

- "Sí, he tenido que cambiar; yo radicaba antes en Cochabamba, ahora, actualmente radico acá."

Respuesta a 22

- "Ventajas, relativamente."

**CARPINTERO ACTIVO EN LA
CONSTRUCCION, EX-MINERO
(La Paz)**

Respuesta a 1

- "Me dediqué a la madera."

Respuesta a 2

- "Efectivamente."

Respuesta a 3a

- "Carpintería. Me está dando satisfacciones."

Respuesta a 3b

- "Esto es en base al sacrificio y a la enorme voluntad que ponemos."

Respuesta a 4

- "Efectivamente necesitamos."

Respuesta a 5

- "Como toda familia siempre desea lo mejor y es lo que ellos también desean que me levante, que yo sea algo mejor para el posterior bienestar de la familia."

Respuesta a 5a

- "Bueno, yo tengo hijos pequeños todavía y aún ellos todavía no pueden tener un criterio de lo que es la vida social, todo eso."

Respuesta a 5b

- "No, en absoluto. Bueno, ella piensa que es necesario que yo me emplee en un trabajo donde pueda obtener alguna seguridad, donde podamos tener una asistencia médica para toda la familia."

Respuesta a 6

- "No, sigo en el mismo domicilio donde ahora estoy."

Respuesta a 7

- "Sí, efectivamente he ido a algunos familiares que son un poquito más elevados económicamente y a ellos siempre he acudido en caso de que me falta alguna vez."

Respuesta a 8

- "Al principio han extrañado bastante porque yo ganaba mucho dinero antes, ahora que modestamente me gano en la madera desde luego ellos están un poco frustrados yo diría."

Respuesta a 9

- "Sí."

Respuesta a 10

- "Antes, cuando trabajaba en la empresa [...] donde me había iniciado en la carpintería sí estuve activando en la federación. El movimiento sindical me parece que es una arma que prácticamente nos tiene muy bien enrolados; yo pienso que sería darle un poquito más de interés para que podamos extenderlo mucho mejor."

Respuesta a 11

- "La democracia de ninguna manera me afecta; lo que sí estoy de acuerdo es que no hay una buena manera de dirigir o sea, no hay un buen sentimiento hacia los trabajadores que están por ahí."

Respuesta a 12

- "Bueno, aunque no soy tan asiduo de ese partido me simpatiza porque hace muchas ayudas a la colectividad, igual manera la UCS.
Para mí es un partido que ayuda bastante, ha hecho obras en diferentes zonas especialmente en las zonas periféricas para los que necesitamos prácticamente esas obras.
Por el momento me simpatiza, no soy de ese partido pero me simpatiza Max Fernández."

Respuesta a 13

- "Ahorrar no."

Respuesta a 14

- "Como todo ciudadano yo prácticante estoy en contra de ese mal que nos afecta a todos y apoyo como todo ciudadano que pueda erradicarse de una vez definitivamente.
Creo que no. La coca es también un producto muy nuestro al que debía incentivarlo y no acabar con él porque es un alimento que prácticamente desde nuestros ancestros lo [...] todos."

Respuesta a 15

- "Pienso que el contrabando ha sido una manera de perjudicar al desenvolvimiento económico de nuestro país, de la industria más que todo."

Respuesta a 15a

- "Desde luego, los créditos blandos por ejemplo para los que tienen pequeños talleres es muy interesante; pienso que a través de eso podemos tener muchos mejores días."

Respuesta a 16

- "Es una institución buena a la que hay que apoyar."

Respuesta a 17

- "La represión militar como se ha venido viendo desde hace mucho tiempo no es nada loable para la sociedad. Yo pienso que debería de haber una manera más humana para erradicar la droga, todo eso; yo pienso que muchas veces se equivocan las instituciones encargadas de erradicar [...]."

Respuesta a 18

- "Desde luego, como todo padre de familia y ciudadano yo tengo un plan que espero que se cumpla con el esfuerzo de mi familia y de las personas a quienes siempre voy a acudir."

Respuesta a 19

- "La labor es muy preponderante y muy loable. Yo pienso que estoy satisfecho con lo que realizan."

Respuesta a 20

- "Yo pienso que no. Cada rama debemos tomarla con mucho cariño y aprecio porque a través de ese trabajo tenemos nuestro alimento."

Respuesta a 21

- "Sí. Como hace un rato había manifestado que yo estuve en la mina y tuve que cambiar de ese lugar a esta ciudad para buscar nuevos horizontes."

Respuesta a 22

- "Aún no. Provecho no pero yo pienso que como le dije hace rato yo pienso que con el tiempo yo voy a poder conseguir algo mejor de lo que estaba antes."

VENDEDORA DE LENCERIA EN LOS MERCADOS (Santa Cruz de la Sierra)

Respuesta a 1

- "Vendiendo, me he ocupado. Porque no había trabajo, nada para mi esposo. Entonces, me dediqué a hacer negocios para poder sustentar a mis hijos y así hemos podido hasta ahorita. Claro que no hemos adquirido gran cosa pero siquiera tenemos el pan seguro. El trabajo de mi esposo es temporal, es a veces: cuando hay trabajo él trabaja; después, a veces lo manejo así para vender pero él no se acostumbra tanto, él es carpintero, siempre en su oficio está."

Respuesta a 2

- "Bastante. Antes comprábamos más y después de que ya todo ha cambiado, todo ha subido. Menos hemos podido comer incluso ya cena así actualmente ya no hacemos casi cena mas que el almuerzo, té y en la noche a veces toman leche y así se duermen."

Respuesta a 3

- "Vendiendo calcetines, ropa interior. Pero he vendido de todo. Recién este año estoy vendiendo así [...]. Uno tiene que ver lo que sale en esa época."

Respuesta a 3a

- "No tanto. Porque no nos da más utilidad que sólo es para llenar la olla, como se dice."

Respuesta a 3b

- "A veces sí, a veces hay venta, a veces no hay venta. Claro que no me quejo aunque sea cinco pesos vendemos de eso estamos seguros, no? No es que no he vendido, siempre cinco aunque sea en todo el día uno vende y ya tiene siquiera para el pan. No me permite obtener ingresos suficientes, no."

Respuesta a 4

- "Me costó. No estaba acostumbrada, estaba más antes mi esposo [...] pero la necesidad me obligó. Cinco años que vendo. Que más íbamos hacer. Tuve que salir a vender."

Respuesta a 5a

- "Bueno. El (el hijo mayor de 23 años, E.C.F.) piensa superarse algo más de su, él dice ya voy a trabajar algo y voy a seguir estudiando (en la Normal, E.C.F.) dice él. La situación hay que ver como cambiará todavía [...]"

Respuesta a 5b

- "No podemos ir porque la consulta usted ve la consulta son 40, 35 pesos; no pues, no alcanza, uno se acobarda. Que fuera unos 10 pesos así [...] no voy siempre al médico. Gracias a Dios no se enferman (los hijos, E.C.F.). Todos son jóvenes y están bien sanos. De eso estoy feliz."

Respuesta a 6

- "Bastante. Hemos cambiado bastante. A veces por los alquileres, por la incomodidad muchos hijos que uno tenía, se acomodaban los dueños de casa. Teníamos que cambiar para poder tener un poco de tranquilidad; pero ahora ya es propia (la vivienda, E.C.F.) hará un año. Hemos hecho una piecita así nomás, tampoco ni está terminada, tenemos el techo, las paredes y no es más."

Respuesta a 6b

- "Sí, han cambiado alguna vez por el barrio, no? Por lo que era lejos teníamos que cambiarnos a otra casa, ellos tenían que estar más cerca. [...]"

Respuesta a 7

- "Sí, bastante nos hemos prestado, ahorita mismo trabajo con una casa [...]"

Respuesta a 8

- "Tenemos que resignarnos porque no es más otra cosa. Me apoyan, me mandan una carta (los parientes que están en La Paz, E.C.F.), me dicen que siga adelante porque qué más me queda ya. Tengo que ayudar al estudio de mis hijos. A ver si pueden lograr uno de ellos [...]"

Respuesta a 9

- "Algunas veces sí porque no sabemos donde vamos a ir a dar, no? No es una cosa segura ni permanente. Aquí cualquier rato

nos llevan, a dónde nos llevarán de aquí [...]. Sí, puede ser (una actividad al margen de la ley, E.C.F.). Más que todo es política porque si le apoyan, por ejemplo, no nos sacan; si no le apoyamos nos sacan. Pero como le digo, todo es política; bastante política existe en este gremio ahorita."

Respuesta a 10

- "Estamos, estamos. Asociación 23 de marzo de Exterior Playa. Muy manejado a todo nivel; para mí que una cosa muy sucia (el movimiento sindical, E.C.F.). La asociación se porta bastante bien con nosotros, no tenemos ningún problema con ellos. Cumplimos con todo. No tenemos ningún problema [...]"

Respuesta a 11

- "A ninguno les tengo fe ya. A ninguno ni tengo esperanzas porque son ellos los que en primer lugar en vez de construir lo destruyen y hay más pobres y al pobre es al que más lo reprimen. Entonces no les tengo afecto a ninguno ni a los nuevos ni a los antiguos. Eso sí estoy contenta (con la democracia, E.C.F.) que no hay represiones. Hasta mi marido cayó cuando García Meza había. Eso no quisiera que vuelva, no? Eso es lo único que me gusta en la política: que hay democracia."

Respuesta a 12

- "Yo nos los conozco. Por ejemplo, a nosotros nos han prometido UCS que cuando han hecho campaña han venido a la Feria de Barrio Lindo que no nos iban a sacar, que ellos nos iban a defender que era una feria tradicional de Santa Cruz (...). Entonces, nosotros les hemos dado el apoyo y ahora han saltado con que nos van a sacar [...]. Ellos hasta sentarse todo prometen, todo dicen bueno vamos hacer así pero llegado el momento no hay tal cosa. Así que no les creo yo."

Respuesta a 13

- "No. Nada, por el momento nada porque todo es al día. Que hay que sacar para el almuerzo, para los pasajes de los chicos [...]. Bastante ha cambiado; antes era mejor [...]"

Respuesta a 14

- "Bueno, eso es una cosa muy fea, no? Hay tantos jóvenes que se han echado a perder. Yo digo que se acabe de una vez pero

que vean también con los grandes, no? Que no repriman a los que por necesidad a veces van a trabajar a eso: los que pisan especialmente, no?. A mi manera sí (debe prohibirse el cultivo excedentario de coca, E.C.F.). Que no se siembre en cantidad porque el gobierno sabe qué cantidad utiliza el país y si para que lo más necesario pero que no los quemem las tierras como han venido a fumigar [...]."

Respuesta a 15

- "Ojalá, no? (El gobierno debería ayudar, E.C.F.) abriendo algunas industrias para que vean mano de obra, para que haya más fuentes de trabajo. Eso es lo que se quiere porque habiendo fuentes de trabajo más seguras, así entonces nadie iría también al narcotráfico, a pisar coca o a brindarse a vender, no? Tampoco yo estaría vendiendo; estaría en la casa atendiendo a mi esposo y a mis hijos porque también yo le digo que para venir aquí tengo que abandonar los hijos, la atención de la casa [...]"

Respuesta a 16

- "He escuchado pero no se dónde cumplirían las obras, eso no? Por tele nomás hay propaganda pero no hay tal cosa."

Respuesta a 17

- "Yo diría que pues los hagan a los grandes, los repriman a esos y no a los campesinos que son ellos los que hacen por sobrevivir. En cambio los otros gozan mucho, tienen más lujos, tienen más comodidad mientras que el campesino, como dicen, se mata para cultivar su coca."

Respuesta a 18

- "Formar mis hijos, formar mis hijos: que sean algún profesional. Eso es mi ambición, de riquezas no hay."

Respuesta a 19

- "No creo, no creo que ayude no? Aunque alguna vez nos ha defendido también porque no nos repriman. Sí, nos ha defendido en algo; debe ser no del todo pero en algo nos deben apoyar. Eso no lo sabemos nosotros, sólo lo saben los dirigentes si apoyan o no porque ellos están en reunión, más en contacto [...]"

Respuesta a 20

- "[...]"

Respuesta a 21

- "Me tuve que venir de La Paz porque a mi esposo lo han traído, por eso yo tenía que estar acá. [...]"

Respuesta a 22

- "Ha sido bastante, digamos. Hemos sufrido más que todo porque no nos ambientábamos y como mi esposo había hecho un contrato teníamos nosotros que aguantar pero ya llegado el momento que nosotros queríamos ir se nos ha presentado muchos problemas, muchos obstáculos. Es por eso que no hemos podido retornar y nos quedamos. Pero sí, bastante hemos sufrido por el clima, por todo. Los chicos se han enfermado por el cambio de clima. Nos ha costado acostumbrarnos. Actualmente ya estamos radicados casi diez años."

VENDEDOR DE UTILES ESCOLARES

(Santa Cruz de la Sierra)

Respuesta a 1

- "No he tenido empleo ni ocupación puesto que estaba estudiando yo y usted sabe, no? Como a veces se presentan estos casos de las mujeres y así que uno se ... Me casé y mi señora tenía esta ocupación y solamente la ayudo a ella. Es comerciante."

Respuesta a 2

- "Sí. Bueno. Este, podría decirse de que o sea nosotros los hijos no lo sentimos de verdad pero los padres sí lo sienten. Yo he escuchado a los padres diciendo de que son o sea lo que uno digamos, de lo que uno, cómo se puede decir o sea todo se paga, no es como antes. Eso lo que decía mi padre y yo le he escuchado siempre diciendo o sea siempre se quejan. Lo he notado siempre así en los padres."

Respuesta a 3

- "Como le digo o sea le ayudo a ella (la esposa, E.C.F.). Voy a traer mercaderías. Ella aquí está vendiendo o sea útiles escolares."

Respuesta a 3a

- "Sí. Su deseo de uno siempre es superarse más, o sea, yo quiero estudiar computación; o sea, puesto para meterse vuelta a la universidad no es ya fácil porque llegan los hijos y no se puede ya. O sea, yo pienso estudiar computación en la noche."

Respuesta a 3b

- "Sí. No tanto pero más o menos sí. En sí yo vivo en la casa de mis padres; o sea, da nomás dentro de lo [...] y tolerable, da nomás."

Respuesta a 4

- "Sí. Ella me enseñó bastante. El negocio me enseñó: dónde comprar y cuándo y cómo, o sea, la calidad de la mercadería. No (es fácil comprar, E.C.F.). Varias veces me ha hecho volver."

Respuesta a 5

- "Mis padres se sintieron defraudados puesto que yo estaba estudiando y no querían que me case; pero, por esas cosas de la vida que hay uno siempre en el momento menos pensado se casa. O sea se desilusionaron conmigo. A pesar que vivo en mi casa no me dan ese trato que más antes tenía. O sea, se han resentido ellos conmigo. Tengo un hijo chiquitito."

Respuesta a 5b

- "Sí, ella (la esposa, E.C.F.) es bien cuidadosa; ni bien se enferma el chico no espera que se enferme, tiene su pediatra donde ella va, siempre lo lleva. Sí, nos alcanza (el dinero que ganan, E.C.F.). O sea, puede ser que sí porque o sea yo a pesar que mis padres se han resentido conmigo tengo un apoyo económico de mis padres. Sí, podría solucionar (el problema de una operación urgente E.C.F.)."

Respuesta a 6

- "No. Mi padre tiene su casa hace diez años y ahí estamos viviendo. Está en proyecto (la vivienda propia, E.C.F.). Tenemos lote y estamos planificando para hacer ya la vivienda en sí."

Respuesta a 7

- "Sí, nos han prestado dinero pero no ha sido ni de mi familia ni de su familia de ella. Aparte, un señor que es buena gente,

que nos conoce bien y siempre nos ha facilitado esa parte, el señor ese y siempre le hemos cumplido. Es un crédito informal; nos presta por un interés del 5% mensual."

Respuesta a 8

- "Como es muy natural o sea lo recriminan: por qué hizo ésto y por qué lo otro y por qué no debería estar siguiendo así en la u (= universidad, E.C.F.). O sea, la reacción que han tenido conmigo siempre me han recriminado."

Respuesta a 9

- "Sí, eso es verdad. Uno nunca está seguro aquí. Cualquier rato vienen y nos sacan. O sea, no es seguro este puesto a pesar de que nosotros pagamos, tenemos todos los papeles al día pero ni así es seguro porque a veces hacen limpieza; tardan una o dos semanas hasta tres semanas, hacen, entran en cuarentena. Así que en esa situación uno tiene que buscar otros caminos. Hay que pagar a la Alcaldía, hay que pagar Renta o sea, uno paga este puesto como si de una tienda: así es, casi igualito."

Respuesta a 10

- "Sí, estamos afiliados a un sindicato del 10 de abril. Es un sindicato de Trabajadores Gremialistas. Bueno o sea de la COB me decía usted? Su representante aquí siempre nos ayuda [...]."

Respuesta a 11

- "La democracia en sí es buena. Con respecto a los partidos políticos no le puedo decir nada puesto que no me gustan nada. No entiendo nada. [...] Es por eso que uno no sabe por quién votar. Hay políticos que nos prometen y no cumplen. Y se valen de uno hasta que suben y después no se acuerdan más"

Respuesta a 12

- "La UCS es un partido nuevo que parece que en los últimos tiempos a pesar de que es nuevo o sea ha hecho, lo que yó he visto, ha hecho cosas buenas. Porque parece que es el único candidato que cuando promete cumple y con respecto a ese partido o sea yo por lo que yo conozco: a las personas acá parece que más están o sea más le creen a él; o sea los vendedores parece que en las elecciones él va a tener el apoyo de todos estos vendedores según lo que escucho a las personas que venden aquí."

Respuesta a 13

- "La actual no. Hay un tiempo donde uno puede ahorrar: cuando comienzan las clases en ese momento sale bastante y ese tiempo es donde uno puede ahorrar algo. Un año que estoy aquí. [...] Cuando no hay clases ella (la esposa, E.C.F.) cambia de mercaderías y vende juguetes."

Respuesta a 14

- "Sí, yo estoy de acuerdo que desaparezca eso porque hace daño a la juventud y, o sea, yo daría cualquier cosa para que desapareciera el narcotráfico en sí, del todo. El cultivo de la coca: el gobierno debería dar así como promete, en realidad no lo vivo pero he escuchado a través de los medios de comunicación, que hay una alternativa de que o sea un cambio del cultivo alternativo que cambien por otros productos. Yo desearía que el gobierno le ayude a los campesinos, o sea, que le den una orientación, que ellos pueden abastecerse, o sea, de otros cultivos y ya no más de la coca."

Respuesta a 15

- "Sí, sería una buena idea eso porque uno siempre, o sea, uno no siempre tiene el respaldo. La mayoría no tiene y yo pienso que debería haber alguna forma, un respaldo para iniciarse con este negocio porque es con capital para iniciar cualquier negocio. Sí, (deberían otorgar créditos blandos, E.C.F.)."

Respuesta a 16

- "Es muy bueno puesto que, o sea, los centros no nos cobran mucho, o sea, son económicos, o sea, por esa parte es bueno [...]"

Respuesta a 17

- "Yo no creo que, o sea, yo no veo que sea necesario tratar de esa forma, solucionar de esa forma puesto que como decía más antes, que les de una orientación con ese cultivo alternativo; que orienten a las personas que puedan cambiar su producto. Yo no estoy de acuerdo con el ingreso de los militares al Chapare."

Respuesta a 18

- "Sí, como decía, o sea, voy a estudiar informática; voy a meterme a un instituto. Eso pienso hacer [...]"

Respuesta a 19

- "Yo creo los Comités Cívicos están en contra porque, o sea, son ellos los que se empeñan más en sacarnos de acá [...]"

Respuesta a 20

- "[...] No es fácil conseguir trabajo, cuesta. O sea depende: le preguntan el grado del estudio, que sea, o sea, que sea bonito en eso se fijan; que sean presentable, en eso se fijan. Depende a dónde uno vaya a buscar para poder trabajar. En un trabajo más o menos no tan duro necesita uno siempre esos requisitos: de que sea Bachiller y de que sea presentable, todo eso." esta a 21
- "Yo vivo acá hace doce años. Hasta ahora no he cambiado; sigo viviendo en mi casa."

3

BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

Eliana Castedo Franco

- Aguilar, Anibal (1987): Exposición (sin título) en ILDIS, *La economía campesina y el cultivo de la coca* (cuaderno n° 10 del Debate Agrario), pp. 43-53, La Paz.
- Aguiló, Federico (1986): "Los peones de la cocaína" en: *Presencia*, La Paz 23.11.1986.
- -- (1988): "Movilidad espacial y movilidad social generada por el narcotráfico" en: ILDIS, ed., *Efectos del narcotráfico*, pp. 53-73, La Paz, Bolivia.
- -- (1991): "Cocaína made in Bolivia". Cuarto Intermedio, 19: 3-23, Cochabamba, Bolivia.
- Alanes, Zulema (1988): Debate en: ILDIS, *La relocalización* (cuaderno n° 5 de Temas Laborales), pp. 61-63, La Paz.
- Albó, Xavier, Tomás Greaves y Godofredo Sandoval (1983): *Chukiyawu. La cara aygnara de La Paz*. III. Cabalgando entre dos mundos. La Paz.
- Antezana Malpartida, Oscar R. (1990): *Análisis de la Nueva Política Económica*. 2a. ed., La Paz-Cochabamba.
- Arauco, Isabel (1988): "Una aproximación al análisis de la relocalización" en: ILDIS, *La relocalización* (cuaderno n° 5 de Temas Laborales), pp. 7-30, La Paz.
- Arrieta, Mario, Guadalupe Abrego, Abel Castillo y Manuel de la Fuente (1990): *Agricultura en Santa Cruz: de la Encomienda Colonial a la Empresa Modernizada (1559-1985)*. La Paz.

- Arteaga, Vivian (1988): "Entre la calle y el hogar" en: Vivian Arteaga y Noemí Larrazábal, *La mujer pobre en la crisis económica. Las vendedoras ambulantes de La Paz*, pp. 9-47, s.l.
- Arze Cuadros, Eduardo (1979): *La economía de Bolivia. Ordenamiento territorial y dominación externa. 1492 - 1979*. La Paz-Cochabamba.
- Barbery, Oscar (1988): "Las alcaldías de barrio" en: Manuel de la Fuente, comp., *Santa Cruz: Cuestión urbana y problemática municipal*, pp. 131-143, Santa Cruz de la Sierra.
- Barrero Suárez, Carlos (1988): "La participación popular y el poder municipal" en: Manuel de la Fuente, comp., *Santa Cruz: Cuestión urbana y problemática municipal*, pp. 13-26, Santa Cruz de la Sierra.
- Bascopé Aspiazu, René (1982): *La veta blanca. Coca y cocaína en Bolivia*. La Paz.
- Baudoin O., Luis F. (1990): "Capacidad de generación de empleo de la industria manufacturera" en: Rodolfo Eróstegui, ed., *La industria: problemas y perspectivas*, pp. 33-87, La Paz, Bolivia.
- Bedregal Gutiérrez, Guillermo y Ruddy Viscarra Pando (1989): *La lucha boliviana contra la agresión del narcotráfico*. La Paz.
- Blanes, José (1991): "La economía de la cocaína y el sector informal urbano: el caso de la ciudad de La Paz, Bolivia". en: *Síntesis. Revista Documental de Ciencias Sociales Iberoamericanas*, 14: 289-310, Madrid.
- BOLIVIA (1988): "Nachlese zur Wahl". 69: 3-11, Berlin.
- Bowles, Oscar (s.f.): Debate en: ILDIS, *La identidad cultural del cruceño* (colección Debate Regional), pp. 44-45, s.l.
- Bustamante, Alberto y Eliana Chávez, Komero Grompone, Samuel Machacuay y Gustavo Riofrío (1990): *De marginales a informales*. Lima.
- Cajías, Magdalena (1987): "Notas sobre la Crisis del Movimiento Minero Boliviano" en: FLACSO / ILDIS, *Crisis del sindicalismo en Bolivia*, pp. 71-92, La Paz.
- Calderón G., Fernando (1984): *Urbanización y etnicidad. El caso de La Paz*. Cochabamba.
- Cámara Departamental de Industria y Comercio (s.f.): *Santa Cruz en cifras 1989*. Santa Cruz, Bolivia.

- Campodónico, Humberto (1989): "La política del avestruz" en: Comisión Andina de Juristas, ed., *Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes*, pp. 225-258, Lima, Perú.
- Canelas Orellana, Amado y Juan Carlos Canelas Zannier (1983): *Bolivia: coca cocaína. Subdesarrollo y Poder Político*. Cochabamba-La Paz.
- Carnaval. Revista Carnavalera. 2.2, Santa Cruz, Bolivia.
- Carvalho, Ruber (1986): "Santa Cruz: Consumismo e Identidad". *Reflejos*, 1.2: 18, Santa Cruz de la Sierra.
- Casanovas Sainz, Roberto (1989): "Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad" en: Antonio Peres Velasco et al., *Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad*, pp. 61-120, La Paz.
- y Antonio Rojas Rosales (1988): *Santa Cruz de la Sierra. Crecimiento Urbano y Situación Ocupacional*. La Paz, Bolivia.
- Casanovas S., Roberto y Silvia Escóbar de Pabón (1988): *Los trabajadores por cuenta propia en La Paz. Funcionamiento, situación laboral e ingresos*. La Paz.
- Chulver Vargas, Vladimiro (1990): *El "prodigio" de la Nueva Política Económica*. La Paz. Bolivia.
- CLEPI (Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional) (1988): *Informe sobre la economía mundial 1988-89. Perspectiva Latinoamericana. El desafío de la incertidumbre*. Venezuela.
- Comité Regional Mixto de Represión al Contrabando (s.f.): *Memoria de gestión: agosto/88 - agosto/89*. Santa Cruz, Bolivia.
- Cooperativa Cruceña de Cultura (1986): *Los cruceños y la cultura. Un diagnóstico de la cultura en Santa Cruz*. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
- CORDECRUZ (Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz) (1982): *Diagnóstico Agropecuario de Santa Cruz*. Santa Cruz.
- CORDECRUZ (1989): *Proyecto Estudio de la población migrante en Santa Cruz, Montero y Villa Busch*. Ciudad de Santa Cruz. Resultados Globales. Serie de Documentos nº 5. Santa Cruz, Bolivia.
- Cossío, Fernando (s.f.): "La inversión pública en: Bolivia" en ILDIS, *La inversión pública* (cuaderno nº 25 del Foro Económico), pp. 5-16, La Paz.

- COTAS (Cooperativa de Teléfonos Automáticos) (1988): *Guía Telefónica 1988*. Santa Cruz.
- Craig, Richard B. (1988): "El tráfico ilícito de drogas: implicaciones para los países sudamericanos donde se origina". *Revista Occidental*, 5.2: 105-140.
- Dabdoub Arrien, Carlos (1988): "Es más grave la crisis moral de la que suponemos. Sacudamos el polvo de la apatía" en: Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", ed., *La delincuencia en Santa Cruz. Bases para una Política Criminal en la República*, pp. 2-7, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
- Dandler, Jorge (1985): *Apuntes generales sobre "economía informal" y su importancia en Bolivia*. La Paz.
- Dietz, Eva Dietz (1990): *Der Funktionswandel der Koka in Bolivien* (= La transformación de las funciones de la coca en Bolivia). Saarbrücken/Fort Lauderdale.
- DIRECO (Dirección Nacional de Reconversión Agrícola) (1988): *Programa de Reconversión Agrícola*. s.l.
- Dirmoser, Dietmar (1990): "Peru: Ein katholischer Japaner und die protestantische Ethik" (= Perú: Un japonés católico y la ética protestante). *Lateinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 256-268, Hamburg.
- Dombois, Rainer y Ciro Krauthausen (1990): "Kolumbien im Kokainkrieg" (= Colombia en la guerra de la cocaína). *Lateinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 213-222, Hamburg.
- Doria Medina, Samuel (1986): *La economía informal en Bolivia*. La Paz, Bolivia.
- (1987): *Coyuntura Económica*. La Paz.
- (1990): "Características y perspectivas de la industria boliviana" en: Rodolfo Eróstegui, ed., *La industria: problemas y perspectivas*, pp. 15-31, La Paz, Bolivia.
- Duarte, Renato, comp. (1984): *Emprego e renda na economia informal da América Latina*. Recife.
- Durán Rivera, Wilman (1988): "La seguridad jurídica como base para una política criminal" en: Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", ed., *La delincuencia en Santa Cruz. Bases para una Política Criminal en la República*, pp. 52-60, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

- Eckel, Jürgen (1990): "Ecuador: Gefährliche Beziehung: Gewerkschaften und regierende Sozialdemokratie" (= Ecuador: Una relación peligrosa: los sindicatos y la Socialdemocracia en el gobierno). *Latinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 194-201, Hamburg.
- Escóbar de Pabón, Silvia (1988): "El comercio en pequeña escala en la ciudad de La Paz, Bolivia" en: Marguerite Berger y Mayra Buvinic, comps., *La mujer en el sector informal. Trabajo femenino y microempresa en América Latina*, pp. 97-121, Venezuela.
- Escóbar de Pabón, Silvia (1989): "Los establecimientos informales ante la ley" en: Antonio Peres Velasco et al.,
- Escóbar de Pabón, Silvia y Carmen Ledo García (1988): *Urbanización, migraciones y empleo en la ciudad de Cochabamba*. La Paz, Bolivia
- Escóbar, Javier (1988): "Trabajadores temporales, empresa agropecuaria y tierra" en: CEDLA, *Tenencia y uso de la tierra en Santa Cruz. Evaluación de la estructura agraria en el área de Santa Cruz*, pp. 97-117, La Paz.
- Fatheuer, Thomas y Werner Würtele (1990): "Brasilien: Mit Tatkraft und Demagogie" (= Brasil: con fuerza y demagogia). *Latinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 171-182, Hamburg.
- Fernández, Gustavo (1989): "Condicionantes externos del desarrollo de Bolivia" en: Carlos F. Toranzo, coord., *Bolivia hacia el 2000. Desafíos y opciones*, pp. 41-91, Venezuela.
- Flores, Gonzalo (1987): Comentario en: ILDIS, *La economía campesina y el cultivo de la coca* (cuaderno n° 10 del Debate Agrario), pp. 31-42, La Paz.
- Flores, Gonzalo y José Blanes (1984): *Adónde va el Chapare?*. Cochabamba.
- Germani, Gino (1978): *Sociología de la modernización. Estudios teóricos, metodológicos y aplicados a América Latina*. Buenos Aires.
- González, Raúl (1991): "Koka für Entwicklung. Interview mit dem bolivianischen Präsidenten Jaime Paz Zamora" (= Coca por desarrollo. Entrevista con el presidente boliviano Jaime Paz Zamora) en: Ciro Krauthausen, ed., *Koka-Kokain. Reportagen*,

Analysen und Dokumente aus den Andenländern (= Coca-Cocaína. Reportajes, análisis y documentos de los países andinos), pp. 35-39, München.

Grebe López, Horst (1983): "El excedente sin acumulación. La génesis de la crisis económica actual" en: René Zavaleta Mercado (comp.), *Bolivia, hoy*, pp. 85-128, México.

-- (1987a): "Bolivia: Opciones de inserción comercial externa y de política industrial alternativa" en CEPAL / ILPES / FLACSO / ILDIS / PNUD, *Estrategias alternativas de desarrollo en América del Sur*, pp. 203-229, Bolivia.

-- (1987b): "Notas críticas sobre la gestión económica de la UDP" en: Movimiento Bolivia Libre, *Repensando el país*, pp. 16-45, s.l.

Grupo de Estudios Andrés Ibañez (1986): *Tierra, estructura y poder en Santa Cruz*. 2a. ed., La Paz.

Heinz, Wolfgang S. (1989): "Kolumbien und der Kokainhandel. Nationale und internationale Aspekte" (= Colombia y el tráfico de cocaína. Aspectos nacionales e internacionales). *Europa Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik*, 44: 15-16, 487-496, Bonn.

Henrich, Tyronne (1987): "Apuntes sobre la Nueva Política Económica" en: Movimiento Bolivia Libre, *Repensando el país*, pp. 46-60, s.l.

Herf, Hermann (1990): *500 Jahre Conquista. Kulturelle Identität und Ausbeutung: Die Krise um das Kokain und was dahinter steckt.* (= 500 años de conquista. Identidad cultural y explotación: la crisis alrededor de la cocaína y lo que ella esconde). s.l.

Hoffmann, Karl-Dieter (1990): "Panama: Mactwechsel à la Bush" (= Panamá: Cambio de gobierno à la Bush). *Lateinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 242-255, Hamburg.

Ibañez López, Mario (1988): "A manera de presentación" en: Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", ed., *La delincuencia en Santa Cruz. Bases para una Política Criminal en la República*, pp. I-III, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

ILDIS (1988): Debate en: ILDIS, *La economía campesina y el cultivo de la coca II* (cuaderno nº 11 del Debate Agrario), pp. 43-56, La Paz, Bolivia.

- Inch, Bernardo (1988): *Desequilibrios regionales y crecimiento acelerado*. (ILDIS, serie Estudio. Diagnóstico. Debate). La Paz.
- Instituto de Estudios Liberales (1988): *Sector Informal y Organización Popular*. Bogotá, Colombia.
- Instituto Libertad y Democracia (1989): *Estimación de la magnitud de la actividad económica informal en el Perú*. Lima.
- Instituto Libertad y Democracia (1989): *Estado mercantilista, economía informal y reformas institucionales*. Lima.
- INE (Instituto Nacional de Estadística) (1981): *Bolivia en Cifras 1980*. La Paz, Bolivia.
- -- (1986): *Bolivia en Cifras 1985*. La Paz, Bolivia.
- -- (1989a): *Bolivia. Encuesta Nacional de Población y Vivienda*
- -- (1989b): *Encuesta Integrada de Hogares 1989*. La Paz, Bolivia.
- -- (s.f.): *Bolivia en Cifras 1989*. La Paz, Bolivia.
- Irusta Medrano, Gerardo y J. Poirot (1986): *Los adoradores de la Diosa Blanca. Relatos verídicos del Narcotráfico en Bolivia*. La Paz, Bolivia.
- Jahnsen, Carlos (1988): *La ilusión del libre comercio en Bolivia*. (ILDIS, serie Estudio. Diagnóstico. Debate). Bolivia.
- Junta del Acuerdo de Cartagena (1988): *Sector informal urbano*. vol. 1. Lima.
- Köster, Gerrit (1978): *Santa Cruz de la Sierra (Bolivien). Entwicklung, Struktur und Funktion einer tropischen Tieflandstadt (= Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Desarrollo, estructura y función de una ciudad de la llanura tropical)*. Aachen.
- Krempin, Michael (1989): *Keine Zukunft für Bolivien? Bedingungen und Ursachen für das Scheitern der Regierung Siles Zuazo sowie Schlussfolgerungen im Hinblick auf die ökonomischen, sozialen und politischen Perspektiven Boliviens (= Ningún futuro para Bolivia? Condiciones y causas para el fracaso del gobierno de Siles Zuazo así como conclusiones acerca de las perspectivas económicas, sociales y políticas de Bolivia)*. Saarbrücken-Fort Lauderdale.
- Kritz, Ernesto (1989): "Prólogo" en: Antonio Peres Velasco et al., *Informalidad e ilegalidad: una falsa identidad*, pp. iii-xi, La Paz.

- Lazarte, Jorge (1987): "Crisis de identidad y centralidad minera" en: *Movimiento Bolivia Libre, Repensando el país*, pp. 151-179, s.l.
- Macleán Stearman, Allyn (1987): *Camba y colla. Migración y desarrollo en Santa Cruz, Bolivia*. La Paz, Bolivia.
- Mansilla, H. C. F. (1991): "A manera de prólogo. Populismo, carisma y comunicación social", en: Joaquín Saravia C. y Godofredo Sandoval Z., *Jach'a Uru: ¿la esperanza de un pueblo? Carlos Palenque, RTP y los sectores populares urbanos en La Paz*, pp. 11-17, La Paz.
- Marschall, Adriana y José Blanes (1991): *Crisis fiscal, Estado y mercado de trabajo*, La Paz.
- Mayorga, René Antonio (1987): "La democracia entre la fragmentación y la imposición" en: René Antonio Mayorga (comp.), *Democracia a la deriva. Dilemas de la participación y concertación social en Bolivia*, pp. 17-90, La Paz.
- Mesa Gisbert, Carlos D. (1988): "Medios de comunicación, democracia, cultura política y elecciones" en: ILDIS *Medios de comunicación y cultura política* (cuaderno nº 3 del Foro Político), pp. 5-21, La Paz, Bolivia.
- Ministerio de Hacienda y Estadística (s.f.): *Censo demográfico 1950*. s.l.
- Ministerio de Planeamiento y Coordinación e INE (1981): *Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. 1976*. La Paz.
- Minkner, Mechthild (1981): *Wirtschaftsentwicklung in Bolivien unter der Regierung Banzer (1971 - 1978)*. (= Desarrollo económico en Bolivia bajo el gobierno de Bánzer) Arbeitsunterlagen und Diskussionsbeiträge / Documento de Trabajo nº 10, Institut für Iberoamerika-Kunde / Instituto de Estudios Iberoamericanos, Hamburg.
- Molina Saucedo, Carlos Hugo (1988): *Con olor a pujusó*. 2a. ed., Santa Cruz de la Sierra.
- (1990): *Radiografía del Moján. Ensayos sobre la identidad de un pueblo*. Santa Cruz de la Sierra.
- Montes Vannuci, José Wolfango (1987): *Jonás y la ballena rosada*. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

- Morales, Juan Antonio (1990): "Impacto de los ajustes estructurales en la agricultura campesina boliviana" en: COTESU / MACA / ILDIS, *El impacto de la NPE en el sector agropecuario*, pp. 9-69, Bolivia.
- Morales, Juan Antonio (s.f.): "Democracia y política económica en Bolivia" en: Carlos Toranzo, ed., *El difícil camino hacia la democracia*, pp. 53-68, Bolivia.
- Morales, Rolando (1988): *Tasa de interés y tipo de cambio: 1981-1987* (serie Estudio. Diagnóstico. Debate de ILDIS). La Paz, Bolivia.
- Moscoso Moreno, María Eugenia (Ms) (1990): *Evolución y perspectivas del desarrollo regional*. Santa Cruz de la Sierra.
- Müller & Asociados (s.f.): *Estadísticas Económicas 1988*. La Paz.
- (1990): *Evaluación económica 1989*. La Paz.
- Müller-Platenberg, Urs (1990a): "Chile: Am Ende der liberalen Revolution" (Chile: al final de la revolución liberal). *Lateinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 183-193, Hamburg.
- (1990b): "Ungeheure Städte - Das Ausmass der Verstädterung in Lateinamerika" (= Ciudades monstruos - La dimensión de la urbanización en Latinoamérica). *Lateinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 23-33, Hamburg.
- Núñez del Prado, Arturo (1986): "Bolivia: inflación y democracia". *Pensamiento Iberoamericano. Revista de Economía Política*, 9: 249-276, Madrid.
- Odonne, Gabriel y Fernando Filgueira y Laura Correa (1990): *Del sector informal a la informalización de la economía. Trabajadores nuevos en el Uruguay*. Montevideo.
- Oporto Castro, Henry (1989): "Bolivia: El complejo coca-cocaína" en: Comisión Andina de Juristas, ed., *Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes*, pp. 171-190, Lima, Perú.
- Ormachea, Enrique (1987): "Los obreros agrícolas temporales del algodón y la caña y sus derechos" en: ILDIS, *Trabajadores temporales* (cuaderno nº 8 del Debate Agrario), pp. 31-44, La Paz.
- Ortiz Crespo, Gonzalo (1990): "Ecuador" en: Comisión Andina de Juristas, ed., *Narcotráfico: Realidades y Alternativas*, pp.33-41, Lima.

- PADI (1982): *Bolivia. Cronología de una dictadura*. Quito, Ecuador.
- Palma, Diego (1987): *La informalidad, lo popular y el cambio social*. Lima.
- Pazos, Felipe (1986): "Ciclos inflacionarios en América Latina, 1950-1985. Comentario". *Pensamiento Iberoamericano. Revista de Economía Política*, 9: 63-67, Madrid.
- Peña D., Mauricio (1989): "Palabras preliminares" en: Edgar Soliz, *La otra cara del crecimiento urbano. Una aproximación al estudio de la Sobrepopulación Relativa de la ciudad de Santa Cruz*, pp. 3-6, La Paz.
- Peredo Mercado, Marco A. (1988): "Algunas consideraciones en torno a la delincuencia en Santa Cruz" en: Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", ed., *La delincuencia en Santa Cruz. Bases para una Política Criminal en la República*, pp. 18-26, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
- Pinedo Antezana, Alvaro (1991): *Narcotráfico. Caso 451*. La Paz.
- Prado Salmón, Fernando (1987): "Soy cambia y ¿ vos?". *Cuarto Intermedio*, 5: 18-32, Cochabamba.
- (1988): "Introducción a la problemática urbana" en: Manuel de la Fuente, comp., *Santa Cruz: Cuestión urbana y problemática municipal*, pp. 1-12, Santa Cruz de la Sierra.
- (1989): *Santa Cruz: Diagnóstico urbano*. Santa Cruz de la Sierra.
- PREALC (1978): *Sector informal: funcionamiento y políticas*. Santiago de Chile.
- Presidencia de la República de Bolivia (1990): *Estrategia del desarrollo alternativo. La economía de la coca y el desarrollo económico en Bolivia: un enfoque alternativo*. La Paz.
- Quiroga T., José Antonio (1987): "Campesino, coca y agricultura" en: ILDIS, *La economía campesina y el cultivo de la coca* (cuaderno nº 10 del Debate Agrario), pp. 7-30, La Paz.
- (1990): *Coca/Cocaína: una visión boliviana*. Bolivia.
- Rediske, Michael: "Nicaragua: Die Niederlage der Avantgardpartei" (= Nicaragua: La derrota del partido de vanguardia). *Latteinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 233-241, Hamburg.

- Rementería, Ibán de (1991): "Strategie und Aktionsplan zur Substitution des illegalen Kokaanbaus (= Estrategia y plan de acción para la substitución del cultivo ilegal de coca) en: Ciro Krauthausen, ed., *Koka-Kokain. Reportagen, Analysen und Dokumente aus den Andenländern* (= Coca-Cocaína. Reportajes, análisis y documentos de los países andinos), pp. 64-79, München.
- Reye, Ulrich (1970): *Política de desarrollo regional en el Oriente boliviano*. Bilbao.
- (1990): "Sector informal y problemática del empleo urbano en Santa Cruz" en: Carlos F. Toranzo Roca, ed., *Sector informal y empleo urbano en Santa Cruz* (serie Debate Regional de ILDIS), La Paz.
- (s.f.): "El crecimiento demográfico en Santa Cruz. Situación y perspectivas" en: ILDIS, *El crecimiento demográfico en Santa Cruz* (cuaderno nº 8 del Foro Económico: Santa Cruz), pp. 5-30, Bolivia.
- Rivadeneira Prada, Raúl (1989): *Agresión política. El proceso electoral 1989*. La Paz, Bolivia.
- Rivera P., Alberto (s.f.): "El Chapare actual" en: Carlos F. Toranzo Roca, ed., *El chapare actual; sindicatos y ONG's en la región*, (serie Debate Regional de ILDIS), pp. 9-22, s.l.
- Roca A., Ovidio (1987): "Agricultura comercial en Santa Cruz" en: Carlos F. Toranzo Roca y Rodolfo Gutiérrez C., eds., *Estabilización y desarrollo en Bolivia*, pp. 136-157, Bolivia.
- Rojas Rosales, Antonio (1988): "Mercado laboral y trabajadores por cuenta propia" en: Manuel de la Fuente, comp., *Santa Cruz: Cuestión urbana y problemática municipal*, pp. 95-111, Santa Cruz de la Sierra.
- Romero, Jorge (1988): "La población y el desarrollo urbano de la ciudad de Santa Cruz" en: Manuel de la Fuente, comp., *Santa Cruz: Cuestión urbana y problemática municipal*, pp. 35-47, Santa Cruz de la Sierra.
- Romero Pittari, Salvador (1989): "El nuevo regionalismo". *Estado y Sociedad. Revista Boliviana de Ciencias Sociales*, 5.6: 95-114, La Paz.

- Ruiz, Carmen (1988): "Presentación" en: Vivian Arteaga y Noemí Larrazábal, *La mujer pobre en la crisis económica. Las vendedoras ambulantes de La Paz*, p. 7, s.l.
- Ruppert, Rasso (1990): *Das Koka- und Kokaingeschäft in Bolivien. Organisation, räumliche Struktur, wirtschaftliche und soziale Effekte* (= El negocio de la coca y cocaína en Bolivia. Organización, estructura espacial y efectos económicos y sociales). Nürnberg.
- Sainz, Leticia comp., (1986): *El sector informal en Bolivia*, La Paz.
- Sandoval Z., Godofredo y M. Fernanda Sostres (1989): *La ciudad prometida. Pobladores y Organizaciones Sociales en El Alto*. La Paz, Bolivia.
- Saravia C., Joaquín y Godofredo Sandoval Z. (1991): *Jach'a Uru: ¿la esperanza de un pueblo? Carlos Palenque, RTP y los sectores populares urbanos en La Paz*. La Paz.
- Soliz, Edgar (1989): *La otra cara del crecimiento urbano. Una aproximación al estudio de la Sobrepoblación Relativa de la ciudad de Santa Cruz*. La Paz.
- Statistisches Bundesamt (1991): *Länderbericht: Bolivien 1991*. (= Informe de países: Bolivia 1991). Wiesbaden.
- Ströbele-Gregor, Juliana (1990): "El Alto - Stadt der Zukunft" (= El Alto - Ciudad del futuro), en: *Lateinamerika. Analysen und Berichte*. 14: 84-107, Hamburg.
- Toranzo Roca, Carlos F. (1987): "Prólogo" en: Oscar Vega, coord., *El consumo en Bolivia* (ILDIS, serie Estudio. Diagnóstico. Debate), pp. 5-6, Bolivia.
- (1989a): "Los rasgos de la nueva derecha boliviana" en: Carlos F. Toranzo Roca y Mario Arrieta Abdalla, *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia*, pp. 43-85, La Paz.
- (1989b): "Bolivia: los desafíos y opciones de futuro" en: Carlos F. Toranzo, coord., *Bolivia hacia el 2000. Desafíos y opciones*, pp. 9-19, Venezuela.
- (1989c): "La carta oculta de la estabilización". *Cuarto Intermedio*, 12: 27-50, Cochabamba, Bolivia.
- , comp. (1990): *Las condiciones de la violencia en Perú y Bolivia*. La Paz.

- -- (s.f.): "Conflicto Estado-sociedad" en: Carlos Toranzo, ed., *El difícil camino hacia la democracia*, pp. 119-129, Bolivia.
- Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) (1985): *La economía informal: una visión macroeconómica*. La Paz.
- -- (1989): *La política antiinflacionaria de choque y el mercado de trabajo: el caso boliviano*. La Paz.
- -- (1990): "Análisis del impacto de las políticas macro-económicas y factores externos en el sector agrícola" en: COTESU / MACA / ILDIS, *El impacto de la NPE en el sector agropecuario*, pp. 71-175, Bolivia.
- UDAPE/INE (1987): *Un intento de medición del sector informal urbano en Bolivia*. La Paz.
- UNITAS (1988): *El Alto desde El Alto*. Documento de análisis nº 5. La Paz.
- Urioste, Miguel (1989): Debate en: ILDIS, *Contexto internacional y política en Bolivia* (cuaderno nº 6 del Foro Político), pp. 65-83, La Paz.
- Vega, Oscar (s.f.): "Propuesta para la reactivación económica" en: ILDIS, *Propuesta para la reactivación económica* (cuaderno nº 9 del Foro Económico), pp. 5-23, La Paz.
- Villa, Miguel (1989): "La población. Desafíos de la demanda de empleo, educación, salud y vivienda en: Carlos F. Toranzo, coord., *Bolivia hacia el 2000. Desafíos y opciones*, pp. 119-188, Venezuela.
- Villegas Quiroga, Carlos y Alvaro Aguirre Badani (1989): *Excedente y acumulación en Bolivia: 1980 - 1987*. La Paz, Bolivia.
- Weatherford, Jack M. (1987): *Narcóticos en Bolivia y los Estados Unidos*. La Paz/Cochabamba.